



historia

# Historia

## contemporánea de Chile II

Actores, identidad y movimiento

GABRIEL SALAZAR  
JULIO PINTO



GABRIEL SALAZAR  
JULIO PINTO

# Historia contemporánea de Chile



# LOM PALABRA DE LA LENGUA YÁMANA QUE SIGNIFICA SOL

## *SERIE HISTORIA*

*Primera edición: abril de 1999*

*Primera reimpresión: agosto de 1999*

Diseño de portada: A & S aguilera  
Motivo de la cubierta: Fotografía de Marcelo Montecinos

R.P.I. N° 108.337

I.S.B.N: 956-282-174-9 (Vol.II)

956-282-172-2 (Obra Completa)

© LOM Ediciones

Diseño, Composición y Diagramación:  
Editorial LOM. Concha y Toro 23, Santiago  
Fono: (56-2) 688 52 73 Fax: (56-2) 696 63 88  
web: [www.lom.cl](http://www.lom.cl)  
e-mail: [lom@lom.cl](mailto:lom@lom.cl)

Impreso en los talleres de LOM  
Miguel de Atero 2888, Quinta Normal  
Fonos: 716 9684 - 716 9695 / Fax: 716 8304

Impreso en Santiago de Chile.

Julio Pinto  
Azun Candina  
Robinson Lira

Volumen II  
Actores, identidad  
y movimiento

SERIE HISTORIA

# INTRODUCCIÓN

No es fácil dedicar un volumen de esta Historia exclusivamente al tema de «lo social», entre otras cosas porque nunca se ha podido deslindar nítidamente «lo social» de otros ámbitos del quehacer humano. En la medida en que casi todo acto que involucre a personas tiende a desenvolverse dentro del amplio marco de «la sociedad» —no siendo el aislamiento la condición normal del ser humano—, podría arribarse a la problemática conclusión de que **todo** es social: lo político, lo institucional, lo económico y lo cultural; lo objetivo y lo subjetivo; lo individual y lo colectivo; lo público y lo privado; lo «trascendente» y lo cotidiano. Y sin embargo, existe en nuestro país una generalizada sensación de que los historiadores han dedicado muy poco tiempo al estudio de «lo social» —a diferencia de lo político, lo económico o lo cultural—. Y también de que lo poco que se ha hecho, más que nada durante las últimas décadas, no ha trascendido más allá de un pequeño círculo de iniciados, cuya labor es prácticamente desconocida fuera del ámbito académico o especializado. Parecería por último que los historiadores han sacado muy poco partido de lo realizado por las otras ciencias **sociales**, una de las cuales, la sociología, se aboca precisamente al tema de «lo social». ¿Es la «historia social» una mera proyección hacia el pasado de las preguntas que los sociólogos aplican al presente, o de las técnicas que emplean para darles respuesta?

Los capítulos que se desarrollan en estas páginas procuran adentrarse en algunas de estas interrogantes, ofreciendo al menos cierta noción de los problemas y reflexiones que dan cuerpo a lo que entre nosotros se ha cultivado como «historia social». Los parámetros que aquí se establecen para llegar a esa definición, desde luego, no aspiran a un rango de «universalidad» o aceptación unánime, y nacen, como todo trabajo científico, de ciertas opciones que no todos deben necesariamente compartir.

Para comenzar, pensamos que el análisis de «lo social» remite ineludiblemente al concepto de «actor social». ¿Quiénes son las personas (o grupos) que dan cuerpo a la sociedad, y la ponen en movimiento? ¿Quiénes son los que escenifican aquel complejo «drama» que es la vida en sociedad? ¿Cómo se constituyen esos actores, y cómo se configuran sus **identidades** de ser tales actores? Una respuesta posible, y parcialmente

correcta, es que cada individuo es, por definición, un actor social, en tanto su existencia y su acción particulares, al unirse a las de todos los demás, confluyen espontáneamente en ese agregado o abstracción conceptual que es «la sociedad». Ese es el punto de vista que sustenta el **liberalismo individualista**, que tanto peso ha tenido (y tiene) en el pensamiento y la acción social contemporáneas. Otra respuesta es la que toma a la sociedad en su conjunto como actor social fundamental, algo así como una especie de organismo vivo que posee un ser colectivo, un interés común, y un sentido único en su accionar. En ese registro se inscriben las visiones corporativistas propias del pensamiento católico-conservador, el funcionalismo sociológico, y los nacionalismos que ven a «la Nación» como el actor histórico más puro y relevante. A su entender, las identidades sociales nacen de una supuesta «alma colectiva» que refunde y trasciende los impulsos particulares de individuos, familias o agrupaciones intermedias. Todo lo que no se amolde a ese imperativo, todo lo que atente contra la cohesión de ese «ente superior» que es la sociedad mayor, constituye una fuerza «disfuncional» o disgregadora que sólo puede conducir al caos y a la disolución de los lazos sociales.

En lo esencial, esta obra no comparte esas miradas. Para nosotros, lo que distingue lo «específicamente» social de otras dimensiones del quehacer humano es la existencia de identidades de carácter «intermedio», situadas entre la particularidad atomizada del individuo y la unidad «hegemonizadora» —y, a nuestro juicio, muchas veces forzada— de la sociedad. Estas identidades intermedias corresponden entonces a actores colectivos, cuya acción (o inacción) da forma a los grandes procesos sociales. Pensamos que las personas que integran esos «grupos intermedios», en tanto comparten experiencias, necesidades e intereses, van construyendo «identidades colectivas» que las cohesionan entre sí y las diferencian de otros actores que comparten su mismo espacio social. De esas identidades colectivas nacen formas de verse a sí mismas y al mundo que las rodea, de posicionarse en la sociedad, y de actuar en defensa de sus intereses y aspiraciones. En tanto se expresan en valores, símbolos y creencias, dichas identidades tienen un basamento cultural que tiende a consolidarlas y proyectarlas en el tiempo. En tanto se plantean siempre en relación a otros actores sociales, su carácter es necesariamente interactivo o relacional, y por tanto dinámico. De allí que el accionar colectivo tienda a materializarse como «movimiento» social, ya sea para conservar un orden establecido e imponérselo a otros —formando «estructuras» de dominación o subordinación—, ya para resistirlo, hacerlo más tolerable, modificarlo, o destruirlo —configurando «rebeldías» o «transgresiones»—. Una buena historia social, a nuestro entender, debe dar cuenta tanto de la estructura como de la transgresión; de lo que tiende a la permanencia como lo que promueve el cambio.

Dentro del marco temporal que define a este trabajo —los dos siglos de historia «republicana»—, consideramos que el actor colectivo fundamental han sido agrupaciones

que podríamos definir gruesamente, y con los alcances que se precisarán más adelante, como **clases sociales**. Esto no quiere decir que haya sido siempre así: se ha discutido mucho sobre la validez de aplicar esta categoría conceptual a sociedades pre-modernas, como la que existió en Chile al menos hasta las primeras décadas del siglo XIX. Así, para el período colonial muchos autores prefieren hablar de «castas», o al menos de «estamentos», rigidizados por barreras de nacimiento, origen étnico y una casi inexistente movilidad social. Por otra parte, incluso cuando las clases sociales hicieron su aparición en nuestra historia, ellas no fueron siempre las mismas, ni se mantuvieron inmunes al transcurso del tiempo. Parte de la historia que se relata y discute en las páginas que siguen es precisamente la de su **formación** o **transformación** durante los siglos XIX y XX; la de los rasgos que fueron adquiriendo o perdiendo; y la de los cruces, agregaciones y fusiones que sufrieron a partir del contacto con otros grupos afines. Por último, al decir que la entidad colectiva fundamental del Chile contemporáneo ha sido la de las clases sociales, no extrapolamos de allí la conclusión de que esa definición lo explique todo, o de que todos los fenómenos analizados puedan reducirse a una lógica «clasista». Como se verá, una y otra vez se pone el acento sobre la **heterogeneidad** interna que caracteriza a los grupos definidos como fundamentales, o incluso sobre las contradicciones que a menudo han fracturado su unidad. Por otra parte, también se ha dedicado un capítulo completo al tema de las etnias, que claramente no obedece a una matriz clasista, pero que se considera lo suficientemente importante como para considerarlo por sí mismo. En suma, si bien nuestro trabajo está atravesado por una opción metodológica que releva la categoría de clase, no hemos querido que ello se traduzca en un tratamiento dogmático o reduccionista. Sin perjuicio de ello, no abrigamos la ilusión de que estas profesiones de fe dejarán satisfechos a quienes siempre han desconfiado de una visión que pone el énfasis más en lo que divide a la sociedad que en lo que la cohesiona, ni a los partidarios de una visión «postmoderna» que le niega todo valor analítico a la categoría de clase social.

A partir de esas coordenadas, este volumen dedica sus tres primeros capítulos a caracterizar y reflexionar sobre las tres grandes clases (o «mundos sociales») en las que generalmente se agrupa a nuestra sociedad: las élites o clases dirigentes, bajo las diversas nomenclaturas («aristocracia», «oligarquía», «burguesía») con que se las ha conocido; las muy nombradas pero también muy mal conocidas «clases medias»; y el complejo y vasto mundo de «lo popular», en el que confluyen actores «pre-modernos» como el campesinado tradicional con otros «transicionales» y modernos como el peonaje, el proletariado o los «pobres de la ciudad». La misma enumeración que precede revela hasta dónde es difícil aglutinar a estos diversos componentes en categorías unificadoras: sus diferencias internas, sus cambios a través del tiempo, la diversidad de sus opciones y conductas, llevan una y otra vez a problematizar el encasillamiento que aquí se ha hecho. Como se verá, nuestro tratamiento no ha eludido esas dificultades, por lo demás presentes

en cualquier análisis de lo social que procure hacer justicia a esa condición siempre movедiza que es la historicidad de los sujetos. Pero por encima de la aparente fragmentación, seguimos convencidos de que los actores colectivos por nosotros definidos han exhibido la suficiente unidad e inteligibilidad como para otorgarle sentido a los grandes procesos de nuestra sociedad.

Para cada uno de los tres grupos definidos, el capítulo respectivo intenta dar cuenta de sus características esenciales, de los sub-grupos que lo componen, de las principales transformaciones que ha sufrido a través del tiempo, y del impacto que su acción ha tenido sobre la historia compartida del país. Se da cuenta también de cómo han sido vistos por los historiadores y los analistas sociales, así como de las interpretaciones que éstos han elaborado para comprender su «ser social». Corroborando lo dicho anteriormente sobre la artificialidad de las barreras entre las distintas esferas del quehacer social, a menudo se ha debido transgredir la división entre lo social, lo político, lo económico o lo cultural, temas que son tratados con mayor detención en otros volúmenes de esta obra. Así por ejemplo, el análisis de las elites ha obligado a hacer continuas referencias al ámbito de lo político, cosa natural tratándose de una clase que a lo largo de estos dos siglos ha tenido a su cargo—bien o mal—la construcción del Estado y la dirección de los destinos del país. Del mismo modo, la definición de las «clases medias» o «populares» se ha situado una y otra vez en la intersección entre lo social y lo económico, que es donde se constituye una buena porción de su condición de sujetos sociales. Con todo, se ha procurado siempre mantener el eje en los conceptos que articulan este volumen: las identidades colectivas, las relaciones entre grupos, los movimientos sociales.

En esa misma virtud, se ha considerado necesario incluir un capítulo final dedicado al tema de las etnias indígenas. Si bien a lo largo de nuestra historia su reconocimiento como actores sociales ha sido más que problemático, hoy no cabe duda que ellas son portadoras de identidades propias, que se han relacionado colectivamente con otros actores sociales, y que vienen desarrollando movimiento social desde mucho tiempo atrás. Es verdad que su constitución como actores sociales no calza con la matriz «clasista» que este volumen ha privilegiado, pero hemos hecho deliberadamente una excepción a partir de nuestra convicción de que, aunque su accionar efectivamente escape a esa lógica, éste no podría quedar fuera de una reflexión sobre la historia social. En alguna medida, en tanto sometidas a condiciones de pobreza y dominación, podría decirse que la experiencia de las etnias se asimila a la de las clases populares, pero consideramos que sus especificidades son demasiado importantes como para subsumirlas en un mismo análisis. Podría tal vez añadirse que el reconocimiento de lo étnico como constitutivo de identidades y movimientos obligaría a considerar también en ese carácter a otros factores de análogo potencial, como la condición de género o la adscripción generacional. Efectivamente, pensamos que éstas son categorías importantes, y en tal virtud serán objeto de un análisis

específico en otro volumen de esta obra. Pero en tanto atraviesan verticalmente la sociedad, nos parece que su matriz generativa no se ajusta con precisión a lo que aquí hemos entendido como «social», privilegiando los grupos «intermedios» y los cortes de sentido más bien «horizontal». Como en tantos otros aspectos, se trata básicamente de una cuestión de definiciones.

En suma, ofrecemos aquí un volumen que procura demarcar, para estos dos últimos siglos de nuestra historia, un terreno más o menos específico de «lo social», en el que se mueven actores colectivos portadores de identidades propias, siempre interactuando entre sí, y dando origen a conflictos y movimientos **sociales**. Intentamos también sugerir cómo un mejor conocimiento de estos grupos y su historia ayuda a una mejor comprensión del país en que vivimos, y de problemas que tanto ha costado resolver. Apostamos a una visión que se fija más en lo diverso y lo dinámico que en lo monolítico y estático, y que en esa misma virtud consideramos más fiel a la complejidad que es parte de la vida en sociedad. Ratificamos, por último, nuestra convicción de que la «historia de Chile» no se agota en los espacios públicos o los aparatos estatales, en las decisiones de los líderes o las hazañas de los héroes, sino que abarca a la totalidad de las personas que habitan nuestra sociedad, y cuyo protagonismo cotidiano, todavía muy mal conocido, es la carne y la sangre de la verdadera historia social.

No faltarán, por cierto, quienes califiquen a nuestra definición de «lo social» de reduccionista, sesgada, o insuficiente en su cobertura y alcance. Se dirá que segmentos importantes de «lo social» quedaron fuera de nuestro marco analítico, o que los conceptos y categorías empleados no satisfacen las exigencias de todas las escuelas del pensamiento sociológico. Se discrepará abiertamente —¿cómo podría ser de otra forma?— de ciertas inferencias o conclusiones que hemos extraído de nuestro cuerpo de problemas históricos. Todo ello es natural en un ámbito, como lo es el de las ciencias sociales, donde no existen las verdades únicas, y donde el conocimiento va a estar siempre «contaminado» por los intereses, las prioridades y los puntos de vista. No es, por otra parte, la aspiración de esta obra producir verdades «consensuadas» o juicios «neutros», sino instalar problemas siempre abiertos a la discusión y mostrar algunas de las lecturas que éstos han suscitado. En consecuencia, pensamos que una declaración explícita y transparente de lo que nosotros entendemos por «lo social», y de los criterios que fundamentan nuestra demarcación, basta para clarificar nuestro marco de referencia. Por lo demás, en las ciencias sociales como en casi todas las ramas del conocimiento, las demarcaciones son siempre más analíticas que «objetivas», más dictadas por el interés del observador que por la naturaleza del «objeto» estudiado. Estas consideraciones preliminares, entonces, no tienen otro fin que el de explicitar nuestra propia concepción de «lo social», para desde allí contribuir al debate que el conjunto de esta obra se ha propuesto promover.



# CAPÍTULO I

## ELITES SOCIALES Y LIDERAZGO

### 1.1.- PROBLEMAS DEL LIDERAZGO: CONSENSOS Y DISENSOS

#### I. Primer Problema: las propuestas de liderazgo

##### *El concepto de liderazgo*

Hablar de elites o clases dirigentes implica necesariamente hablar de liderazgos, aun cuando en ello se corra el riesgo de diluir las fronteras, en todo caso más convencionales que reales, entre lo social y lo político. En la historiografía chilena que se remite a los dos últimos siglos, los términos *liderazgo* y *líderes* políticos, sociales y hasta culturales son manejados con relativa largueza. Se habla de las *crisis de liderazgo*, de los *problemas del liderazgo*, de la a veces punzante *falta de líderes*. Sin embargo, no siempre es fácil rastrear —y no sólo en la producción histórica, sino también en la de las ciencias políticas y sociales— los basamentos de lo que se delimita bajo esos términos.

Esta indefinición tal vez obedezca a que la condición de *liderazgo* o de *líder* no corresponde a una definición social o política propiamente tal, sino a un elemento asociado a situaciones sociales más profundas. El ejercicio visible del poder social no siempre revela transparentemente quiénes son los que detentan las prerrogativas, pero a través de él puede adivinarse la existencia de un poder difuso en un grupo determinado: “todo lo que en la colectividad asegura un fundamento social al Poder, se exterioriza en actitudes respecto de un jefe. Es un proceso de creación de los dirigentes por los dirigidos”<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Burdeau, G., *Tratado de Ciencia Política*, volumen III, México, 1994, citado en Inostroza, Hugo, “La dirección: convergencia del poder, la autoridad y el liderazgo”, *Revista Chilena de Administración Pública*, N° 12, 1996, p. 18.

De tal manera, el reconocimiento de un individuo o de un grupo como líder no es un proceso auto-generado; es una adjetivación basada en la legitimidad que otorga la circulación del poder y la expresión de cierto poder en sociedades y situaciones determinadas. De allí que reconocer determinado liderazgo pase no sólo por las personalidades que ejercen el mando, sino por las fuentes del poder identificado en ellos, a través de procesos sociales complejos, que incluyen lo que Weber ha tipificado como las fuentes de la legitimidad: el *poder legal*, propio de los estados burocráticos, con leyes que mandan, permiten o prohíben, donde tales mandatos estarían por encima de los individuos que los ejercen; el *poder tradicional*, basado en caracteres sacros o en una autoridad heredada y/o patriarcal que por principio no se cuestiona; y el *poder carismático*, basado en la sumisión casi afectiva a la persona de un jefe, “conductor de hombres”, que descansa precisamente en su *charis* excepcional<sup>2</sup>.

Por ello, internarse en el campo de los liderazgos sociales —y no sólo de las representaciones del poder formal, de cargos públicos y atribuciones claras— se torna dificultoso. Nos encontramos con la riqueza y la transformación, inseparables del mismo desarrollo histórico, de una sociedad; el tapiz social en que diferentes grupos, a menudo divergentes y confrontados entre sí, se disputan o habitan diferentes liderazgos, en diferentes espacios sociales: los liderazgos propiamente gubernamentales, los partidario-ideológicos, los intelectuales, los artísticos, y, ya insoslayables en nuestro ambiente contemporáneo, los liderazgos de los medios de comunicación masiva, con sus propios consensos, guerrillas y disidencias “alternativas”. E implica también evitar los reduccionismos clasistas y los que tratan exclusivamente de la expresión política de las elites:

*“El problema de la expresión política de las clases dominantes y de las formas en que se realiza el control del Estado exige, pues, especialmente para el caso chileno, evitar simplificaciones de distinto signo. Una de ellas consiste en el reduccionismo clasista, que interpreta cualquier situación anormal en el campo político como una estrategia de las clases dominantes, lo cual implica suponer que ésta controla en Chile a los partidos intermedios y los usa como mediadores. El otro tipo de simplificación proviene de llevar hasta un punto límite la autonomía de lo político, haciendo desvanecerse la relación entre el Estado y la dominación y convirtiendo la historia de la política en una narración de pugnas entre partidos, sin relación con lo social”.*<sup>3</sup>

Por lo tanto, en las páginas que siguen el concepto de liderazgo será tratado en lo que respecta a su emergencia y sus proyectos en lo político, lo constitucional y lo estatal, pero intentando no reducir el campo al solo análisis de la expresión política de los

---

<sup>2</sup> Weber, Max, *Economía y Sociedad, esbozo de sociología comprensiva*, Tomo I.

<sup>3</sup> Moulian, Tomás e Isabel Torres Dujisin, “La Derecha en Chile: evolución histórica y proyecciones a futuro”, *Revista Estudios Sociales*, CPU, N° 46, 1986, p. 64.

liderazgos sociales. El énfasis también está en la formación de liderazgos económicos e intelectuales, por ejemplo, que atraviesan o conforman la expresión de los liderazgos políticos.

### *El proyecto de orden y unidad nacional*

El proyecto de liderazgo que ha dejado una huella más profunda en nuestro desarrollo como república independiente, al menos desde la óptica del siglo XX, ha sido el de la construcción de un “orden nacional”, a menudo revestido de rasgos autoritarios, cuya gestora originaria habría sido una elite más o menos homogénea congregada en torno al Estado portaliano. Es verdad que el espacio social ocupado por las elites no es único ni monolítico, por lo que podría ser más apropiado referirse a ese actor social y sus propuestas, como ya se ha venido haciendo en este texto, en el plural. Sin embargo, la mayor parte de los análisis tiende a visualizar como la elite nacional a aquella que detenta más visiblemente el poder, especialmente el político. De allí que la historiografía tradicional a menudo haya identificado la historia de este grupo como la historia nacional.

Este proyecto de “orden y unidad nacional” ha recorrido nuestra historia desde la Independencia. Si nació bajo la fuerza de las circunstancias —como apuntan los ensayos de Alberto Edwards, por ejemplo<sup>4</sup>—, a lo largo del tiempo ha dejado de ser sólo una idea o noción de que Chile debería ser gobernado por sus “patricios”, para convertirse en un pensamiento político y social influido por ideologías concretas, como el liberalismo modernizador decimonónico o, en época más reciente, el corporativismo, el nacional-populismo o los llamados regímenes burocrático-autoritarios.

Por lo tanto, si bien los contenidos del proyecto elitario pueden presentar ciertas variantes y modificaciones a través del tiempo, sigue siendo posible reconocer algunas líneas fundamentales que atraviesan estos dos siglos. Un esquema conceptual que ha tenido particular fuerza es aquel que se inspira en nociones tales como la continuidad histórica, la autoridad y la tradición, el orden, la legitimidad, la nación y el Estado nacional, todas basadas en el “legado político” de nuestra primera vida republicana. En esta lectura, la idea de proyecto nacional ha estado ligada, por una parte, a una vertiente de pensamiento nacionalista que favorece un sistema autoritario de gobierno, y por otra, a un corporativismo que contempla la existencia de instituciones como los gremios y las profesiones, cuya tarea sería la de impedir una excesiva concentración del poder político en el Estado: “el nacionalismo y el corporativismo constituyen, en un

---

<sup>4</sup> Nos referimos a la imagen preponderante de la política y la historiografía conservadora en relación a los comienzos del siglo XIX, que se basa en la presunta existencia de un solo grupo social preparado para asumir el liderazgo: la “aristocracia” latifundista y comerciante de origen colonial.

primer momento, los dos canales formales que orientan los argumentos conservadores contra la tradición liberal chilena”<sup>5</sup>.

Esta retórica de lo “nacional” es más antigua que los nacionalismos contemporáneos, llevados a su extremo en los discursos del fascismo europeo. Desde el siglo XIX, tanto liberales como conservadores desarrollaron (o, siguiendo la nomenclatura de Benedict Anderson, “inventaron”) la idea de una “chilenidad”, anunciada, a través de los jesuitas exiliados por ejemplo, en un supuesto proto-nacionalismo dieciochesco apegado al suelo natal, y que habría cobrado madurez ideológica con la gesta de la Independencia. En esa interpretación, el liberalismo decimonónico chileno retomó ese sentimiento para afirmar que la Independencia no había sido un hecho accidental, sino la culminación de un “destino histórico” que se venía incubando desde mucho más atrás en el tiempo. Asimismo, el nacionalismo fue utilizado como herramienta política que entregaba una semblanza de participación ciudadana a quienes no la poseían de hecho, y permitía al Estado, conducido por las elites, canalizar fuerzas emotivas y espirituales latentes, que quizás de otra manera hubiesen tomado canales alternativos y no estatales, hacia sus propósitos. Fue una suerte de pseudo-religión estatal, que incluso logró la adhesión de los sectores populares para iniciativas como las guerras de 1836-39 y 1879-83<sup>6</sup>. Y esa matriz autoritaria, que fortalece una idea de Nación construida a partir del Estado y habría impedido o debilitado la formación de una sociedad civil capaz de enfrentársele, ha seguido vigente hasta este siglo<sup>7</sup>.

Como se ha dicho, estos ejes centrales no son absolutamente monolíticos, y han sufrido transformaciones importantes a lo largo de los siglos XIX y XX. Sin ir más lejos, muchos autores contraponen al proyecto hegemónico estructurado en torno al “orden”, otro, a menudo surgido desde las mismas elites, que tiene su fundamento en la idea de “libertad”<sup>8</sup>. Empero, el supuesto “proyecto portaliano” conserva su fuerza convocadora hasta nuestro propio presente. La idea de una legitimidad basada en la fuerza presidencial, la *thèse royaliste*, que deplora los regímenes parlamentaristas y la fragmentación de las fuerzas políticas, se ha visto reeditada desde la figura de Diego Portales hasta la Dictadura

---

<sup>5</sup> Cristi, Renato y Carlos Ruiz, *El pensamiento conservador en Chile. Seis ensayos*, Editorial Universitaria, Santiago, 1992, p. 11.

<sup>6</sup> Ver al respecto Julio Pinto V., “¿Patria o clase? La Guerra del Pacífico y la reconfiguración de las identidades populares en el Chile contemporáneo”, *Contribuciones Científicas y Tecnológicas*, N° 116, Universidad de Santiago de Chile, Santiago, 1997.

<sup>7</sup> Alfredo Jocelyn-Holt, *El peso de la noche. Nuestra frágil fortaleza histórica*, Editorial Ariel, Buenos Aires, 1997, ps. 23 y ss. También Mario Góngora, *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX*, Editorial Universitaria, Santiago, 1986.

<sup>8</sup> Ver Alfredo Jocelyn-Holt, *La Independencia de Chile: Tradición, modernización y mito*, Madrid, Editorial Mapfre, 1992; “El liberalismo moderado chileno (siglo XIX)”, *Estudios Públicos* N° 69, Verano 1998; María Rosaría Stabili, “Mirando las cosas al revés: Algunas reflexiones a propósito del Periodo Parlamentario”, en Luis Ortega (ed.), *La Guerra Civil de 1891. Cien años hoy*, Santiago, Universidad de Santiago de Chile, 1991.

militar. En su versión más radicalizada, el nacionalismo unificador resurge como un elemento importante en el movimiento nacista fundado por Jorge González von Marées, en la propuesta nacionalista-hispanista de Jorge Prat (a la que adhirió en su momento Gonzalo Vial), y en el Movimiento Patria y Libertad, que revive el perfil conservador revolucionario del movimiento nacista chileno<sup>9</sup>.

De allí su carácter totalizante: si no se consigue que el conjunto de la nación se pliegue a estos objetivos nacionales diseñados y dirigidos por una minoría gobernante, se llega a la conclusión de que la estabilidad y “los destinos” del país están en jaque; la crisis de una clase o del proyecto de dicha clase es la crisis del país en su conjunto. También se explica así que esta línea de pensamiento no haya identificado los procesos democratizadores y socializantes como aportes enriquecedores de un liderazgo, o como la capacidad de una sociedad para ampliar su representatividad e incorporar nuevos saberes a esa misma conducción del país. Conservan una “nostalgia aristocrática”, que enaltece los períodos autoritarios como períodos de gloria, y los de mayor pluralismo o ruptura como de debilitamiento y fracaso<sup>10</sup>. La interpretación de Gonzalo Vial de nuestra historia nacional y sus puntos de inflexión es una versión reciente de esta mirada. La “unidad nacional” rota, los puntos en que no se ha logrado imponer esa idea de que el proyecto nacional “es de todos”, han sido los períodos negros, de desorden, quiebre y las horas tristes de nuestra historia<sup>11</sup>.

También se debe destacar que si la idea-fuerza del proyecto nacional tiene una matriz autoritaria y conservadora, ello no ha influido sólo en los partidos o grupos de poder pertenecientes a las clases altas o que han representado a ese pensamiento en específico. Al parecer, dicha construcción ha sido capaz de salir de su matriz e impregnar con parte de su lógica a otros proyectos, de fundamento ideológico distinto. O por lo menos, han tenido el cuidado suficiente de usar su retórica. Las élites de la “esperanza mesocrática”, del Estado desarrollista, del proyecto demócrata cristiano, de los planes de la Dictadura y aun de los gobiernos democráticos actuales han sido fieles a esa ambición. La idea de “los intereses generales de la nación” y de una “revolución en libertad”, de la “restauración del país” y los actuales “proyecto-país” y “servicio-país” están emparentados con ella. Liderar a la sociedad chilena ha sido hacerse cargo de ese proyecto nacional unitario. Recordemos, a modo de ejemplo, el lema de nuestro primer presidente electo en el nuevo período democrático: el presidente “de todos los chilenos”.

---

<sup>9</sup> Verónica Valdivia, “El nacionalismo chileno en los años del Frente Popular (1938-1952)” y “Nacionalismo e ibañismo”, *Serie de Investigaciones* números 3 y 8, Universidad Católica Blas Cañas, Santiago, 1995; Cristi y Ruiz, *op. cit.*

<sup>10</sup> Claudio Orrego Vicuña, “Antecedentes políticos”, en VV.AA., *Visión de Chile (1920-1970)*, Ediciones CINDE, Santiago, 1980, p. 27.

<sup>11</sup> Gonzalo Vial, *Historia de Chile (1891-1973)*, vol. I, tomo I; Editorial Santillana, Santiago, 1981.

## *Los proyectos alternativos*

Junto a esa concepción de liderazgo, defendida en numerosos momentos de nuestra historia hasta el derramamiento de sangre, han existido paralelamente algunas corrientes críticas y alternativas, construidas en contradicción, o al menos marcando cierta disidencia, con el proyecto de “orden y unidad nacional”.

En líneas gruesas, éstas se han planteado como una crítica hacia los puntos básicos del modelo de liderazgo autoritario: el mito de la Nación homogénea, la participación política restringida, y la falta de una democratización social y económica sustentada en la sociedad civil.

El primero de estos cuestionamientos es el de más reciente data. Ha impugnado la existencia de un verdadero “proyecto nacional”: la nación misma tal vez, en su dimensión de empresa consensuada y unitaria, sería una invención. La profundización de los estudios sobre nuestro mundo indígena ha desdibujado la imagen del país homogéneo, pacificado y “blanco” de los discursos dominantes<sup>12</sup>. Asimismo, los estudios sobre el mundo popular, obrero y campesino han socavado la imagen de un Chile unitario desde el punto de vista social, cultural y político. Chile habría sido siempre una sociedad diversa y discordante, con profundas brechas económicas, culturales y políticas.

El segundo cuestionamiento al “orden unitario” ha tenido una historia más prolongada, que se remonta a los inicios de nuestra vida como país independiente. Sus primeros esbozos surgieron precisamente de una brecha en la elite colonial, como se analizará más adelante. La pugna entre los proyectos centralistas y los primeros gérmenes de un proyecto-país más democrático y menos sujeto al centralismo corresponden al liderazgo liberal del primer período republicano, desde aproximadamente 1810 hasta 1830. Las diferencias entre los patriotas que luego asumirían el gobierno ya comienzan en el año de 1810, cuando junto a los partidarios de un gobierno “fuerte” e incluso personalista, que luego apoyarían el gobierno de O’Higgins y el orden portaliano, actuaron grupos favorables a un gobierno más popular y representativo, liderados por personeros como Martínez de Rozas, Camilo Henríquez y José Miguel Infante. La lucha no tenía aún carácter ideológico, pero ya estaba planteada la idea de “bandos” que propugnarían estilos de gobierno y participación política diferentes<sup>13</sup>.

Las rebeliones de los años 50 del siglo XIX plantearon, heredando la tradición liberal derrotada en Lircay, un proyecto que por primera vez consideró con seriedad la

<sup>12</sup> Nos referimos a los estudios pioneros de Alejandro Lipschutz y a la mayor parte de la corriente etnohistoriográfica de los años 60 en adelante, que ha rescatado el valor del mundo indígena y pre-moderno en la formación de, por una parte, las identidades locales chilenas, y, por otra, de su importancia como sustrato básico de nuestra identidad nacional. Al respecto, revisar especialmente José Bengoa, *Historia del pueblo mapuche*, y Osvaldo Silva, *Reflexiones en torno a la presencia indígena en la historia nacional*.

<sup>13</sup> Jocelyn-Holt, *La independencia de Chile...*, op. cit.

participación de grupos medios y populares en el gobierno de la República, y la incursión activa y efectiva de las oligarquías regionales. Los liberales del “48” chileno y los críticos del Centenario pertenecieron, de una u otra manera, a esta corriente que intentó, durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX, reconocer la historicidad de otros grupos sociales, criticando seriamente tanto la capacidad del proyecto elitario para cumplir sus objetivos como la legitimidad de su poder sobre el resto de la sociedad<sup>14</sup>.

Durante el siglo XX, asistimos a la elaboración más compleja y teóricamente fundamentada de esos proyectos alternativos. Puede hablarse de dos grandes proyectos que se levantan —con distintos niveles de éxito— contra la supremacía del proyecto oligárquico tradicional, hasta cierto punto consensuado a nivel de elite a través del orden liberal en lo económico-político y conservador en lo social, que fue la “República Parlamentaria”. Aquellas propuestas alternativas fueron la nacional-desarrollista y la socialista de corte marxista, cuya influencia en las transformaciones del liderazgo trataremos más adelante.

## II. Segundo problema: La construcción y defensa de la legitimidad

El hecho de que un proyecto de liderazgo sea impulsado sólo por un grupo, una vanguardia, un estamento o una clase dentro de la sociedad, no necesariamente significa que no haya tenido legitimidad social. Esto implicaría que se ha logrado construir matrices de legitimidad hacia el conjunto de la sociedad —y también de otras elites, que han quedado fuera del liderazgo predominante— para cimentarse como un poder no sólo político, sino reconocido social y culturalmente. En este subcapítulo nos interesa revisar los mecanismos mediante los cuales las elites chilenas han obtenido esa deseada base de apoyo, y cómo la han perdido.

En lo primero, creemos posible dibujar dos mecanismos básicos de legitimación: una apelación formal al principio de representación política, y el peso social realmente ejercido por las elites.

Aproximadamente desde mediados del siglo XIX, el ideal político oligárquico consistió en mantener la existencia de un poder equilibrado dentro de un sistema representativo, estructura que permitía el predominio corporativo de elites y no, por ejemplo, el de caudillos militares<sup>15</sup>. Recursos como el cohecho, el clientelismo, el reparto

---

<sup>14</sup> Cristián Gazmuri, *El '48' chileno: Igualitarios, reformistas, radicales, masones y bomberos*, Editorial Universitaria, Santiago, 1992.

<sup>15</sup> Jocelyn-Holt, *El peso de la noche*, *op. cit.*; Moulian y Torres, “La derecha en Chile: evolución histórica”, *Revista Estudios Sociales*, CPU, p. 68.

de prebendas, la demagogia electoral y la exhibición de imponentes obras públicas lograron hacerse parte de un modo de democracia restringida, pero funcional y legitimada políticamente, que reforzaba la dominación propiamente social. Se trataba, por tanto, de una legitimidad esencialmente política.

Esa era una de las ideas que moraban tras la archicitada frase de “el peso de la noche”, con la que Diego Portales proyectó la imagen de un pueblo manejado por minorías que eventualmente podían permitirle votar, pero cuyo interés de fondo era hacerse obedecer. José Bengoa, avanzando más allá del análisis estrictamente político de dicho fenómeno, ha destacado esa matriz autoritario-rural que ha pervivido en nuestra sociedad desde aquellas fechas: una sociedad poco ciudadana, donde la voz del patrón y la creencia en la autoridad vertical y legitimada por la estirpe han sido siempre poderosas<sup>16</sup>. También lo decía Jorge Ahumada para el siglo XX, cuando se refería a la inveterada falta de virtudes cívicas del pueblo chileno, que sólo obedecía las leyes “cuando lo están mirando”, y que necesitaba ser dirigido y educado al respecto<sup>17</sup>.

Porque este fenómeno no terminó con la caída de los gobiernos abiertamente oligárquicos. Otros liderazgos siguieron la misma huella, y el “peso de la noche” continuó reproduciéndose bajo nuevos discursos. Nuestro período de gobiernos radicales y de corte populista es un buen ejemplo de ello. En una de sus lecturas, el populismo ha sido quizás uno de los sistemas más hábiles con que una minoría conductora ha recogido las expectativas democratizadoras de los sectores medios y populares, pero sin traducirlas en una participación real en la toma de decisiones. La matriz populista no es una expresión necesariamente fiel del interés popular, pero es indudable que, en Chile como en otros países en vías de modernización conflictiva, representó una estrategia de integración social y desperfilamiento del conflicto clasista<sup>18</sup>. Desde los años treinta a los cincuenta, a través de la propaganda y las realizaciones de un “gobernar es educar”, de un “gobernar es industrializar”, y construir, y electrificar, su propuesta resultó bastante exitosa.

Otra matriz importante de legitimidad y representatividad ha sido una forma de caudillismo que no se ha apoyado fundamentalmente en la fuerza militar, y también el peso de líderes no necesariamente caudillescos, pero respetados casi como tales. Mario Góngora caracterizó el fenómeno de la “democracia caudillesca” que se produce en Chile en el período de 1920 a 1938: desaparecida —o al menos cuestionada— la legitimidad tradicional del gobierno “aristocrático”, surge con fuerza el caudillo apoyado por las masas, “las muchedumbres movidas por los discursos, la prensa o la canción”, a las que hay que

---

<sup>16</sup> José Bengoa, *La comunidad perdida*, Ediciones SUR, Santiago, 1996.

<sup>17</sup> Jorge Ahumada, *En vez de la miseria* Santiago, 1956, capítulo 1.

<sup>18</sup> Danilo Martucelli y Maristella Svampa, “La doble legitimidad del populismo”, *Proposiciones* N° 22, Ediciones SUR, Santiago, 1993. Para una lectura distinta ver Eduardo Valenzuela, “La experiencia nacional-popular”, *Proposiciones* N° 20, Ediciones SUR, Santiago, 1991.

convencer de que se es el ejecutor de su voluntad soberana y sus demandas. Sujetas al capricho de las masas o a los vaivenes de la economía, figuras como Arturo Alessandri Palma o el General Carlos Ibáñez encarnaron esa matriz de legitimidad, ligada también a las ideas corporativistas y populistas triunfantes en el período de entreguerras<sup>19</sup>.

Sin embargo, en líneas gruesas, esta matriz caudillesca de legitimidad ha sido derrotada o finalmente cooptada e integrada al sistema de relaciones de la democracia restringida y manejada por las minorías que detentan los poderes fácticos de la sociedad, y el respaldo de la llamada “tradición democrática”. Sería el caso, por ejemplo, de la derrota por las armas o el exilio de caudillos al estilo de Carrera y Freire en los primeros años de la República, o de la integración al sistema político de personalidades en un principio peligrosas. El caso de Alessandri Palma —que en su segundo período se convierte en un gobernante “maduro”, adecuado a los mecanismos del poder y la legalidad ya reconocida— es emblemático al respecto<sup>20</sup>. Tampoco debe olvidarse la imagen que la historiografía conservadora y el discurso masivo de la dictadura de Pinochet diseñó para Diego Portales<sup>21</sup>, o (caso que tal vez se volverá clásico) el del propio General Pinochet para la derecha, que lentamente va siendo convertido, ya en vida, en el estadista que sentó las bases de nuestra “democracia” contemporánea y nuestro éxito neoliberal. El caudillo es convertido, por los grupos que lo han adoptado como parte de su herencia, en una figura que legitima su propio movimiento y creencias. Su imagen queda vaciada de parte de su significado y hechos originales, para entrar al panteón de los emblemas. Incluso el presidente Allende, quien históricamente no podría ingresar en la definición formal de un caudillo, ya es invocado en términos análogos: “Salvador Allende se incorporó a la lista de chilenos más ilustres. Cercano a la figura apasionante de Balmaceda, se destacan su consecuencia y el propósito patriótico de un proyecto enfilado hacia la segunda independencia nacional, y a la construcción de una sociedad equitativa”<sup>22</sup>.

### *La carencia del soporte social*

Los límites de la legitimidad de los liderazgos en nuestro país han estado dados por dos factores: las anomalías o carencias en la construcción de dicha legitimidad, y el desencanto organizado de los proyectos alternativos.

Una de las grandes falencias del sistema legitimante basado en el equilibrio de

---

<sup>19</sup> Mario Góngora, *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX*, Editorial Universitaria, Santiago, 1982, ps. 136 y ss.

<sup>20</sup> Góngora, *op. cit.*, p. 228.

<sup>21</sup> Ver un resumen de este debate en Sergio Villalobos, *Portales, una falsificación histórica*, Editorial Universitaria, Santiago, 1989.

<sup>22</sup> Hernán Soto, “Cambiando a Chile de faz”, *Encuentro XXI* N° 3, Santiago, 1995, p. 121.

los partidos en el poder y la preeminencia de lo político, ha sido precisamente la carencia de una base social y económica amplia que haya apoyado su construcción y discurso. En lo que respecta a la construcción de Estado, que trataremos con mayor detalle más adelante, esto es visible en el desconocimiento o la represión a los proyectos diferentes al impuesto por las elites políticas y militares. Cuando las demandas populares se han vuelto amenazantes, “se observa que todos los problemas de la sociedad tendieron a resolverse mediante un discurso puramente técnico y sincrónico para tiempos de estabilidad .... la clase política militar y la clase política civil, en tácita colaboración con las elites mercantil-financieras, han sido más determinantes y protagónicas que los actores propiamente sociales (sobre todo los de tipo popular) y, aun, más que la misma masa ciudadana”<sup>23</sup>.

Así, la propuesta de un sistema de relaciones equilibrado, que ofrece resolver los conflictos y demandas sociales utilizando los métodos diseñados y enmarcados por el poder elitario establecido y consensuado al interior de esas propias elites, flaquea ante la fuerza de actores sociales desencantados y postergados por larga data. Ante conflictos extra políticos<sup>24</sup>, como las crisis económicas o el fortalecimiento de movimientos sociales, la configuración creada por las elites se transforma en su propia navaja de doble filo.

La complejización y formación de una protesta organizada y un proyecto alternativo al de las elites ha sido el otro gran límite a su poder. A partir de los estallidos de descontento popular, del trabajo crítico de los intelectuales y la prensa, y de la formación de grupos de presión y oposición, ha quedado en evidencia la particularidad de sus proyectos, y sus fracasos a la hora de ponerlos en marcha. Los bolsones de pobreza, los límites de un proclamado desarrollo económico y las falencias de sus métodos de manejo social y control político y represivo quedan de relieve.

Para el caso del profundo quiebre de 1973, la crisis de legitimidad del sistema resulta bastante clara. Se ha postulado que la radicalización o polarización política previa al Golpe de Estado no fue el resultado de una “hipermovilización” de las masas, o de una “excesiva” sindicalización o un aumento real de las huelgas, que desestabilizaran seriamente al país<sup>25</sup>. El sistema, argumenta el politólogo Arturo Valenzuela, podría haber asimilado esas presiones, de no haber ocurrido cambios fundamentales en las prácticas de acuerdos y contrapesos políticos que convertían a la movilización social en una amenaza. Estos cambios se enmarcan en el fracaso de la Democracia Cristiana en su propósito de convertirse en una verdadera y estable fuerza de centro político, que hiciera funcionar

---

<sup>23</sup> Gabriel Salazar, “Construcción del Estado en Chile: la historia reversa de la legitimidad”, *Proposiciones* N° 24, SUR Ediciones, 1994, p. 95.

<sup>24</sup> Entendiendo aquí “lo político” en su sentido más restringido, de juego de partidos y alianzas o conflictos en lo alto de las estructuras de poder formalizado y legalmente ratificado.

<sup>25</sup> Arturo Valenzuela, *El quiebre de la democracia en Chile*, FLACSO, Santiago, 1989, ps. 90 y ss.

las alianzas de centroderecha o de centroizquierda que antes habían logrado, por ejemplo, los liderazgos populistas del radicalismo; “al debilitar, aunque fuese sin intención, el frágil entendimiento de la política chilena, sin haber alterado la tradicional correlación de fuerzas, ella simplemente agravó la polarización y el impasse de las fuerzas políticas chilenas”<sup>26</sup>.

Esta interpretación, centrada casi exclusivamente en las repercusiones del miedo a los actores sociales por parte de los grupos de poder más conservadores (y no viceversa) es ilustrativa, por una parte, de un tipo de análisis que sólo se ocupa del conflicto social cuando altera el funcionamiento de las elites políticas, y, por otra, de una característica central del tratamiento de las crisis de legitimidad: que éstas sólo pueden ser resueltas mediante dos métodos: la represión hacia los reventones de demandas incontrolables de una sociedad hasta entonces controlada; y la búsqueda de un nuevo consenso de elites que restaure la hegemonía perdida.

### *Respuesta autoritaria y represión*

La defensa del equilibrio en peligro (o definitivamente en crisis) ha engendrado diferentes estrategias de neutralización, donde fracciones de las mismas clases amenazadas acuden a distintos recursos —no necesariamente organizados en un solo bloque— para enfrentar el problema.

La respuesta autoritaria podría distinguirse de la claramente represiva en cuanto no apela a mecanismos de poder que sean físicamente violentos. En la respuesta autoritaria, nos encontramos con elites que actúan desde las parcelas de poder político, intelectual y social que manejan. Entre ellas, habría que mencionar como principales a los medios de comunicación, los poderes del Estado y los “poderes fácticos” de las elites patronales, mercantiles y empresariales.

Aunque nos faltan estudios específicos respecto al papel que la prensa ha tenido en la defensa de las elites, sí existen referencialmente, atravesando diversos escritos críticos. Los estudios sobre la prensa de derecha a fines de los años sesenta son una prueba de ello<sup>27</sup>. Asimismo, el papel de *El Mercurio* como órgano divulgador de los distintos pensamientos de la derecha, tal vez no en un sentido partidista pero sí creador de opinión pública a nivel masivo, como una verdadera institución cultural difusora de los distintos pensamientos de la derecha, es insoslayable<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, p. 115.

<sup>27</sup> Carlos Ruiz, “El conservantismo como ideología. Corporativismo y neo-liberalismo en las revistas teóricas de la derecha”, en Cristi y Ruiz, *Seis ensayos sobre el pensamiento conservador en Chile*, op. cit., ps. 103 y ss.

<sup>28</sup> Guillermo Sunkel, *El Mercurio: 10 años de difusión político-ideológica, 1969-1979*, Estudios ILET, Santiago, 1983.

Desde el escándalo por la aparición de *Sociabilidad Chilena* de Francisco Bilbao<sup>29</sup> hasta las conocidas y tristemente célebres “campanas del terror” contra la Unidad Popular, ha existido en Chile la percepción, refrendada por la realidad, de que las elites manejan la prensa masiva y más considerada de nuestra sociedad. Lo hacen permanentemente, a través de los grandes grupos editoriales nacionales, e intensifican su labor cuando se sienten amenazadas, no sólo a partir de sus editoriales y escritos que apoyen explícitamente a determinada postura, sino también a través de la censura. Los ejemplos son tan numerosos que rebasarían largamente la capacidad de estas páginas. Baste por ahora mencionar la persecución a la prensa obrera y estudiantil de comienzos de siglo, descrita con vívida tristeza por Pablo Neruda en sus memorias<sup>30</sup> y Manuel Rojas y Nicomedes Guzmán en sus novelas<sup>31</sup>; y el juego casi risible de confiscación y venta apresurada de revistas de oposición durante el régimen militar, donde medios escritos como *Apsi*, *Cauce*, *Fortín Mapocho* y *La Bicicleta*, y emisoras de radio como Cooperativa y Chilena, debieron participar en la tragicomedia.

Al momento de defender un determinado *statu quo*, las elites también han recurrido a parcelas de poder enraizadas en otras instituciones. Uno de los mejores ejemplos es tal vez el del poder judicial. Si bien se ha afirmado que la gran lucha de este poder del Estado ha sido la de mantener su autonomía frente a los poderes propiamente políticos, a lo largo de la historia su comportamiento ha exhibido un sesgo consistentemente conservador y siempre se ha sentido amenazado cuando algún proyecto político ha puesto en peligro su autonomía corporativa y su concepción racional-positivista de la labor judicial<sup>32</sup>. A comienzos de la década de 1970, sectores de izquierda denunciaron que el principal problema del poder judicial no era su formalismo o timidez en la interpretación de las normas emanadas de los poderes colegisladores, sino por el contrario, que su actuación ha exhibido un sesgo deliberado que no teme sobrepasar el marco legal cuando juzga que aquello va en beneficio de las clases dominantes<sup>33</sup>. Desde esa misma perspectiva, se planteó la posibilidad de estructurar una mayor participación popular en la administración de justicia a través de los llamados tribunales vecinales, lo que fue duramente combatido por la institucionalidad judicial<sup>34</sup>. Así, hacia 1973, cuando colapsa el sistema general del estado de compromiso en Chile, el poder judicial es el único que pervive relativamente incólume:

---

<sup>29</sup> Alfredo Jocelyn-Holt, *El peso de la noche...*, op. cit., p. 37.

<sup>30</sup> Pablo Neruda, *Confieso que he vivido*, Editorial Seix Barral, 1974.

<sup>31</sup> Especialmente en *La oscura vida radiante* de Manuel Rojas, y *La sangre y la esperanza* de Nicomedes Guzmán.

<sup>32</sup> Hugo Frühling, “Poder Judicial y política en Chile”, *El Ferrocarril* N° 7, Santiago, Noviembre de 1986; p. 4.

<sup>33</sup> Eduardo Novoa Monreal, “El difícil camino de la legalidad”, *Revista de la Universidad Técnica del Estado*, marzo de 1972; citado en Hugo Frühling, op. cit., p. 19.

<sup>34</sup> Norbert Lechner, “Principio de legalidad y participación popular”, *Sobre la justicia en Chile*, Valparaíso, 1973; citado en Frühling, op. cit., p. 19.

“Durante el período autoritario es [el poder judicial] el único lazo institucional con las tradiciones de la antigua república... una cierta identidad con el ethos de las Fuerzas Armadas y las rutinas institucionales adquiridas durante la república —y fundadas ideológicamente en la separación de poderes— provocan en el poder judicial un verdadero síndrome de ‘incapacidad adiestrada’ frente a la situación de los derechos humanos en Chile y frente al control de las actuaciones del poder político.”<sup>35</sup>

En cuanto a la *respuesta represiva*, de violencia directa, ella ha surgido generalmente cuando los mecanismos anteriores no han sido capaces de restaurar una situación; o ha aparecido también asociada con ellos, aplicándose a los sectores más duros de la desobediencia civil.

En términos generales, la represión ha sido ejercida por las elites utilizando el aparato de seguridad interior y exterior que el Estado pone a su disposición: Carabineros, policía civil y Fuerzas Armadas. Las elites han delegado la restauración del orden directamente en estos cuerpos institucionales, como en el caso del Golpe Militar de 1973, o simplemente les han dado órdenes a través del Poder Ejecutivo o Judicial. En este sentido, es interesante revisar el artículo de Carlos Maldonado sobre el nacimiento de Carabineros de Chile como una policía militarizada y al servicio de los dispositivos represores del gobierno desde 1927 en adelante<sup>36</sup>; los estudios de Verónica Valdivia y María Teresa Covarrubias sobre las complejas relaciones cívico-militares en el período 1924-1973<sup>37</sup>; y los estudios sobre la violencia política en Chile, que dan cuenta de una compleja alianza entre fuerzas represivas del Estado y liderazgos políticos y económicos amenazados por una eventual rebeldía de otros sectores sociales<sup>38</sup>.

Los mecanismos en que la represión con violencia física y sangrienta ha sido puesta en marcha han revestido distintas formas. Una de ellas ha sido la represión como “conservación del orden público”, tal vez la más frecuente y reconocida por las elites. A través de la declaración de estados de sitio o de emergencia, y en aras de la mantención de la paz pública, las elites han movilizado a la policía y al ejército para desbaratar con

<sup>35</sup> Carlos González Peña, “Informe sobre Chile”, en Jorge Correa (ed.), *Situación y políticas judiciales en América Latina*, Escuela de Derecho, Universidad Diego Portales, 1993, p. 361.

<sup>36</sup> Carlos Maldonado, “Los Carabineros de Chile. Historia de una policía militarizada”, *Ibero-America Nordic Journal of Latin American Studies*, vol. 3, 1990.

<sup>37</sup> Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, *La Milicia Republicana. Los civiles en armas (1932-1936)*, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Santiago, 1992; “Camino al golpe: el nacionalismo chileno a la caza de las Fuerzas Armadas”, Universidad Católica Blas Cañas, *Serie de Investigaciones* N° 11, Santiago, 1996; “Nacionalismo, ibañismo, Fuerzas Armadas: Línea Recta y el ocaso del populismo”, *Contribuciones Científicas y Tecnológicas* N° 116, Universidad de Santiago de Chile, 1997; María Teresa Covarrubias, *Políticos y militares. Antecedentes históricos del quiebre entre los sectores civil y militar en la sociedad chilena*, Ediciones Centro de Estudios del Desarrollo, Santiago, 1991.

<sup>38</sup> Gabriel Salazar, *Violencia política popular en las “Grandes Alamedas”*. Santiago de Chile, 1947-1987, Ediciones SUR, Santiago, 1990; Introducción.

dureza las manifestaciones masivas de descontento. Los golpes asestados en la batalla urbana de 1850 en el centro de Santiago, en los reventones populares de 1905, 1957 y 1983 (por mencionar algunos) han sido parte de esta modalidad<sup>39</sup>.

Otra, de menor impacto cuantitativo pero de fuerte resonancia pública, ha sido la represión selectiva. Comprendemos aquí el asesinato individual, como en el caso Mesa Bell en 1932<sup>40</sup>, y el de los tres profesionales comunistas degollados en 1985; así como las relegaciones, encarcelamientos y desapariciones, donde organismos de inteligencia o grupos “de limpieza” amparados por el Estado seleccionan a los culpables y cabecillas de la “sedición” y los eliminan de la circulación pública.

Entre las prácticas de control social también habría que considerar el *terror organizado*, entendido aquí como la puesta en marcha de “escenarios” amedrentadores, la publicidad anti-subversiva, el despliegue de fuerza militar y represiva en espacios públicos, los allanamientos y detenciones masivas. Este fenómeno, propio de las tácticas de la Doctrina de Seguridad Interior del Estado, fue puesto en práctica en Chile desde los años setenta en adelante. Por último, la *represión como masacre*, generalmente ocurrida cuando grupos específicos de rebeldes no han podido ser disueltos con los métodos anteriores, o en el fragor de una represión generalizada. Casos como la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, de los campesinos en Ranquil, de los mapuches en su “Pacificación” o del Seguro Obrero en 1938 han revestido estas características. La policía o el Ejército han sido autorizados por el Ejecutivo para realizarlos, generalmente bajo el principio de que “la situación” obligó a llegar a esos extremos de violencia, posteriormente ocultando los entretelones y a los responsables específicos de las órdenes.

En estas últimas situaciones, las decisiones represivas se han basado principalmente en el férreo principio de la defensa no sólo del orden público, sino de la Patria como núcleo fundamental de la existencia de la sociedad; de allí los resultados graves (y en ocasiones, fatales) de la más grave acusación formulada por los gobiernos: la de antipatriota<sup>41</sup>.

---

<sup>39</sup> Gabriel Salazar, *Violencia política popular...op. cit.*; también Pedro Milos, “Los movimientos sociales de abril de 1957 en Chile. Un ejercicio de confrontación de fuentes”, tesis doctoral inédita, Universidad de Lovaina (1996).

<sup>40</sup> Carlos Maldonado, *op. cit.*, p. 28.

<sup>41</sup> Como en el caso de los estudiantes de la Universidad de Chile en el “Juicio a los Subversivos” del año 1920, quienes acaso tengan el dudoso honor de haber sido los primeros en ser acusados no sólo de actividades subversivas al orden público, sino de conspirar contra la Patria misma; cf. Gonzalo Vial, *op. cit.*, volumen II, 7a. parte; Mario Góngora, *Ensayo histórico...*, ps. 113 y ss.

### III. Tercer problema: los consensos y disensos del liderazgo

#### *Los conflictos de las elites decimonónicas*

Al interior de los liderazgos, una de las características que ha irritado a los defensores de los gobiernos oligárquicos y ha afilado los cuchillos de sus detractores, ha sido la pluralidad y los antagonismos entre las propias elites. En la visión de necesaria unidad y homogeneidad interna que ya hemos esbozado, dicha característica es vista como una de sus principales debilidades.

En la perspectiva conservadora que se elaboró desde la crisis de los gobiernos oligárquicos en adelante, la gran pugna se habría dado entre las intenciones “díscolas” y anti autoritarias de la elite aristocrática y los gobiernos fuertes y sólidos que entregaban estabilidad al país. La aristocracia chilena era supuestamente un grupo en permanente conflicto con esa necesidad de gobiernos fuertes, y la gran batalla del liderazgo en el siglo XIX habría sido, precisamente, la que buscó consolidar la unidad nacional con el apoyo de una clase alta cohesionada, el Ejército y un Estado-instrumento de aquel ambicionado “orden público”<sup>42</sup>. Esta interpretación visualiza muy positivamente la figura de Diego Portales y los presidentes de la llamada República Autoritaria (1830-1861). Si para la mayor parte de la historiografía conservadora Diego Portales es un estadista de primera importancia en la construcción del Estado chileno decimonónico, es porque restaura ese orden absolutamente necesario al desarrollo del país, y detiene los arrebatos de los miembros liberales, románticos y rupturistas de la oligarquía; es decir, lo que ella misma llama “los frondistas”. Así vista, la aristocracia chilena sería un león al que sólo adormece la amenaza de la anarquía, como la que se vivió en el período 1823-1829. En 1850, el mismo temor habría hecho fracasar los intentos del Club de La Reforma y del Coronel Urriola por liberalizar el sistema político. Pero el espíritu de fronda habría permanecido plenamente vigente, siempre dispuesto a ejercer sus privilegios de clase por sobre cualquier gobierno fuerte y centralizador.

Esta lectura, todavía hegemónica a nivel de conciencia histórica general, ha sido seriamente cuestionada por interpretaciones que han hecho hincapié en los disensos sociales y culturales de las elites, así como en diferencias económicas o políticas que podrían explicar más adecuadamente el fenómeno supuestamente “frondista”.

En verdad, estudios centrados no en la retórica del mito de origen —como la “aristocracia castellano-vasca”, por ejemplo— ni sólo en el discurso político de estas elites, han propuesto la existencia de una brecha profunda que desde los inicios del período

---

<sup>42</sup> Alberto Edwards, *La fronda aristocrática en Chile*, 1a. edición, Santiago, 1928.

republicano se habría formado en y a partir de la constitución de dos grupos rivales, que la historiografía marxista “clásica” ha identificado como aristocracia latifundista-mercantil y burguesía industrial modernizadora, y versiones más recientes como estrato productor-patronal y estrato mercantil-financiero de la clase dominante.

Según esta última versión, los “patrones” se hicieron elite durante el largo período colonial. Se consolidaron en el “color local”, en el manejo y la represión de peones e inquilinos y en la creación de una tecnología productiva barata. Fortalecieron sus relaciones locales y asumieron una postura cercana al caudillismo, apoyando movimientos como el federalismo, el “pipiolismo”, el proteccionismo, y aun el parlamentarismo<sup>43</sup>. Los “mercaderes”, a lo largo del período 1750-1850, erosionaron el poder caudillesco de los patrones, se convirtieron en sus prestamistas y proveedores, se asociaron (con éxito) al comercio extranjero de puertos como Valparaíso, lograron el apoyo de las Fuerzas Armadas y finalmente, lograron imponer su hegemonía política, expresada en el gobierno autoritario y centralizado que triunfa de 1830 en adelante, tras la derrota de los poderes “patronales”, más productivistas y localistas:

*En contraste con los patrones coloniales, que buscaron amigos en todos los niveles de la sociedad chilena, los “mercaderes” se vincularon mejor con los comerciantes, banqueros, cónsules y diplomáticos extranjeros. Ese tipo de relaciones se convirtió en uno de los más típicos símbolos de distinción de la elite chilena, de evidente origen mercantil. Pero fue algo más importante aún: constituyó el poder supranacional necesario para persuadir a las agencias militares y políticas del país de que el proyecto político de los mercaderes era el que mejor se identificaba con los intereses generales de la nación.<sup>44</sup>*

Reconociendo esa tensión permanente al interior de las elites decimonónicas, es posible comprender o iluminar aspectos que han sido poco tratados en su desarrollo y sus tropiezos, y que se refieren a las diferentes concepciones de poder manejadas por los “patrones” y los “mercaderes”. Existiendo, como ya hemos visto, consenso en cuanto a la conciencia de ser la clase minoritaria llamada a manejar la República y al “pueblo” (y en un sentido ciudadano, de ser el único verdadero “pueblo”) el disenso estuvo en su relación y objetivos hacia el poder: *“en Chile, el capital comercial-financiero ejerció una prolongada supremacía, pero sin resolver el conflicto. La tensión cruzaría todo el siglo XIX, y aún más allá”<sup>45</sup>.*

Asimismo, no pueden dejar de mencionarse las enconadas luchas en los campos de la educación y la religión. Aunque el tema se volvió secundario para los historiadores actuales, más ocupados de estudiar las grandes transformaciones político-económicas, sabemos que consumieron ríos de tinta y de energías oligárquicas. Para las elites, éstas

---

<sup>43</sup> Gabriel Salazar, *Diferenciación y conflicto en la clase dominante chilena (1820-1973)*, mimeo, 1983, p. 18.

<sup>44</sup> *Ibid.*, p. 21.

<sup>45</sup> *Ibid.*, p. 15.

no fueron luchas menores, aunque luego hayan quedado atrás, postergadas por crisis más serias. Jocelyn-Holt destaca, por ejemplo, las enconadas discusiones en torno a la relación entre Estado y cultura en la década de 1840: temas como la gramática, el romanticismo y la naturaleza de la Universidad apasionaron a personajes como Andrés Bello y Domingo Faustino Sarmiento, y significaron disensos de no menor importancia para las elites<sup>46</sup>. Asimismo, historiadores como Gonzalo Vial y Francisco Antonio Encina nos han dejado un rico relato de las querellas religiosas decimonónicas<sup>47</sup>. Han elaborado, por ese intermedio, la imagen de unas elites capaces de las peores descalificaciones públicas, utilizando como bandera de lucha la “cuestión moral” en la derrota del adversario.

Sin embargo, las elites chilenas decimonónicas fueron capaces de atacarse y contradecirse, pero finalmente llegar a pactos y alianzas sin sumirse en una lucha total. La tensión entre los proyectos de los mercaderes-banqueros y los “patrones”, una de cuyas más violentas expresiones habría sido, según algunos autores, la Guerra Civil de 1891, no desembocó en la destrucción definitiva de un paradigma de poder por el otro<sup>48</sup>. Más bien se abrió una etapa difusa, donde el peso del capital extranjero, los antiguos proyectos federalistas y la “aldeización del Estado” hicieron que a inicios del siglo XX la mayoría de los chilenos buscara otras alternativas —aunque una interpretación reciente recupera la “localización” del poder implícita en la Ley de Comuna Autónoma de 1891 como un elemento al menos potencialmente democratizador y favorable al surgimiento de una verdadera ciudadanía popular<sup>49</sup>.

Asimismo, las guerras civiles de 1851 y 1859, y la misma de 1891, son ejemplos de la capacidad de las elites para atacarse entre sí con extrema dureza y llegar hasta el conflicto armado, pero, victorioso un grupo, no exterminarse. Ello, nos parece, marca una diferencia esencial en las relaciones de los grupos de elite entre sí, en relación con la actitud que son capaces de asumir frente a otros grupos sociales. Terminados los conflictos, no hay “noches de los cuchillos largos” para los líderes derrotados, bastando tal vez con una muerte emblemática como la de Balmaceda. Acaso cuando Sergio Villalobos se refiere a la herencia positiva que nos dejó la república liberal del Siglo XIX, definida como el respeto a los derechos políticos y las garantías individuales<sup>50</sup>, el respeto aludido no com-

<sup>46</sup> Jocelyn-Holt, *El peso de la noche*, op. cit., ps. 35 y ss.; también Sol Serrano, *Universidad y nación. Chile en el siglo XIX*, Santiago, Editorial Universitaria, 1994.

<sup>47</sup> Ver por ejemplo Ricardo Krebs (ed.), *Catolicismo y laicismo. Las bases doctrinarias del conflicto entre la Iglesia y el Estado en Chile*, Ediciones Nueva Universidad, Santiago, 1981. También Gonzalo Vial, op. cit., vol. I, tomo I.

<sup>48</sup> Ver al respecto Hernán Ramírez Necochea, *Balmaceda y la contrarrevolución de 1891*, Santiago, Editorial Universitaria, 1972; también Maurice Zeitlin, *The Civil Wars in Chile (or the Bourgeois Revolutions that Never Were)*, Princeton, Princeton University Press, 1984.

<sup>49</sup> María Angélica Illanes, “El proyecto comunal en Chile. 1810-1891”, *Historia* N° 27, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1993.

<sup>50</sup> Sergio Villalobos, “Antecedentes Históricos”, en VV.AA., *Visión de Chile (1920-1970)*, Santiago, Ediciones CINDE, 1980, p. 24.

prenda al conjunto de la sociedad chilena y sus organizaciones, sino sólo aquellos individuos que la elite reconocía como miembros de ella misma, aunque estuviesen en oposición a las ideas triunfantes. Esta afirmación, más que una “herencia cívica”, debe ser entendida como una característica propia del equilibrio-tensión de poder que caracteriza a las elites decimonónicas.

### *Consensos y Disensos del siglo XX*

En el presente siglo, el panorama de los consensos y disensos de las elites se complejiza, precisamente a raíz de la complejización y diversificación de los liderazgos y de la sociedad misma.

La crisis del Centenario y el agotamiento del proyecto oligárquico-elitario del siglo XIX provocó nuevas alianzas y quiebres al interior de las antiguas elites chilenas.

Uno de los puntos de tensión de más largo alcance, que atraviesa los problemas del liderazgo desde la segunda década del siglo, se refiere al aislamiento de la derecha y sus duros conflictos con la democracia caudillesca del período 1920-1938, y también la dificultad para convivir con las coaliciones de centro-izquierda, desde 1938 hasta 1973.

Dejando atrás la caricatura de una clase alta absolutamente insensible a los cuestionamientos formulados en la Crisis del Centenario, era evidente que entre los años de 1915 a 1920 la clase dirigente se hallaba en proceso de readaptación política, “que en 1919 produjo casi un consenso de la elite política en torno a la necesidad de una ‘evolución que evitara la revolución’”<sup>51</sup>. Sin embargo, la irrupción en escena de la figura de Arturo Alessandri rompió dicha atmósfera. La invocación a la “querida chusma” despertó la antigua prevención liberal contra el desborde de la irracionalidad y el peligro de las masas desatadas. Esa coyuntura habría impedido la creación de una derecha unificada en posiciones evolucionistas, manteniendo sus pautas básicas de dominación y arrastrando a las fuerzas “intermedias”, vale decir moderadas, hacia su propio campo<sup>52</sup>.

De allí en adelante, los liderazgos no pueden considerarse como un poder sólida o claramente identificable con una sola clase. La aparición de partidos políticos de masas, de los Frentes Populares y de un liderazgo intelectual y universitario donde figuras y un “espíritu mesocrático” se hacen visibles, impide hacer una relación automática entre liderazgo-clase dominante. La lucha de clases, asumida como el principal desafío que la burguesía chilena debió enfrentar desde los años treinta en adelante, adormeció el conflicto “inter-burgués” entre las décadas de 1950 y 1970, aunque el proyecto demócra-

---

<sup>51</sup> Tomás Moulian e Isabel Torres, “La derecha en Chile: evolución histórica y proyecciones a futuro”, *Estudios Sociales*, CPU, N° 46, 1986, ps. 67-68.

<sup>52</sup> *Ibid.*, p. 69.

ta cristiano de “Revolución en Libertad” relativice hasta cierto punto esta afirmación. En todo caso, las propuestas revolucionarias de los años sesenta generaron la posibilidad no sólo de recurrir a la violencia armada para acabar con ellas, sino incluso de romper el “pacto de caballeros” y la circularidad de un eventual conflicto entre burguesías sin enfrentarse a una lucha interna como la de 1891<sup>53</sup>, y también, podría agregarse, sin replegarse a una posición secundaria en el ámbito político, como ocurrió en 1920.

Pues, probablemente, como destaca Tomás Moulian en su *Anatomía de un Mito*, parte de los errores de visión cometidos en la dictadura temprana se debió a que se seguía pensando que unas elites respetarían a las otras; que el gobierno militar naciente no pasaría por encima del juego tradicional de arreglos posteriores al disenso, por profundo —e incluso sangriento— que éste hubiese sido. No se había tomado en cuenta lo que —a su manera de cientista político— destaca Eduardo Valenzuela: que los liderazgos adecuados a una política de conducción de masas habían sido rebasados por la fuerza y el temor hacia los “representados”. Para la “gente de orden”, “[la Unidad Popular] fue un período de caos, donde los perversos comunistas y otros desclasados azuzaron al roto... para ellos fue una oscura etapa de demagogos irresponsables”<sup>54</sup>.

Sin embargo, no parece éste el mejor ejemplo de los momentos en que las elites se han visto obligadas a ponerse de acuerdo a pesar de sus profundas diferencias. Hay otros más claros; por ejemplo, el consenso forzoso de la clase empresarial en los primeros diez años de dictadura, donde los sectores corporativistas cedieron ante la presión de los neoliberales, respondiendo a un temor común frente al enemigo socializante. O el consenso forzoso de la oposición para enfrentar el régimen pinochetista, del que también se hablará en el punto final de este capítulo.

## 1.2.- CARACTERIZACION DE LAS ELITES DIRIGENTES CHILENAS (1810-1980)

### I. Las Elites Decimonónicas (1810-1891)

Uno de los problemas que ha debido enfrentar la historiografía chilena (y la latinoamericana en general) ha sido la querrela de los conceptos. Aparte de la acusación general a la ciencia histórica de que no crea conceptos, sino que los toma prestados de las

---

<sup>53</sup> Salazar, *Diferenciación y conflicto...*, op. cit., p. 53.

<sup>54</sup> Tomás Moulian, *Chile Actual: Anatomía de un mito*, Santiago, Ediciones ARCIS-LOM, 1997, p. 168; también Alfredo Jocelyn-Holt, *Chile Perplejo: Del avanzar sin transar al transar sin parar*, Santiago, Planeta, 1998.

demás disciplinas, se une la dificultad de adoptar conceptos generados por la historiografía europea. ¿Qué fueron, conceptual y realmente hablando, nuestras elites dirigentes en el siglo XIX? Como bien apunta Rafael Sagredo en su estudio sobre los trabajos referentes a estos grupos sociales, los estudiosos no se han preocupado de precisar qué entienden por elite. El término se emplea indistintamente como sinónimo de “aristocracia”, “burguesía”, “oligarquía”, “patriciado”, “grandes familias”, “autoridades”, “personajes políticos”, “familias más importantes”, “altos grupos sociales”, “familias influyentes”, “grupos dirigentes”, “sectores sociales elevados” o “fronda aristocrática”. Probablemente, lo único que sea general a todas estas categorías sea su referencia a una entidad local, nacional y chilena<sup>55</sup>.

Si nos preguntamos de dónde proviene esta abundancia y confusión de términos, la respuesta probablemente radique en la transformación de las visiones en torno a estas elites dirigentes chilenas, en tanto grupo social, económico y político, a lo largo de los estudios históricos dedicados al tema.

### *El “mito de los orígenes” de las elites chilenas*

En los manuales escolares de historia, y en no pocos análisis políticos, sociales y culturales de nuestro espacio nacional, se ha desarrollado un “mito de los orígenes” de nuestros grupos dirigentes para el siglo XIX, e incluso hasta el XX; es decir, la primera matriz, la imagen creada del primer grupo social que asumió la tarea de la dirigencia nacional. Antes de referirnos a los estudios más recientes sobre las elites decimonónicas, es importante revisar el mito.

Este mito en gran parte ha sido construido y/o transmitido por la historiografía conservadora, especialmente aquella que se escribió durante la primera mitad de este siglo. Los historiadores “clásicos” chilenos del siglo XIX no enfocaron sus obras como un estudio de las elites, sino como un estudio de la historia “de Chile”, aunque su concepción del país tendía a ver a esa misma elite como único sujeto relevante. Tal como lo conocemos, por tanto, el “mito de los orígenes” se remonta a la historiografía conservadora de los años veinte a los cincuenta, en que, con nostalgia de una preeminencia y un liderazgo que consideraban perdido, se construyó la imagen de una edad dorada en que una aristocracia virtuosa regía los destinos nacionales. Pertenecen a esa corriente historiadores como Alberto Edwards, Francisco Antonio Encina y Jaime Eyzaguirre, pero no sólo alcanza a las interpretaciones generales, o centradas en la aristocracia santiaguina; también encontramos la imagen aristocratizante en las crónicas provincianas “que no sólo perci-

---

<sup>55</sup> Rafael Sagredo Baeza, “Elites chilenas del siglo XIX. Historiografía”, *Cuadernos de Historia* N° 16, Santiago, Universidad de Chile, 1996.

ben como protagonista exclusivo de la historia a un sector social que designan como aristocracia o nobleza regional, sino que atribuyen a este sector una clara y absoluta superioridad sobre el resto de la sociedad”<sup>56</sup>.

En Chile habría existido una suerte de “antigua nobleza” colonial. Una aristocracia rural, formada sobre la base de la gesta guerrera de la conquista y la propiedad de la tierra. Luego, con el aporte de los vascos del norte de la península ibérica, trabajadores y honestos, se habría formado la llamada “aristocracia castellano-vasca”. El término, acuñado por Francisco Antonio Encina, da cuenta de las pretensiones aristocráticas, hispanistas y racistas de su postura. El elemento de continuidad en ellos es fuerte, especialmente en el contexto de predominio rural del Chile Colonial y el siglo XIX; esto habría favorecido la visión aristocratizante, que puede asirse en la relativa continuidad de las elites provincianas, donde generaciones de una misma familia se suceden en los cargos de autoridad y en la propiedad de los bienes<sup>57</sup>.

Pero el espejo no es la imagen. La crítica a una colonia dividida entre “caballeros criollos” y “rotaje” de indios, mestizos y españoles pobres necesariamente alcanzó a la imagen de esta “antigua nobleza” chilena. ¿Podía, verdaderamente, hablarse de aristocracia en Chile? ¿Calzaban los modelos de la aristocracia con la realidad chilena? ¿Qué pasaba con las características de comerciante —muchas veces no demasiado honesto— del hacendado colonial? ¿Qué decir de su desobediencia a los preceptos religiosos, de sus tendencias liberales, de sus frecuentes “recién llegados”, de su fluidez como clase, de sus matrimonios mixtos?

### *De la “aristocracia” terrateniente a la burguesía mercantil*

La mayor parte de los autores que tratan el período, coinciden en opinar que los grupos dirigentes de la sociedad chilena no sufrieron una transformación profunda ni inmediata con la llegada de la Independencia. Al margen de las convulsiones políticas del período, de los intentos reformistas de los grupos pipiolos y de la guerra, las actividades económicas y los modos de vida de las elites no cambiaron de improviso ni radicalmente.

Aproximadamente hasta la década de 1830, las elites chilenas siguieron siendo un grupo que basaba su poder social, económico y político en una estructura agraria. Hasta la década de 1850, al menos, Chile seguía siendo un país con un 80% de población rural, ciudades y puertos poco desarrollados y un grupo dirigente de vida casi provinciana,

---

<sup>56</sup> Luis Barros, “El mundo provinciano según sus historiadores y cronistas contemporáneos”, *Revista Estudios Sociales*, N° 48, Santiago, CDU, 1986, p. 14 y ss.

<sup>57</sup> Luis Barros, *op. cit.* Véase en especial el caso de la familia Donoso, avecindada en el antiguo Corregimiento del Maule, y que desde el siglo XVII hasta los años cuarenta del siglo XX exhibe un predominio en los cargos públicos locales y la heredad de las propiedades agrícolas; ps. 15 y ss.

herederos de la ruralidad colonial y sin fortunas espectaculares<sup>58</sup>. Asimismo, en su obra sobre la burguesía decimonónica, Sergio Villalobos apunta que si en el siglo XVIII el rasgo mercantil de estos grupos se había acentuado, junto a los inevitables negocios inescrupulosos había un trasfondo de moralidad, recato y prudencia “del viejo estilo, como consecuencia de la escolástica y de un mundo de negocios poco desenvuelto, en que los lazos familiares y de amistad se dejaban sentir muy fuertemente”, y que la manera de hacer negocios conservaba un “sabroso tono familiar”<sup>59</sup>. Según esa opinión, al menos una parte del mito de los orígenes no habría estado errada.

Esta percepción de una clase dirigente más austera —y, francamente, más pobre— que la que vendría después, también está presente en las crónicas de la época. Vicente Pérez Rosales, por ejemplo, dedica largas páginas a comparar a un Santiago y a unas familias tradicionales calmos, poco lujosos y coloniales, con los desarrollos posteriores<sup>60</sup>. Se nota en esas impresiones, por una parte, el orgullo de estarse convirtiendo en una sociedad moderna, más parecida a la europea, pero también una suerte de nerviosismo ante la pérdida de un “tono de la vida”, como lo expresaría Huizinga, que no era indiscriminadamente repudiable. Pérez Rosales se burla de la antigua iluminación a velones de Santiago, tan inferior al “moderno” alumbrado a gas, pero se duele de la pérdida de las visitas de casa a casa, con bandejas de comida en la mano. Y, como Benjamín Vicuña Mackenna, expresa alguna añoranza por el respeto a la autoridad paterna, que identificaba como propio de un mundo hispano y colonial que se habría ido perdiendo con las “libertades” posteriores<sup>61</sup>.

A partir de las décadas que van de 1820-30 en adelante, las transformaciones de esa “aristocracia” terrateniente adquieren más velocidad.

Por una parte están las transformaciones económicas, que serán tratadas en detalle en otro volumen de esta historia, pero de las que nos interesa profundizar en lo que significaron para el cambio de ritmo de las elites. Como ya se mencionó, la tensión entre los elementos “patronales” y “mercantiles” de las elites cobraría mayor fuerza, influyendo sobre los proyectos políticos y económicos que defendían. La riqueza minera de la plata, el aumento de las exportaciones de cobre, el auge triguero de las exportaciones a California y el crecimiento de la actividad mercantil- exportadora (con el auge del puerto de Valparaíso) cambiaron la faz de esa elite. El grupo de los “merchant bankers”, ese patriciado mercantil, comienza a cobrar mayor fuerza, aunque ya estaba influyendo en la política y la construcción del Estado desde la Independencia<sup>62</sup>. Nue-

---

<sup>58</sup> Cristián Gazmuri, *op. cit.*, Introducción.

<sup>59</sup> Sergio Villalobos, *Origen y ascenso de la burguesía en Chile*, Santiago, Editorial Universitaria, 1987.

<sup>60</sup> Vicente Pérez Rosales, *Recuerdos del pasado*.

<sup>61</sup> Benjamín Vicuña Mackenna, *La era colonial*, Santiago, 1869.

<sup>62</sup> Gabriel Salazar, *Diferenciación y conflicto...*, *op. cit.*, ps. 14 y ss.

vos apellidos, nuevas familias, nuevas fortunas y nuevas formas de vivir la riqueza llegan al entorno de las elites.

Junto a ello, e influyéndose, por supuesto, unos elementos con otros, está la estabilidad política. Gazmuri ha afirmado que nuestras luchas por la Independencia y las convulsiones posteriores, con tener momentos de evidente violencia, no quebraron en profundidad las relaciones al interior de las elites chilenas. En la interpretación de nuestra historiografía tradicional, esto se expresó en el triunfo de un “Estado en forma”, con la derrota de las tendencias liberales y centrífugas y el inicio desde 1830 de aquel largo período de estabilidad que se conoce como la “República Autoritaria”. Sea cual fuere la postura que se adopte ante la controvertida figura de Diego Portales o la dirigencia posterior, ya sea que en ella se vea un verdadero “proyecto de clase” o más bien un “consenso forzoso”, lo que interesa destacar aquí es el hecho de la estabilidad obtenida, aunque no fuese perfecta. Durante un período de aproximadamente veinte años, las elites gobernantes consolidaron un proyecto conservador y autoritario en lo político, y liberal y mercantil en lo económico. En tal sentido, no fallaron. Después de las convulsiones que van desde 1810 hasta 1830, no pierden su preeminencia como grupo decisorio en la política, la economía y el control de la sociedad.

Sin embargo, se debe tener cuidado al afirmar que, a raíz de lo anterior, la eficacia sería reflejo de una supuesta homogeneidad. Las elites, al transformarse, también se complejizan. Como se señaló algunas páginas atrás, estudios más recientes han destacado los enfrentamientos entre terratenientes y “mercaderes” como base para entender las luchas políticas del siglo XIX<sup>63</sup>. Por otra parte, la dificultad de ese patriciado para convertirse en “genuina burguesía”, creadora de desarrollo económico<sup>64</sup>, nos alerta sobre la necesidad de comprender a estas elites como un grupo en transformación. Muestran rasgos burgueses, por supuesto, crece la acumulación de capitales, aumenta el comercio exterior y la presencia extranjera, pero también conflictúan con su herencia anterior.

Porque las transformaciones no se quedan sólo en lo político y lo económico; se expresan también en la sociabilidad, en el interés o el rechazo a los modelos europeos y en la relación con otros grupos sociales. En un fenómeno creciente, advertido por los cronistas de la época y por los historiadores de nuestro siglo, las elites miran a la Europa burguesa, a la Europa revolucionaria y también se sorprenden de sí mismas.

Por una parte, asistimos a la sobrevivencia de aquellos “valores tradicionales” tan apreciados por la historiografía conservadora. A lo largo del siglo XIX se conservarán los orgullos de casta; los nuevos ricos entroncarán familiarmente con la aristocracia terrateniente y también adoptarán el patrón tradicional y respetado de hacerse de tierras,

---

<sup>63</sup> Maurice Zeitlin, *op. cit.*

<sup>64</sup> Arnold J. Bauer, “Industry and the Missing Bourgeoisie: Consumption and Development in Chile, 1850-1950”, *Hispanic American Historical Review*, 1990.

convirtiéndose ellos mismos en latifundistas y estimulando la vitivinicultura, por ejemplo. Como destaca Gonzalo Vial, especialmente en el caso de las mujeres herederas de grandes fortunas, se conserva un estilo piadoso, de obra caritativa y sumisión a la Iglesia; quizás el paradigma de esa forma de ser rico y austero sea doña Juana Ross de Edwards, la “pobre más rica de Chile”<sup>65</sup>.

Pero desde otra mirada, avanzan el afrancesamiento, los modos de vida más ostentosos y la necesidad de un cotidiano más refinado. Los trabajos de nuestros historiadores durante los años sesenta y setenta de este siglo han arrojado luces al respecto, ampliando el campo a su mentalidad, su ideología, sus relaciones de sociabilidad, sus intereses culturales e intelectuales<sup>66</sup>. Gran parte de las dificultades al definir a esas elites probablemente vengan de sus propios arrestos aristocráticos, de sus “toques de distinción”, con los que intentan deslumbrarse entre sí y a sus visitantes extranjeros.

En este sentido, la literatura chilena decimonónica ha dejado retratos en que se mezclan las bien vistas virtudes burguesas y la tendencia a sentirse aristócrata. Novelas como la divulgada *Martín Rivas* son buen ejemplo de ello, y no por nada han sido citadas por historiadores como Gonzalo Vial y José Bengoa como un buen reflejo de las décadas de 1840 y 1850.

Pues está claro que Blest Gana glosaba y recogía, más que inventaba. Unos años más tarde, sus protagonistas podrían haber sido los descendientes de Francisco Subercaseaux, francés vecindado en La Serena en el siglo XVIII que hizo riquezas en la minería. Su hijo Ramón Subercaseaux se dedicó a los negocios en la banca y el comercio. Su nieto, Francisco Subercaseaux Vicuña, heredó la fortuna paterna y una participación importante en el Banco Inmobiliario, institución relativamente pequeña. Llegó a convertirse en magnate al adquirir bonos salitreros peruanos en 1878, con lo que se hizo de fuertes ganancias al mejor estilo de John Thomas North, el “rey del salitre”. Así llegó a manejar el banco, utilizándolo mayormente para sus negocios personales; poseyó diversos fundos y extendió sus negocios a Europa e instituciones crediticias de Francia y México. Este Francisco Subercaseaux casó con Juana Browne y Aliaga, hija del gerente de la casa Huth, Grunning y Cía., de Valparaíso, y por la vía del parentesco o la amistad terminó ligándose con la mayoría de las familias de la clase alta.

Julio Subercaseaux, el hijo de la pareja, nació en 1870. A los doce años se trasladó con su familia a París, donde vivieron en el lujo y la mejor bohemia de aquella ciudad. Adquirió allí el gusto por las carreras de caballos y las grandes fiestas, y se casó con

---

<sup>65</sup> Gonzalo Vial, *op. cit.*, vol. I, tomo I, capítulo I.

<sup>66</sup> Ver Hernán Godoy, *La estructura social de Chile*, Santiago, Editorial Universitaria, 1973, y, para el caso específico de los “modos de ser” de las elites, Eduardo Balmaceda, *Un mundo que se fue*, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1969, segunda parte; y Bernardo Subercaseaux, “La cultura en la época de Balmaceda. 1880-1900”, en VV.AA. *La época de Balmaceda*, Santiago, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 1992.

Marta Aldunate Echeverría, belleza chilena también residente en París e hija del político, ministro de hacienda y economista Luis Aldunate. Volvieron a Santiago, brillando en sociedad como una joven pareja afrancesada, y a pesar de enfrentar serios tropiezos económicos en 1906, erigieron una mansión en la plazuela del Teatro Municipal, con todo el alhajamiento interno venido de Francia y de hierro trabajado en Bélgica, que hoy corresponde a la sede del Banco de Agustín Edwards. Julio Subercaseaux hizo algo de carrera política en el Partido Conservador, obteniendo la primera mayoría como diputado por Carelmapu; esto último no le resultó difícil, ya que disponía de tres mil votos correspondientes a los inquilinos de sus fundos o los que tenía en arriendo o administración. Recordaría siempre ese último tercio del siglo XIX, en que se vivía “en Jauja”<sup>67</sup>.

La “saga” de la familia Subercaseaux, que sólo se particulariza a modo de ejemplo y porque ellos mismos se encargaron de dejarnos sus memorias, podría compararse sin demasiadas variaciones con la de otras familias contemporáneas de elite, como los Cousiño, los Errázuriz-Urmeneta o los Concha y Toro. En cada una de esas experiencias puede apreciarse cómo el paso de la historia fue transformando a nuestras clases dirigentes, pero siempre conservando esa combinación entre elementos “burgueses” y “aristocráticos” que a final de cuentas se configura como uno de sus rasgos más definitorios.

### *Vuelta a la definición*

Por lo dicho, no puede hablarse en el Chile del siglo XIX de una aristocracia ni feudal, ni nacida directamente de privilegios monárquicos; ni tampoco de una aristocracia de castas cerradas y mantenidas en el tiempo. Lo único que, tal vez, pueda rescatarse de este concepto es la idea de una “debilidad aristocratizante”: el deseo de devenir tal, la mayor parte de las veces cumplido a través del consumo ostentoso, el viaje a París y la imitación de modos de vivir refinados, señoriales y despectivos hacia las clases inferiores y los “recién llegados”.

Podría por otra parte adoptarse la clasificación amplia de burguesía o de “alta burguesía”. Sin embargo, también aquí cabe ser cauteloso: las elites decimonónicas, que gustaron de sentirse aristocráticas, agrarias en amplia medida, muchas veces más proclives al gasto que a la inversión, y frecuentemente cuestionadas por su “capitalismo primitivo” y su escasa capacidad de ahorro y capitalización, tampoco corresponden muy bien al “burgués de viejo cuño” delineado por Sombart, ni al burgués aventurero, audaz en los negocios y laico en el vivir.

En tal virtud, no se puede dejar de mencionar la definición de la clase alta chilena

---

<sup>67</sup> Resumido de las *Reminiscencias* de Julio Subercaseaux Browne, citado por Villalobos, *Origen y ascenso de la burguesía en Chile*, op. cit.

como una oligarquía, tal vez el concepto más adecuado: sin perderse en el complejo campo de los modos de ser y los modos de vivir aristocráticos o burgueses, difíciles de separar en una sociedad híbrida, apunta a la realidad de que son una elite, un grupo minoritario que, durante el siglo XIX se disputa el poder al interior de sí misma y no con el resto de los grupos sociales. Una oligarquía que a lo largo de ese siglo, derrotadas las intentonas liberales previas a Portales, se vuelve en general conservadora en lo político, liberal en lo económico, y mantiene relaciones conflictivas con otros cuerpos del liderazgo, como veremos más adelante. Una oligarquía, en fin, que asienta y conserva su poder, que dirige la educación y las artes, que pugna con o apoya a la Iglesia, y que se disputa internamente los cargos de gobierno.

Entonces, lo que tuvimos fue una oligarquía con rasgos burgueses y mercantiles, por una parte, con un pasado latifundista y terrateniente al que no quería renunciar, por otra, y en suma con un modo de ser algo paradójal, que oscilaba entre los valores burgueses del trabajo, la sobriedad y los buenos negocios, y una tendencia o debilidad por los modos de ser aristocráticos, ostentadores y europeizantes.

Esto se refleja, entre otras cosas, en sus edificaciones de dudoso o confuso gusto, en su apertura a unirse matrimonialmente con los inmigrantes extranjeros exitosos, y en su gusto por los viajes: “ir a París, y morir”, era señalado a menudo como el sueño máximo de estas élites aristocratizantes. Y al mismo tiempo otra vez, escandalizaba a sus elementos más conservadores con sus poderosos sectores librepensadores y anticlericales, que se enfrentaron duramente con el poder de la Iglesia, o tal vez se valieron de aquella bandera de lucha para debatir otras querellas de poder intestinas.

Es este grupo oligárquico el que se enfrenta entre sí en la revolución o reacción oligárquica de 1891. No analizaremos aquí el ya antiguo debate entre el ejecutivismo o el parlamentarismo, que pertenece a la parte política de esta obra. Lo que nos interesa en este punto fue el significado de esa confrontación para la evolución de su comportamiento y el juicio a su liderazgo.

## La crisis de una “aristocracia” (1891-1920)

### *La aristocracia distanciada e inoperante*

El llamado “Período Parlamentario” comienza con una elite triunfante que derrotó al “tozudo” Presidente Balmaceda, según expresión de Sergio Villalobos. Por fin liberada de las restricciones del autoritarismo presidencialista, ésta se vio casi inmediatamente sumida en la más profunda crisis de legitimidad y representatividad que había vivido desde los inicios de la era republicana.

Según la visión más difundida en los manuales escolares y en la interpretación “subjetiva” del período, el desenlace de la Guerra Civil de 1891 marcó el agotamiento de la “aristocracia” decimonónica. Tras casi un siglo de gobierno, y deslumbrada por las rentas fáciles del salitre y su extremo poder bajo el régimen parlamentario, se convirtió en una clase derrochadora, ociosa, despreocupada de los destinos del país y ciega a las poderosas demandas sociales, políticas y económicas de las “honradas” clases medias, por una parte, y del pueblo sumido en la miseria y la enfermedad, por la otra.

Sería extensísimo enumerar las bibliografías y fuentes básicas de la crítica social de la “Crisis del Centenario”, que denuncian este agotamiento y ceguera oligárquica. Destacan entre ellas, por supuesto, los ensayistas al estilo del Doctor Valdés Canje (Alejandro Venegas) y Nicolás Palacios, sacerdotes como el padre Hurtado y poetas como Vicente Huidobro. Todos destacan la idea básica de la oligarquía como una clase decadente, que tiene en sus manos los destinos de un país que está llevando al desastre. Y se ridiculiza —y se ridiculiza hasta hoy— a los presidentes del período, supuestamente paradigmas de esta clase decadente, que reposan relajadamente, como Ramón Barros Luco, en sus sillones de La Moneda.

Finalmente, al llegar la coyuntura crítica del año veinte, un presidente que decía representar a los pobres y la clase media llega al poder, terminando con el gobierno de los “aristócratas” y sacando al país —no inmediatamente, porque la tarea se ve obstaculizada— del empuñamiento del parlamentarismo, la rotativa ministerial y la insensibilidad social.

Sin embargo, se han formulado análisis más estructurales y profundos de la situación vivida en torno a la Crisis del Centenario. Para éstos, las preguntas básicas serían dos: ¿Se debió esa crisis a la “decadencia de una aristocracia”? ¿Es realmente el año 1920 un punto-eje de cambio en la estructura social nacional?

En parte, las causas del descrédito del discurso oligárquico tradicional ya se habían comenzado a gestar desde los años setenta del siglo XIX. Las luchas por la convertibilidad monetaria, las querellas eclesiásticas y las batallas electorales habían debilitado la cohesión hegemónica, pero la crisis se vio aplazada por la Guerra del Pacífico, el bienestar económico que ella generó, y la victoria obtenida contra Balmaceda. Al momento del Centenario, sin embargo, las tensiones contenidas no resistieron más. La despersonalización del gobierno y el fin de la querrela religiosa no fueron suficientes para restablecer o mantener una situación de poder social indiscutido. Para el conjunto del país aquellas eran luchas ya indiferentes, ante las graves críticas a un modelo de sociedad que creían agotado<sup>68</sup>.

---

<sup>68</sup> Julio Heise González, *Historia de Chile. El período parlamentario*, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1974; tomo I, p. 152.

Por otra parte, la historiografía marxista, sin estar en desacuerdo con la tesis de la “clase ociosa” y despilfarradora, ha enfatizado más las transformaciones estructurales que la burguesía nacional experimentó en este período. La burguesía minera del Norte prácticamente desapareció, prefiriendo vender sus posesiones al mejor postor ante el avance de los capitales extranjeros en las explotaciones de cobre y salitre. A fines de la década de 1920, esa burguesía minera criolla se había fundido con las elites agrarias, industriales, mercantiles o financieras. Asimismo, se ha llamado la atención sobre la ya inveterada reticencia de los sectores terratenientes hacia la modernización de la producción agraria como una de las causas de la crisis de la vieja oligarquía terrateniente y su poder político, y la emergencia de una nueva burguesía industrial y nuevos sectores burgueses comerciales y constructores nacidos al calor de la “fiebre del lujo” financiada por la riqueza salitrera<sup>69</sup>.

A los análisis precedentes se debe sumar la interpretación que ve al régimen parlamentario como una expresión tardía del antiguo federalismo patronal de los años 1820. El sector manufacturero-industrial aún carecía de representatividad dentro del Estado, y los mineros del Norte, como hemos visto, se encontraban en franco proceso de repliegue. El predominio mercantil-financiero flaqueaba, en cuanto a su capacidad para reavivar la lucha ya librada (y agotada) en 1891. Se proclamó la “crisis moral de la República” y los caudillos patronales lamentaron nuestra “inferioridad económica”<sup>70</sup>.

Independientemente de las caracterizaciones o explicaciones ofrecidas, todo indica que en el tránsito del siglo XIX al XX la elite dirigente enfrentó una crisis de legitimidad y predominio político, y por extensión, pareció hacer posible un cambio de la sociedad en su conjunto. En verdad, era su modelo de país, era su práctica como clase hegemónica la que estaba fallando. Durante casi un siglo, o al menos desde 1830-1850 en adelante, la oligarquía liberal, conservadora en lo político, libertaria en las luchas congresistas, árbitro de la cultura y la elegancia, agraria y abierta al comercio exterior, había logrado mantener su poder sin grandes contrariedades. Las luchas políticas habían sido principalmente sus luchas internas: frente a los intentos de otros grupos, se habían unido en la represión.

Pero ahora el contexto había cambiado. Su balance económico era discutible, como también lo era su débil —o casi inexistente— iniciativa en materia de políticas sociales. Se debe subrayar que la crítica no venía sólo de los ensayistas de clase media y de la izquierda: al interior de la propia oligarquía también se alzaron voces de protesta. Paradójicamente, y tal vez fieles a su ya centenaria convicción de ser la clase política y activa del país por excelencia, extrapolaron su crisis al conjunto de la sociedad, y sintieron que era “el país” el que se deslizaba hacia el desastre.

---

<sup>69</sup> Luis Vitale, *Interpretación marxista de la historia de Chile*, vol. 5, ps. 72 y ss.

<sup>70</sup> Gabriel Salazar, *Diferenciación y conflicto...*, *op. cit.*

## La transformación de las elites (1920-1980)

### *Pluralización y complejización de las elites dirigentes*

Una visión menos difundida ha sugerido que desde el punto de vista institucional, la elección de Arturo Alessandri marca un momento muy significativo en la historia nacional, un momento de alta efervescencia social, con un movimiento estudiantil y obrero en expansión, pero sin que ello indique necesariamente un cambio profundo ni en las estructuras del poder ni en las relaciones sociales más definitorias<sup>71</sup>. Este proceso fue más lento y equívoco. La percepción trágica del pensamiento conservador de los años veinte a los cuarenta, que temió asistir al ocaso definitivo de una clase y su sustitución más o menos violenta por los grupos medios, por los extranjeros enriquecidos y los advenedizos en general, parece no ser refrendada por un análisis con mayores matices.

La estructura social de la dirigencias que se inician en las dos primeras décadas del siglo XX comprende una evolución que abarcó un período más largo, y que no posee un momento demoledor y refundante. Más que hablar del período 1920-1925, es decir, desde la elección de Arturo Alessandri a la promulgación de la Constitución de 1925, hay que referirse a un período difícil y cambiante, asolado por los golpes militares, el caudillismo, el enfrentamiento en la tribuna política y en la prensa, y también en el área de las políticas económicas y sociales, hasta —por lo menos— el año 1938, con la llegada al poder del Frente Popular.

Entre 1920 y 1932 se sucedieron una serie de intentos frustrados de reforma, como el reformismo alessandrista y el militar, pero que finalmente no constituyeron una “revolución social”. El triunfo de los Frentes Populares (1938-1947) significó un reemplazo de los partidos políticos oligárquicos en el gobierno por nuevos personajes y grupos profesionales y técnicos (e ideológicos), que pertenecían en muchos casos a las capas medias y abrigaban los ideales desarrollistas y mesocráticos de los años treinta a los cuarenta. Sin embargo, al hablar de la constitución de los grupos o clases dominantes específicamente para este período, puede caerse en la desviación de juzgar la estructuración global del poder de las clases dominantes sólo por su incidencia en lo político.

Porque si bien la Derecha no tuvo una participación relevante en los nuevos gobiernos de corte “desarrollista-populista”, en la arena parlamentaria conservó un peso de representación no inferior al 47%. Conservó también su experiencia de maniobra política, con lo que los nuevos grupos gobernantes terminaban prefiriendo la búsqueda de opciones de centro antes que radicalizar la confrontación clasista, temiendo chocar

---

<sup>71</sup> Jorge Ovalle, “Antecedentes políticos”, en *Visión de Chile*, op. cit.

con el problema del atraso agrario e incluso con una posible oposición católico-laica en su propio electorado<sup>72</sup>.

La historiografía marxista tradicional ha sido categórica en relación a este tema, subrayando la permanencia de una elite plutocrática en el poder, que ciega y siega los procesos de verdadera apertura y democratización de la sociedad. Se critica con fuerza el discurso caudillesco y populista de Alessandri Palma, por ejemplo, que integró a los nuevos sectores burgueses —el comercial y el industrial— en una alianza política que le permitió llegar al poder, pero con el poder del “apellido” manteniéndose siempre en un sitial protagónico. El gobierno de Alessandri, en tal lectura, siguió siendo oligárquico<sup>73</sup>.

Por otra parte, y como se ha visto en el primer apartado de este capítulo, fue precisamente entre los años treinta y los cincuenta cuando el pensamiento conservador construyó el “mito de los orígenes” de la oligarquía nacional, en el sentimiento de que habían perdido su esencia más virtuosa. El “caballero” del siglo XIX no era tal si no tenía ricas tierras en el centro-sur, si no poseía mansión en el casco antiguo de Santiago, si no hacía el viaje a Europa y si además no estaba relacionado de alguna forma con la política, a menudo desde un tranquilo escaño parlamentario.

El nuevo oligarca, en cambio, a menudo no reunía esas condiciones. Las nuevas burguesías industriales y comerciales que se integran a partir del ocaso del gobierno oligárquico tradicional acusan el aire de los tiempos. El modelo parisino ya no es más que un recuerdo del pasado. Sus esposas y sus hijas ya no son damas caritativas, vestidas de negro y dedicadas a las labores piadosas; la beneficencia es principalmente un asunto del Estado. Algunas se vuelven incluso feministas, artistas e intelectuales, y escandalizan a sus ascendientes con sus nuevos discursos y actividades, como es el caso de la escritora *Iris*, de la poetisa Teresa Wilms Montt y de la escultora Rebeca Matte. Los “modos de ser” de la elite decimonónica, como los llamaría un historiador de las mentalidades, ya no son hegemónicos.

Novelas como *La Chica del Crillón*, de Joaquín Edwards Bello, dan cuenta irónicamente de los “apellidos vinosos” que se desmoronan ante la crisis económica de la década de 1930, para dar paso a una elite deseosa de ser considerada al mismo nivel que la anterior, pero que ya acusa diferencias: las “niñas Cepeda”, despreciadas y envidiadas por la venida a menos Teresa Iturrigorriaga, viven en Providencia, el nuevo barrio de los ricos; su riqueza es industrial y su “siútica” madre lee a Freud y habla inglés, en la nueva moda de la época. Asimismo, novelas de José Donoso, como *Coronación* o *El obsceno pájaro de la noche*, entregan una negra imagen de los antiguos linajes en decadencia,

---

<sup>72</sup> Moulian y Torres, *op. cit.*, p. 72.

<sup>73</sup> Julio César Jobet, *Ensayo crítico del desarrollo económico social de Chile*, Santiago, Editorial Universitaria, 1955; también Vitale, *op. cit.*, p. 73.

apegados a un pasado patronal-campesino que flaquea y a una tradición afrancesada que se anacroniza.

Personajes venidos de los grupos medios y de los inmigrantes —elevados por el éxito económico o el talento personal— surgen junto a las elites sociales tradicionales. Los radicales, desde este punto de vista, conformaron una elite de modos de ser y gobernar diferente a la clase alta tradicional. Se identificaron con la tradición laica y proeducacionista propia de los sectores medios profesionales, que habían ganado fuerte respetabilidad. Asimismo —más allá de lo estrictamente político— cultivaron un estilo público algo campechano, que ha dejado el recuerdo de una época tranquila y socialmente tolerante. Como ha afirmado humorísticamente Enrique Lafourcade, “el de los radicales fue un bonito Chile. Tenían, además, una enorme amplitud doctrinaria... estaban dispuestos a negociar todos sus principios por unas buenas patitas de chancho...”<sup>74</sup>.

Lo que hace complejo a este nuevo liderazgo es la yuxtaposición, la pluralidad, la alianza y la integración a las elites de otros modelos y personajes. Si hemos afirmado que 1920 no fue el “año de la revolución” para Chile, ello no significa que los cambios de allí en adelante no se hayan intensificado y profundizado. No pasó inadvertida la integración de líderes venidos de otros sectores sociales a las elites tradicionales —no sólo las políticas, sino también las profesionales y culturales—; no pasó de largo el *American way of life*, ni el auge y posterior caída de los fascismos europeos. Radicales, independientes, derecha tradicionalista y demócratacristianos, y hasta una izquierda más consolidada y rica en posturas, son parte de ellas, y se disputan el poder durante el período. A mediados de los años cincuenta, y con más fuerza en los sesenta, nos encontramos con unas elites seriamente transformadas.

### *El disenso profundo y el enfrentamiento*

Ello se explica por una complejización del panorama social general chileno, y también por el juego promesas-desencanto del que ya se ha hablado y que desde los años treinta en adelante se vuelve paulatinamente más duro. Los sectores medios no tienen una identidad de clase definida, pero se vuelven un segmento social tan diverso como numeroso, y que ejerce su poder hacia los partidos de Centro: el Partido Radical, primero, y luego como aplastante fuerza electoral al servicio de la Democracia Cristiana. El juego político se hace cada vez más competitivo, en gran medida porque crece la percepción en el electorado de pertenecer a grupos sociales con demandas y tradiciones diferentes. El “peso de la noche” se ha alivianado, y con ello las tormentas se desatan.

Por otra parte, los sucesivos fracasos de las elites de distinto signo en el plano

---

<sup>74</sup> “Contra corriente”, entrevista a Enrique Lafourcade en *Revista El Capital*, octubre de 1997, p. 62.

económico contribuyen y se entrelazan con la competencia política. Como ha afirmado Alan Angell, hablando de los gobiernos que van desde Jorge Alessandri a Pinochet, “las cuatro administraciones de este período siguieron —con variados resultados— políticas muy diferentes para manejar problemas que se presentaban con monótona regularidad”<sup>75</sup>. La idea de Chile como “desarrollo frustrado”, acuñada por Aníbal Pinto precisamente durante estos años, cobró cada vez más adeptos.

Las alianzas, cuya eficacia para formar consenso en las elites se había probado repetidas veces, se hacen cada vez más difíciles. Con esto no se hace referencia solamente a las alianzas partidarias, sino al menos visible (y menos estudiado) mundo de las alianzas y tolerancias al interior de la sociedad y los grupos de poder. La formación de bloques elitarios refractarios a la alianza no se dio sólo en los procesos electorarios y en el Estado. Alianzas que pudieron producirse, por proyectos comunes o por tradiciones compartidas, no llegaron a concretarse.

Probablemente, el caso más claro de ese fenómeno sea el de la Democracia Cristiana. Por una parte, su crecimiento y transformación en un movimiento progresista significó una ruptura de suma importancia al interior de los sectores católicos, identificados desde larga data con el tradicionalismo social y político. El crecimiento de la Doctrina Social de la Iglesia hasta el aplastante triunfo de la Democracia Cristiana en 1964, da cuenta de lo profundas que llegaron a ser las diferencias entre los sectores católicos conservadores y derechistas y los cristianos de compromiso social, como lo prueban, entre otros, la obra política y ensayística de Eduardo Frei Montalva. Por otra parte, sus dificultades para aliarse con un movimiento socialista y marxista también fueron una piedra de toque que profundizó los disensos. Los programas de cambio social de los gobiernos de la Unidad Popular y de la Democracia Cristiana fueron bastante similares, pero las diferencias eran de otro orden. Aliarse con los marxistas, revolucionarios, ateos y (se decía) armados, era para muchos de ellos inaceptable. Como escribió irónicamente Frei Montalva,

*Como si fuera poco, en la Iglesia Católica aparecen los representantes de la izquierda, quienes quieren demostrar con sutilezas teológicas como aquellas de saber cuántos ángeles cabrían en la punta de un alfiler, que se puede ser cristiano siendo marxista, siempre que el marxismo no signifique borrar al cristiano..... San Ignacio de Loyola debe mirar con asombro a estos discípulos que en su afán de convertir infieles comienzan a abjurar de su fe para convertir a los que no creen, pero sin pretender convertirlos*<sup>76</sup>.

---

<sup>75</sup> Alan Angell, *Chile de Alessandri a Pinochet: en busca de la utopía*, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1993.

<sup>76</sup> Eduardo Frei Montalva, “Todos son de izquierda”, en *Eduardo Frei Montalva. Textos escogidos (1931-1982)*, selección y prólogo de Oscar Pinochet de la Barra, Santiago, Ediciones Centro de Estudios Latinoamericanos Simón Bolívar; p. 409.

Los sectores tradicionales acusan la amenaza. Luego de la derrota fascista en 1945, el corporativismo como ideología fue abandonado por la intelectualidad derechista. Mas a partir de 1970, el liderazgo de la lucha ideológica contra la izquierda marxista queda en manos del Movimiento Gremialista. Al decir esto, nuevamente no se habla sólo de “política”. Cuando se repite que una de las razones del quiebre de la democracia en Chile en 1973 fue la intolerancia y la polarización e ideologización nacional, se está hablando, en parte, del antiguo terror de las elites a presentir que la nación podía escapárseles de las manos, en un sentido que iba más allá de los poderes tradicionalmente en equilibrio. Como antídoto al quiebre que parece precipitarse, comienza a delinearse un nuevo proyecto de unidad nacional, conservador y autoritario en lo político, neoliberal en lo económico y con un fuerte discurso anti-partidos. Que Pablo Baraona, Jaime Guzmán, Ricardo Claro y Arturo Fontaine Aldunate hayan estado entre sus gestores, no deja de ser significativo<sup>77</sup>.

A comienzos de la década de 1970 los procesos de reforma agraria, el fracaso del PDC, con su contradicción entre un programa social cuasi revolucionario y un programa económico reformador, y el triunfo de Allende, hicieron que las elites chilenas se sintieran, quizás como nunca antes, al borde de un abismo.

El abismo era tal precisamente porque el gobierno de la Unidad Popular les disputaba un terreno que durante tanto tiempo había sido el suyo: el del Estado, y el de un “Proyecto Nacional” cuyo principal instrumento era ese mismo Estado. A partir de 1972, las movilizaciones de grandes y medianos empresarios, los paros de los transportistas y de los gremios profesionales desbordaron sus propios liderazgos políticos: “la importancia de este movimiento radica en que marcó un hito: el reemplazo de la movilización dirigida y manipulada por los partidos, por una movilización directamente generada por los empresarios—grandes y pequeños— cuyo objetivo era defender sus propios intereses en el sistema”<sup>78</sup>. En una entrevista otorgada en 1989, el General Pinochet contó que pocos días antes del Golpe, su esposa lo llevó al dormitorio donde dormían sus nietos y le dijo que no quería que ellos crecieran como esclavos: “Augusto, tienes que hacer algo”, le dijo<sup>79</sup>.

Las elites empresariales, conservadoras o antimarxistas, en uno de los consensos más duros que han debido enfrentar en su historia, cerraron filas, apoyando el Golpe militar o, *in extremis*, lamentándolo sin combatirlo. Fueron capaces de exterminar a miembros de

---

<sup>77</sup> Cristi y Ruiz, *op. cit.*; también Verónica Valdivia, “Camino al golpe...”, *op. cit.*; Sofía Correa Sutil, “Algunos antecedentes históricos del proyecto neoliberal en Chile (1955-1958)”, *Opciones* N° 6, Santiago, 1985; Sofía Correa Sutil, “La derecha en Chile contemporáneo: la pérdida del control estatal”, *Revista de Ciencia Política*, vol. XI, N° 1, Santiago, 1989; Gonzalo Cáceres Quiero, “El neoliberalismo en Chile: Implantación y proyecto 1956-1980”, *Mapocho* N° 36, Santiago, 1994.

<sup>78</sup> Valenzuela, *op. cit.*, p. 213.

<sup>79</sup> *Qué pasa*, julio de 1989, en *Anuario especial revista Qué Pasa. Las mejores entrevistas de los últimos 25 años*, Santiago, 1996.

sus propias filas sociales, si se habían “pasado al enemigo”. Como se afirma con más fuerza en la actualidad, particularmente en el análisis del sociólogo Guillermo O’Donnell al referirse a nuestro régimen “burocrático-autoritario”, distinto del fascismo clásico y de la “dictadura bananera”, las elites triunfantes se encontraron con que eran ellas las que debían acomodarse a y en el gobierno militar, y no viceversa. “Tenemos metas, no plazos”, afirmó la Junta de Gobierno. Se inició así una nueva época en nuestra historia de liderazgos, donde, como lo afirmó Sergio de Castro, “la disyuntiva verdadera no está entre regímenes autoritarios y democráticos, sino que entre regímenes con o sin liderazgo”. Los militares, encabezados por la figura del General Augusto Pinochet, que pronto se reveló como el principal personaje de la Junta de Gobierno, emprendieron una “restauración del país”. Se crearon nuevos cuadros de poder, recogiendo a algunas figuras de la derecha tradicional y formando su propia tecnocracia y colaboradores, su propia elite. Hombres jóvenes, como Jaime Guzmán, Sergio Fernández y los *Chicago Boys* fueron sus figuras emblemáticas.

Asumieron un discurso que no era nuevo, y que tampoco había muerto durante las décadas de efervescencia social y desarrollismo estatal: el de la necesaria unidad nacional, del respeto a los valores patrios y a una minoría conductora que actúa por sobre los intereses particulares. Instalaron, descabros de por medio, una economía neoliberal y un Estado autoritario en lo político, lo intelectual y lo artístico. Una nueva derecha que se había estado formando teóricamente desde los años cincuenta colaboró en el proyecto. Las cúpulas militares y esta nueva derecha se aliaron para acabar con los monstruos que habían asolado al país: la inflación, la lentitud e ineficiencia estatal, la politiquería partidista y el enorme peligro de una dictadura del proletariado. El liderazgo nacional, fragmentado y peligroso durante las décadas anteriores, volvió a unificarse. Un gobierno, una moral, una economía, una cultura, una patria. Por unos años, los peligros de un liderazgo compartido con otros sectores sociales e ideológicos quedó atrás.

### **1.3.- PROBLEMAS DEL LIDERAZGO: RELACION CON EL ESTADO, EL MERCADO Y LA SOCIEDAD CIVIL**

#### **I. La relación con el Estado**

Se ha hecho casi un lugar común afirmar que Chile es un país estatista. El Estado parece haber estado presente desde siempre, heredado por nuestra estructura republicana del pasado colonial. Chile se habría construido defensiva y guerreramente, con una política exterior y unas Fuerzas Armadas poderosas, y la nacionalidad chilena

se habría construido también en torno a esa idea decimonónica de Estado. Lo que construyeron las elites durante ese siglo fue, en gran medida, un Estado y una nacionalidad desprendida de él<sup>80</sup>.

Sin embargo, la noción del Estado chileno como contrucción previa y creadora de nacionalidad ha sido ampliamente debatida. Se ha apuntado que, en realidad, la idea básica de un Estado creador de nacionalidad proviene de un error de interpretación en torno a nuestros primeros años de vida republicana: las elites que asumieron la conducción del país después del colapso (accidental) del régimen colonial no podían, evidentemente, consolidarse en el plano político sino legitimando su poder de esa manera, negando una nación previa al Estado y al modelo republicano-liberal que querían implantar<sup>81</sup>.

En consecuencia, no es extraño que los liderazgos —y no sólo los políticos— perciban al Estado como su instrumento, como una fuente de legitimidad y un espacio a dominar necesariamente, pero también como un campo de batalla donde se miden las fuerzas, y donde el mismo poder de las minorías sociales puede ser seriamente amenazado.

Uno de los casos más estudiados al respecto es el de la Guerra Civil de 1891. Dejando aparte el análisis económico o bélico de este fenómeno, parece evidente que fue uno de los momentos en que los intereses de las elites se sintieron amenazados por un Ejecutivo que parecía dispuesto a usar el poder estatal para mediatizar su liderazgo económico. La postura del marxismo tradicional en este sentido ha sido clara: Balmaceda era un estadista que estimó que las entradas del salitre debían dedicarse a la creación de un Banco Nacional y a desarrollar un plan de obras públicas que permitiera el desarrollo nacional. Luchó por poner término a la desvalorización monetaria con que se beneficiaba la oligarquía latifundista y combatió la política de los bancos particulares que lucraban con los bajos préstamos estatales que luego traspasaban en términos mucho más onerosos a los particulares. Su derrota política y su muerte, en consecuencia, habrían tenido más que ver con sus intenciones que con sus actos. Provocó el temor de la oligarquía y fue derrocado<sup>82</sup>. Pero, ¿se estuvo realmente en presencia de un enfrentamiento entre el liderazgo social oligárquico y el Estado?

El diagnóstico marxista “clásico”, elaborado entre las décadas de 1930 y 1960, se apoya en la derrota del supuesto proyecto balmacedista para impugnar lo que a su juicio el Estado nacional dejó de hacer durante los siglos XIX y XX: impulsar el desarrollo nacional, incorporar a las masas excluidas a través de una democratización real de la sociedad, proyectar a la comunidad nacional en su conjunto hacia un estadio “superior” de su historia. En ese sentido, sin embargo, también esta escuela atribuye al Estado una

---

<sup>80</sup> Mario Góngora, *op. cit.*, ps. 268 y ss.

<sup>81</sup> Alfredo Jocelyn-Holt, “Chile, fértil provincia y señalada...Su refundación posmodernista”, *Proposiciones* N° 24, Santiago, 1994, p. 359.

<sup>82</sup> Hernán Ramírez Necochea, *op. cit.*; Julio César Jobet, *op. cit.*

función de liderazgo fundamental que en su esencia no difiere mucho de lo que la historiografía conservadora ha asociado siempre con su noción de Estado “en forma”, autoritario, ordenador y conductor, verdadera cristalización del “alma” nacional. Lo que sí distingue a una visión de la otra es la idea, propia del pensamiento conservador, de que estas funciones les corresponden casi por definición a las elites, y que por ende el Estado es un espacio que necesariamente debe ser ocupado y controlado por ellas, mientras que para el marxismo “clásico” sería el fracaso de dichas elites en el adecuado cumplimiento de esa responsabilidad histórica lo que justifica el “traspaso” del poder estatal a otras manos: las de los trabajadores y la izquierda. Por encima de esas deducciones, sin embargo, ambas posturas son profundamente “estatistas”.

Considerando esa curiosa convergencia, no deja de ser sintomático que la crisis de los proyectos “estatistas” de este siglo haya generado, tanto en la izquierda como en la derecha, un pensamiento que desliga tanto a las elites como a la noción misma de liderazgo social de su estrecha dependencia del poder estatal. En el caso de la derecha, el proyecto neoliberal asume casi como un artículo de doctrina la “desestatización” del poder, aunque para lograrlo haya tenido que recurrir a cuotas de autoritarismo que hacen palidecer al mismo espíritu portaliano. Ultimamente ha surgido también un discurso derechista alternativo, expresado historiográficamente en los escritos de Alfredo Jocelyn-Holt, que apuesta a una relegitimación de los liderazgos que, sin dejar de ser elitista, actúa desde la sociedad civil y en una suerte de antagonismo con el Estado<sup>83</sup>. Y en el caso de la izquierda, si bien en los círculos más “ortodoxos” subsisten ciertas nostalgias estatistas, la experiencia de la dictadura en general valorizó el fortalecimiento de las instancias sociales “de base” y un cierto distanciamiento respecto del poder central<sup>84</sup>. En todo caso, el carácter fragmentador y elitista del modelo neoliberal mantiene sobre el tapete la discusión respecto del papel que debe desempeñar el Estado, y la compleja relación entre éste y las clases que rigen la sociedad.

## II. La Relación con el Mercado

Es indudable que, a lo largo de nuestra historia, una de las mayores demandas (y promesas) de los liderazgos nacionales ha sido la económica. En el contexto de un país subdesarrollado, el gran desafío ha sido que un liderazgo pruebe su capacidad para supe-

<sup>83</sup> Esta es la tesis de fondo de su libro *El peso de la noche*, ya citado; ver también Luis Corvalán Márquez, “Reflexiones sobre *El peso de la noche, nuestra frágil fortaleza histórica*”, *Alamedas*, N° 4, Santiago, Factum Editores, 1998.

<sup>84</sup> En este registro se inscribe la obra más reciente de Gabriel Salazar, y también los estudios sobre municipio y poder local que viene realizando María Angélica Illanes.

rar la situación desmedrada, pues parece evidente que nuestros empresarios y economistas, estatales o privados, son los únicos que se encuentran en el nivel de poder necesario para definir cómo tratar los problemas de la macroeconomía internacional, el Mercado. La realidad de que Chile sigue siendo un país pobre y con grandes diferencias en la distribución del ingreso y la calidad de vida, y con una estabilidad económica siempre en duda, ha hecho que la opinión pública nacional, las mismas elites y nuestros intelectuales continuamente reflexionen y teoricen sobre el papel del liderazgo económico y su eficiencia real en la sociedad.

### *¿Quién manda en la economía chilena?*

Una de las querellas de más largo aliento al respecto, ha sido la de definir si realmente existe un liderazgo económico nacional. La teoría de la dependencia ha sido la que más claramente ha planteado que las economías periféricas están imposibilitadas, por la misma estructura básica de esa relación, para salir de su situación sojuzgada y alcanzar la independencia económica, que se hace prácticamente sinónima de un “verdadero” desarrollo. Desde esta perspectiva, las cadenas de la dependencia determinan el carácter del comercio exterior de un país como Chile, influyen en su estructura sociopolítica y establecen límites inamovibles a sus políticas socioeconómicas<sup>85</sup>. Pero este enfoque no empezó con ella.

El fantasma de ser una economía manejada por factores externos, es decir, por un mercado donde otros grandes y poderosos grupos ponen las reglas, ha sido una constante tanto en la crítica al liderazgo económico nacional como en la defensa de su actuación. En el enfoque crítico, las posturas socialistas y marxistas denunciaron casi desde un comienzo la alianza de las oligarquías nacionales con poderosos intereses externos. Lo que éstas planteaban no era la frustración de intentos sinceros de nuestro liderazgo económico por superar su situación desmedrada, sino justamente lo contrario: las elites económicas decimonónicas fueron en gran medida un grupo de mercaderes-especuladores, creadores de un Estado funcional al buen manejo de sus intereses en el juego del comercio internacional. Desde fines del siglo XVIII constituyeron para sí mercados externos en gran escala, como el mercado cerealero peruano y el nor-atlántico (Inglaterra, principalmente), y la utilidad comercial “dependiente”, con todo lo que ella implicaba en cuanto a vulnerabilidad y falta de autonomía, se convirtió en el eje de la acumulación de capital, tanto nacional como privado.

El fenómeno se profundizó con la adquisición, gracias a la Guerra del Pacífico, de la riqueza salitrera. La querella clásica al respecto ha sido la de la Guerra Civil de 1891,

---

<sup>85</sup> Ver, por ejemplo, Osvaldo Sunkel, *El marco histórico del proceso de desarrollo y subdesarrollo*, ps. 6 y ss.

donde, como se ha visto, la postura marxista tradicional entronca con una tesis adelantada por Jobet: una coalición de banqueros, terratenientes, mineros e industriales habría enfrentado la política nacionalista, contraria al librecambismo y estatalmente intervencionista de Balmaceda al ver amenazados sus privilegios como clase social y económica dominante<sup>86</sup>. Las posturas no marxistas, sin aceptar el sesgo “conspirativo” de la línea anterior, entroncan con ella al establecer que, finalizada la guerra, el gobierno de Domingo Santa María, imbuido en las ideas del *laissez faire* y el carácter intrínsecamente benéfico de la propiedad privada individualista, juzgó que Chile ganaría prestigio internacional al reconocer los certificados salitreros a los particulares. Pero, en su famoso discurso del 8 de marzo de 1889 en Iquique, Balmaceda atacó a las compañías inglesas. El gobierno canceló los privilegios de la Nitrate Railways Company para abrir la oportunidad a otras empresas, y el litigio se convirtió en constitucional. Sin embargo, las compañías salitreras inglesas estaban bien ligadas a los círculos políticos chilenos, especialmente nombrando abogados, representantes o apoderados entre destacados personajes de los partidos y del Congreso, los que eran retribuidos con altos salarios. Además, mantenían sumas destinadas a sobornar funcionarios públicos o jueces venales<sup>87</sup>.

De allí la tradición de considerar que el liderazgo económico nacional ha estado en manos de un grupo que ha tendido a aliarse con el capital internacional dominante, fuera inglés, alemán o norteamericano, que manejaría la “cara externa” de nuestra economía, mientras ellos quedaban a cargo de la “cara interna”, donde se desarrollarían las actividades productivas y comerciales para la exportación e importación. Y que al momento de sentir amenazados sus intereses, incluso ha rebasado sus liderazgos políticos, como ocurrió bajo el gobierno de la Unidad Popular, donde los gremios empresariales participaron de manera directa en las movilizaciones contra las reformas económicas de corte socialista<sup>88</sup>.

Este enfoque no sólo ha sido sostenido por la crítica de izquierda. En repetidas oportunidades, una suerte de fatalismo rabioso ha llevado a decir a los mismos empresarios y a las elites económicas que la “culpa” no era suya. Nada podían hacer ante la desleal competencia externa, ante el poder de los grandes consorcios nórdicos. El imperialismo económico también los afecta a ellos. Las declaraciones de empresarios como Carlos Cardoen en relación al boicot norteamericano en su contra son clásicas al respecto: “como el componente político es tan grande, yo no puedo, solo, enfrentar una defensa. Frente a Estados Unidos, no tengo los medios y no tengo los caminos”<sup>89</sup>.

---

<sup>86</sup> Véase principalmente Ramírez Necochea, *op. cit.*

<sup>87</sup> Harold Blakemore, *Gobierno chileno y salitre inglés. Balmaceda y North, 1886-1896*, traducción castellana, Santiago, Editorial del Pacífico, 1977.

<sup>88</sup> Arturo Valenzuela, *op. cit.*, ps. 212 y ss.

<sup>89</sup> *La Nación*, 1996, citado en *Anuario Revista Qué Pasa, op. cit.*, 1997.

## *El vaivén proteccionismo-liberalismo*

Profundamente enlazada con el fenómeno anterior, ha estado la otra querrela: la opción (muchas veces complicada y tormentosa) de las elites por decidir si es el Estado o el mercado quien ha de llevarnos a una gestión económica eficiente.

En opinión de Guillermo Campero, históricamente el gran empresariado ha sostenido posiciones más liberales que sus contrapartes de la mediana y pequeña empresa. Ha privilegiado el mercado sobre las corporaciones como agente regulador de la vida económica, y ha sido favorable a una economía más internacionalizada y a un Estado poco interventor. Ha sido más especulador que productor, y su alto nivel de vida, más cosmopolita, de mejores relaciones con el gobierno y el mundo financiero y los intelectuales, lo haría mirar con desprecio las labores productivas y tener ventajas desproporcionadas. Asimismo, tendería a ver la reivindicación de crear “empresa nacional” como un rechazo a la empresa eficiente, buscando ampararse en el Estado<sup>90</sup>.

Pero cuando el mercado lo decepciona, vuelve la mirada al proteccionismo. Fue lo que aceptó, y, en gran medida, aprovechó de construir en el período “desarrollista”, desde la década de 1930 en adelante. En el contexto de la dictadura pinochetista, sin embargo, el gran empresariado nacional no tuvo mayores problemas para aceptar el fin de un modelo intervencionista del Estado. En esto influyeron varios factores: políticos, como la percepción de amenaza de los modelos socializantes, y económicos, como las “expectativas de futuro” que les auguraba la adopción de un modelo abierto y neoliberal. Especialmente el gran empresariado del sector financiero se benefició con la estatización de la deuda externa y la privatización de empresas estatales. La crisis de 1982 hizo que la crítica de oposición en parte abjurara del modelo neoliberal y planteara el regreso a una economía de mayor control público<sup>91</sup>, pero el repunte económico iniciado desde 1985 hizo que finalmente, como se verá en el acápite final de este capítulo, los proteccionistas cedieran.

El liderazgo económico le teme al proteccionismo, pero también le teme al mercado. Da la impresión de que la actitud es pendular: en los momentos en que el liberalismo nos pone en una crisis económica, se recuerda la importancia de regular la economía y la responsabilidad del Estado. Cuando el mercado traiciona, tiende a recordarse la debilidad estructural de los modelos primario exportadores, la vulnerabilidad de la economía chilena, el carácter estratégico de la industria para el desarrollo. Pero cuando el mercado funciona bien, vienen los momentos de triunfalismo: los grandes “caracoles” o “malls” de los mercaderes, la sensación de haber dejado el miedo atrás, el gatito maullando como jaguar.

---

<sup>90</sup> Guillermo Campero, *Los empresarios ante la alternativa democrática. El caso de Chile*, Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, 1988.

<sup>91</sup> Carlos Vignolo y otros, *La industria chilena: cuatro visiones sectoriales*, Santiago, Centro de Estudios del Desarrollo, 1986.

En esos momentos, se recuerda, hay que crear “un clima favorable a la inversión”, y a la vez constatar que la industrialización programada también fracasa.

Ese ha sido uno de los puntos de conflicto insoluble para nuestros liderazgos económicos de distinto signo, y también para sus analistas. La frontera entre los errores propios y las fatalidades imposibles de evitar siempre es móvil y difusa. En consecuencia, establecer si las elites han sido ineficientes —es decir, si han intentado un proyecto de desarrollo nacional y no han sabido llevarlo a cabo—, o si han sido inoperantes —ocupándose sólo de la ganancia rápida y particular, especulando y malgastando—, o si sólo han sido frustradas —moviéndose con buenas intenciones, pero impotentes ante los grandes poderes extranjeros que las coartan— es una pregunta con salida triple, o tres preguntas con un permanente ¿qué hacer? como respuesta. ¿Se fomenta la producción de bienes de capital? ¿Se abandona por completo al mercado, intentando al menos ser una economía de semi-enclave con ganancias? ¿Se desafía a “los Otros” con el proteccionismo? ¿Se busca la unión latinoamericana? ¿Se abren las fronteras a la globalización?

Quizás la única conclusión posible es que nuestros liderazgos económicos no son estables ni en la forma, ni en el fondo. Son, con igual facilidad, dependientes y asustadizos, triunfalistas y trágicos. Y, en este punto más que en otros, se enfrentan permanentemente con los límites de su poder local.

### III. La Relación con la Sociedad

#### *El desafío de ser “clase modelo”*

En cierta manera, las elites chilenas han vivido el conflicto “Princesa Diana”. Es decir, se han enfrentado permanentemente al desafío de sentirse (y ser sentidas) como clase modelo de la sociedad, la que “debía dar el ejemplo”.

En el Chile del siglo XIX, sin familia monárquica residente, sin una aristocracia de sangre y de casta, la clase que asumió ese papel de directora y encarnación de los mejores valores de la nación fue la oligarquía. Nacidos en cuna de oro, líderes de un país dividido entre “rotos y caballeros”, sus integrantes tienen el deber social de ser, en el sentido más lato del término, aristocracia: los *aristoi*, los mejores, la selección de la sociedad, el grupo del cual deben esperarse los mejores intelectos, el mayor desprendimiento, la vida moral y política más ejemplar. Asimismo, el grupo en el cual es más deleznable el crimen, la corrupción, la molicie y el despilfarro.

Tal como en la política y en el manejo de la economía, la oligarquía chilena, casi desde la época de la Independencia, se irguió en rectora de la vida social y cultural del

país. De sus filas debían salir no sólo los políticos y los Presidentes de la República, sino también los pensadores, los médicos, los educadores y los benefactores sociales. Su papel era educar y “civilizar”, o al menos mantener a raya, la brutalidad e ignorancia del pueblo<sup>92</sup>. En gran medida, la idea de que la cultura popular tiene un valor, una sabiduría y una fuerza creativa propias es nueva en Chile, y no llega hasta que la izquierda comienza a valorar al “pueblo” como matriz de identidad y cultura.

Hasta pleno siglo XX, y en cierta manera hasta fecha muy reciente, se mantiene esa idea, aunque sólo sea como nostalgia y decepción de lo que ha sido. Cuando la escritora Inés Echeverría (*Iris*) pide la pena de muerte para su yerno Joaquín Barceló, su principal argumento es el mismo: Joaquín Barceló pertenecía a los privilegiados, por lo que su deshonestidad en los negocios y el asesinato de su mujer—la hija de Inés—es un crimen mucho peor que en un pobre<sup>93</sup>. Cuando aparece en *El Mercurio* un nostálgico artículo sobre las grandes benefactoras de la oligarquía, como Juana Ross e Isabel Caces de Brown, es evidente el concepto de lo que las clases altas “deberían ser” para la sociedad: benefactoras, caritativas, con conciencia clara de sus propios privilegios y de las obligaciones consiguientes hacia los más desfavorecidos.

Allí, es interesante subrayar una característica permanente del discurso que se viene delineando: al parecer, siempre fue “ayer mismo” cuando las clases altas aún no habían perdido sus valores tradicionales de caridad, austeridad y amor a la Patria por sobre sí mismas. Se queja Vicente Pérez Rosales a mediados del siglo pasado de la insolencia de los jóvenes, que ya no respetan los valores como antes. Se queja la Iglesia en los años sesenta y setenta del siglo XIX, ante el descreimiento, la frivolidad y la ostentación de los ricos. Se queja la bombardeada oligarquía del Centenario de haber perdido, poco tiempo antes, las mismas virtudes. Y, como se mencionaba en el párrafo anterior, se quejan hoy los historiadores del consumismo y la indiferencia de las elites actuales, ante la rectitud del pasado. En una mirada histórica, queda la sensación de que en el largo plazo cada generación oligárquica, y luego plutocrática, se ha visto enfrentada al dilema: la imagen de un pasado más digno, más solidario, y de una manera actual de “ser rico” ostentosa y, por ello, peligrosa. Un prestigio a mantener, y la incomodidad de que no se mantenga del todo. Una exigencia social siempre menoscabada por la realidad de su riqueza.

### *Las relaciones con los otros*

Quizás una de las principales carencias de nuestros estudios sociales sea, precisamente, el campo de las interrelaciones sociales. Probablemente ello se deba al predomi-

<sup>92</sup> A propósito de este “sentimiento aristocrático” ver la obra de Maria Rosaria Stabili, *Il sentimento aristocratico. Elites cilene allo specchio (1860-1960)*, Lecce, Congedo Editore, 1996.

<sup>93</sup> Mónica Echeverría Yáñez, *Agonía de una irreverente*, Santiago, Editorial Sudamericana, 1996, ps. 245 y ss.

nio del enfoque político (donde lo analizado es la expresión ideológica o electoral de esas relaciones), o a la creencia no explicitada de que las elites sociales han “funcionado solas”: no han tomado decisiones en conjunto con la sociedad, y muchas veces han mantenido su propia cultura y modelo de vida, cosmopolita y alejado de lo popular, situación que ha llevado a José Bengoa a decir que las clases altas no tienen cultura propia: “Es un pasado imaginario, tanto el de las clases altas —los Huasos Quincheros— como el de las clases populares”<sup>94</sup>. Hasta los años ochenta, las elites político-intelectuales que discutían las bases de un nuevo acuerdo democrático, se preocupaban de esos “Otros” desconocidos: “siendo un misterio particular lo que suceda con la representación de las capas marginales y los ‘nuevos’ grupos medios. En todo caso, no se ve dónde afirmar una relativa perdurabilidad de los perfiles estructurales del esquema partidario pre-73”<sup>95</sup>.

Donde más clara parece esta percepción es en el caso de los “grupos medios”. Para las elites decimonónicas, el hombre y la mujer de clase media fueron personajes minoritarios, poco amenazantes y despreciables, y que por último, como clase, no parecieron existir. La literatura, más que la historia, nos ha dejado la imagen de ese desprecio por el “siútico” en novelas como la ya citada *Martín Rivas*, y también, ya más cerca de nuestros tiempos, en la obra de Eduardo Barrios y José Donoso. Son los mandaderos, los empleados de la elite. Son los artesanos finos que adornan sus mansiones, son los técnicos extranjeros, son los “recién llegados” que, con suerte, podrán convertirse en parte de la “gente bien”.

Pero con la complejización de la sociedad chilena, la relación cambia. De ese mundo de provincianos, de empleados burocráticos y profesionales que no heredan, sino que trabajan, vienen personajes útiles al liderazgo, y que se transforman en parte de él. Ya hemos mencionado la fluidez del contexto social chileno; hay que subrayar ahora que quizás uno de los puntos más fluidos ha sido la frontera alta de los grupos medios, muchos de cuyos integrantes llegan a formar parte del liderazgo nacional. Con el fin de una “manera de ser elite” en los años veinte y treinta, también se crea un callejón de intercambio. Las elites ya no se burlan —al menos no abiertamente— de los grupos medios<sup>96</sup>.

Se alían con ellos. En cierta manera, la alianza con sectores de los grupos medios, su integración en los cuadros del poder como ministros, asesores especializados y funcionarios de importancia, es parte central de esa transformación en las elites. Aliarse a los grupos medios, lograr que sus personajes connotados se vuelvan parte de ellas, es en parte un proceso que se va dando espontáneamente, y en parte una estrategia: aliarse a ella, a su saber profesional, a sus partidos y sus ideas, es también frenar su alianza con los movimientos y partidos de izquierda. Son menos peligrosos. Son bastante más respetables y tratables. En su mayoría, no son marxistas.

---

<sup>94</sup> José Bengoa, *op. cit.*, p. 39.

<sup>95</sup> Eugenio Tironi, “Clases sociales y Acuerdo Democrático”, CED, Documento de Trabajo N° 14, 1984.

<sup>96</sup> Ver sobre este tema Gonzalo Vial, *op. cit.*, vol. III, capítulo 1.

Creemos que este fenómeno, estudiado para el período radical ha seguido produciéndose. Los liderazgos identificados con los altos grupos sociales siguen cooptando a los profesionales, técnicos y políticos exitosos venidos de los sectores medios. Pero se debe reconocer que nos faltan estudios empíricos que refrenden esta afirmación.

## Grupos populares: entre el paternalismo y el miedo

La problemática de relacionarse con los grupos populares, con sus demandas y sus comportamientos, ha sido evidentemente más tormentosa que la relación con los grupos medios, pues el pueblo chileno, el pueblo pobre, borracho y enfermizo, el pueblo de las “chinas” y los “rotos”, ha sido el “Otro” por antonomasia para las élites. Es el trofeo más duro de conquistar, el que más se ha despreciado, el menos comprensible y comprendido, y el más temido. Y es el que le ha provocado sus reacciones más pendulares.

### *El paternalismo y el corregimiento*

A un lado del péndulo, se encuentra la actitud paternalista. Más que buscar alianzas, más que comprenderse —y menos aún, fundirse— lo que han buscado las élites cuando han tenido “buenas intenciones” con el bárbaro bajo pueblo, ha sido “civilizarlo”.

Las élites decimonónicas y sus herederas más conservadoras expresaron esta actitud sin ambages; no dudaron en definir al bajo pueblo como bárbaro, inmoral e ignorante, y en declarar que su tarea como clase hegemónica era enseñarle a vivir humanamente. Como dijera el rey Carlos III para la España que quería modernizar, el pueblo era como el niño al que hay que lavarle la cara, y que cuando se hace, llora. La caridad decimonónica y sus “señoras” de las que ya hemos hablado, manifestaron esa actitud: el horror ante su brutalidad, y la necesidad de construir casas de huérfanos, de poner a las “chinas” a trabajar en casas respetables, de sacar a los vagos de las calles.

Con el avance de los procesos modernizadores, la actitud paternalista se complejizó y disfrazó. A un bajo pueblo organizado y rebelde ya no podía decirse que era bárbaro y que se le “enseñaría a gente”. Las estrategias debían ser más finas, porque se enfrentaban a un “Otro” más consciente<sup>97</sup>.

Primero, había que alejarlo del marxismo, del anarquismo, de la creencia de que podían decidir sus propios destinos a través de la derrota de las jerarquías sociales

---

<sup>97</sup> Aparte de la obra de María Rosaria Stabili ya citada, ver el libro de Luis Alberto Romero *¿Qué hacer con los pobres? Elite y sectores populares en Santiago de Chile, 1840-1895*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1997.

existentes. Había que darles leyes sociales y mejorar sus horribles condiciones de vida<sup>98</sup>. Había que lograr que los obreros díscolos se casaran legalmente, formaran familias estables y dejaran de beber, que se convirtieran en hombres y mujeres respetuosos y responsables. De allí la aparición de los servicios sociales modernos, la urgencia por construir hogares decentes, la importancia atribuida a la educación primaria, tal como se aprecia en los trabajos de María Angélica Illanes sobre la salud pública y la educación, y de Lorena Godoy y otras sobre el disciplinamiento hacia los grupos de obreros y obreras a través del matrimonio y la vida familiar<sup>99</sup>.

Al respecto, es interesante mencionar que en la década de 1930 comienza en Chile la labor de servicio social profesional, y su asistencia al Poder Judicial y las prisiones. La primera escuela de Servicio Social chilena se crea en 1925, bajo la influencia de profesionales belgas. En 1930 se crea el Servicio Social de Prisiones, cuya tarea era colaborar con el Poder Judicial en la readaptación del reo y la ayuda a sus familias y a las víctimas de sus delitos<sup>100</sup>. Había que hacerles “entender” que todo lo que se hacía por ellos se hacía para mejor. Reformas como la reforma agraria sólo les traerían penurias, pues no sabrían administrarse correctamente. Un eventual régimen socialista pondría a las mujeres a trabajar como esclavas del proletariado, barriendo calles. La solución era que comprendieran que su flojera y sus vicios eran la verdadera causa de sus males<sup>101</sup>.

Mientras más se avanza en el tiempo, más se complejiza la actitud paternalista, porque se vuelve más sutil, más estructuralmente desmovilizadora. Durante la Dictadura, por ejemplo, el esfuerzo se centró en la adecuación de los cuadros obreros, campesinos y del pueblo urbano en general a una ética y una visión de mundo individualista y capitalista. Durante años, el régimen de Pinochet pregonó que había una política de los “señores políticos” que sólo se ocupaban de sí mismos, y que para salir adelante no había que obsesionarse con las desigualdades sociales o los discursos ideologizados sobre sociedades sin clases y dictaduras del proletariado. Según la prédica dictatorial, en Chile cualquiera que trabajara duro, tuviese iniciativas emprendedoras y respetase a la autoridad y las leyes, podía aspirar seriamente a mejorar su vida.

Y por el otro lado del péndulo, el terror. El terror en sus dos acepciones: como

---

<sup>98</sup> James Morris, *Las elites, los intelectuales y el consenso*, Santiago, Editorial del Pacífico, 1967.

<sup>99</sup> María Angélica Illanes, *En el nombre del pueblo, del estado y de la ciencia. Historia social de la salud pública, Chile 1880-1973*, Santiago, Colectivo de Atención Primaria, 1993; “Ausente Señorita”. *El niño chileno, la escuela para pobres y el auxilio. Chile, 1890-1990*, Santiago, Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, 1991; Lorena Godoy y otras, *Disciplina y desacato. Construcción de identidad en Chile, siglos XIX y XX*, Santiago, Ediciones SUR-CEDEM, 1996.

<sup>100</sup> Renato Fuentealba, *El servicio social ante las ciencias penales*, Memoria de Prueba para optar al grado de Licenciado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile.

<sup>101</sup> Abraham Meerson, *Factores sociales de la delincuencia en Chile*, Tesis para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas, Universidad de Chile, 1936.

miedo de la elite a la furia popular, a su poder destructivo en la calles, los campos, al interior de las casas; y como terror represivo ejercido por las propias elites. Como éstas han vivido secularmente bajo el miedo a que el Pueblo se des controle y desborde los canales permitidos, ya sea como la “ciudad bárbara y ajena” a la que se refería el Intendente Vicuña Mackenna en el siglo pasado, ya como la “escalada delictual” que denuncia a diario nuestra prensa de fin de siglo, el recurso al terror represivo ha estado siempre latente, a pocos centímetros de la superficie social. Entre tratar al “Otro” popular mediante el paternalismo o la represión, nuestras elites han tendido a sentirse históricamente más cómodas depositando su confianza en la segunda.

#### **1.4. LIDERAZGO NACIONAL Y GLOBALIZACION (1980-1998)**

##### **Nuevo planteamiento de la pregunta: ¿Existe el proyecto nacional?**

A partir de 1973, la sociedad chilena ha enfrentado cambios de una radicalidad difícil de igualar en otro período análogo de nuestra historia, al punto de llevar a muchos autores a calificarlo abiertamente como una “revolución”. En parte, dichos cambios han obedecido a un contexto epocal, el fin del siglo XX, que parece moverse a una velocidad sin precedentes. Pero más importante que eso para el caso chileno ha sido una voluntad deliberada, gatillada por la profunda crisis experimentada por el capitalismo criollo hacia fines de los sesenta, y por la sensación de amenaza terminal que afectó a sus grupos dirigentes durante el experimento de la Unidad Popular. Puesto en marcha bajo el férreo auspicio de la Dictadura militar, el proyecto de refundación neoliberal se inspiró y desplegó gracias a la iniciativa y la conducción directa de sectores de esa propia elite, que venían preparándolo a lo menos desde fines de la década del cincuenta. Y si bien no todos sus componentes se sintieron igualmente cómodos dentro del nuevo esquema, llegando algunos incluso a sufrir perjuicios bastante serios en sus intereses materiales más inmediatos, no cabe duda que el desenlace de la aventura terminó comprometiéndolos prácticamente a todos. La elite chilena de fin de siglo, con más o menos remordimientos de conciencia, se ha reencontrado consigo misma en este Chile neoliberal.

El propósito de este último subcapítulo es reflexionar, en un registro más interpretativo que empírico, sobre el impacto que los cambios del último cuarto de siglo han tenido sobre las elites chilenas, y sobre el ejercicio de su liderazgo. Esto implica, por una parte, analizar las transformaciones que ella misma ha sufrido en su condición de actor social, tanto en sus conductas cotidianas como en las formas de comprender su papel ante el resto de la nación. Implica también, por otra, revisar cómo se ha modificado

su “visión de país”, y los lugares desde los que ha optado por ejercer su hegemonía. En este último contexto, parece de suma importancia constatar una suerte de recuperación de sentido hegemónico, el reencuentro con un “destino manifiesto” que durante gran parte del siglo XX pareció deslizarse por una pendiente de progresiva disolución. Por último, implica la riesgosa tarea de intentar una caracterización de la relación entre esas elites y los conductores políticos de la Transición a la Democracia: ¿Se trata de actores sociales esencialmente diferentes, comprometidos con distintos modelos de liderazgo y sociedad? ¿Se trata, por el contrario, de portadores de estrategias alternativas para alcanzar un mismo fin? ¿Cómo caracterizar, en fin, a la elite concertacionista en el contexto más general de una historia social de Chile? Hacia esas complejas interrogantes se vuelca esta última parte del análisis.

## **I.- La recuperación de los roles hegemónicos: El empresariado como portador de modernidad**

El principal legado del régimen militar chileno para las elites económico-sociales ha sido la recuperación de su sentido de protagonismo histórico. Aquejadas, al menos desde la crisis del parlamentarismo oligárquico, por una clara sensación de fracaso, alimentada tanto por su renuncia a la conducción directa del desarrollo económico como por el surgimiento de proyectos alternativos de sociedad, la refundación capitalista operada durante el período dictatorial les devolvió el optimismo y la confianza en sus propias capacidades. Una manifestación de este cambio ha sido el repudio hacia cualquier forma de “estatismo” y la constitución del empresariado como nuevo modelo de actor social.

En relación a lo primero, la masividad y persistencia del discurso anti-estatista procedente de los sectores de elite durante los últimos 25 años denotan una clara convicción de haber recuperado la iniciativa y estar en condiciones de ejercer su liderazgo sin necesidad de agentes intermediadores. Desde una perspectiva histórica este cambio de actitud no deja de ser curioso, toda vez que uno de los principales motivos de orgullo de la elite decimonónica fue precisamente la construcción del “Estado portaliano”, fuerte en lo social y exitoso en lo económico y lo militar. La nostalgia del discurso conservador respecto de ese Estado “en forma”, reproducida por la Dictadura con gran convicción, habla en ese sentido por sí sola. Pero incluso el denostado Estado “desarrollista” del siglo XX, con todas sus contaminaciones mesocráticas, intervencionistas y populistas, no fue siempre percibido con hostilidad desde las elites. Después de todo, un Estado que subsidiaba generosamente la actividad productiva y mantenía las tensiones sociales bajo control no era necesariamente un problema.

Por otra parte, la implementación del modelo neoliberal requirió de una capacidad de acción estatal pocas veces emulada a lo largo de nuestra historia. Sin el despliegue represivo implementado por el régimen militar habría sido muy difícil desarrollar políticas que no sólo iban en contra de todo lo que se había construido en los decenios anteriores en materia de protección social, sino también conllevaban una cuota de sacrificio y sufrimiento social que un gobierno menos autoritario habría sido seguramente incapaz de imponer. De igual forma, cuando la primera versión del neoliberalismo criollo hizo crisis a comienzos de los ochenta, nuevamente fue el Estado el que salió en ayuda de un aparato financiero y productivo que por sí solo no habría podido resistir. En consecuencia, la reivindicación de la iniciativa privada y los mecanismos automáticos del mercado como fórmula privilegiada de desarrollo y organización social se ha logrado en Chile con una buena cuota de estatismo, la misma que hoy se invoca para garantizar la “seguridad ciudadana” y la protección de los “valores tradicionales”; y la misma que seguramente se invocará para futuras crisis de la economía o la sociedad.

Con todo, la constitución de un empresariado que, al menos a contar de 1985, ha demostrado tener condiciones de desenvolverse autónomamente, sostener índices adecuados de funcionamiento, e incluso competir más allá de nuestras fronteras, ha infundido a las elites nacionales un sentido de exitismo que seguramente no se veía desde los tiempos de la Guerra del Pacífico. Después de un siglo de críticas generalizadas y actitudes defensivas, hoy pueden nuevamente presentarse ante el resto de la sociedad como portadoras y constructoras de un proyecto de modernización nacional que ha sido invocado como modelo a nivel internacional, y que parece haber puesto término a la larga serie de “desarrollos frustrados”, denunciada por Aníbal Pinto ya a fines de los cincuenta. Esto hasta les ha hecho soportable una posible pérdida parcial de control sobre ciertos centros de decisión política, en el entendido que las verdaderas redes neurálgicas de la sociedad chilena pasan hoy por otros conductos, o de que la hegemonía puede ejercerse con la misma eficacia desde los espacios de la sociedad civil. Y aunque su confianza no esté exenta de uno que otro sobresalto, provocado por nostalgias populistas, reventones “anómicos” o contradicciones del propio modelo neoliberal, la ausencia de propuestas alternativas permite que éstos se vean por el momento como un mal relativamente menor. Gracias a la refundación capitalista iniciada bajo la tutela dictatorial, por primera vez en cien años la elite chilena puede sentirse orgullosa de sí misma y disfrutar de sus éxitos en relativa paz.

¿Se trata, sin embargo, de la misma elite que enfrentó el desafío “socializante” de los años sesenta? La diferencia en las conductas exhibidas y los valores defendidos; el aparente distanciamiento respecto del Estado y aun del propio pasado histórico; el recurso a fórmulas nuevas de legitimación (la “globalización”, la eficiencia, el individualismo competitivo, el éxito material); incluso las fracturas que se perciben en torno a materias

de orden “cultural” (el rol de la Iglesia o la familia, la “libertad de elegir” aplicada a situaciones de la vida privada); todo ello sugiere un cambio tan profundo en el ser social que algunos hasta postulan la sustitución de los grupos tradicionales de elite por una nueva tecnocracia empresarial, constituida originariamente bajo el alero del período dictatorial. La ubicación hasta cierto punto marginal de los “Chicago Boys” antes de 1975, los debates vividos al interior del propio régimen militar en relación a la implantación del neoliberalismo como modelo de sociedad, el aparente eclipsamiento de la derecha corporativa o nacionalista, la desaparición del latifundio tradicional producto de la reforma agraria, son otros tantos indicios que apuntan en la misma dirección<sup>102</sup>.

Sin embargo, la continuidad de los apellidos y el carácter mismo del proyecto neoliberal, con su defensa de un orden establecido y su rescate de un capitalismo que siempre se ha revelado como la opción fundamental, sugieren que se estaría más bien en presencia de una **adaptación**, de una estrategia hegemónica con ciertos toques de radicalidad motivados por la fuerte sensación inicial de amenaza. Después de todo, uno de los rasgos más estructurales de la clase dirigente chilena ha sido, históricamente hablando, su capacidad de reaccionar creativamente ante los desafíos; de, como decía Arturo Alessandri Palma, “hacer la revolución por sí misma, antes que dejar que la hagan los otros”; de cambiar, para que lo esencial no cambie<sup>103</sup>. Con otro ropaje y otro discurso, con un sentido decididamente más claro de misión y liderazgo, nuestra clase dirigente sigue siendo la misma de siempre.

## II. El problemático liderazgo de las elites concertacionistas: ¿dirigentas o administradoras?

Un segundo problema a encarar al momento de levantar un perfil de los liderazgos sociales en este fin de siglo dice relación con la clasificación de la “elite concertacionista”, y del papel que ésta se encuentra objetivamente desempeñando en la legitimación del proyecto neoliberal. ¿Puede hablarse de una elite concertacionista con propósitos y pertenencias homogéneas? ¿Constituye su función de “humanizadora” del neoliberalismo una tarea impuesta por los imponderables de la historia, o una asumida voluntariamente y con sentido de convicción? ¿Es ella una especie de “bisagra social” que se hace cargo de la administración de un modelo que no necesariamente comparte, con el propósito fundamental de evitar una explosión social de consecuencias incalculables?

---

<sup>102</sup> Una expresión de esta tesis es desarrollada por Alfredo Jocelyn-Holt en su reciente *El Chile Perplejo*, *op. cit.*

<sup>103</sup> Esta es, desde luego, la hipótesis central de las obras de Alfredo Jocelyn-Holt que aquí se han venido citando, y también, bajo el concepto de “transformismo”, del *Chile Actual* de Tomás Moulian.

Los “intelectuales y políticos de la oposición” fueron en su origen un grupo amplio y rico en matices, compuesto por abogados, sociólogos, científicos políticos, economistas, filósofos e historiadores. Desde la oposición al régimen militar y aunados por la perspectiva de tener que asumir la conducción de una transición a la democracia —fuera en 1983, 1986 o 1989—, realizaron una amplia labor reflexiva sobre el quiebre de la democracia en 1973, las características del autoritarismo y la futura restauración institucional. Pensadores como Eugenio Tironi, Luis Maira, Tomás Moulian, Manuel Antonio Garretón, José Joaquín Brunner, Angel Flisfisch, Francisco Cumplido, Patricio Aylwin, Andrés Zaldívar, Alejandro Foxley, Ricardo Lagos, Edgardo Boeninger, Gabriel Valdés y muchos otros que sería imposible enumerar aquí, formaron parte de una elite intelectual y política opositora que ante las “revoluciones silenciosas” más bien hizo énfasis en los “silencios de la revolución”<sup>104</sup>.

Realizar un estudio acabado de ella, o aun de sus principales exponentes, sería una tarea demasiado extensa y compleja para estas páginas. Sin embargo, es interesante revisar cuáles fueron sus conclusiones generales, pues lo que aquí interesa no es el análisis minucioso de sus actividades y escritos, sino la transformación sufrida en el momento en que asumieron el liderazgo de la transición democrática.

Muy resumidamente, las reflexiones elaboradas antes de asumir sus cargos de gobierno, fueron las siguientes:

- El quiebre de la democracia chilena se habría producido por una extrema polarización de las fuerzas políticas, que habría inutilizado el sistema tradicional de acuerdos en las cúpulas del liderazgo. Los militares, aliados al temor de la derecha y el centro a una revolución de corte marxista, habrían aprovechado la coyuntura e instaurado una nueva institucionalidad autoritaria.

-Este autoritarismo habría revestido características especiales y diferentes a otros gobiernos dictatoriales, inspirándose, por una parte, en la doctrina de la seguridad nacional para la resolución de los asuntos internos, y prefiriendo las políticas de libre mercado y atomización social por sobre los modelos corporativistas más cercanos al fascismo clásico o al populismo militar. Habría tenido éxito a nivel macroeconómico, pero su talón de Aquiles seguía siendo su autoritarismo: la contradicción entre un país en franco proceso de estabilización económica y de fuerzas democráticas en ascenso con un régimen aún autoritario y de baja sensibilidad social, sería la causa principal de su caída<sup>105</sup>.

-En consecuencia, para recuperar la democracia era imprescindible lograr dos

---

<sup>104</sup> Se hace aquí referencia a la polémica en torno a la modernización supuestamente experimentada por Chile bajo la Dictadura, en la que se cruzaron los textos de Joaquín Lavín (*La revolución silenciosa*, Santiago, Editorial Zig Zag, 1987), y Eugenio Tironi (*Los silencios de la revolución. Chile: la otra cara de la modernización*, Santiago, Editorial La Puerta Abierta, 1988).

<sup>105</sup> Luis Maira, *Las dictaduras en América Latina. Cuatro ensayos*, Santiago, CESOC, 1986.

objetivos: por una parte, la unidad de la oposición en un solo frente amplio y antidictatorial; y por la otra, una vez recuperada la democracia, evitar los peligros de una nueva polarización (y, por tanto, de un nuevo golpe de Estado), mantener la estabilidad económica y devolver a Chile su prestigio de nación democrática, dejando atrás los años del terror, consagrando la reconciliación de los chilenos y mejorando las carencias más graves en materia de servicios básicos como salud, educación y previsión.

La preocupación central de estos analistas opositores de los ochenta se enfocó hacia la confrontación política con la Dictadura, pero no dejó de lado la reflexión sobre el apoyo popular a una coalición opositora, en términos de su legitimación en la base social.

Por una parte, les preocupó la verdadera base social del proyecto concertacionista. Los largos años de gobierno militar probablemente habían modificado (a raíz de la inorganicidad social creada por la represión y la desmovilización estructural emanada del arraigo de las políticas neoliberales) el modelo “clásico” de apoyo meso-popular a los partidos: es decir, la izquierda socialista afincada en el medio obrero y los estratos de menores ingresos, y la Democracia Cristiana, perfilada sobre un área meso-popular, también con componentes obreros, pero que no cuestiona en lo fundamental el sistema de propiedad privada ni de mercado<sup>106</sup>. Por ello, se consideró un desafío central estimular una democracia realmente participativa, extendiendo el principio democrático a las organizaciones sociales, propiciando el desarrollo autónomo y la representación de los intereses corporativos en las decisiones económicas, aunque el temor a una baja respuesta social siguiese presente<sup>107</sup>.

Tras casi una década de administración gubernamental, lo que ahora podría denominarse “elite concertacionista” comienza a levantar un primer balance de su actuación, interrogándose sobre su capacidad efectiva de impactar sobre los hechos y sopesando dónde reside actualmente el verdadero eje del poder social: si en los conductores visibles del Estado, o en esos omnipresentes “poderes fácticos” que en un momento denunció un líder de la propia derecha, Andrés Allamand. De ese ejercicio han surgido dos visiones hasta cierto punto contrapuestas: una calificada de “gobiernista” y “auto-complaciente”, y otra desencantada o “auto-flagelante”.

La primera visión apoya lo que ha sido el esfuerzo, y también los logros, de esa “elite concertacionista”. Resumidamente, su diagnóstico positivo se fundamenta en su capacidad de moverse con prudencia, y no sin éxitos, por una ruta extremadamente peligrosa. Han sido capaces de mantener en pie los consensos que se plantearon como básicos para que la democracia funcionase: el equilibrio con los empresarios y una difícil

---

<sup>106</sup> Aníbal Pinto, “Consensos, disensos y conflictos en el espacio democrático-popular”, citado en Eugenio Tironi, *Clases sociales y acuerdo democrático*, Santiago, CED, Documento de Trabajo N° 14, p. 7.

<sup>107</sup> Alejandro Foxley, “Algunas consideraciones para una democracia estable: el caso de Chile”, Santiago, CIEPLAN, 1982.

pero no catastrófica relación con las fuerzas armadas. Como lo afirmara el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en mensaje de 1997 a la nación:

*... en estos años hemos actuado con responsabilidad y prudencia, sin demagogia ni oportunismo. Nos alzamos sobre una realidad trabajosamente conseguida. Libertad y justicia no han sido dones gratuitos, son bienes preciados que han exigido más de lo que todo el pueblo desearía. Por eso nuestro caminar ha sido paso a paso, con certeza, con seguridad.*

No es éste el lugar para extenderse en un análisis sobre los programas específicos que ha seguido la Concertación, pero no cabe duda que ese párrafo clave resume el balance positivo que estos años de gobierno han suscitado en una parte de las antiguas elites opositoras. Estas se han demostrado capaces de navegar “trabajosamente”, soportando movimientos militares de enlace y reventones de protesta social sin que la Concertación se quiebre y sin que el empresariado, esa viga maestra del modelo, pase del nerviosismo a la rebeldía abierta. Esos “bienes preciados” y “dones no gratuitos” han tenido un precio elevado, “han exigido más de lo que todo el pueblo desearía”. Pero existen. No se ha producido, al menos hasta el estallido incontrolable de la crisis asiática, una situación recesiva en la economía. El gobierno puede exhibir aumentos en los presupuestos de salud y educación, puede aprovechar la “oportunidad histórica” para el desarrollo que hoy se le presenta. Ha sabido ser responsable, sin caer en la temida demagogia, ni provocar el temido Golpe de Estado. La ética weberiana de la responsabilidad, y los consensos que impiden la fragmentación del sistema político, continúan vigentes<sup>108</sup>.

La otra visión hace una crítica, si no amarga, al menos bastante decepcionada del proyecto democratizador llevado a cabo por las elites concertacionistas. Esta proviene tanto de los sectores de la izquierda no concertacionista, como el Partido Comunista, como de los “descolgados” de la Concertación, al estilo de los humanistas y otros sectores intelectuales independientes o “alternativos”.

El reciente texto de Tomás Moulian sobre la *Anatomía de un mito*, entrega una figura perspicaz de los dilemas que esa antigua elite opositora hoy enfrenta. La democracia actual chilena, y su consiguiente proceso modernizador, corresponderían a una suerte de “jaula de hierro” weberiana en que las elites políticas y económicas comparten, de grado o por fuerza, una idea del necesario “consenso eterno” que transforma al actual modelo social en un estadio o estado definitivo, privado para siempre de historicidad. En esa lectura, las ataduras constitucionales creadas desde 1977 hasta 1983, y el sistema de partidos que se fue formando desde 1983 en adelante, serían parte del dispositivo construido para preservar al neocapitalismo consolidado durante los últimos años de la

---

<sup>108</sup> Eduardo Valenzuela, “Sistema político y actores sociales en Chile” *Proposiciones* N° 22, Santiago, SUR, 1993.

Dictadura de los avatares de una democracia procedimental. “Esta hermandad entre razón y poder, garantizada por las instituciones ‘tecnificadoras’, tiene la misión de impedir los perniciosos efectos de las inevitables veleidades de la masa. Por tanto se trata de un sistema político trucado”<sup>109</sup>.

Esto significaría, siguiendo la misma interpretación, que se acepta una permanente tensión y contradicción discursiva en las elites democráticas chilenas, y una derrota simbólica que se consumó desde el mismo triunfo plebiscitario de 1988 en adelante<sup>110</sup>. No puede sembrar desconfianza en el Chile Actual, no puede hacerlo sentir ni precario ni inestable. No puede decir, por ejemplo, que, aceptando las reglas de la transición impuestas por la Dictadura, aceptaron una opción impuesta por una estructura política preestablecida e incambiable. Se habrían abandonado incluso nociones tan centrales para ese antiguo discurso anti-dictatorial como las de profundización democrática, reestructuración de la sociedad autoritaria y reconstitución de la comunidad nacional. Se ha denunciado también la transformación de los centros de educación popular y las antiguas ONGs independientes y creadoras de estudios ricos en crítica y análisis social en consultoras profesionales que han abandonado ese rol para dedicarse a la exclusividad de los estudios pagados por empresas o por el gobierno, dejando en la estacada al movimiento popular que ellas mismas habían contribuido a rearticular<sup>111</sup>. En una palabra, las elites concertacionistas, incapaces de incidir significativamente sobre el orden hegemónico neoliberal, habrían terminado o por incorporarse a su lógica, o por hundirse en un desaliento carente de propuestas. En la práctica si no en las intenciones, el verdadero poder social seguiría bajo el firme control de las elites de siempre.

---

<sup>109</sup> Tomás Moulian, *Chile Actual, ...op. cit.*, p. 49.

<sup>110</sup> Tomás Moulian, “Capitalismo, democracia y campo cultural en Chile”, *Encuentro XXI* N° 2, Santiago, 1995.

<sup>111</sup> Gabriel Salazar, *Los intelectuales, los pobres y el poder. 1989-1995*, Santiago, Serie de Documentos de Análisis PAS, 1995.

## CAPÍTULO II

# LOS GRUPOS MEDIOS

### 2.1 LA DEFINICIÓN DE LOS GRUPOS MEDIOS

#### *Las dificultades del análisis clasista*

Hay dos afirmaciones que constituyen un lugar común en el estudio de nuestros grupos medios: que no se han estudiado lo suficiente, y que, si bien no dudamos de su existencia, sí enfrentamos serios problemas al definir cómo se han desarrollado en nuestra sociedad. Javier Martínez ha destacado esta situación, afirmando el carácter de problema no resuelto de la definición de las clases medias en América Latina, y, asimismo, su condición de “término mágico”: “si se atiende a las conclusiones de diversos estudios, obra de los ‘sectores medios’ parecieran ser tanto el desarrollo como el atraso, la estabilidad política o su contrario, el modernismo o el tradicionalismo, la democracia o la dictadura”<sup>1</sup>.

El problema es de antigua data. Los intelectuales criollos del siglo XIX no hicieron una aproximación teórica a la clase media; atrapados en la visión de la “antigua nobleza” chilena, que no se reconocía como la “clase de especuladores y usureros” que fue la burguesía europea, se optó por negar la idea de una clase media emergente e innovadora, y se siguió dividiendo a la sociedad chilena en dos grandes grupos, los “caballeros” y los “rotos”, dejando a los grupos intermedios a merced de la burla y la pulla costumbrista<sup>2</sup>.

Historiadores tradicionales como Encina o ensayistas como Edwards también cayeron en la descalificación por insignificancia. Edwards, por ejemplo, excluye a los grupos medios de un plumazo al afirmar que para la república chilena del siglo XIX no

---

<sup>1</sup> Javier Martínez, *Sobre el concepto estructural-marxista de “pequeña burguesía” y las hipótesis sobre su conducta política*, Santiago, SUR, Documento de Trabajo N° 36, 1980; p. 2.

<sup>2</sup> Gabriel Salazar, *Para una historia de la clase media en Chile*, Documento de Trabajo 1986; p. 22.

fueron relevantes: “el resto del país (o sea, todo lo que no cabía dentro del Estado o la ‘fronda aristocrática’) era materia inerte, ganado humano”<sup>3</sup>. Los grupos medios sí existieron en el siglo XIX, pero como no fueron políticamente relevantes, quedaron fuera de su órbita de estudio.

Con el remezón político de los años veinte, los grupos medios se convirtieron en una clase de creciente interés. El descrédito de la oligarquía los convirtió en el grupo depositario de las nuevas virtudes que debían gobernar el país. Perdieron el estigma de “siúuticos” y “rotos acaballerados” con que los había recubierto la oligarquía decimonónica. Dejaron de ser “insignificantes”. Se convirtieron en la clase culta, de profesionales e intelectuales, que daría forma a la “esperanza mesocrática”. Pero, ¿hasta qué punto se constituyeron como una clase, un estamento o unos “grupos” sociales definidos, y cuál ha sido su comportamiento como tal y su relación con una cierta identidad?

Si algo revela el estudio del origen y la evolución de las “caravanas” de clase media que revisaremos, es que las dificultades de un análisis convencional de clase crecen a medida que se avanza en el conocimiento de la realidad factual de dichos grupos. Más que antes, cabe preguntarse qué tienen en común y qué engloban grupos quizás tan disímiles como los profesionales liberales de éxito, los pequeños propietarios rurales, los empobrecidos funcionarios de la burocracia estatal y los comerciantes venidos de la inmigración, para ser llamados por parejo miembros de los grupos medios.

La teoría marxista clásica plantea la definición básica de clase social, en cuanto grupo definido por su lugar en el proceso de producción. Mas Nicos Poulantzas destacó que si esa consideración era sin duda central, para el caso de los sectores medios era igualmente importante destacar el efecto de las estructuras ideológicas y políticas. Como en la sociedad no se dan los modos de producción ni las estratificaciones sociales en “estado puro” —donde sólo estaría dada la existencia de dos clases: explotadores y explotados— las formaciones sociales reales dan como resultado la aparición de clases correspondientes a otros modos de producción<sup>4</sup>. En las formaciones sociales capitalistas, donde ese modo de producción es el dominante, pueden encontrarse más clases de las que corresponderían en una situación “pura”.

Ese sería el caso de América Latina. En sociedades con un cercano pasado precapitalista, como las nuestras, se ha hablado del surgimiento de nuevas capas medias entre las clases antagónicas de la sociedad tradicional. Estas serían, más que una clase social constituida por factores productivos e ideológicos, “clases residuales”, que corresponden a modos de producción distintos del dominante, como le ocurría a la burguesía naciente al interior de las economías feudales. Esos modos de producción no

---

<sup>3</sup> Alberto Edwards, *La fronda aristocrática en Chile*, Santiago, Editorial Universitaria, 13a. edición, 1992; p. 38.

<sup>4</sup> Nicos Poulantzas, *Las clases sociales en América Latina*, México D.F., Editorial Siglo XXI, 1973.

se encuentran “yuxtapuestos” al modo dominante, sino que se articulan con él. En ese caso estarían, por ejemplo, los pequeños propietarios: “sectores medios” que, siendo propietarios de medios de producción, no compran fuerza de trabajo, sino que trabajan por sí mismos. Según Javier Martínez, esto ha llevado a ciertos analistas a considerar a ése como el único grupo “medio” propiamente distinto de la clase obrera y la capitalista<sup>5</sup>.

En el fondo, nos enfrentamos a la disyuntiva de definir la relación entre trabajo asalariado y trabajo productivo. Poulantzas hace la distinción entre los asalariados obreros y los asalariados no productivos, que forman parte de la pequeña burguesía. Integrarían esta pequeña burguesía no-obrera, por tanto, aquellos asalariados de labores no estrictamente productivas y los pequeños empresarios que ejecutan labores productivas sin comprar, mayormente, fuerza de trabajo.

A partir de la caracterización que se propondrá, varios de los “grupos medios” chilenos podrían definirse como clases diferentes a las generadas por las relaciones dominantes entre capital y trabajo en la jerarquización social. Los artesanos del siglo XIX y los pequeños y medianos empresarios del XX podrían corresponder, en un sentido amplio, a esas clases “residuales” desencajadas del gran modo de producción capitalista y mercantil dominante. Por otra parte, el grupo funcionario de la burocracia estatal y privada podría clasificarse como parte de una clase asalariada no productiva.

Sin embargo, el mismo Javier Martínez, reflexionando en torno a dichas definiciones, apunta que se producen vacíos, grupos sin definir o que difícilmente cabrían en este esquema: “quedan abiertos los problemas planteados por simples ocupaciones empíricas como el repartidor de comercio, el jardinero municipal, el encargado de aseo en las aulas universitarias, el portero de la Bolsa de Valores, etc.”<sup>6</sup>; y también, podríamos agregar, de los profesionales asociados a la producción material.

Por lo tanto, consideramos que si enfocamos a los grupos medios desde una perspectiva clasista, poseeremos una vertiente de análisis que permitirá situar su formación en el contexto de una estructuración y jerarquización amplia, que podría aclarar uno de los problemas básicos de su definición: entendiéndolos como sectores que pueden provenir de relaciones previas, paralelas o articuladas con el modo de producción dominante, comprenderemos el origen —y la importancia— de su carácter diverso, y hasta a veces contradictorio, con otros grupos y con sus mismos objetivos. Ello ayuda a entender, en parte, la dificultad y los límites del análisis de clase frente a su comportamiento.

---

<sup>5</sup> Javier Martínez, *op. cit.*, ps. 23 y ss.; José Calixto Rangel Contla, “La pequeña burguesía en la sociedad mexicana, 1895 a 1960”, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, 1972.

<sup>6</sup> Martínez, *op. cit.*, p. 29.

## *La clase esperanza y la clase traidora*

Nos encontramos en Chile, por tanto, con que los grupos medios se han constituido en distintas coyunturas históricas, asociadas o anteriores al modo de estructuración social dominante: en los impulsos endógenos de un artesanado popular que quiere ascender hacia la independencia productiva, en los obreros que se resisten a la proletarianización y se vuelven empleados fiscales y dependientes de tiendas, en la modernización educacional y tecnológica y en el mundo de las llamadas “clases políticas”. Los grupos medios parecen ser, al mismo tiempo, los mundos del esforzado inmigrante, del pueblo deseoso de acabar con su “estigma” de clase, del intelectual “patrimonio de la Nación” y del técnico asociado a la gran empresa pública o privada.

Esto ha llevado, por una parte, a una suerte de orgullo nacional, que en un discurso sociológico de divulgación —como el de Pablo Huneus<sup>7</sup>— planteó a Chile como un país diferente a otras realidades tercermundistas; un país donde no había sólo pobres y ricos, sino donde los más pobres y los más ricos se hallaban precisamente mediatizados por una numerosa y diversa clase media. Un país socialmente fluido, como dijo Amanda Labarca, donde frecuentemente la clase media es percibida como un sector “de paso” hacia lo más alto de la sociedad. Un “poder mesocrático” no expresado solamente en la política —los partidos de centro y centroizquierda, los gobiernos radicales y el PDC— sino en una estructura social que permitía mayores matices, aun dentro de esos mismos grupos: la clase media-media, la media-baja, la media-alta. Un grupo de tendencias laicas, culto, de donde vendrían poetas, científicos, políticos y burócratas probos y talentosos.

Se trata en suma de una visión de los grupos medios como una verdadera “esperanza” nacional, reemplazante de la oligarquía y llamada a conducir los cambios profundos que un siglo de predominio aristocrático y mercantil no había sabido o querido realizar. A partir de la década de 1920, y debido al desarrollo de la industria chilena y de una suerte de capitalismo “a la norteamericana”, los antes infranqueables límites del consumo exclusivo se descomponen y se levanta un modo de vida que no seguía ensanchando las distancias del castillo kafkiano, sino que tendía más bien a derribarlas. Si a esto se suma la explosión política del bajo pueblo, tendremos una imagen de una clase media que ahora se hacía industrialista y populista. Bloqueada la línea de desarrollo empresarial medio, la responsabilidad histórica se centró en el proyecto político y el deber social: proteger el desarrollismo, derrotar en las urnas a la oligarquía tradicional y solucionar los problemas proletarios de cesantía, alimento y vivienda. Es decir, ante una eventual ausencia de proyecto propio, los grupos medios se habrían abocado a solucionar los problemas acumulados por decenios de gobierno oligárquico, como nueva clase redentora. Así, en los decenios intermedios del siglo XX sus integrantes alcanzaron un

---

<sup>7</sup> Pablo Huneus, *¿Qué te pasó, Pablo?* Santiago, Editorial Zig Zag, 1983.

sitial respetable y autónomo, convirtiéndose, de paso, en un modelo a imitar para los grupos proletarios<sup>8</sup>.

Pero existían vacíos y límites, económicos, políticos y también cotidianos que comenzaron a desdibujar a los sectores medios de su condición de “clase esperanza”. Como veremos, sus sectores más “productivistas” no lograron consolidarse —ni en el siglo XIX, ni en gran parte del XX— como ese grupo estable, activo y con identidad propia que fue la clase media europea francesa e inglesa, por ejemplo, capaz de ascender socialmente con estabilidad y ganarse un nicho al menos en los mercados internos de sus países. A partir de la crisis del modelo desarrollista de industrialización por sustitución de importaciones, comienza a insinuarse el malestar del fracaso: se sentía que no se habían podido erradicar todos los vicios del parlamentarismo (como el caciquismo político) y que no se habían resuelto eficazmente las demandas del proletariado. Desde los años cincuenta en adelante, en un proceso que no podemos considerar radical ni explosivo, pero sí existente, la idea del “destino manifiesto” de los grupos medios como conductores de un nuevo Chile no oligárquico ni plutocrático, industrial, menos desigual y más ciudadano, se fue eclipsando. En tiempos de mayor polarización y conflictividad, sus propuestas se vieron siempre anonadadas y desbordadas por el polo más derechista<sup>9</sup>.

En los años sesenta y setenta, los analistas teóricos y propiamente políticos de las realidades latinoamericanas —incluida la chilena— se preocuparon más de los enfoques estructurales y de las reorganizaciones partidarias que del desgastado tema de los grupos medios. Definir su eventual ubicación en relación a los cambios estructurales, al reordenamiento de la jerarquía social, se convirtió en un tema más importante. De esa forma, una de las vertientes del análisis sociológico de los años sesenta propuso la tesis de que la clase media se había burocratizado, y con ello frenado los mismos proyectos desarrollistas que en un comienzo había defendido<sup>10</sup>. De acuerdo a esta visión, ella no habría sido un factor de desarrollo para sus países, porque sólo supo jugar su papel en las concertaciones de orden político. Su posición estructural como clase habría sido ambigua y débil. Análogamente, Aníbal Pinto, en su clásica interpretación sobre el “desarrollo frustrado” chileno, sostuvo que la clase media se hizo carne en el proceso político y el manejo del Estado, subvalorando el proceso productivo. Por su parte, César de León planteó que en realidad no podía hablarse de clases medias, porque no tenían la consistencia necesaria para ello, sino de capas medias que se insertan en la vida social sin ser ni capitalistas ni obreros, acusándolas también de haber fracasado como administradoras del Estado<sup>11</sup>.

<sup>8</sup> Gabriel Salazar, *Para una historia de la clase media...*, op. cit., ps. 31 y ss.

<sup>9</sup> Manuel Castells, *Chile: Movimiento de pobladores y lucha de clases*, Santiago, CIDU, 1972.

<sup>10</sup> Jorge Graciarena, *Formaciones sociales y estructuras de poder en América Latina*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1981; Luis Ratinoff, “Los nuevos grupos urbanos: las clase medias”, en Seymour Martin Lipset y Aldo Solari (eds.), *Elites y desarrollo en América Latina*.

<sup>11</sup> César de León, “Las capas medias en la sociedad chilena del siglo XIX, (1810-1910)”, *Anales de la Universidad de Chile* N° 131, 1964.

De esta forma se va dibujando una interpretación de los grupos medios como una clase incapaz y cuasi traidora. Saliendo del análisis formal y entrando al territorio mucho más escabroso de las sensibilidades sociales, se configura aquí una imagen de los grupos medios como los que han entrabado arteralmente la resolución del necesario conflicto entre los poderosos y los desvalidos; los que, por miedo, por arribismo, por envidia y fascinación hacia un modelo signado por el consumo y el logro individual, finalmente abandonaron su careta populista y, en la lucha final de 1973, apoyaron a los militares. Se jugaron por no perder el Chile que habían conocido, por acabar con el molesto recurso del mercado negro para acceder libremente al mercado, y por dejar atrás su vertiente izquierdista, de posible alianza con los intereses populares<sup>12</sup>.

Por ello, gran parte de la pregunta inicial sigue pendiente: ¿Quiénes han sido, social y políticamente hablando, las clases medias en Chile? ¿Cómo y hasta qué punto han transformado la estructura social chilena e incidido en el cambio o la conservación social? ¿Fue el proyecto “desarrollista-populista” realmente un “proyecto de clase”, o al menos la expresión de un movimiento social de sectores, si no homogéneos, relativamente unitarios en sus metas? ¿Cuánto ha influido la pluralidad de los sectores medios en su identificación como clase, o en su falta de identidad? Y, acaso más crucial todavía, ¿hasta qué punto su pluralidad y diversidad ha sido un beneficio o un obstáculo para la modernización y el desarrollo de la sociedad chilena?

En las páginas que siguen, se entrega un estado de la cuestión sobre los estudios en torno a estos grupos en los siglos XIX y XX, y, en la medida de lo posible, una reflexión final sobre su evolución y situación en el Chile actual.

## **2.2 PRODUCTIVISTAS, MERCANTILISTAS E INDEPENDIENTES**

### **I. El artesanado decimonónico y el estrato de “productores independientes”: ¿el caso de una clase media frustrada?**

Para muchos de los estudios consagrados a la historia del artesanado chileno del siglo XIX, este actor social habría pertenecido claramente al mundo de lo popular, constituyendo una suerte de “aristocracia laboral” que tempranamente tomó conciencia de su potencialidad social y de los derechos que le asistían para aspirar a un mayor reconocimiento de sus capacidades como actor histórico. De esta inclinación habría nacido

---

<sup>12</sup> Salazar, *Para una historia...*, op. cit., p. 7.

la participación artesanal en la Sociedad de la Igualdad de 1850, la formación de las primeras mutuales a partir de esa misma década, y el amplio proyecto de democratización política y “regeneración popular” que culminó en la constitución del Partido Demócrata en 1887, y la plena incorporación de sectores trabajadores a la política nacional a contar de la década de 1890. De esta experiencia se habrían nutrido también las primeras entidades de carácter netamente “clasista” o “proletaria” de nuestra historia, como las mancomunales, las sociedades de resistencia y los primeros partidos obreros<sup>13</sup>.

También existe, sin embargo, una visión alternativa que mira al artesanado no como conductor y miembro del mundo popular, sino como sustrato originario de aquellos grupos medios que se definieron no por su carácter de asalariados, sino por su independencia y capacidad de acumulación por cuenta propia, y que habrían sido, contrariamente a lo que se piensa, mucho más numerosos que la clase media “dependiente”<sup>14</sup>.

En esta interpretación, se parte de la idea de que los polos de articulación ocupacional del bajo pueblo chileno fueron varios, y no sólo el peonaje o inquilinaje rural, o el trabajo doméstico urbano. Dentro de estos polos alternativos de articulación, estuvo, primero, una explotación empresarial de los recursos de la tierra y, segundo, el ya nombrado artesanado urbano, ambos como modelos diferentes a las opciones laborales creadas por las elites.

En la primera situación, se plantea un movimiento micro-colonizador de “labradores” en fronteras, intersticios y valles poco valorizados anterior a 1850, y también de “pirquineros” y “placilleros” en el Norte Chico. A partir de su perseverancia, echaron los fundamentos de una eventual clase media rural, de mentalidad social-productivista. Sin embargo, las elites mercantiles discriminaron a esta naciente clase media, que finalmente no llegó a eclosionar. Tildada de “pipiola” y “anarquista”, fue identificada con el “populacho” y obligada a ceder, especialmente a partir de la expoliación mercantil y usurera que se precipitó sobre ella<sup>15</sup>.

La segunda situación se relaciona con lo que se ha llamado la industria popular del siglo XIX. Según la interpretación que se viene comentando, durante el período comprendido entre 1820 y 1850 habrían surgido establecimientos pequeños, rústicos y

---

<sup>13</sup> El mejor exponente de esta “escuela” es sin duda Sergio Grez, con su monumental estudio titulado *De la “regeneración del pueblo” a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890)*, Santiago, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 1997. Ver también Luis Alberto Romero, *¿Qué hacer con los pobres? Elite y sectores populares en Santiago de Chile, 1840-1895*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1997, capítulo 3; y María Angélica Illanes, *La revolución solidaria. Historia de las sociedades obreras de socorros mutuos. Chile, 1840-1920*, Santiago, Colectivo de Atención Primaria, 1990.

<sup>14</sup> Gabriel Salazar, *Para una historia...op. cit.*, p. 9.

<sup>15</sup> Gabriel Salazar, *Labradores, peones y proletarios. Formación y crisis de la sociedad popular chilena del siglo XIX*, Santiago, Ediciones SUR, 1985.

pobrementemente equipados, manejados más por familias que por “elencos asociados en contrata”, que habrían dado lugar a una industria pobre en capitales y medios de producción, pero rica en creatividad y capacidad para utilizar medios baratos y apropiarse de algunas tecnologías y herramientas importadas. Eran éstas industrias artesanales de textiles, cigarreros, almidoneros, curtidores, torneros, abasteros y comercios ambulantes del más diverso tipo, cuyo vigoroso desarrollo preocupó a unas elites empeñadas en mantener su monopolio de la actividad mercantil. No sólo en las dos ciudades mayores, sino también en el sur del país se generaron —por ejemplo, en el caso de los astilleros— asociaciones de agricultores, madereros, carpinteros, calafateros, peones y marinos, utilizando la tecnología colonial y local, y absorbiendo en porcentajes apreciables la cesantía existente<sup>16</sup>.

Otros autores también se han referido al surgimiento de grupos medios dentro de las labores rurales, aunque sin plantearlos como antagónicos al predominio oligárquico. Según el texto clásico de Aníbal Pinto sobre el desarrollo económico chileno, la producción minera y agropecuaria se quintuplicó en el período 1844-1860. Esta actividad productiva ligada al comercio exterior dio lugar a la emergencia de sectores que empezaron a ejercer presión sobre el gobierno por una mayor apertura del país y su integración al sistema británico, pero se apunta que sus intereses no fueron contrarios a los de la oligarquía dominante, ni se produjo una diversificación que diera lugar a cambios en la estructura social general<sup>17</sup>.

Por otra parte, es un hecho bastante establecido que los grupos de “trabajadores con profesión” aumentaron con fuerza entre los años 1895 y 1907. Entre 1914 y 1919, se dibujan en el contexto nacional una serie de espacios de expresión que fueron ocupados por estos independientes: opositores a la oligarquía, mutualistas y comunales, artesanos, mineros y parceleros, grupos provincialistas y localistas, con un desarrollo de conciencia social democrático-provincial<sup>18</sup>.

Es este sector diverso, que no constituye en realidad una clase cohesionada, el que recibe los alfilerazos de la burla oligárquica decimonónica, y aun la de este siglo. Para hablar de una obra ya citada, el *Martín Rivas* de Blest Gana no retrata a dichos grupos como el modelo de laboriosidad y democracia que más adelante se les atribuyó. En la novela, son la gente “de medio pelo” urbano, envidiosa de la posición de los ricos, mal educada y oportunista. La familia de doña Bernarda Cordero, viuda de Molina, es la versión “de medio pelo” de la familia Alonso; destacan su deshonestidad arribista y la vida ruidosa de sus chinganas, en comparación con el ambiente afrancesado, más rico y “virtuoso” de la clase alta santiaguina.

---

<sup>16</sup> Gabriel Salazar, “Empresariado popular e industrialización: la guerrilla de los mercaderes (Chile, 1830-1885)”, *Proposiciones* N° 20, Santiago, SUR, 1991.

<sup>17</sup> Aníbal Pinto, *Chile: un caso de desarrollo frustrado*, Santiago, Editorial Universitaria, 1962.

<sup>18</sup> Gabriel Salazar, *Para una historia...*, op. cit., p. 30.

Y por otra parte, las pullas contra el medio pelo rural. En otra gran obra de costumbres, como es *Gran Señor y Rajadiablos*, de Eduardo Barrios, vemos el desprecio de una aristocracia latifundista, que gusta de remontar sus orígenes hasta la gesta heroica de la Conquista, hacia los nuevos propietarios. *Gran Señor y Rajadiablos*, escrita durante el siglo XX, es un verdadero canto a la supuesta “antigua nobleza” colonial, a la que ya se ha hecho referencia en el capítulo anterior, y al desprecio por aquellos que intentan tomarse libertades con ella o igualárseles. Una galería de personajes “de medio pelo” rodea al protagonista, el gallardo y aristocrático José Pedro Valverde Aldana. Por una parte están Sofanor y su mujer, los recién llegados “con aspiraciones”, ridiculizados por su anhelo de igualarse con Don Pepito, por su mestizaje oculto a medias y por su ignorancia disfrazada de latinazgos mal pronunciados; y por otra, los huasos que han logrado reunir fortuna pero que son bien tratados por el autor. “Don Joaco”, por ejemplo, que mantiene el respeto y la humildad hacia el patrón y que al morir le deja su fortuna, porque, afirma, “siempre se mea la bestia donde no hace falta humedad”.

¿Qué ocurrió con estos presuntos grupos medios independientes del siglo XIX? Una tesis es que este primer ciclo de sectores medios productivistas, de pequeños empresarios ascendidos de los sectores populares en las áreas de la industria y los servicios urbanos, habría visto frustrado su desarrollo ascendente. En la competencia con el sector mercantil internacional actuante en el país, y también con los grandes mercaderes nacionales aliados a esos capitales externos, perdieron la partida. Desde 1824 en adelante, con la emblemática guerra del monopolio mercantil estancero contra los cigarreros populares, se habría desarrollado un esfuerzo sistemático y constante por someter a estos grupos bajo las políticas económicas (y sociales, en cuanto al “orden” de la sociedad) hegemónicas<sup>19</sup>.

Pues a diferencia de lo ocurrido en algunos países europeos con las pequeñas y medianas burguesías del siglo XIX, estos nacientes grupos “productivistas” no recibieron el apoyo de un Estado que estimulara su desarrollo y crecimiento interno. El Estado chileno decimonónico, funcional a los intereses del grupo terrateniente y mercantil que lo manejaba, los dejó en la estacada o los reprimió, y, por lo demás, compitió con ellos en los mercados internos. Las condiciones no los favorecieron: ni las crediticias, ni las de cambio monetario, ni las de contratación de mano de obra.

Ello provocó, por una parte, la proletarización de estos sectores. Si algunos de estos pequeños y medianos empresarios venidos del mundo popular habían iniciado una ruta ascendente, llegando a superar esa “frontera alta” que deslindaba con la elite, no lograron consolidarla como una ruta de ascenso constante. Quedaron en la difícil situación de proletarizarse, uniéndose a los cuadros de trabajadores propiamente obreros de la

---

<sup>19</sup> Salazar, “Empresariado popular e industrialización...”, *op. cit.*, p. 44.

gran industria minera y manufacturera que comienza a desarrollarse desde fines del siglo XIX. O se “bandolerizaron”. U optaron por una situación de simple subsistencia, intentando mantener —que no aumentar— el patrimonio acumulado.

De ellos, unos pocos lograron vencer las condiciones adversas, pero de estos estudios se desprende, indirectamente, que se trató precisamente de individuos que lograron incorporarse a las elites: inmigrantes enriquecidos rápidamente, agricultores y comerciantes aliados a las políticas económicas dominantes.

## II. Siglo XX. La continuación de la inseguridad

Aunque nos faltan estudios sobre la situación de los “productivistas independientes” que se constituyen en sectores medios para el presente siglo, no es tan arriesgado afirmar que la dura lucha de los pequeños y medianos empresarios por subsistir —y más aún, por ascender— ha seguido en marcha.

Como veremos en específico al tratar el tema de los inmigrantes, los primeros años de este siglo asistieron a los reclamos de estos pequeños y medianos comerciantes por la falta de apoyo a su desarrollo. Sus dardos se dirigieron en especial hacia los extranjeros, a quienes veían bien relacionados con las elites, y exitosos a raíz de ese mismo apoyo y de los recursos técnicos y de mentalidad empresarial que ellos no poseían. La misma historiografía conservadora se dolió de esta incapacidad, coincidiendo en este aspecto con las denuncias del ala izquierda de nuestras ciencias sociales. Así, a comienzos de siglo Francisco Antonio Encina lamentaba la falta de expectativas, de formación empresarial, de armas productivas y de capital de los chilenos para enfrentarse con eficiencia a la competencia exterior. No estaban preparados, y por ello, demasiado a menudo perdían la partida<sup>20</sup>.

Los estudios de Guillermo Campero y Cecilia Montero han reflexionado sobre las diferencias ya históricas entre la pequeña y mediana empresa y el gran empresariado nacional durante el siglo XX. Sociológicamente, Campero considera a los empresarios una “camada social media”, donde la alta burguesía es minoritaria, y la mayoría se concentra en actividades de servicios y transporte, y no en el sector productivo. Este pequeño y mediano empresariado ha poseído, a lo largo del presente siglo, una visión más nacionalista y corporativista de la empresa, con una clara aspiración de ser protegido por el Estado y una reivindicación de mayor poder para las organizaciones empresariales: se autodefine como “hombres de trabajo”, buscando diferenciarse, por un lado, del gran

<sup>20</sup> Francisco Antonio Encina, *Nuestra inferioridad económica: sus causas y consecuencias*, edición original, Santiago, 1912.

empresariado, y por otro, de la clase media política, intelectual y profesional liberal. Este pensamiento ha sido especialmente fuerte entre los comerciantes, transportistas, agricultores y mineros tradicionales<sup>21</sup>.

Sin embargo, han tenido en común con la gran empresa la defensa indiscutida de la propiedad privada, que los hizo unificarse durante la Unidad Popular. En otro estudio realizado con René Cortázar, Campero ha destacado que el gran empresariado fue clave en la desestabilización ideológica de ese gobierno, pero que la pequeña y mediana empresa fue la que logró alterar el comercio y el transporte<sup>22</sup>. Con todo, las diferencias entre uno y otro grupo se harían muy notorias durante los primeros años del gobierno militar. Estas no se referían sólo al modelo económico, sino también a factores más antiguos: los pequeños y medianos empresarios se consideraban la base social privilegiada del régimen, por el papel que habían tenido en la caída de la Unidad Popular. Pero la política económica neoliberal habría terminado con esas aspiraciones, aunque no necesariamente con su valoración más profunda de ciertos principios del régimen militar como la defensa de la propiedad privada, la libertad de empresa, la desconfianza frente a los partidos políticos y la voluntad de combatir al comunismo.

El repunte económico experimentado a partir de mediados de la década de 1980 ha llevado a algunos observadores a postular la aparición de una nueva clase media empresarial. Así, los estudios de Rodríguez y Venegas hablan de una clase media empresarial en formación en el sector agrícola, pero que no posee aún una “mentalidad empresarial” claramente definida. La explicación estaría en la heterogeneidad de sus experiencias y procedencias, a que la actividad frutícola es una más entre muchas que desarrollan, por lo que habría dificultades en la configuración de una identidad colectiva<sup>23</sup>.

Por su parte, Cecilia Montero también destaca las múltiples actividades de este “nuevo empresariado”, que combina iniciativas productivas, comerciales y financieras. Para ella, más que por su rama de actividad, esta nueva clase empresarial estaría definida por el mercado al que se orienta. En este sentido, no se estaría asistiendo a la aparición de una nueva “clase media agraria”, es decir, a un grupo empresarial medio, cohesionado y con identidad propia, que reemplazaría, por una parte, a la vieja aristocracia agraria, o que se enfrentaría con el modelo neoliberal exportador dirigido por el gran empresariado. Más bien, esos nuevos grupos seguirían básicamente la misma orientación de la gran empresa, y emularían los modelos tradicionales de vida del campo chileno<sup>24</sup>.

<sup>21</sup> Guillermo Campero y Cecilia Montero, *Los empresarios ante la alternativa democrática. El caso de Chile*, Santiago, Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, 1988.

<sup>22</sup> Guillermo Campero y René Cortázar, “Actores sociales y la transición a la democracia en Chile”, *Estudios Cieplán* N° 25.

<sup>23</sup> D. Rodríguez y S. Venegas, “Los empresarios frutícolas chilenos: orígenes, estilos de vida, opiniones”, Santiago, Grupo de Estudios Agrarios, Documento N° 14, 1989.

<sup>24</sup> Cecilia Montero, *La revolución empresarial chilena*, Santiago, Dolmen Ediciones, 1997, especialmente el capítulo VI.

Quizás esta heterogeneidad y falta de una identidad común sea extensible a otros sectores de la mediana empresa. Pues igualmente, en la empresa urbana —especialmente en el sector servicios— tampoco parece haberse desarrollado en las últimas décadas ni un modelo de relación con el Estado ni una forma de comportamiento económico propio que entrase en conflicto con el modelo neoliberal del gran empresariado. Roberto Fantuzzi, por ejemplo, vocero de las asociaciones de pequeños y medianos empresarios, en numerosas ocasiones ha denunciado que el gobierno no se ocupa de integrar a esos sectores a su dinámica globalizadora. En una veta humorística, este dirigente advirtió que los medianos empresarios no podían acompañar al Presidente de la República en sus viajes al Asia, porque no tenían dinero suficiente para financiarse<sup>25</sup>. Pero, ¿van estas críticas más allá del mero rezongo? La respuesta no nos parece clara. Al parecer, esos empresarios medios, como los del transporte, por ejemplo, conservan un supuesto “estatista”, en el sentido de esperar soluciones a sus conflictos por parte del Estado, o recurrir a él para “plantear sus demandas”, pero se conforman con compromisos que sólo momentáneamente mejoran su situación.

En tal sentido, podríamos decir que aquí se cumple una de las tesis habituales de Ratinoff: estos grupos medios, nacidos de la expansión de fenómenos como la exportación frutícola, el “mega-crecimiento” de las ciudades y el aumento de la capacidad de consumo de otros sectores medios e incluso populares, siguen poseyendo aspiraciones corporativistas y estatistas, pero al chocar contra el neoliberalismo imperante en las elites, protestan y aceptan a la vez. Y tampoco parecen existir intenciones de alianzas con otros sectores medios: su opción sigue siendo la condición empresarial. Así terminan empantanados entre su conciencia de ser desplazados y postergados por los sectores dominantes de la política y la economía, y el temor a establecer alianzas con quienes podrían desconocer el necesario respeto a la propiedad privada y la iniciativa individual que consideran la base de su existencia.

### III. La presencia inmigrante

#### *Origen de los grupos inmigrantes*

Al hacer referencia al papel de los inmigrantes en los grupos medios, hay que revisar brevemente las características de su llegada al país y la imagen de la que social, política y económicamente han sido revestidos a lo largo del período a tratar.

Según Leonardo Mazzei, los inmigrantes formaron parte del proceso de

---

<sup>25</sup> Entrevista publicada en revista *Cosas*, marzo de 1995.

“organización nacional” de las elites decimonónicas. Son bienvenidos y bien vistos por las elites oligárquicas desde el siglo XIX en adelante<sup>26</sup>.

Por una parte, ya desde los años de 1810-20, forman parte de la elite artesanal y del comercio interno de las mayores ciudades chilenas. Artesanos especializados franceses, alemanes e italianos se concentran en Santiago y Valparaíso, distinguiéndose por su refinamiento técnico y su cultura, del peligroso y popular artesanado vernáculo, formando un grupo más próspero, especializado y mejor considerado socialmente por las elites, que desde 1840 en adelante les concede patentes de exclusividad hasta por diez años<sup>27</sup>.

Asimismo, la llegada de comerciantes ingleses, franceses, italianos o norteamericanos, especialmente a Valparaíso, fue parte del proceso de desarrollo económico de la burguesía mercantil chilena, como lo han destacado los estudios que se refieren al auge decimonónico de dicho puerto<sup>28</sup>. Como representantes de casas comerciales europeas, y luego realizando sus propios negocios, se integran al contexto urbano y al tejido económico y social de espacios determinados, influyendo incluso en la arquitectura, los adelantos tecnológicos y la sociabilidad urbana. Como lo destaca Gonzalo Vial, llegan a darle a Valparaíso un “tono británico” y luego un “tono italiano” que lo diferencia de Santiago, en sus barrios del Cerro Alegre, sus actividades deportivas y la fundación de clubes de estilo inglés<sup>29</sup>.

A ellos se suma la inmigración planificada de los años de 1850 en adelante. En el amplio esfuerzo por “desbarbarizar” y colonizar las amplias zonas desocupadas en el sur del país, la inmigración fue vista por las elites políticas como un punto positivo, que traería una fuerza de trabajo honesta, moderna y responsable a colaborar en el proceso. Los cronistas de la época, libres del temor a ser calificados como racistas o europeizantes, no temieron expresar públicamente las bondades de los distintos pueblos que podrían favorecer el desarrollo nacional. Desestiman a los españoles del sur, por su fama de pueblo poco laborioso y rebelde, y ensalzan especialmente a los pueblos germánicos, paradigma de templanza y laboriosidad<sup>30</sup>. Por ello, se privilegia una inmigración selectiva y planificada, donde las legislaciones desde 1845 en adelante, muestran una clara tendencia a reclutar inmigrantes con cierto grado de formación técnica y alfabetismo. Asimismo, se ofrecen garantías —como el transporte gratuito al país— a los inmigrantes que puedan traer conocimientos industriales específicos e incluso que puedan cargar con las maquinarias necesarias para realizarlos. De allí emanó la colonización de los espacios de

---

<sup>26</sup> Leonardo Mazzei, “Inmigración y clase media en Chile”, *Proposiciones* N° 24, Santiago, SUR, 1994.

<sup>27</sup> Luis Alberto Romero, *¿Qué hacer con los pobres?* op. cit., capítulo III.

<sup>28</sup> Eduardo Cavieres, *Comercio chileno y comerciantes ingleses, 1820-1880. Un ciclo de historia económica*, Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso, 1988.

<sup>29</sup> Gonzalo Vial, op. cit., vol. I, tomo I, capítulo I.

<sup>30</sup> Por ejemplo, Vicente Pérez Rosales, *Recuerdos del pasado*.

la Araucanía por inmigrantes suizos y alemanes, llegados a raíz de las revoluciones y crisis económicas de 1847-48 y 1873-75<sup>31</sup>.

Luego comienzan las oleadas inmigratorias de otros europeos, especialmente agricultores y artesanos. Se trata de flujos sin planificación estatal, pero que son en general igualmente bienvenidos. Contamos allí a los inmigrantes europeos o levantinos llegados a raíz de las grandes convulsiones de la Europa desde fines del siglo XIX hasta las guerras mundiales: los croatas impulsados a la emigración por los conflictos balcánicos; los peninsulares de distintas regiones, debido a las guerras carlistas y la Guerra Civil Española; los italianos, judíos y otras minorías por las guerras mundiales; y los árabes que, consignados como “turcos”, en realidad corresponden a contingentes de sirios, libaneses y palestinos. Su factor de inmigración fue precisamente la dominación turca en sus territorios de origen, y los problemas de estas minorías cristianas con un imperio musulmán<sup>32</sup>.

### *Evolución del inmigrante en Chile*

¿Qué ocurrió con estos inmigrantes en la cultura, la economía y la política nacional? Como principio de respuesta, tal vez sería interesante partir señalando lo que no ocurrió con ellos.

Primero, no se integraron del todo a los proyectos soñados por las elites decimonónicas. Si bien se establecen en el país, no llegan a formar parte de una masa de trabajadores asalariados. Probablemente se resistieron a un proceso de proletarianización que ya habían experimentado o eludido en sus países de origen<sup>33</sup>.

Segundo, no llegan a formar un grupo transformador a nivel profundo de las estructuras o las jerarquías sociales del país. La inmigración no fue en Chile un proceso masivo que produjera ese efecto, como sí ocurrió en Argentina o Uruguay. Porcentualmente, la cantidad de extranjeros residentes en el país ha sido muchísimo más baja que la de esas naciones vecinas o Brasil. En Chile, las “colonias” extranjeras no han constituido ni ghettos ni ciudades aparte y no han modificado (salvo en mínima escala) ni el habla nacional ni las costumbres. Acaso con la excepción de pueblos como Capitán

---

<sup>31</sup> Jean-Pierre Blancpain, *Los alemanes en Chile (1816-1945)*, Santiago, Colección Histo-Hachette, 1985; Carmen Norambuena Carrasco, “Política y legislación inmigratoria en Chile, 1830-1930”, *Cuadernos de Humanidades* N° 10, Universidad de Santiago de Chile, 1990; Lilian Mires, “Notas sobre la constitución de las clases medias chilenas: los inmigrantes”, SUR Profesionales, Documento de Trabajo N° 59, 1986.

<sup>32</sup> Benedicto Chuaqui, *Memorias de un emigrante*, Santiago, Editorial Nascimento, 1957; Lorenzo Agar, “El comportamiento de los migrantes árabes en Chile y Santiago”, tesis inédita de Licenciatura, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1982.

<sup>33</sup> Leonardo Mazzei, *op. cit.*

Pastene, no hay en Chile asentamientos que evoquen a una “pequeña Italia”, o una España o una Croacia. Por lo tanto, tampoco han “blanqueado” nuestra población a nivel de porcentajes generales. Los datos cuantitativos no acompañan a cierto discurso chauvinista nacional, en el que Chile, como Argentina y Uruguay, se habría constituido gracias a la inmigración en uno de los países latinoamericanos “blancos”, a diferencia del mestizaje, el claro porcentaje netamente indígena y la “negritud” visibles más al norte del subcontinente.

Sin embargo, es innegable que los inmigrantes han tenido un papel en la realidad social chilena de este siglo. Según varios autores ya citados, estos grupos se hicieron parte de un empresariado medio urbano, manufacturero, comerciante y técnico relativamente exitoso. A nivel de imágenes, el panadero español, el tendero levantino, el almacenero italiano y el colono alemán se fueron haciendo parte del repertorio social del país. Sin constituir en su mayoría ghettos diferenciados del resto de la población, ellos y sus descendientes tendieron a unirse con mujeres de los grupos medios y bajos chilenos, quienes también colaboraron en su despegue comercial, como aclaran los estudios para el caso italiano y español de Baldomero Estrada<sup>34</sup>.

Estos grupos, al tenor de esa evolución, despiertan la admiración, pero también las críticas. En los sectores medios de origen nacional, el éxito de los inmigrantes fue sentido como una amenaza: se advertían sus buenas relaciones con las elites, y se argumentaba que la falta de industria nacional, unida a la dominación del comercio que estaban ejerciendo, restringía a la clase media chilena a los empleos públicos y limitaba a los nacionales a posiciones secundarias. Intelectuales nacionalistas del Centenario, como Nicolás Palacios, lanzaron virulentos ataques contra la inmigración, especialmente contra la italiana, bajo el supuesto de que quitaban espacio al desarrollo y las oportunidades de los chilenos. También se criticó la contratación de técnicos y profesionales extranjeros, mejor pagados que los nacionales. En los datos aportados por Lilian Mires, el porcentaje de técnicos extranjeros empleados por la industria nacional entre 1919 y 1926 asciende a un 47 o 48 % del total. Por su parte, Carmen Norambuena ha destacado las diatribas contra los “agencieros” (dueños de casas de préstamo y empeño) a comienzos de este siglo, que se expresaban a través de la prensa. Estos agencieros —en su mayoría españoles— concitaron el odio de quienes debían recurrir a ellos para empeñar sus bienes: los obreros, los empleados y otros numerosos miembros de los sectores pobres y medios<sup>35</sup>. Otra fuente de resquemores fueron las posiciones clave que ocuparon los inmigrantes en actividades como la educación. La Iglesia Católica miró con desconfianza

---

<sup>34</sup> Baldomero Estrada (ed.), *Presencia italiana en Chile*, Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso, 1993; *Inmigración española en Chile*, Santiago, Universidad de Chile, 1994.

<sup>35</sup> Carmen Norambuena Carrasco, “Inmigración española en Chile, 1890-1920: los prestamistas”, *Proposiciones* N° 24, Santiago, SUR, 1994.

la introducción de profesores extranjeros, en su mayoría alemanes, por su supuesta afinidad con sectores más proclives a una educación moderna y laica<sup>36</sup>.

Porque los inmigrantes rebasaron rápidamente el nivel del almacén de barrio o la panadería de la esquina. Sus descendientes, integrados a una clase media en rápido ascenso, o se integraron a la vida empresarial, o tomaron los caminos más tradicionales de la burocracia, la carrera profesional o la política. Algunos de sus miembros pasaron incluso a formar parte de las elites, llegando a integrar el gran empresariado nacional, la política de las cúpulas y los círculos de la “alta cultura”. Aunque su llegada a Chile data de comienzos del siglo XIX, el caso de los Alessandri es en este sentido emblemático, no sólo por la dinastía política generada a partir del “León de Tarapacá”, sino también por Hernán Alessandri, figura señera en la historia de la medicina chilena, y por Jorge Alessandri, destacado ingeniero, cuya actuación en el ámbito profesional y empresarial ha sido hasta cierto punto opacada para el público por su actuación política<sup>37</sup>.

Sin embargo, consideramos que se debe ser cuidadoso a la hora de repetir un esquema historiográfico tradicional que análoga el papel de los inmigrantes en Chile con la historia de las familias de ese origen que han terminado por integrarse a las elites. Es efectivo que un porcentaje de ellos lo ha logrado, pero ¿cuál es la relevancia en términos generales de ese porcentaje en relación al destino de la mayoría de los descendientes de inmigrantes llegados al país? Habría que estudiar hasta qué punto los clubes de campo, centros de reunión y festividades de las “colonias” reúnen a un porcentaje significativo de esos emigrados y sus descendientes, o sólo al sector que se ha elevado hacia la clase alta. Estudios como los de Mario Matus para el caso de los judíos sefardíes, o de Armando Barría sobre la presencia árabe han avanzado en el camino de hacer de la historia de estos inmigrantes más que un recuento de personajes ilustres, pero aún quedan importantes cuestionamientos pendientes<sup>38</sup>.

Con todo, no cabe negar a estos grupos un peso significativo en la formación de las clases medias nacionales. Carl Solberg, en su estudio comparado de la inmigración en Chile y Argentina, sin hacer distinción del tamaño del flujo migratorio, considera que tuvieron un peso significativo en la emergencia de grupos de clase media urbana. Realizaron un proyecto de ascenso social, se concentraron en empresas mercantiles e industriales propias del empresariado medio, y se casaron con mujeres que incorporaron a ese ascenso social. Hubo en suma un efecto multiplicador, continuado en sus hijos y descendientes<sup>39</sup>.

---

<sup>36</sup> Lilian Mires, *op. cit.*, p. 19.

<sup>37</sup> Ver a este respecto María Rosaría Stabili, *op. cit.*

<sup>38</sup> Mario Matus González, *Tradición y adaptación: vivencia de los sefardíes en Chile*, Santiago, Comunidad Sefaradí de Chile, 1993; Armando Barría y Elías Sakalha, *Presencia árabe a través de la historia*, Valparaíso, Ediciones El Observador, 1989.

<sup>39</sup> Carl Solberg, *Immigration and Nationalism. Argentina and Chile, 1890-1914*, Austin, The University of Texas Press, 1970.

Creemos que debe quedar claro que, más que un grupo social determinado dentro del contexto de las clases medias, al hablar de los inmigrantes hablamos de un “grupo de origen”, quizás el que mejor corresponda al concepto de “caravana de origen” acuñado por José Bengoa. Las rutas específicas de esa caravana, sus porcentajes reales de ascenso a las cúpulas sociales, su comportamiento como “colonias” y su impacto sobre la sociedad mayor, son temas que en gran medida aún están por estudiarse.

#### IV. Los Grupos Profesionales

Otro componente de los grupos medios independientes, lo constituye el llamado sector profesional. Se hace referencia con este concepto a grupos constituidos por profesionales, en su mayoría universitarios, que se desempeñan de manera asalariada o independiente, pero que aun en el primer caso, mantienen una independencia que no poseen otros grupos medios, como los funcionarios públicos y los empleados particulares que se verán más adelante.

##### *Evolución de la capa profesional: del intelectual de elite al “poder mesocrático”*

Estos sectores comenzaron a desarrollarse lentamente a partir de la estabilización política de la década de 1830. Con ella, la expansión del sistema educacional fue en paulatino aumento, multiplicándose entre 1855 y 1920 la enseñanza primaria en dieciséis veces, y la secundaria en cuatro. Al mismo tiempo, tanto al interior de las elites como en los sectores medios que empiezan a formarse, la crítica a un modelo educacional católico y tradicionalista, y el interés por una educación más laica, científica y —en cierto sentido— más democrática, se va fortaleciendo. Gran parte de las encendidas luchas anticlericales decimonónicas tuvieron que ver con el avance de esta concepción educacional.

A raíz de este proceso, asistimos a lo largo del siglo XIX a un incremento y complejización de la educación chilena que, entre otras implicaciones, se expresará en las reformas educacionales implementadas a partir de 1880. La “modernización de la educación”, tema de tan larga data en nuestro contexto, se expresó en esa época en la creación de las Escuelas Normales para maestros y del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, con lo que se aumentó tanto la dotación como la calificación profesional del magisterio.

Sin embargo, se debe ser cuidadoso a la hora de afirmar que el crecimiento y consolidación de instituciones como la Universidad de Chile durante el siglo XIX significó un ascenso visible de los grupos medios. En un estudio sobre el origen de trescientos

académicos de dicha casa de estudios entre 1842 y 1879, Sol Serrano ha descubierto una educación homogénea y formal y una pertenencia mayoritaria a la clase dirigente, con escasa presencia de autodidactas, por ejemplo. Lo que en verdad ocurre, es que “dentro del grupo de los intelectuales más productivos y comprometidos con el desarrollo de esa institucionalidad intelectual, muchos no pertenecen a la clase propietaria. En un proceso típicamente moderno, la escolaridad progresivamente significa un capital para iniciar una carrera en funciones ligadas a instituciones intelectuales, y acceso a los altos cargos del Estado”<sup>40</sup>.

Empiezan a formarse así los cuerpos de abogados, literatos, periodistas y, en general, profesionales de origen medio del siglo XX. Un poco antes de los controvertidos años veinte, tienen ya un lugar en la discusión intelectual y la opinión política chilena. Según José Bengoa, para esa década ya se puede hablar de un grupo culto, que disputará el predominio de las labores intelectuales, científicas y técnicas a la oligarquía tradicional, y también a los técnicos “importados” del extranjero: “la generación del 27, los estudiantes fundadores de la FECh, casi todos ellos migrantes de provincia o del exterior —De María, Neruda, Gómez Rojas y tantos otros—, inauguraron el modelo intelectual del país, la propiedad mesocrática de la cultura y la educación como única vía cierta de ascenso social”<sup>41</sup>.

Comienzan a ser respetados por miembros de la propia elite oligárquica, que ya no ve en ellos al “siútico” risible del siglo XIX. En ese sentido, algunos trabajos de memorialistas y novelistas son significativos, por ejemplo, la biografía de Inés Echeverría. Allí, la rebelde escritora *Iris* se entrega con apasionamiento a la amistad de un Eliodoro Yáñez o un Arturo Alessandri, aún no famosos y mal mirados por su círculo aristocrático. Pero los admira por su inteligencia, su amplia cultura, sus virtudes honestas “no contaminadas” por la holgura y la disimulada ignorancia de la oligarquía<sup>42</sup>.

Son los intelectuales y profesionales sin fortuna heredada, que ascienden socialmente por su esfuerzo en el campo de las artes, la universidad, la política y su desempeño en la empresa privada. Estas “tribus” suelen ser estadistas, laicas y proeducacionistas. Cerrados los caminos del empresariado medio, su opción es la educación como principal fuente de sobrevivencia y ascenso social. La universidad —especialmente la Universidad de Chile— es su gran institución. Sus simpatías políticas se inclinarán por los partidos de la naciente izquierda marxista o el radicalismo mesocrático. Son predominantemente urbanos, aunque, en la tesis de Bengoa, traen a la urbe una fuerte “nostalgia rural”, que revela su afecto por la aldea perdida. La poesía lárca de Jorge Teillier, las fiestas de Pablo de Rokha, la celebración de la greda, la lluvia y la piedra de

---

<sup>40</sup> Sol Serrano, “Rol histórico de los intelectuales en Chile”, *Proposiciones* N° 24, SUR, 1994.

<sup>41</sup> José Bengoa, *La comunidad perdida. Ensayos sobre identidad y cultura: los desafíos de la modernización en Chile*, Santiago, Ediciones SUR, Colección Estudios Sociales, 1996, p. 64.

<sup>42</sup> Mónica Echeverría, *Agonía de una irreverente*, Santiago, Editorial Sudamericana, 1997, ps. 105 y ss.

Neruda y el culto a la tertulia bien regada y nutrida de los radicales tienen esa raíz. Viene también de ella el gusto por la casa acogedora y las familias hospitalarias, con numeroso círculo de amistades que se visitan y celebran. Al decir de Tomás Moulian, probablemente son ellos los responsables de parte del gigantismo santiaguino, con su rechazo por el departamento y su amor por la casa con patio, jardín y empleada doméstica.

Junto al desarrollo de intelectuales, poetas y maestros que conforman una clase media universitaria, hay que mencionar también el de los profesionales científicos y técnicos.

Durante los gobiernos de Alessandri e Ibáñez, se reclutó a una importante cantidad de jóvenes tecnócratas en la administración central y se implementaron políticas basadas en la intervención estatal, que impulsaron una extensión de responsabilidades administrativas a ciertos sectores de la clase media.

Este proceso se incrementó con el auge del desarrollismo y el modelo de sustitución de importaciones de las décadas del treinta y el cuarenta. La CORFO, creada el año 1939, surge como un organismo que encauza un concepto técnico-administrativo de la actividad política para responder a los requerimientos de la época. Los técnicos serán los llamados a reemplazar a los políticos en este organismo, compuesto principalmente por ingenieros. Esta tecnocracia tuvo su origen en la clase media acomodada, cuyos miembros ocupaban cargos en el aparato del Estado, en el ambiente académico y en empresas públicas y privadas<sup>43</sup>.

Por lo tanto, para mediados del siglo XX ya se encuentra socialmente consolidado en el país un grupo de capas medias profesionales. Cuando hablamos de “consolidación” social, nos referimos a que se reconocen y son reconocidos como uno de los grupos activos, en permanente ascenso y respetados dentro de la sociedad chilena. Ellos conforman, probablemente, lo que podríamos llamar en numerosos casos, la “frontera alta” de la clase media chilena.

Sin embargo, se debe reconocer que también faltan estudios específicos sobre la historia de las organizaciones formadas e impulsadas por estos profesionales. Los trabajos de María Angélica Illanes sobre la salud pública revelan la importancia del gremio médico, por ejemplo, en la consolidación de las políticas nacionales y centralistas de “civilización”, que tuvieron un fuerte papel en las campañas de salubridad pública desde fines del siglo pasado en adelante. Son historias que han contado con sus mártires y sus héroes, como el doctor Juan Noé, que detuvo el avance de la malaria en Arica, o el Dr. Grau, uno de los grandes precursores del ecologismo chileno.

Pero queda mucho por hacer al respecto. Los gremios y colegios profesionales

---

<sup>43</sup> Ver Luis Ortega y otros, *Corfo. 50 años de realizaciones, 1938-1988*, Santiago, Corporación de Fomento de la Producción, 1988.

chilenos también han tenido una participación importante en la generación de opinión pública, las políticas de gobierno, las demandas al Estado y el apoyo (o la oposición) a los planes de modernización de diverso signo que se han puesto en práctica a lo largo del siglo XX. Sus publicaciones gremiales periódicas, por ejemplo, son una fuente que hasta ahora ha sido poco aprovechada en el estudio de su participación en el devenir social, político e ideológico del país. La inclusión del saber producido y de la influencia en los movimientos sociales y políticos de estas asociaciones está por articularse.

### **2.3 Los grupos funcionarios**

Una de las tesis más difundidas en torno al origen de los sectores medios chilenos ha sido la de que una parte importante de ellos provendría de los grupos de empleados asalariados, adscritos a la burocracia y la administración pública y privada.

Como ya se ha dicho antes, la historiografía tradicional no consideró importante ni menos aun crucial referirse a estos grupos de funcionarios del Estado, ni a los administrativos de las casas particulares. Historiadores como Encina, Edwards o Eyzaguirre se contentaron sólo con mencionarlos, acaso porque les parecía obvio que habían crecido con la misma expansión y afianzamiento del Estado durante el siglo XIX, y también por la expansión de las actividades comerciales y mercantiles-exportadoras.

Sin embargo, es difícil afirmar que el avance de los estudios históricos haya llenado a satisfacción el vacío. Mientras crecían las investigaciones en torno a las elites propiamente tales, los movimientos populares y obreros, y aun sobre los artesanos, pequeños y medianos empresarios y grupos de intelectuales, en gran medida los empleados han permanecido en la penumbra. Por ello, lo que veremos a continuación se mueve con frecuencia en el campo de la conjetura.

## **I. El empleado público y su evolución**

La mayor parte de los historiadores está de acuerdo que con la estabilización de la República después de 1830, las plantas administrativas estatales comenzaron a crecer. Se confirmaría así una de las versiones “clásicas” de la historia y la sociología en cuanto a vincular el origen de los sectores medios a la expansión del Estado burocrático moderno y la urbanización. En un proceso paulatino se va incrementando un estrato funcionario que con la expansión de las actividades económicas y del ecúmene nacional hacia el

norte salitrero y el sur colonizado y “pacificado”, se hace cada vez más numeroso. En términos más exactos, el ya clásico estudio de Carlos Humud estima que entre 1845 y 1930 los funcionarios del Estado, tanto en la Presidencia como en los distintos ministerios, pasaron de 1.165 a 47.193 personas, en un aumento superior a las cuarenta veces<sup>44</sup>.

Estimulados por la ampliación de los mercados, la concentración urbana y la factibilidad de inversión de capitales, comienza el proceso de industrialización “incipiente” de Chile, anterior a los grandes procesos industrialistas estatales de la década de 1930 en adelante. Las elites mercantiles e industrialistas actúan por intermedio del Estado, que se convierte en el gran distribuidor de oportunidades, como ya hemos visto, en el sector educacional, y —lo que interesa aquí— en el aumento de su función burocrática, medio principal de obtención de oportunidades de ascenso social para la capa social no propietaria

En el período llamado de la “República Liberal”, todavía se advierte un cierto equilibrio entre la capacidad del erario público y el tamaño del aparato burocrático, pero desde 1886 en adelante, y especialmente con Balmaceda y los primeros años del Período Parlamentario, la proporción se desajustó abrumadoramente. Así, entre 1892 y 1920 se crea una gran cantidad de nuevos servicios estatales: Correos y Telégrafos, los servicios de Higiene y Salud Pública, las cajas de ahorro y crédito para empleados públicos y fuerzas armadas, etc. Pero medir hasta qué punto estas iniciativas corresponden a un movimiento generado por los propios empleados, y dónde se confunden con las políticas generales del Estado subsidiario, es un tema que está por estudiarse. Para algunos autores, en parte estas actividades crecen por un aumento del intervencionismo estatal, que cubre funciones que el campo privado no puede o no desea cubrir; y en parte por el clientelismo político y la presión ejercida por los egresados de la educación secundaria y técnica, que buscan un lugar dentro de la burocracia. Es evidente que la expansión educacional y la expansión burocrática se entrecruzan y alimentan recíprocamente.

Esta “inflación” administrativa también levantó críticas. Las acusaciones pueden resumirse en que se trató de un incremento poco planificado, hecho a retazos, que no estaba acorde con las necesidades reales ni las capacidades presupuestarias del Estado. Así, estos sectores medios no habrían crecido racionalmente —con una organización racional de la industrialización entendida bajo los parámetros weberianos— sino sólo a partir de la necesidad de generar empleo estatal para un grupo de profesionales egresados y cumplir con las complicadas formas del clientelismo oligárquico.

Entre 1920 y 1940 el aparato público siguió en expansión, alimentada ahora por las políticas desarrollistas con apoyo estatal. Surge así una nueva burocracia, a medio camino entre los sectores público y privado, constituida por profesionales técnicos, en su

---

<sup>44</sup> Carlos Humud Ruiz-Tagle, *El sector público chileno, 1830-1930*, Santiago, Universidad de Chile, 1969.

mayoría, que no es fácil distinguir de los grupos profesionales que se analizaron en el apartado anterior. De hecho, no es claro que estos últimos correspondan a la imagen clásica del funcionario público.

Pues de una u otra manera, es probable que durante este período, que va desde los últimos años del siglo XIX hasta la época desarrollista, se constituya la imagen del “funcionario público” que también forma parte del imaginario social chileno. Este empleado público parece ser el paradigma de la clase media gris, oscura, kafkiana, pero también de destino seguro, amparada por las políticas previsionales y laborales del Estado. Es evidente que al respecto nos faltan estudios más profundos, que den cuenta de las características internas y los “modos de ser” de estos funcionarios del Estado, tal como se ha hecho para el caso de las elites dirigentes y de algunos grupos populares, y de su influencia en, por ejemplo, la extensión del ecúmene nacional.

Mas si no lo ha hecho la historia, la literatura y las memorias nos han dejado la percepción de una vida rutinaria, sofocante, necesaria pero no amada. En novelas como *Los feroces burgueses*, de Luis Merino Reyes, y, más aún, *Un juez rural*, de Pedro Prado, aparece la visión de una maquinaria lenta, que a la vez atrapa y sostiene al joven segundón que necesita un cargo que le permita sobrevivir; al profesional que inicia una carrera y es destinado a la administración en “provincias”; o para los individuos venidos de los grupos populares que se integran a la burocracia estatal y las familias de origen rural que conforman el nuevo “medio pelo” social urbano.

A estas últimas, según algunos autores, pertenecerían los estratos más inferiores del aparato público, como los funcionarios hospitalarios, porteros, maestros rurales y escribientes. Son una suerte de “peonaje medio”, que recibe bajos salarios pero se ve a sí mismo como “empleado”, y no “obrero”, lo que le da un estímulo constante para ascender social e institucionalmente. Políticamente, suelen ser estatistas y pro balmacedistas, primero, y afiliados a partidos como el Radical y el Demócrata Cristiano, después.

Con la resistencia de los sectores populares a proletarizarse en el período 1900-1920, la expectativa del ascenso individual —por la vía de pasar de “obrero” a “empleado”—fue más atractiva. Sin embargo, esta opción conservó su carácter de inestabilidad, dependiendo del número de ocupaciones semi-estructuradas nacidas (o disminuidas) al compás de los vaivenes del crecimiento o la estagnación económica<sup>45</sup>.

En especial durante las dos últimas décadas, esa imagen y el tamaño de los aparatos públicos han seguido deteriorándose. En el Chile Actual, ser funcionario público suele ser sinónimo de pobreza y proletarización. Aunque no poseemos estudios específicos al respecto, es posible afirmar que estos grupos han estado entre los más golpeados por la política desestatizadora y privatizadora iniciada bajo la Dictadura. El mundo de los

---

<sup>45</sup> Gabriel Salazar, *Para una historia de la clase media...*, op. cit., p. 223.

profesores municipalizados, de los funcionarios ministeriales y de los paramédicos es quizás, más que nunca antes, una frontera baja hacia los grupos claramente populares. Y una frontera que existe sólo por parámetros que no tienen relación con una mayor calidad de vida, capacidad de consumo o status social, sino por la dudosa estabilidad de un sueldo ínfimo y una cobertura previsional de mala calidad, pero segura.

## II. El empleado particular

El caso de los empleados particulares reviste, en sus orígenes, características al parecer similares al de los empleados estatales. Sus antecedentes, en todo caso, han sido aún más difíciles de pesquisar. En esta área de estudios semiabandonada por nuestros científicos sociales, el camino recorrido por los empleados particulares se confunde, por una parte, con las afirmaciones hechas en torno a los empleados públicos, y, por otra, se mueve en el contexto del Mercado, donde los datos y las circunstancias laborales también son más difíciles de rastrear.

Sin embargo, parece claro que el mismo impulso que alimentó las plantas burocráticas estatales, influyó en el crecimiento de los sectores funcionarios privados. Según el estudio ya citado de Gabriel Salazar, debe reconocerse que el éxito de un cierto modelo capitalista durante los siglos XIX y XX, contribuyó a crear burocracias no sólo estatales, sino grupos de empleados privados que formaron parte del “peonaje mesocrático” del siglo XX.

Pero es muy poco lo que se sabe sobre la organización laboral, las inclinaciones políticas y los modos de vida de estos grupos. Más que estudios sistemáticos, lo que hay al respecto son chispazos, acercamientos o apreciaciones a partir de otras miradas, como la prensa o el cine. En el primer caso, los empleados particulares aparecen y desaparecen del interés público en la medida que se unen para solucionar conflictos puntuales, como, por ejemplo, la inestabilidad laboral de los vendedores de instituciones de previsión privadas, en la actualidad, o su apoyo a las luchas de los sindicatos portuarios de Valparaíso en los años cincuenta de este siglo. Allí, su comportamiento tampoco es fácil de, en primer lugar, separar del conflicto obrero y, en segundo término, de su relación con el empresario-empendedor.

En el caso del cine, se cuenta con la imagen crítica de los cineastas de izquierda sobre ese mundo de funcionarios de escasos horizontes y personalidad oscura que se confunde con la literatura sobre el funcionario público. Así sucede en “Tres Tristes Tigres”, de Raúl Ruiz, donde las peripecias de dos santiaguinos oscuros y una prostituta denuncian el vacío y la falta de personalidad individual y social que los partidarios de una identidad

claramente popular han visto en esos sectores de oficinistas y dependientes de tiendas. Poco más generosa es la imagen que presenta el propio Ruiz en “Palomita Blanca”, donde unos presuntos empleados bancarios procuran inútilmente arrastrar a unas liceanas sedientas de aventura a una dudosa “fiesta particular” durante su horario de colación.

Tal vez, la inseguridad y la oscuridad en que nos movemos en este campo sea una de las mejores señales de lo que se revisará a continuación: la aparente falta de un discurso político, de una historia asumida y una identidad definida parecerían en definitiva configurar uno de los principales rasgos demarcatorios de la clase media nacional.

## 2.4. EL PROBLEMA DE LA HEGEMONIA Y LAS ALIANZAS

A partir de la revisión realizada en torno al carácter de los distintos grupos medios, cabe en este último apartado reflexionar sobre dos puntos básicos: las formas de integración de esos sectores a los movimientos y jerarquías sociales del Chile contemporáneo, y una suerte de “estado de la cuestión” sobre el estudio de los grupos medios en la actualidad.

### *Las constantes de los grupos medios*

Luis Ratinoff, en sus trabajos sobre las clases medias como nuevos grupos urbanos, sintetizó las principales hipótesis sobre el papel de esas categorías sociales en América Latina como agente modernizador, dividiéndolas en “usuales” y “críticas”<sup>46</sup>.

Las hipótesis “usuales” se refieren a que las sociedades tradicionales se estructuran en torno a dos clases bastante rígidas, ante las cuales la modernización, que trae consigo el desarrollo urbano, hace emerger grupos intermedios. Estos son parte de un fenómeno de movilidad social y a la vez lo generan: sus destinos dependen de las posibilidades de expansión y racionalización de las actividades productivas urbanas y de la legitimación del status social que sean capaces de generar, en cuanto a su capacidad adquisitiva y al mérito de las personas. Para lograr estos objetivos, estos grupos entran en conflicto y a veces en franca lucha con los sectores dominantes tradicionales, los que muchas veces buscan aliarse con los sectores nuevos mediante sistemas de cooptación como el padrazgo y el clientelismo. De tal manera, se concluye que mientras el sistema pueda satisfacer un mínimo razonable de demandas de movilidad, los sectores de clase media tienden a

---

<sup>46</sup> Luis Ratinoff, “Los nuevos grupos urbanos: las clases medias”, en Seymour Martin Lipset y Aldo Solari (eds.), *Elites y desarrollo en América Latina*.

modelar su comportamiento según las pautas de las propias elites, y sólo entran en conflicto con ellas cuando son marginados del “padrinazgo”; entonces presionan para lograr una mayor apertura de parte de los padrinos.

Las hipótesis “críticas”, por su parte, se basan principalmente en el origen y la constitución de los Estados latinoamericanos y sus relaciones con el capitalismo extranjero, y están fuertemente influidas por la teoría centro-periferia de autores como Cardoso y Sunkel. La situación de dependencia habría producido economías de enclave en los sectores de la periferia, cuyas consecuencias sobre las estructuras de clase serían profundas. Un tipo intermedio de estas economías de enclave, donde las clases dominantes preservan al menos parte de sus funciones económicas, sería la chilena. Este tipo tendería a un desarrollo mayor de las clases medias, y a requerir del Estado una política más integradora y más favorable a una redistribución interna de la renta. Serían estas capas medias, producto fundamentalmente de la expansión del aparato administrativo estatal, las que en ausencia de una burguesía local, irrumpen para acomodar un sistema de distribución de las rentas internas generadas en los enclaves, dando forma a un cierto mercado interno que permite el surgimiento de un nuevo empresariado. Pero, salvo excepciones, esto no produce una ruptura con los grupos hegemónicos ni conduce a la generación de un desarrollo económico autónomo.

Lo que ambas hipótesis comparten es la idea de que nuestros grupos medios provienen de la modernización de la sociedad. Este proceso ha generado plantas burocráticas, técnicas y profesionales, y sectores comerciales y productivos intermedios entre las elites y los trabajadores o los grupos propiamente populares. Es esta posición “intermedia” la que les permite coyunturalmente desplazar sus alianzas hacia uno u otro de los sectores “extremos” de la sociedad, pero sin que en general se evidencie una voluntad muy clara de romper con las clases dirigentes.

En todo caso, la misma pluralidad de los grupos medios dificulta el encontrar una constante en su comportamiento y en su articulación con los movimientos sociales de uno u otro signo. La heterogeneidad interna, los disensos y las decisiones que no corresponden nítidamente a la lógica de la “opción de clase” se presentan, probablemente, en todos los grupos sociales, pero en el caso de los sectores medios estas características parecen adquirir una relevancia particular. Para dichos grupos, es insoslayable matizar el panorama no sólo en lo político-partidario, sino en el complejo y poco estudiado mundo de sus opciones coyunturales, sus modos de ser, sus aspiraciones y decepciones.

Según lo que hemos revisado, en el diferente origen, evolución y posicionamiento social de los grupos medios chilenos acaso esté la clave para comprender su “ambigüedad” y su identidad social en permanente cuestionamiento existencial. Grupos como los pequeños y medianos empresarios se han identificado con la defensa de la propiedad privada y en general con una opción más bien derechista en lo político. Otros, como los empobrecidos

empleados fiscales, han mantenido una actitud de demanda al Estado y de evidente descontento ante los recortes presupuestarios y las políticas privatizadoras del neoliberalismo, como en el caso de los profesores y los empleados de la salud pública. En ese contexto, es difícil sostener la existencia de una identidad común de grupo o clase media, lo que a su vez obliga a repensar la estructura social chilena recordando que la fluidez y los permanentes “recién llegados” no sólo se dan en los grupos altos, o en la supuestas “fronteras” entre el mundo popular, los grupos medios y los altos, sino al interior de cada uno de ellos. Y que los plurales “grupos medios” son los que quizás mejor representan la confusión de una modernización a menudo incompleta, engañosa, basada en la apariencia y el status visible. La “siutiquería”, el afán de estar “de paso” en esa posición social, la misma dificultad de dirimir quiénes —por un status que a veces sólo corresponde a cierta capacidad de consumo, o nivel educacional, o identificación con los ideales del liderazgo— pertenecen a esos grupos, probablemente provoca desgarros sociales más profundos de lo que creemos, y de lo que los estudios han indicado hasta ahora.

Pues sin una matriz de origen única ni claramente diferenciada de los otros grupos sociales, estos actores se han constituido como estratos, grupos o sectores (o clases) a partir de procesos de transformación económica, política y social que no los tienen a ellos como sujeto preferente. Es como si continuamente hubiesen tenido que optar por proyectos ajenos, no crear ni ser considerados creadores. Y en la confusa situación actual, en el discurso posmoderno del fin de los metarrelatos tradicionales, dicha característica parece haberse agudizado, o al menos hecho más visible.

### *Los grupos “sin discurso”*

En un reciente reportaje sobre la clase media chilena actual, se destacan dos características consideradas básicas y “novedosas”: su poderosa capacidad y deseo de consumir, y la falta de un discurso social y político específico. Se afirma que la “nueva clase media” no es hija de la antigua, la laica, la crecida al amparo del Estado y de la política: “se diría que es hija de la generación espontánea asociada a la dinámica del desarrollo”<sup>47</sup>. Es adorada por los publicistas, por ejemplo, porque constituye el principal público de las casas comerciales y de sus créditos de consumo. Sería el mejor representante del “Chile Actual” radiografiado por Tomás Moulian, donde la ciudadanía real no está dada por la opinión o la participación política, o por la pertenencia a grupos locales, comunitarios o étnicos con identidad propia, sino precisamente por la capacidad de consumo. Se existe, se es socialmente por un ingreso que permite renovar automóviles, computadoras y artefactos

---

<sup>47</sup> “La nueva clase media. Mayoría manda”, reportaje de Lorena Medel, revista *Capital*, Santiago, octubre de 1997.

electrodomésticos; por las tarjetas de crédito bancarias y comerciales; por la peregrinación a los centros comerciales y los expendios de comida rápida.

Como tal, la “nueva clase media” tiene una imagen positiva y una negativa. Para Marta Lagos, ella representa un estrato social instrumentalizado, fijado en la apariencia, corrupto, oportunista y optimista a la vez, que copia la estética globalizada y norteamericana de consumo, pero no tiene ni la racionalidad ni la apertura de ese modelo. Cristián Parker, en cambio la ve como un grupo que valora la vida de familia, se identifica con los políticos moderados “que hacen cosas”, y que, siendo sana y honesta en principio, está estresada y desconforme con los fenómenos de la corrupción y la falta de políticas dirigidas directamente a ellos<sup>48</sup>. Sol Serrano, por su parte, la ve, en otro reciente artículo de prensa, como un grupo consumista y arribista, que habría perdido esas características de sobriedad, honestidad, fe en la educación y en el Estado que la caracterizaron en lo que podríamos llamar su período “clásico”, entre los años veinte y los cincuenta. Desde ese punto de vista, serían el grupo que mejor corresponde al fenómeno de la posmodernidad social como lo ve una crítica neoconservadora, al estilo de Daniel Bell: un comportamiento propio de un capitalismo hedonista, donde “la gente desea vivir el ‘aquí’ y el ‘ahora’, buscando la calidad de vida y la cultura personalizada... el capitalismo autoritario cede paso al capitalismo hedonista y permisivo que acaba con la edad de oro del capitalismo competitivo”<sup>49</sup>.

Por otra parte, parece ser un fenómeno extendido en la actualidad el que “ser de clase media” se ha convertido en una suerte de amplia laguna identitaria, donde todos nadan y donde, por ello, nadie se identifica de verdad. Durante el siglo XX, ser de clase media dejó de ser una vergüenza: ya no significó pertenecer al caricaturizado grupo de los “siúticos”. Después, en nuestro convulsionado período “revolucionario”, se corrió el riesgo de insinuar que pertenecer a ella era ser “pequeño burgués” y poco decidido, desde un ángulo, o ser sospechoso de buscar alianzas con la izquierda, desde el otro. Hoy, por último, ser de clase media se ha convertido en el lugar común: ser un intelectual, un Presidente de la República o un ministro de “clase media” es una condición cómoda y positiva, aunque no sea cierta. Quizás porque decir que se viene de la “aristocracia chilena” suena agresivo y jactancioso, y decir “soy del pueblo” suena a marxismo, es decir, a un anacronismo beligerante de mal tono en tiempos de posmodernidad. Ser de clase media lima las asperezas, y, a fin de cuentas, ayuda en el refinado arte de responder una pregunta sin definirse; se puede vivir en Vitacura o en San Miguel, venir de Chiloé o de Arica y la respuesta no estaría fuera de lugar.

Pero una aproximación histórica, que incluya el peso de lo que los grupos medios

---

<sup>48</sup> *Capital, op. cit.*

<sup>49</sup> Josep Picó, *Modernidad y Posmodernidad*, Madrid, Alianza Editorial, 1988, p. 37. Ver también Daniel Bell, *Las contradicciones culturales del capitalismo*, traducción castellana, Madrid, Alianza Editorial, 1977.

han sido y no han sido, iluminaría con otro cariz estas opiniones. En primer lugar, nos haría reflexionar sobre la supuestas características novedosas de los grupos medios actuales. Su locura consumista, su deseo de “parecerse a los ricos” y su arribismo, no son un fenómeno que sólo haya provocado el desprecio de las elites durante los últimos años, como se ha visto. Tampoco su carácter “acomodaticio” en lo político. Y menos aún la inexistencia de un discurso cultural o político dirigido específicamente a ellas. Ahora designadas como mayoritarias, parecen tan ausentes del debate sociológico, histórico y político como cuando eran consideradas una minoría de escasa relevancia.

Por lo tanto, no es aventurado afirmar que gran parte de esas “novedades” de los grupos medios actuales, así como sus “ambigüedades”, nacieron de la amplia laguna de conocimientos específicos en torno a su(s) identidad(es), tanto en su devenir histórico como en la actualidad. Lo que en verdad se ha manejado hacia los grupos medios, ha sido muchas veces un conjunto de supuestos sociales, políticos e ideológicos que se han validado como reales, porque (al parecer) no tendría por qué ser de otra manera. Jorge Cash Molina, por ejemplo, afirma que los sectores medios, junto a la oficialidad progresista, apoyaron al general Ibáñez en su primer gobierno, para luego de su caída desligarse de ese proyecto autoritario y optar durante los años treinta “por la normalización democrática, para lo cual tendrán que librar una dura lucha política que culmina en 1938, apoyados una vez más por el movimiento popular”<sup>50</sup>. Sin intención de refutar o refrendar esas afirmaciones, queda la duda de cuáles son los métodos y fundamentos que las sustentan.

Por ello, los grupos medios chilenos han generado, o ha sido generada para ellos, una teoría sobre su comportamiento y su identidad basada en apreciaciones, sensibilidades, comparaciones, y confusas definiciones por la negación: grupo medio es el que no es claramente popular ni proletario, y tampoco aristocrático o clásicamente burgués.

Pero así como no se aceptaría definir seriamente (o académicamente) a los pobres como “no-ricos”, tampoco podemos definir a los grupos medios como “no-pobres” y “no-ricos”. Por ello, la revisión de las esquinas, las casas paralelas, los patios aledaños o los dependientes de la Modernidad en que han nacido y medrado, es una de las tareas pendientes para los historiadores y científicos sociales chilenos. En el mapa jerarquizado, barroco (por usar un término caro a Carpentier) y a la vez fluido de las sociedades modernizadas “a saltos y tirones” de América Latina, es necesario sacar a la clase media de su carácter de “término mágico”, para dilucidar sus rasgos definitorios en términos de realidad.

---

<sup>50</sup> Jorge Cash Molina, *Bosquejo de una historia*, Santiago, Imprenta Pucará, 1986, p. 53.

## CAPÍTULO III

# EL SUJETO POPULAR

### 1.- CUESTIONES DE DEFINICIÓN Y CONCEPTO

*¿"Ser" o "estar siendo"?: el Sujeto como categoría analítica*

¿Quiénes son los protagonistas en el acto de la vida? ¿Quiénes son los que hacen la Historia? La modernidad respondió a estas preguntas señalando que éstos son los individuos que tienen conciencia de sí mismos, una conciencia que los lleva a tener la voluntad de influir sobre su "yo y su circunstancia", asegurando, por medio de sus actos, la protección y extensión de su **libertad**.

A quien actúa en este sentido se le considera un **sujeto**, un "**actor social**" e histórico que, al decir de Touraine, constituye la figura central de la modernidad<sup>1</sup>.

Este actor social tiene la vocación de influir sobre su destino, de transformar la vida social en la cual está inserto. Es la antípoda de aquel que en la sociedad tradicional siguió, sin cuestionar, los mandatos divinos y que, en la sociedad actual, asume, ciegamente, los roles determinados por los centros de poder. Sobre el Sujeto social no caería el "peso de la noche".

Las ciencias sociales, en su afán de sistematizar, comenzaron analizando al sujeto social como una categoría fija y definible. Lo situaron dentro de la estructura socioeconómica, en torno a las relaciones sociales de producción. La inserción del sujeto en dicha estructura determinaba, a priori, sus intereses de "**clase**", de los cuales se derivaban los objetivos y estrategias que movilizaban la acción social.

Así entonces, el sujeto social **obrero** aparecía como una categoría perfectamente identificable, puesto que se podía decir cuántos eran y en qué ramas productivas laboraban,

---

<sup>1</sup> Touraine, A. *Crítica a la modernidad*. FCE, México 1992.

determinar su grado de productividad, el tipo de organizaciones que los representaban y las ideologías que los convocaban. Si no obraban del modo en que era previsible que lo hicieran, se responsabilizaba de ello a fenómenos de “falsa conciencia”.

La lógica **estructural** de este esquema no admitía cambios ni contradicciones. Para el marxismo clásico, el obrero era un “**ser**” destinado a hacer la revolución. Su identidad se definía en la **clase obrera**, homogénea y ontológicamente revolucionaria.

Pero al confrontar el paradigma con la realidad, las seguridades ofrecidas por la teoría no siempre operaron de acuerdo a lo esperado. El estudio histórico ha comprobado que los sujetos no “son”, sino que “**están siendo**”<sup>2</sup>.

Bajo el prisma historicista, la identidad de los sujetos aparece definida en la acción, por eso es que “están siendo”. Esta visión reconoce la dialéctica del accionar social que diversifica las experiencias, percepciones y modos de representación de la vida social, todo lo cual influye en la constitución de identidades y culturas heterogéneas.

El reconocimiento del carácter dinámico de los sujetos se ha fortalecido gracias a los aportes de historiadores como Eric Hobsbawm y Edward P. Thompson. Sus estudios acerca de la formación de la clase obrera británica han demostrado que el marco cultural que condicionó a los jóvenes operarios, en cuanto a actitudes, formas de vida y organización, no se diferenció mayormente del que influyó sobre otros sectores populares (como los artesanos, jornaleros y campesinos) en los inicios de la Revolución Industrial.

¿En qué momento se produjo la transición hacia formas más “clásicas” de conducta dentro del Movimiento Obrero? ¿Ese modelo “clásico” se mantuvo fijo o evolucionó con el tiempo? Las respuestas inclinan a observar el proceso histórico como algo fluido. En tal caso, las categorías que tradicionalmente se han utilizado no dan cuenta de la transitoriedad o el carácter dinámico del sujeto social.

En conclusión, la lógica histórica hace confluir pasado, presente y futuro en un mismo sujeto, éste es lo que es, lo que ha sido y lo que proyecta ser. Su accionar social se desarrolla bajo los signos de la permanencia y el cambio.

Lo anterior no significa prescindir del enfoque estructural para caracterizar a los sujetos sociales (quiénes son y hacia dónde orientan sus acciones), ya que éste devela las condiciones “objetivas” en las cuales los individuos se desenvuelven, condiciones que emanan de su emplazamiento en la estructura socioeconómica.

Pero ese enfoque debiera ser complementado con un análisis histórico que dé cuenta del mundo **cultural** que incide sobre los sujetos y que, a su vez, es incidido por éstos. Es en este espacio donde se plantea la pregunta fundamental en el proceso constitutivo de los sujetos: ¿quiénes somos nosotros?<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> A este respecto ver los estudios de Campero, Ruiz Tagle que se citarán más adelante.

<sup>3</sup> Cfr. Romero, L. “Los sectores urbano-populares como sujeto histórico” en *Proposiciones* n°19. Sur. 1990. p. 271. Cfr. también su compilación de artículos: *¿Qué hacer con los pobres?* Ed. Sudamericana. Bs. Aires 1997.

Los obreros se plantearon esta pregunta, pero otros miembros de los llamados **sectores populares** también lo hicieron. Para Gabriel Salazar, ellos pudieron no haber levantado discursos ni organizaciones estables, pero de su experiencia cotidiana y de sus aspiraciones como personas nació una conciencia, una identidad y un proyecto histórico que, aunque tal vez confuso, siempre ha estado latente en el mundo popular. Las palabras y los sueños de los pobres representan ese proyecto en los términos de una **“sociedad mejor”**, mejor en cuanto a los valores que sustenta (sencillez, autenticidad, hospitalidad, camaradería, comunidad, esfuerzo, y, sobre todo, **solidaridad**) y que por su contenido humano son lo opuesto al individualismo y la desintegración social promovidos por la modernidad liberal<sup>4</sup>.

### *Presencia histórica y desafío conceptual: el sujeto popular*

¿Puede considerarse a los pobres como un actor protagónico en la trama histórica de la nación? Si apelamos a nuestra **“patrística historiográfica”**, la pregunta estaría de más. ¿Cómo considerar sujeto a quien no era un **héroe** ni tampoco formaba parte del **“pueblo sano”** de la Nación, que sabía por donde conducir al país?

Mirados desde la óptica de los grupos dirigentes, los pobres no podían **“ser históricos”** ya que eran una masa sometida a incapacidades que Portales metaforizó en un concepto numerosas veces recordado en estas páginas: **“el peso de la noche”**.

Podrá argumentarse que hacia fines del siglo XIX parte de ese pueblo mostró evidentes signos de descontento, se movilizó y exigió reformas e, incluso, la revolución. La salida teórica a este **“impasse”** estuvo dada por la adscripción de la historiografía conservadora a criterios **nomotéticos**, vale decir, a totalidades, a un sistema de ideas generales y estáticas.

Dichas **“generalidades”** se articularon en torno al **paradigma portaliano** que habría instalado en el país las ideas de patria, orden, progreso económico, autoritarismo presidencialista, servicio público, estabilidad monetaria, apertura comercial externa. Para que un individuo pudiese ser considerado un actor social e histórico, debía profesar estas ideas; de lo contrario, su **historicidad** no le era reconocida<sup>5</sup>.

Fue así como quedó sin dignificación historiográfica y/o deslegitimada (teórica y axiológicamente) toda acción que no se desarrollara a nivel de **“sistema”** y, peor aún, que actuara en contra de éste. Tal es el caso de los motines y huelgas, y de aquellos movimientos políticos que se desarrollaron bajo el signo anarquista o marxista.

---

<sup>4</sup> Cfr. Salazar, G. *Violencia política popular en las grandes alamedas*. Ed. SUR, Santiago, 1990, p. 394.

<sup>5</sup> Una elaboración más acabada de estas ideas en Salazar, G. **“Chile historia y bajo pueblo”** en *Proposiciones* n° 19. Edic. Sur, Stgo. 1990. Ver también *Violencia Política en las grandes alamedas*, op. cit.

Se consideró que quienes actuaban contra el sistema eran “masas” que socavaban la “institucionalidad y estabilidad nacional”. Por ello recibieron el apelativo de “bárbaros”, “fieras”, “antipatriotas”, “humanoides”. Entre la descalificación conceptual y la represión física se formó una tenue frontera que ha sido reiteradamente traspasada.

El **funcionalismo sociológico** de los sesenta también contribuyó a negarle historicidad al “bajo pueblo”, desde el momento en que acentuó el componente **racional** e **integrativo** para otorgarle a un individuo la categoría de sujeto.

Se entendía que frente a un conflicto, los sujetos debían evitar caer en conductas “anómicas”, que atentaran contra la necesaria cohesión social. Por ello es que, junto con movilizarse y levantar **discurso**, debían presentar propuestas que abrían el camino a la negociación y solución “racional” del conflicto. Sujeto social popular podía ser el obrero organizado, pero no el “roto alzado”.

Sin embargo, considerar a los obreros como los únicos representantes del “mundo popular” susceptibles de ser considerados sujetos históricos, resultaba extremadamente parcial. Conformaban una parte mínima de ese “mundo popular”, y durante la crisis de los años setenta y ochenta de este siglo no asumieron un rol protagónico en la reconstrucción del **movimiento social**. Estaban demasiado golpeados para ello.

Quienes sí asumieron ese rol fueron las organizaciones que nacieron en la base, al interior de los denominados **sectores populares**. Los movimientos en pro de la subsistencia en las poblaciones, o de defensa de los derechos humanos, crearon un acervo de experiencias que dio vida a una conciencia identitaria y a organizaciones locales que desplegaron un proyecto de autonomía social.

Era evidente que quienes conformaban esos movimientos no eran “entes pasivos”. Para las ciencias sociales, la actividad que ellos desarrollaban justificaba otorgarles la categoría de “actor social”. El concepto **sujeto popular** obtenía así su carta de ciudadanía.

La aseveración de que en los sectores populares se constituyen sujetos sociales planteó nuevos desafíos conceptuales. Las seguridades epistemológicas del pasado ya no servían. El sujeto popular no tiene una **identidad** fija, sino que constantemente está reformulándose, a partir de la experiencia acumulada en la base, pero también de las percepciones que la elite tiene de ellos y de las funciones que el Estado, la Iglesia y, más contemporáneamente, los medios de comunicación social les han asignado.

En síntesis, las ciencias sociales, al adoptar la categoría ‘sujeto popular’, han debido reconocer lo complejo y “huidizo” del concepto, ya que éste abarca un espectro amplio de personas y de culturas que se desenvuelven en ámbitos diversos, que pueden ir desde un sindicato hasta la cantina o el garito.

Pero por muy heterogéneas que sean esas experiencias, hay elementos que les son comunes y que han tendido a **unificar** a esos sectores en torno a determinadas demandas

y proyectos, cuya expresión ha constituido el eje central en torno al cual se desarrollaron y desarrollan los movimientos social-populares.

*Entre “moverse” en la historia y “mover” la Historia: el concepto de “movimiento social-popular”*

En las décadas de 1960 y 1970 América Latina experimentó una “explosión” de sus bases sociales, las que se movilizaron por diversos motivos. Por ejemplo, al amparo de la Iglesia “progresista” nacieron las comunidades eclesiales de base, cuya lectura “activa” del Evangelio animó la resistencia contra las dictaduras militares.

En los años 80, los universitarios de Ciudad de México abortaban un proyecto de reforma que les perjudicaba, mientras que en Buenos Aires, las madres de la Plaza de Mayo desafiaban la “guerra sucia”. Simultáneamente, en la periferia de Santiago, Lima o Sao Paulo, otras madres se organizaban para “capear” la crisis económica, levantando ollas comunes y organizando campañas contra la carestía.

Todas estas movilizaciones tenían algunos rasgos en común: surgían de necesidades colectivas bien concretas; no se movían fundamentalmente a partir de los liderazgos tradicionales (sindicales o partidistas); tampoco respondían necesariamente a referentes clasistas; las organizaciones con las cuales se identificaban no eran muy estructuradas ni jerárquicas.

Los sociólogos se refirieron a ellas utilizando el término **movimiento social**. El concepto se había estrenado a raíz de las protestas estudiantiles de París el año 68, cuyas características remecieron el marco teórico y conceptual de las ciencias sociales. Lo que ocurría en América Latina no hizo sino confirmar la necesidad de utilizar nuevas categorías para comprender la realidad social y a sus actores emergentes.

Se reconoció en los sectores populares un espacio donde se constituían sujetos sociales, con demandas, objetivos, organizaciones y una identidad propia que daban vida a los **movimientos social-populares**.

El concepto alude a “movimiento”, “acción”, “actividad”, supone que los actores históricos (en este caso, los sujetos populares) se **movilizan** con el objeto de transformar una realidad considerada adversa o, por lo menos, problemática.

La definición de las adversidades y las formas (estrategias) de enfrentarlas, responde a la experiencia particular de los sujetos en cada uno de los ámbitos donde éstos se constituyen, ámbitos en los que, como lo señalamos en el último apartado, se originan culturas e identidades diversas, heterogéneas y en constante reformulación.

Pero lo anterior no invalida la posibilidad de entender “lo popular” y reconocer la existencia de movimientos social-populares, a partir de la constatación de experiencias

macro que afectan por igual al sujeto “pueblo” y que se insertan dentro de tendencias de “largo aliento” (históricas), que han cohesionado las percepciones y acciones de los sujetos populares.

Una de esas experiencias macro es la **pobreza**. Los sujetos populares son pobres, el pueblo es pobre. Dicha condición le ha otorgado a nuestra historia social un elemento de continuidad, una vivencia de “larga duración”, que ha orientado las movilizaciones populares hacia un norte bien definido: encarar las privaciones y, en la medida de lo posible, superarlas.

Otra vivencia de “largo aliento” ha sido la **dominación**. Las formas de subordinación dentro del mundo popular han adoptado diversas expresiones, desde aquellas que, producto de un bajo salario, restringen la posibilidad de los individuos de orientar su vida en el sentido que mejor les parezca, hasta la explotación más abierta y brutal.

La dominación viola la condición innata de todo sujeto, la búsqueda de su autonomía. Producto de ello, el movimiento social popular reacciona, luchando en contra de la subordinación, resistiéndola de diversas maneras, algunas visibles y otras no tanto.

La afirmación de que en los sectores populares también se genera movimiento social provoca una serie de interrogantes: ¿cuál ha sido el grado de conciencia de los sujetos populares al encarar o resistir la pobreza y la subordinación? ¿Las estrategias utilizadas han buscado solucionar el problema inmediato o responden a proyectos históricos, enraizados en la base social? Las respuestas a estas interrogantes han abierto un debate que ha permitido observar con otros prismas el desarrollo histórico social de la Nación.

La historiadora María Angélica Illanes considera que las movilizaciones populares se han desplegado en torno a un proyecto de largo plazo, antítesis del proyecto oligárquico de exclusión y repliegue de la cultura popular a los márgenes del sistema de poder<sup>6</sup>.

Como tal situación no habría sido aceptada, el pueblo habría levantado un proyecto de modernidad popular a través del cual ha buscado sobreponerse, activa y prácticamente, a las tendencias marginadoras de la élite. Así entonces, la historia social de Chile se habría desarrollado sobre el juego dialéctico entre las fuerzas de exclusión (élite) y las de desmarginación (sujeto pueblo).

En esta misma línea, Gabriel Salazar ha hecho provocativos aportes al señalar que en las “etapas formativas” del **bajo pueblo**, se evidenciaría la existencia de un proyecto histórico de acumulación productivista, desplegado en los márgenes del sistema, llevado a cabo por “empresarios populares” y legitimado éticamente por su carácter **solidario** y **humanitario**<sup>7</sup>.

Sin embargo, las aspiraciones del bajo pueblo fueron abortadas por el patriciado

---

<sup>6</sup> Illanes, M. “Marginación y desmarginalización en el movimiento popular”. *Proposiciones* n° 24. Edic. SUR, Santiago 1994.

<sup>7</sup> Salazar, G. *Labradores, peones y proletarios*. Edic. SUR, Santiago 1985.

mercantil-terratiente. La frustración por no concretar su proyecto de autonomía habría llevado al bajo pueblo a expresarse bajo fórmulas “explosivas”. Allí estaría el origen de la rebeldía peonal del siglo XIX, y de los “reventones sociales” del XX.

En un matiz algo distinto se sitúa el trabajo de Julio Pinto. Sus estudios acerca de la violencia peonal le hacen pensar que la movilización popular en el norte minero no sería el fruto de un proyecto frustrado de **empresarialidad popular**, sino que la consecuencia de la ruptura de vínculos sociales tradicionales y la resistencia a una nueva relación laboral, estrictamente disciplinada<sup>8</sup>.

Pese a las diferencias, todas estas consideraciones tienen elementos en común. Dan cuenta de un mundo que no se integró al **orden** diseñado por la élite. Por el contrario, creó su propio espacio de libertad, paralelo a las concepciones de libertad formuladas en sentido institucional. En ese espacio de “libertad popular” surgió una suerte de sociedad civil que, desde fuera de las estructuras de poder, deslegitimó y resistió sus controles y coerciones.

El que a través de la historia se hayan desplegado dos concepciones distintas y antagónicas de libertad, demostraría, a juicio de Alfredo Jocelyn-Holt, que nunca ha existido un verdadero orden en el país. Hubo simulacros de orden, un “orden en forma” pero no un orden legitimado, del cual emanarían normas aceptadas libremente por su conveniencia y racionalidad<sup>9</sup>.

Siguiendo esta última línea argumental, el **desorden** y la violencia son parte de nuestra historia, aunque la historiografía tradicional no lo quiera reconocer. El desorden es la otra cara del orden, ha estado siempre presente, latente, a punto de estallar. No es privativo de los sectores populares, es democrático, transversal; los jóvenes “patricios” del 91 desplegaron tanta violencia contra los balmacedistas, como los jóvenes “populares” que asolaron Santiago en los motines de 1905.

Portales lo percibió claramente: para él, el orden no descansaba en el aparato legal-institucional, sino en la tradicional **inercia** de la “masa popular”.

Los aportes historiográficos recientes han rescatado de esa “masa popular” al sujeto, asignándole un protagonismo histórico, reivindicando su **historicidad** y reconociendo su capacidad para tomar conciencia de las condiciones adversas a las que históricamente ha estado sometido (pobreza, subordinación, exclusión), en virtud de las cuales se habría movilizado. A partir de allí, también se reconoce la capacidad popular para concebir y luchar en función de proyectos propios, alternativos al orden que se le ha pretendido imponer.

A diferencia de esta visión, las movilizaciones populares han sido tradicionalmente

---

<sup>8</sup> Pinto, J. “Rebeldes pampinos: los rostros de la violencia popular en las oficinas salitreras. 1870 - 1900”, en *Trabajos y rebeldías en la pampa salitrera*, Editorial Universidad de Santiago, 1997.

<sup>9</sup> Jocelyn Holt, A. *El Peso de la Noche, nuestra frágil fortaleza histórica*. Ed. Ariel, Bs. Aires, 1997, p. 193 y ss.

explicadas como el producto de “agentes externos” que penetraron en la masa, desquiciándola. No serían, por tanto, el fruto de acciones impulsadas y protagonizadas por los mismos pobres.

A principios de siglo, la visión conservadora católica de un Juan Enrique Concha interpretó las movilizaciones populares desde un punto de vista moral. El pueblo era una **masa abandonada** a su suerte por la elite. Producto de ello, se había desbandado, siguiendo consignas ajenas a su naturaleza sumisa<sup>10</sup>.

Concha propuso a la elite retomar las conductas compasivas y paternalistas de antaño para reconstruir el “viejo orden” de patronos e inquilinos. En la perspectiva conservadora, el que ese orden no se haya reimpuesto marcó con un signo trágico la historia de Chile durante el siglo XX. La ruptura de los consensos tradicionales trajo consigo la decadencia. La consolidación de una democracia de masas dejó al país sometido a los arbitrios y caprichos del pueblo, o, peor aún, de los demagogos que periódicamente lograban captar su adhesión, lo que redundó en desequilibrio y descontrol. La acción “salvífica” de los militares en 1973 vino a poner fin a los excesos<sup>11</sup>.

La sociología funcionalista también ha contribuido, teóricamente, a restarle historicidad al bajo pueblo. Lo ha considerado como una masa “en disposición”, movilizada por líderes **populistas** que estaban al servicio de las clases medias y la burguesía que buscaban desbancar a la oligarquía e imponer la industrialización. No hay autonomía ni historicidad en individuos que actuaron motivados más por la pasión que por la razón y que, ciegamente, siguieron los dictados de un líder (percibido como un padre) que ofrecía limar las asperezas del proceso modernizador<sup>12</sup>.

La tesis de **marginalidad** de los años sesenta (fundamento ideológico del programa de **promoción popular** demócrata cristiano), también sustentó una visión pasiva de los sujetos populares. Asoció la pasividad de los pobladores a su supuesto origen rural y a conductas conservadoras y tradicionales, propias de la cultura campesina<sup>13</sup>. Vieron a esta parte del pueblo como una “masa” que debía ser integrada a los planes nacionales de desarrollo diseñados desde la cúpula estatal. Dichos planes se llevaron a cabo con espíritu paternal y cálculo político. El éxito de esta iniciativa otorgaría proyección al partido de gobierno.

Incluso algunas expresiones de la izquierda comunista, paradójicamente, le han restado protagonismo a la base social, sobre todo campesina o pobladora. Tradicionalmente

---

<sup>10</sup> Concha, J. E. *Cuestiones obreras*. Imp. Barcelona, Stgo. 1899 y *Conferencias sobre economía social*. Imp. Chile, Stgo. 1918.

<sup>11</sup> Góngora, M. *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile, siglos XIX y XX*. Edic. La Ciudad, Santiago 1981. Vial Correa, G. “Decadencia, consensos y unidad nacional en 1973”, sin datos de edición.

<sup>12</sup> Di Tella, T. “Populismo y reformismo”, en Octavio Ianni (ed.) *Populismo y contradicciones de clase en América Latina*. Serie popular Era. México 1973.

<sup>13</sup> Cfr. Vekemans, R.-Venegas, R. “Marginalidad y promoción popular”. en Revista *Mensaje* n° 149, 1966.

han descalificado sus demandas económicas, tachándolas de pequeño-burguesas. En la perspectiva marxista, la línea “correcta” la imponía el partido y no la organización de base. Sujeto histórico era quien luchaba por los objetivos políticos e ideológicos emanados de la cúpula partidista<sup>14</sup>.

Así, las tesis que han reconocido la historicidad plena de los sujetos populares son bastante recientes. Ello ha implicado reenfocar nuestra historia social, poniendo en entredicho algunas tesis clásicas que encasillaban las conductas de los sujetos históricos en esquemas que ahora aparecen estrechos. Aunque ello no sea fácil de demostrar desde el exclusivo ámbito de las ciencias sociales, podría incluso aventurarse que este enfoque reproduce con mayor fidelidad las percepciones que los propios sujetos populares tuvieron de sí mismos y de la sociedad que los rodeaba.

A este respecto, no está de más recordar que, a diferencia de otros actores sociales analizados en estas páginas, el mundo popular no ha dejado muchos testimonios directos, al menos en el plano del discurso, sobre sus verdaderas percepciones y auto-percepciones. Hasta bien entrado el siglo XX, todo lo que sabemos sobre los sujetos populares emana de opiniones de terceros, a menudo descalificatorias u hostiles; de transcripciones, también hechas por terceros, de testimonios populares emitidos bajo condiciones no exentas de presión o temor (como las declaraciones judiciales); y de actos o costumbres cuyas igualmente descritas por testigos no populares. Sólo podrían escapar a estos efectos distorsionantes ciertas expresiones culturales, como la poesía, la música o la religiosidad popular, que por su propia naturaleza han llegado hasta nosotros en estado más “puro”, pero que en Chile recién comienzan a estudiarse, sobre todo desde la antropología o los estudios literarios.

Por tal motivo, la recuperación de los actores populares por parte de la historia social se hace más difícil que en el caso de otras clases sociales, salvo para períodos más recientes en que sí disponemos de testimonios directos o incluso, a través de métodos de recopilación oral, de la posibilidad de entrevistarlos en persona. Como se podrá apreciar a través de las páginas que siguen, esta limitante lleva a que para los períodos más distantes a menudo resulte difícil separar nítidamente los “hechos mismos” (por lo demás una categoría bastante discutible en cualquier disciplina, sobre todo del ámbito social), de las reconstrucciones que de ellos han realizado los historiadores sociales. Por la mayor distancia que existe respecto del sujeto, la intermediación del analista se hace en este caso mucho más evidente.

Con todo, en un marco de análisis científico donde la “objetividad pura” resulta cada vez más relativa, y donde los objetivos de conocimiento “duros” tienden a perder

---

<sup>14</sup> “Metodos de lucha de los comunistas en el frente poblacional”. Seminario sobre la vivienda organizado por el Partido Comunista. Santiago 1969. Mimeo.

parte de su atractivo, no cabe duda que la historia social ha realizado un aporte significativo a un mayor conocimiento de los sujetos populares, sobre todo porque sus pretensiones nunca fueron explicar cómo debieran comportarse los individuos, sino cómo éstos se han comportado de hecho. Las conclusiones que de ahí se extraigan enriquecen el debate y ayudan a reforzar la idea de que nuestra parcela del conocimiento trabaja con seres humanos, cuyas posibilidades de acción y reflexión son tan variadas como impredecibles.

## 2.- Campesinos, peones y artesanos: el pueblo “Tradicional”

### Campesinos

#### *Un mundo de vagabundos y labradores*

En la actualidad, el 17% de los chilenos habita en áreas rurales. La cifra no guarda relación con el Chile del siglo XIX, ni menos aún con el de la Colonia, cuando el peso de la economía agrícola y ganadera era gravitante y la población del país era mayoritariamente campesina.

¿Quiénes formaban ese gran contingente de población rural? ¿Cuál era su origen? ¿Dónde se asentaron?

En la Colonia nacieron las haciendas y con ellas surgió la necesidad de los patrones de contar con trabajadores permanentes al interior de sus propiedades, los cuales suplirían la falta de los indios de encomienda y de esclavos. Este proceso se dio en forma simultánea al interés de los colonos por radicarse por su cuenta, y se verificó por opción y/o coacción.

Los patrones comenzaron reclutando trabajadores **de confianza** que luego formarían su “estado mayor” de **empleados** y **sirvientes**. Paralelo a este proceso, los hacendados permitieron a sus parientes pobres, vástagos y hombres de confianza arrancharse en las márgenes del fundo para tener dónde y de qué vivir. Según Mario Góngora, éste sería el origen de los **inquilinos**<sup>15</sup>.

Gabriel Salazar no comparte la tesis de Góngora. Según este autor, el inquilinaje se asocia al “boom cerealero” de fines del siglo XVII que llevó a los patrones a establecer contratos con colonos pobres que tenían familia y deseaban arrendar tierras para producir el trigo que luego era comercializado por sus “socios”, los hacendados.

Los labradores-arrendatarios ocuparon un lugar intermedio entre el campesinado independiente (que obtenía de las autoridades una merced de sitio donde levantaba una

---

<sup>15</sup> Góngora, M. *Origen de los inquilinos de Chile central*. Santiago, 1960.

“chacra”, cuya producción se dirigía a las ciudades) y el **peonaje residente**, integrado por jóvenes sin familia, con un mínimo de independencia y de espíritu empresarial, que se arranchaba en las márgenes del fundo ofreciendo su trabajo a cambio de regalías.

Para Salazar, esta última vía de campesinización era la más rechazada puesto que atentaba contra el espíritu de autonomía y “empresarialidad” del bajo pueblo, desarrollado tanto por los labradores independientes como por los semi-independientes. Sin embargo, a partir del aumento en el valor de la tierra, los dueños de fundo (el **patriciado** terrateniente-mercantil) presionaron a los pequeños agricultores a fin de terminar con su autonomía e integrarlos a sus haciendas como mano de obra barata.

Así fue como el proyecto de empresarialidad “popular-rural” terminó abortado. El inquilino debió aceptar el orden impuesto por los patrones a fin de evitar la expulsión, quedando casi en igualdad de condiciones con respecto al “peón estable”, aunque con una carga de frustración mayor<sup>16</sup>.

Hay autores que sostienen que, aun bajo estas condiciones, el “sueño” de la autonomía no se habría perdido del todo. Si el “orden hacendal” duró tanto tiempo no fue por la simple y pura imposición de los “señores”; quienes aceptaban la subordinación pensaban que, a largo plazo, y a falta de otras opciones, algún beneficio podrían obtener de ella: un cierto nivel de estabilidad, tal vez incluso la perspectiva de poder autonomizarse al final de una vida de trabajo.

### *La “pax rural”: el orden hacendal y la búsqueda de libertad “en la medida de lo posible”*

Uno de los elementos que más llama la atención al estudiar los sectores rurales, es lo tarde que se manifestó en ellos la “cuestión social”. Se ha señalado que en esto influyó el espíritu pasivo de los inquilinos, sobre los cuales recayó el peso de un orden opresivo que dispersó toda posibilidad de revuelta. Estas serían las bases que sustentaron la “**pax rural**”.

José Bengoa ha puesto en entredicho esta visión. Para él, el inquilinaje fue un sistema de control social que contemplaba mecanismos de ascenso social, el cual se iniciaba con la “solicitud de puebla” y podía terminar con la compra de un terreno, después de haber vendido los animales. Si los inquilinos aceptaron la servidumbre y el sacrificio fue con la esperanza de obtener, a futuro, un premio a toda una vida de esfuerzos. Esto es lo que habría detrás de la **subordinación ascética**, según Bengoa un elemento central, aunque no dominante, en la cultura popular chilena<sup>17</sup>.

<sup>16</sup> Salazar, G. *Labradores, peones y proletarios*. Ed. SUR. Santiago 1985.

<sup>17</sup> Bengoa, J. *El poder y la subordinación*. Ed. SUR, Santiago, 1988; “Las casas de Quilpué” en *Proposiciones* n° 19. Ed. SUR, Santiago 1990.

¿Qué explica entonces la ausencia de rebeldía en las haciendas? Por un lado, el **paternalismo** y **autoritarismo** patronal, respaldado legalmente por el Estado e ideológicamente por la Iglesia. Y por otro, la aceptación del sistema por parte de los mismos campesinos, quienes percibieron que fuera de las haciendas su situación sería aún más precaria.

En último término, los inquilinos habrían entendido que subordinándose ascéticamente podían obtener su **autonomía** y convertirse en campesinos-propietarios. El proyecto de autonomía, que estaba *in mentis*, podía realizarse por una vía no confrontacional.

Todo lo anterior supone que el sistema de inquilinaje no era absolutamente indigno, opresor y cerrado, como tradicionalmente se ha sostenido. Por el contrario, al ser mínimamente **permeable**, este sistema le permitió al trabajador rural integrarse a la sociedad **subjetivamente** (a los organismos de representación, por la interpósita persona del patrón) y **objetivamente**, al abrir la posibilidad de ascender en lo social.

En conclusión, el inquilino no habría sido un individuo que aceptó pasivamente el sometimiento. Si no se rebeló fue porque las circunstancias no eran favorables. De todos modos, los campesinos, a través de canales no tan explícitos, hicieron manifiesto su descontento y sus aspiraciones de libertad y de mejor vida.

Maximiliano Salinas resalta la **autonomía cultural** del pueblo rural. A través de los cantos a lo “humano y lo divino”, los refranes, cuentos y fiestas religiosas, los campesinos desafiaron la hegemonía cultural de la élite civil y religiosa. Las poesías construyeron mundos “al revés” donde los ricos sufrían las penurias del pobre o donde las máximas autoridades eran objeto de burla<sup>18</sup>. Esta “**fuga mental**” fue uno de los medios a través de los cuales se expresaron las tensiones y utopías del mundo rural, y que podría identificarse como una de las bases de las que se nutrió la rebeldía peonal.

Otras formas de descontento fueron más explícitas y se encuadraron dentro del esquema de las “rebeldías primitivas”. Tal es el caso del **bandolerismo**, respuesta agresiva, espontánea y sin ideología que desafió el orden hacendal e hizo de la marginalidad delictiva un modo de vida, solidario no sólo entre quienes la practicaban (entre quienes se “**combinaban**”) sino también entre los inquilinos que protegían y servían de informantes a los bandoleros. Las acciones de éstos provocaron admiración entre los campesinos; sus hazañas se convirtieron en leyenda.

Pero entrado el siglo XX el medio rural fue testigo de formas de rebelión más organizadas. “La tierra para quien la trabaja”, la consigna vino a poner fin a siglos de una subordinación que exteriormente parecía sólida e inexpugnable.

---

<sup>18</sup> Salinas, M. “*El cristianismo popular en Chile*”. Flacso, 1983. *Historia del pueblo de Dios en Chile*. Edic. Rehue, Santiago 1987.

## *El desafío: la cuestión rural y el movimiento campesino en el siglo XX*

Hasta bien entrado el siglo XX el mundo rural no experimentó convulsiones. Durante décadas los patrones supieron manejar bien los ataques de los sectores urbanos que los acusaban de incompetentes en el plano de la producción y de feudales en cuanto a sus relaciones sociales.

En los años treinta, el peso de los hacendados (agrupados en la Sociedad Nacional de Agricultura y el Partido Conservador) impidió extender hacia el campo las disposiciones del Código del Trabajo. En los cuarenta, la derecha condicionó su apoyo al proyecto industrializador al compromiso de no permitir la sindicalización rural. Tal iniciativa contó con la anuencia tácita de los industriales y del movimiento obrero.

Los industriales estaban interesados en frenar la sindicalización rural para evitar un alza de los precios agrícolas que gatillara alzas en los salarios de su sector. Por su parte, el movimiento obrero estuvo dispuesto a “pactar” con los hacendados a fin de que éstos aceptasen el control de precios de artículos de primera necesidad<sup>19</sup>.

Así entonces, el movimiento campesino durante la primera mitad del siglo XX se caracterizó por su aislamiento. La matanza de Ranquil (1934) demostró, con dramatismo, la soledad en que se encontraban aquellos que, desde abajo, reclamaban su derecho a la tierra y a mejores condiciones de vida.

Los sucesos de Ranquil motivaron la formación de una serie de organizaciones rurales. Sus demandas apuntaron a la organización y libertad sindical, la reforma agraria, la ampliación de los derechos sociales para los campesinos y la creación de cooperativas. La primera de estas reivindicaciones recién se vino a implementar en 1967, año en que se promulgó la Ley 16.625.

A partir de allí, el movimiento campesino asumió un carácter institucional. Esto, a juicio de Bahamondes, tuvo dos proyecciones negativas: primero, circunscribió las estrategias “de lucha” a un marco legal impuesto por poderes que actuaban fuera del medio rural. Segundo, al privilegiarse la organización sindical quedaron fuera de los beneficios reportados por la Reforma Agraria cientos de miles de trabajadores no sindicalizados<sup>20</sup>.

El cariz institucional del movimiento campesino se denota también en su renuncia a la demanda por tierra como primera reivindicación. De las 826 huelgas realizadas hasta 1970, sólo 9 incluyeron el acceso a la tierra como objetivo<sup>21</sup>.

<sup>19</sup> Cfr. Aranda, S. - Martínez, A. “Estructura económica: algunas características fundamentales, en *Chile Hoy*. Siglo XXI, Santiago 1971.

<sup>20</sup> Bahamondes, M. “Modelos de acción urbanos y movimiento campesino” en *Proposiciones* n° 25. Ed. SUR, Santiago 1994.

<sup>21</sup> Cfr. GIA. *Historia del Movimiento Campesino*. Santiago, 1983. p. 40 y Affonso y otros. *Movimiento campesino chileno* vol. 2. ICIRA, Santiago 1970. p. 245.

Otro elemento que caracterizó a las organizaciones sindicales rurales fue su alta dependencia respecto al Estado y a movimientos urbanos, de inspiración política y religiosa, que impulsaron la creación de las primeras federaciones campesinas<sup>22</sup>.

Para entender estas dependencias, hay que considerar el marco global bajo el cual se desarrolló el movimiento rural. Éste estuvo fuertemente condicionado por la **reforma agraria**, iniciativa que partió desde arriba, como un macro programa de transformación desarrollista cuyo propósito era incorporar a los campesinos al mercado y aumentar la producción agrícola.

Pero a poco andar, el proceso fue cooptado por los de abajo. La Reforma Agraria abrió los cauces para expresar anhelos, rebeldías que llevaban largo tiempo incubándose y que se hicieron explícitas cuando los campesinos se sintieron respaldados por personas e instituciones que venían de afuera, asegurándoles la irreversibilidad del proceso.

El orden hacendal fue desafiado. Los trabajadores rurales se atrevieron a exigir sus derechos políticos y sociales, incluso el acceso a la tierra. Entre 1970 y 1973 el movimiento campesino ejerció acciones directas con el fin de acelerar la expropiación de los fundos. Este fue el período en que se rompieron las barreras legales y en el que muchos inquilinos adoptaron posiciones desafiantes, que sorprendieron a sus patrones, pues sólo las habían visto en los peones, el paradigma de la “clase peligrosa”.

## Peones

### *El desarraigo: orígenes del peonaje rural*

El peón ha sido un personaje poco estudiado por la historiografía tradicional, pese a su número e importancia en términos económico-sociales, ya que fue la mano de obra que posibilitó el tránsito hacia formas de producción capitalista.

Los orígenes de este segmento laboral, mayoritario dentro del mundo popular y caracterizado por su **movilidad** y falta de **especialización**, se encuentran en el mundo rural.

A mediados del siglo XIX, las tierras del valle central experimentaron un proceso de valorización debido a la expansión de la agricultura comercial. Los vagabundos debieron emigrar, igual que los hijos de inquilinos que no encontraron ocupación en la hacienda. Se dirigieron a las ciudades, las obras públicas, los centros mineros, la frontera araucana y al extranjero. En tiempos de cosecha, muchos retornaban al campo<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Estas fueron la **Federación de Campesinos e indígenas** (pro socialista), el **Movimiento Campesino Independiente** y la **Unión de Campesinos Cristianos** (ligados a la Iglesia católica y el PDC) y aquellas que emergieron al alero del INDAP.

<sup>23</sup> Bauer, A. *La sociedad rural chilena*. Ed. Andrés Bello. Santiago 1994.

El peón se caracterizó por su indisciplina, la élite los consideró el paradigma de la “clase peligrosa” en contraposición al inquilino, paradigma de la “clase laboriosa”. Se le calificó de revoltoso, pendenciero e inmoral, pero se reconocía su capacidad física de trabajo, su ingenio y su valor en la guerra.

En un registro distinto, José Bengoa señala que la rebeldía peonal encubría una forma de subordinación —en tanto no atentaba realmente contra el orden social—, establecida por coacción e incentivos económicos. Esa subordinación era aceptada porque les permitía acceder a placeres sensuales (desatados en las fiestas y borracheras) que formaban parte de su identidad cultural. La **subordinación sensual** permitía a los peones alcanzar una libertad “de momentos”, preferida a la eventual autonomía que podía obtener el inquilino a través de la subordinación ascética.

### *Orden y transgresión: orientaciones y conductas del peonaje rural*

En las ciudades el peón o **gañán** formó parte de una masa laboral empleada en diversos oficios, escasamente calificada y barata. Estas características se acomodaban al mercado laboral de la época, condicionado a ciclos de expansión y contracción que ampliaban o restringían la demanda de mano de obra<sup>24</sup>.

Esta flexibilidad del mercado laboral también se acomodó al carácter de los gañanes, renuentes al disciplinamiento laboral y la proletarización, cuestión que se manifestaba en su escaso interés por cumplir horarios, en su abandono de las labores (a menudo con el pago por adelantado), y en su búsqueda permanente de nuevas ocupaciones, conductas que la élite atribuyó a la “naturaleza errante” del “roto gañán”, o a problemas de índole económica, como los bajos salarios<sup>25</sup>.

Pese a los prejuicios y las quejas contra la conducta disipada de los peones, ellos eran un “mal necesario”. Por eso es que su partida “masiva” al Perú en la década de 1870 desató temores en la élite, que la llevaron a intentar limitar la circulación de población, arraigándola a la fuerza<sup>26</sup>.

Pero el tiempo demostró que los temores frente a la escasez de la mano de obra eran infundados. Año a año las ciudades (especialmente Santiago), crecían por la llegada de migrantes que se instalaban en los arrabales. La élite se intranquilizó: “su ciudad” se contaminaba y los pobres eran responsables de ello.

<sup>24</sup> Romero, L. “Rotos y gañanes: trabajadores no calificados en Santiago (1850 - 1895)”. En *¿Qué hacer con los pobres?* Ed. Sudamericana Buenos Aires 1997.

<sup>25</sup> A este respecto conviene confrontar el debate periodístico de la década de 1870 entre el Independiente (defensor de la primera tesis) y El Ferrocarril (defensor de la segunda tesis). Cfr. Grez, S (comp.) *La “cuestión social” en Chile. Ideas, debates y precursores (1804-1902)*. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Santiago, 1995. pp.169 - 209.

<sup>26</sup> Romero, *Op. Cit.* p. 103.

Dicha contaminación, a ojos de la misma élite, no sólo era física, sino también social. El Santiago “feroz y brutal” donde habitaba el bajo pueblo se consideró como un espacio donde se incubaban las patologías sociales que atentaban contra el orden. Las tesis higienistas en boga afirmaban que un espacio de miseria generaba conductas miserables, como el alcoholismo, la delincuencia y la prostitución.

A los ojos de la élite, dichos males eran los compañeros inseparables de la pobreza, por eso a los pobres se les comenzó a mirar con horror. Un periódico de la época sintetizó ese sentimiento: si Santiago continuaba creciendo a la par con el número de pobres, la ciudad estaría “aún más estrechada y más amenazada por las hordas de los hambrientos que son la nueva invasión de bárbaros que castiga a las civilizaciones imprevisoras”<sup>27</sup>.

Diversas medidas se aplicaron para evitar un desborde masivo desde abajo. Tal fue el caso de la renovación urbana emprendida por Vicuña Mackenna, pero a la postre fue la movilidad del bajo pueblo lo que realmente evitó los estallidos sociales.

La emigración fue la forma a través de la cual los pobres rehuyeron la proletarización. Ella actuó como una válvula de descompresión que aminoró la violencia social en la región central, a diferencia del norte minero, donde la posibilidad de desplazamiento fue coartada para favorecer la creación de un mercado laboral estable.

El deseo de conservar su independencia llevó a los peones más allá de las ciudades. Algunos de ellos se instalaron en la frontera araucana. Allí iniciaron un proyecto de campesinización que luego fue abortado por la penetración estatal y conquista definitiva de esas tierras en la segunda mitad del siglo XIX.

Ante el bloqueo de sus aspiraciones, los peones no se rindieron. Persistieron en la idea de encontrar fortuna en otros lugares, en construir mundos alternativos (marginales) donde ellos serían los dueños. Según Salazar, eso fue lo que les otorgó su identidad, una “conciencia de clase” que nació de la experiencia real de vida.

En la búsqueda de un mundo donde desarrollarse plena y humanamente, los peones emigraron también a Chiloé, cruzaron a la Argentina, llegaron al Perú, Panamá, California y Australia. Algunos de los que se quedaron en Chile optaron por “combinarse” y hacer de la marginalidad delictiva su modo de vida. Esa fue la fuerza que hubo detrás del bandolerismo.

En el Norte Chico, los peones descubrieron las vetas y comenzaron a trabajarlas. Fueron cateadores y pirquineros, pero al poco tiempo perdieron lo que habían ganado, a manos de los prestamistas y habilitadores que terminaron quitándoles sus minas<sup>28</sup>.

En conclusión, los peones fueron un actor protagónico en la historia del siglo pasado. Su presencia era necesaria para impulsar la transición laboral hacia un modo capitalista de

---

<sup>27</sup> *El Ferrocarril*. 1872. Cit. en Grez p. 212.

<sup>28</sup> Salazar, G. *Op. cit.* p.

producción. Empero, fueron ellos mismos los que rechazaron su inserción dentro del nuevo modelo. Actuaron impulsados por su deseo de independencia, en virtud del cual desafiaron el orden dominante y se aventuraron tras “locos sueños” en lejanas comarcas.

Paralelamente, otro segmento del mundo popular actuaba de modo diferente. Se trató de los artesanos, los que, a diferencia de los peones, no se marginaron del sistema, sino por el contrario buscaron su inserción en él con el objetivo de cooptarlo.

## Artesanos

### *Artesanos y sectores populares*

Desde la época colonial, las ciudades albergaron un sector laboral que se diferenció de los “rotos” sin profesión definida. Se trató de los **artesanos**, trabajadores (algunos tal vez los calificarían como “pequeños empresarios”) que contaban con un grado de mayor independencia por su calificación y educación.

A diferencia del resto de los trabajadores urbanos del siglo XIX, los artesanos tuvieron un mayor nivel y regularidad en sus ingresos, dispusieron de un autogestionado sistema de seguridad social (las mutuales), y mayor interlocución con los grupos dirigentes, hacia los cuales proyectaron una imagen de laboriosidad que contrastó con la visión peyorativa que se tenía del peón-gañán.

Todos estos antecedentes llevan a preguntarse, como se señaló en el capítulo anterior, si los artesanos deben ser estudiados como miembros de los sectores populares o como representantes de la clase media. Eduardo Cavieres considera que los artesanos formaron parte de un grupo intermedio dentro de la sociedad, emplazado entre el proletariado y los sectores más bajos de la clase media<sup>29</sup>.

Con los sectores populares los artesanos compartieron varios elementos en común. Por ejemplo, las condiciones de vida de un trabajador con escasa o nula calificación no fueron muy diferentes a las de un zapatero, carpintero, panadero o herrero.

Estos últimos integraron el estrato más bajo del artesanado, eran poseedores de técnicas tradicionales y rudimentarias y sus productos eran adquiridos por los otros miembros de los sectores populares. De hecho, si estos artesanos no pudieron ascender social y económicamente, fue por el reducido poder adquisitivo de su “mercado de consumo”.

Pero otros artesanos volcaron su producción hacia un mercado más selecto, hacia las élites. Tal fue el caso de ebanistas, carroceros, boteros, joyeros, modistas, constructores,

---

<sup>29</sup> Cavieres, E. “grupos medios intermedios e integración social: La sociedad de artesanos de Valparaíso a comienzos del siglo XX” en *Cuadernos de Historia* n° 6. Santiago. Julio 1986, p. 37.

decoradores y tipógrafos<sup>30</sup>. Podría argumentarse que este estrato más elevado de artesanos y obreros sí formó parte de los grupos medios del siglo pasado. Sin embargo, los valores y aspiraciones de sus organizaciones demuestran que ellos no reprodujeron el *modus operandi* de los sectores medios.

Los grupos medios del siglo XIX se caracterizaron por su admiración hacia las supuestas virtudes públicas y privadas, la laboriosidad, el orden y la riqueza del patriciado mercantil-financiero. Esto los llevó a imitar, sin éxito, el modo de vida de las élites, cayendo en lo que Salazar denomina el “pecado inútil de la alienación siútica”<sup>31</sup>.

Los artesanos no mostraron similar conducta. Por el contrario, aquellos que alcanzaron un mayor status (los artesanos independientes), junto a pirquineros, parceleros y vendedores ambulantes, lucharon contra la proletarización, defendiendo su autonomía y el despliegue de su espíritu de empresa.

Pero a la postre los grupos de poder impusieron sus intereses. La política económica (que no favoreció la industrialización) y el control del crédito (en manos del gran capital) frustró las posibilidades de muchos artesanos de desplegar su espíritu empresarial, lo que significó su incorporación a las engrosadas filas del proletariado.

El arribismo de los grupos medios tampoco fue una característica de los artesanos. Ellos se definieron como clase “laboriosa y honrada”, se identificaron con sus organizaciones y símbolos (estandarte, bandera e himno), y con valores cívicos fundados en principios ilustrados de redención social, pero que emanaron de una “lectura popular” del liberalismo y no de una adscripción ciega a los ideales de la élite.

Las orientaciones de las organizaciones artesanales tampoco fueron una proyección de los deseos de paz social sustentados por la oligarquía y un rechazo a las preocupaciones proletarias. En los momentos de crisis, como la década del 70, las organizaciones artesanales hicieron manifiesto su descontento, desplegaron proyectos autónomos y encabezaron la protesta social. Fueron un polo en torno al cual se articularon diversos actores que en el futuro seguirán caminos diversos, desde industriales medios hasta artesanos en vías de proletarizarse<sup>32</sup>.

Lo anterior ha generado nuevos cuestionamientos que ponen en entredicho las visiones tradicionales respecto al carácter del movimiento artesanal.

---

<sup>30</sup> Romero, L. “Liberales y artesanos” en *Op. Cit.* p. 61.

<sup>31</sup> Salazar, G. “Para una historia de la clase media en Chile”. *Sur Profesionales. Documento de trabajo* n° 60, p. 5.

<sup>32</sup> Grez Toso, Sergio. *De la “regeneración del pueblo” a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890)*, Santiago, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 1997.  
Goicovic, I. - Corvalán, N. “Crisis económica y respuesta social: el movimiento urbano artesanal. Chile 1873 - 1878” en *Ultima Década*. CIDPA. Viña del Mar. Diciembre 1993 p. 182.

## *El movimiento del artesanado: ¿primer movimiento social o prehistoria del movimiento obrero?*

La perspectiva marxista de los primeros autores que se preocuparon de la historia social de Chile concibió el movimiento obrero como el movimiento popular por excelencia. Antes que los trabajadores se organizaran en mancomunales, sociedades de resistencia y sindicatos pudo haber algunos gérmenes, pero no un movimiento popular propiamente tal. Para Hernán Ramírez Necochea, las organizaciones artesanales fueron una preparación (un antecedente) de lo que vendría después de 1879, cuando el proletariado alcanzó su madurez<sup>33</sup>.

Sergio Grez no comparte esa tesis. Para este autor, en el siglo XIX sí hubo un auténtico movimiento social popular encabezado por los artesanos y obreros calificados, quienes desarrollaron conciencia de clase y levantaron organizaciones cuyo proyecto, la **regeneración del pueblo**, trascendió en el tiempo, bajo diversas formas<sup>34</sup>.

Este movimiento social estuvo representado en organizaciones numerosas y diversas: sociedades filarmónicas de obreros, cooperativas, logias de temperancia, escuelas nocturnas de artesanos, periódicos populares y, obviamente, las mutuales.

Coyunturalmente, una lectura “artesanal” del liberalismo se constituyó en una de las expresiones políticas del movimiento popular decimonónico. Los artesanos adhirieron a él, convocados por las élites que se oponían al régimen conservador. Dichas élites buscaron acercarse al pueblo motivadas por el romanticismo (y su espíritu de regeneración social), y por el deseo clientelar de ampliar el respaldo contra el peluconismo, al cual se le hizo oposición revolucionaria en 1851 y 1859<sup>35</sup>.

En todo caso, la alianza entre el movimiento popular y el liberalismo fue sólo temporal. Ideológicamente, el movimiento artesanal no podía compartir el *laissez faire*, ya que ello contradecía su racionalidad productiva que demandaba, en lo inmediato, protección a la industria nacional. En lo mediano, el movimiento popular decimonónico adhirió al proyecto de “regeneración del pueblo” difundido a partir de los escritos de Arcos y Bilbao, posteriormente retomados por líderes mutualistas como Fermín Vivaceta.

A partir de la década de 1880, estas reivindicaciones fueron encauzadas políticamente a través del Partido Democrático. El hecho demuestra que al menos esa variante del movimiento social de la época privilegió su inserción dentro del sistema político, a fin de democratizarlo. La estrategia “artesanal” de lucha priorizaba la integración y no la ruptura.

---

<sup>33</sup> Ramírez Necochea, H. *Historia del movimiento obrero en Chile. Antecedentes, siglo XIX*. Ed. Lar, Santiago 1986. p. 173.

<sup>34</sup> Grez, S. *op. cit.*, y “Hacia una caracterización del movimiento popular chileno del siglo XIX” en *Solar. Estudios Latinoamericanos*. Santiago 1997, p. 166.

<sup>35</sup> Romero, L. “Liberales y artesanos” en *Op. Cit.* p. 76.

Pero hacia fines del siglo XIX el movimiento social experimentó profundas mutaciones. Trabajadores con escasa experiencia organizativa (como los pampinos) y otros con una mayor trayectoria en este campo (como los portuarios) se constituyeron en una nueva “vanguardia social”, relegando a un segundo plano a sastres, tipógrafos, ebanistas, y carpinteros, cuyas organizaciones (al igual que el Partido Democrático) no participaron de los movimientos de protesta del año 1890.

Nuevos lineamientos ideológicos y estratégicos entrarán en escena en el siglo XX. El liberalismo popular será reemplazado por el socialismo y el anarquismo, las estrategias de lucha serán rupturistas y las mancomunales, sociedades de resistencia y sindicatos se impondrán a las mutuales como principales formas organizativas.

Empero, el espíritu ilustrado de las mancomunales será retomado por el sindicalismo obrero. La redención del pueblo (bajo la consigna de “emancipación obrera”) seguirá sustentando ideológicamente a las organizaciones sociales. Según Grez, estos serían los elementos que dieron continuidad histórica al movimiento popular que nació en el siglo XIX siendo artesanal, para luego transformarse en obrero.

### 3.- EL PUEBLO ORGANIZADO: OBREROS Y SINDICATOS

*La proletarización como idealización: tesis “clásicas” acerca de los orígenes del movimiento obrero*

Los precursores de la historiografía obrera en Chile (Hernán Ramírez Necochea, Julio César Jobet, Marcelo Segall, Jorge Barría y Luis Vitale) fueron los primeros en centrar su atención en los pobres como sujeto histórico, pero en los pobres **proletarios**, los que laboraban en un medio modernizado, o en vías de modernizarse, y que tomaban conciencia de pertenecer a una clase que aspiraba al poder.

Según estos autores, la clase obrera habría adquirido su condición de tal por el hecho de insertarse dentro de ramas productivas asociadas al capitalismo de fines del siglo XIX: la minería, el transporte, las obras públicas. El otro elemento que definió la identidad obrera fue su condición de “clase explotada”, condición que habría afectado a todos los asalariados por igual.

Ante la explotación los trabajadores se rebelaron. Al principio, se trató de rebeliones espontáneas que carecieron de programa y organización, pero después de 1879 y gracias al aumento cuantitativo del proletariado, a la experiencia organizativa de las mutuales y el influjo “concientizador” de las ideologías y partidos que animaban la lucha proletaria en el viejo mundo, los obreros tomaron conciencia de sí, transformándose en clase organizada y revolucionaria.

En las últimas dos décadas, este enfoque “estructural” ha sido objeto de variadas críticas. Se le ha cuestionado su incapacidad para reconocer la diversidad cultural al interior de los sectores populares. También se ha criticado su tendencia a privilegiar las relaciones entre los trabajadores y los partidos de izquierda, haciendo aparecer a éstos últimos como los verdaderos y únicos protagonistas de la historia. Incluso se le ha atribuido un sesgo “iluminista”, en el sentido de privilegiar la acción racional-instrumental o el apego a determinados “proyectos” por sobre una disposición a reconocer a un actor popular que no era necesariamente discursivo o proyectista.

El que el análisis marxista haya exaltado al máximo la condición proletaria, reconociéndola como punto cúlmine en un contexto de progresiva “toma de conciencia”, deja al descubierto una situación paradójica: las resistencias al proceso de proletarización demuestran que pocos deseaban alcanzar tal condición; si la aceptaron, fue porque no existían otras opciones.

Una vez asumida la condición proletaria, a los trabajadores no les quedó más que luchar por mejorar su calidad de vida, conduciendo las formas de rebeldía pura por los cauces de la acción organizada. El sindicalismo moderno entraba en escena.

### *Hacia una economía de la violencia: de la violencia popular a la protesta obrera*

La aparición del sindicalismo moderno coincidió con la fase de crecimiento hacia afuera liderada por el enclave minero. Allí, el capitalismo impuso un orden que fue más coactivo e intransigente respecto al mundo popular, en comparación a las exigencias impuestas a los trabajadores en otras regiones del país.

María Angélica Illanes resume esta situación señalando que el azote, el salario y la ley, forjaron en la industria minera un modelo de relaciones económico-sociales cuyo objetivo, la proletarización, atacó formas de vida y costumbres propias del sustrato rural del cual provenía el trabajador, por no ajustarse a los requerimientos de laboriosidad, orden y disciplina exigidos por el patrón minero<sup>36</sup>.

El disciplinamiento, unido a las bajas condiciones laborales y salariales (en términos reales), y al hecho de tener que desenvolverse en un medio abiertamente hostil, creó las condiciones para hacer del espacio guanero y salitrero, un medio propenso a la agresión intragrupal (riñas de cantina), el bandolerismo, la deserción laboral y el motín contra la autoridad del campamento<sup>37</sup>.

El mundo minero fue un mundo marcado por la **violencia popular**. El término, empleado por autoridades públicas, empresarios, administradores y capataces, se aplicaba

<sup>36</sup> Illanes, M. “Azote, salario y ley”. En *Proposiciones* n° 19. Santiago 1990

<sup>37</sup> Pinto, J. *Trabajos y rebeldías en la pampa salitrera*, Santiago, Editorial Universidad de Santiago, 1998.

a toda situación que, “desde abajo”, amenazaba el orden establecido, como las revueltas, delitos, desórdenes cotidianos, incluso, las huelgas pacíficas. El origen de esta violencia se hallaba en la ruptura de vínculos sociales tradicionales y la oposición a una nueva relación laboral, estrictamente disciplinada, a la cual el peón no se adaptaba.

Para los trabajadores mineros, la violencia era una forma de vida internalizada y culturalmente aceptada que respondía al modelo de rebeldía peonal, definido por Salazar.

Con el tiempo, las rebeldías primarias fueron encauzadas estratégicamente, es decir, organizadamente. Se produjo así la transición hacia una “economía de la violencia” que desembocó en la formación de organizaciones que dieron vida a una cultura obrera que se desarrolló en oposición a la cultura oligárquica.

La cohesión interna de las primeras organizaciones de trabajadores se fundó sobre tres pilares: el impacto organizativo del capital; el discurso ideológico de izquierda; y la experiencia solidaria proveniente de las comunidades de origen del trabajador. Aquí están las bases del moderno movimiento sindical<sup>38</sup>.

En el espacio minero, la transición hacia formas modernas de protesta social fue lenta. Los trabajadores de las guaneras iniciaron el proceso, pero éstos (así como los del salitre) frecuentemente mezclaron atisbos de organización huelguística con conductas tradicionales que circunscribieron el movimiento al simple motín.

En tanto, en las ciudades, algunos grupos de trabajadores (como los de Ferrocarriles, los jornaleros, lancheros y artesanos) demostraban mayor organización y eficacia en la consecución de sus objetivos. De hecho, fueron ellos quienes en 1890 encabezaron la primera huelga general en la historia de Chile<sup>39</sup>. Estos antecedentes han servido para que autores como Peter De Shazo afirmen que por su esquema de racionalidad organizativa y cultura ilustrada, fue en las ciudades y no en los centros mineros, donde eclosionaron las primeras formas modernas de organización laboral<sup>40</sup>.

Pero 17 años más tarde, las conductas de los trabajadores salitreros manifestaban una inclinación similar a la de los urbanos. El comportamiento pacífico de éstos en la huelga de 1907, que desembocó en la matanza de la Escuela Domingo Santa María, sugiere un proceso de internalización del principio según el cual debían organizarse y por medios no violentos, negociar con los patrones o buscar un árbitro en el Estado. Para esa fecha, el movimiento obrero en las salitreras —o al menos sus conductores— ya parecía haber hecho suyo el modelo de racionalidad organizativa y cultura ilustrada.

---

<sup>38</sup> Cfr. Zapata, F. *Autonomía y subordinación en el sindicalismo latinoamericano*. FCE. México 1993. p. 36.

<sup>39</sup> Pinto, J. “Transición laboral en el norte salitrero”. En *Historia* n° 25. Santiago 1990; también Grez, S., *De la “regeneración del pueblo” a la huelga general...*, op. cit.

<sup>40</sup> De Shazo, P. *Urban Workers and Labor Unions in Chile*. University of Wisconsin Press. 1983

## *Movimiento obrero y obrerismo ilustrado: de integrados y excluidos.*

A principios del siglo XX, en el mundo popular existían notables diferencias en cuanto a organización y estrategias reivindicativas.

Los trabajadores urbanos organizados siempre se esforzaron por demostrar la racionalidad de sus demandas y movilizaciones, advirtiendo, tácitamente, que la violencia provenía de otros sectores populares con los cuales no se identificaban y sobre quienes proyectaron una imagen que no fue muy distinta a la que tenía la élite: un “lumpen” que, refugiado en guaridas, estaba al acecho de la menor oportunidad para desatar su “barbarie” —la misma barbarie que las elites percibían como consustancial al “bajo pueblo”.

Por su parte, la institucionalidad también hizo distingos al interior de los sectores populares. Los diputados que analizaron la gran huelga de 1903, se preguntaban acerca de si fueron los lancheros, jornaleros y artesanos los culpables de los desórdenes que habían remecido a Valparaíso. Su conclusión fue negativa: los desastres los habían provocado desconocidos, “individuos de mala fama salidos de sus guaridas de los cerros, o personas que no eran de la ciudad”<sup>41</sup>.

Los ataques que los “de arriba” dirigieron en contra del “lumpen” fueron reforzados -y he aquí un punto interesante de conexión- con las propuestas de los representantes ilustrados del movimiento obrero (como Luis Emilio Recabarren, Alejandro Escobar y Carvallo y otros líderes del mutualismo, el anarquismo o el Partido Democrático), quienes enfatizaron la necesidad de eliminar la espontaneidad, la violencia injustificada, el economicismo y la “barbarie” de muchas de las conductas del pueblo “no ilustrado”. Hay que decir también, en honor a la verdad, que las masacres obreras del Novecientos (1903, 1905, 1906, 1907) y la militarización de los conflictos sociales por parte del Estado inhibieron cualquier eventual atractivo del recurso a la violencia, por mucho que el discurso revolucionario de socialistas o anarquistas nunca lo descartara del todo.

Lo anterior incluso permite sugerir que hacia el Novecientos, tanto los de “arriba” como los sectores ilustrados de los “de abajo”, se sumaron en una especie de “alianza implícita” en favor del disciplinamiento y el orden. Aunque con objetivos diametralmente distintos, capitalistas y socialistas deseaban terminar con la cultura popular tradicional, para reemplazarla por otra que se ajustara a la modernidad y a un paradigma cultural teñido de cierto puritanismo que evoca las tesis weberianas sobre la “ética protestante” propia de las burguesías modernizadoras.

En efecto, el “obrerismo ilustrado”, como lo ha denominado Eduardo Devés, aspiraba a la constitución de una clase trabajadora austera, disciplinada, laboriosa,

---

<sup>41</sup> Cámara de Diputados. *Sesión*. Marzo 15, 1900. Ver también Jorge Iturriaga E., “La huelga de trabajadores portuarios y marítimos, Valparaíso, 1903, y el surgimiento de la clase obrera organizada en Chile”, tesis inédita de Licenciatura, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1997.

respetuosa de la moral y las “sanas” costumbres, conectada con las novedades científicas y técnicas del siglo. Su programa emancipador se propuso erradicar las “conductas bárbaras” dentro del bajo pueblo, de ahí su énfasis en la educación.

Los esfuerzos por educar (civilizar) al pueblo fueron notables. Mutuales, mancomunales, sociedades de resistencia y sindicatos desarrollaron una prolífica actividad periodística y cultural, que llevó a la formación de conjuntos musicales, talleres de teatro, de poesía y círculos literarios<sup>42</sup>.

El referente de toda esta actividad era el proyecto modernizador e ilustrado que la élite había sido incapaz de implementar en debida forma y para el conjunto de la sociedad. Para el obrerismo ilustrado, esa incapacidad deslegitimaba a la burguesía y avalaba la argumentación de Recabarren y otros que pensaban como él en orden a levantar un movimiento que, bajo la conducción del socialismo u otras propuestas revolucionarias, reivindicara para el pueblo el programa de regeneración social.

¿Quiénes pondrían en acción el programa emancipador del movimiento obrero? Obviamente que los proletarios. Ellos constituían la “clase moderna” cuya cultura se ajustaba a los nuevos tiempos. En contraposición, campesinos, peones e indígenas (el grueso del mundo popular) quedaban al margen de una participación activa en la implementación del proyecto emancipador, mientras no se zafaran de las rémoras de su cultura tradicional.

Esta subvaloración de las conductas y principios de la cultura popular tradicional hizo que el obrerismo ilustrado perdiera vitalidad en el bajo pueblo. Recabarren y los anarquistas pudieron ser escuchados con respeto, pero de seguro, muchos a los cuales dirigían su discurso moralizante los vieron distantes y no compartieron sus posturas. ¿No se encuentra allí una de las razones de por qué el movimiento que ellos promovieron sufrió una severa crisis en los años veinte? ¿No se encuentra allí una razón que permite comprender el suicidio de Recabarren?

Cuando el movimiento obrero recobró fuerzas, mantuvo algunos de los elementos que lo habían marcado en sus orígenes. No fue el portador de los intereses y demandas de todo el espectro popular, ya que siempre fue más obrerista que campesino, más industrialista que poblacional y más politizado que social.

Pese a lo anterior, no se puede desconocer la importancia del sindicalismo como vehículo de expresión popular. La imagen social que proyectó tenía raigambre popular; en tal condición, se transformó en agente de cambios. Cabe ahora preguntarse si esos cambios se orientaron hacia objetivos puramente reivindicativos o tuvieron una finalidad mayor: hacer la revolución.

---

<sup>42</sup> Devés, E. “La cultura obrera ilustrada” en *Camanchaca*. Iquique, Otoño de 1984.

## *De auroras modernizadoras ¿y crepúsculos revolucionarios?*

Las modernizaciones de fines del siglo XIX tuvieron una consecuencia no deseada para sus mentores de la élite: la aparición de una “cuestión social” que amenazaba con sumir al país en una revolución, comandada por el movimiento obrero. Ante la amenaza el Estado reaccionó con represión, una represión que crecía al mismo ritmo que la organización e ideologización de los trabajadores<sup>43</sup>.

La matanza de la Escuela Santa María de Iquique (1907) frenó la oleada huelguística. La represión estatal postergó la protesta social por una década, tiempo en el cual las organizaciones obreras replantearon sus objetivos y métodos.

Una parte considerable de las organizaciones se radicalizó. Consideraron al Estado como un interlocutor no válido y, entusiasmados con el proceso soviético, centraron su discurso en la toma del poder y la imposición de la sociedad socialista. Estos sectores se aliaron con el Partido Obrero Socialista, fundado en 1912 a partir de una escisión del Partido Democrático, y en 1920 ya controlaban la **Federación Obrera de Chile (FOCH)**, imponiendo un discurso claramente antisistema.

El cuestionamiento y la rebeldía de los “de abajo” hizo patente la crisis de legitimidad del “antiguo régimen”. Un sector de la élite consideró como prioritario articular mecanismos que, a cambio de otorgar concesiones en el campo político y social, anularan la eventualidad de un desborde masivo desde abajo, al estilo bolchevique. Este fue el trasfondo de la propuesta social-legislativa de Arturo Alessandri de propender a una integración armónica entre el capital y el trabajo.

El programa alessandrista remeció al movimiento obrero. La discusión en torno a aceptar o rechazar la legislación social y laboral, reavivó la vieja querrela entre anarquistas y comunistas respecto a cómo recibir aquellas reformas que emanaran del Estado, o del hegemónico ideario republicano liberal.

Los anarquistas repudiaron la legislación. No así los comunistas, entre los que se impuso una línea que se sustentaba en la táctica de aceptar del sistema todo lo que pudiera servir, a la espera de que las condiciones estuvieran maduras para iniciar la revolución.

Desde 1925, y ante el horror de los empresarios, los “agitadores” comunistas pasaron a controlar los primeros sindicatos legales<sup>44</sup>. Ante esta consecuencia (no prevista por los mentores del sistema) la reacción no se dejó esperar.

Con Ibáñez, la fuerza volvió a convertirse en el principal disuasivo del movimiento

---

<sup>43</sup> Cfr. Fernández, M. “Proletariado y salitre en Chile (1890 - 1910)”. En *Nueva Historia*. Londres 1988, y Pinto (1990) *Op. Cit.*

<sup>44</sup> Cfr. Rojas, J. *La dictadura de Ibáñez y los sindicatos*. Santiago, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 1983.

obrero “antisistema”, representado por comunistas y anarquistas. Los dirigentes laborales que no compartían esta línea de acción gremial respaldaron la iniciativa de Ibáñez, por su carácter proteccionista.

Pero el objetivo político de atraer al grueso de los trabajadores hacia el programa de gobierno fracasó, entre otras razones, por la desconfianza de Ibáñez frente a la irrupción en política de los trabajadores. Esta actitud impidió al gobierno contar con una base social que le diera su respaldo durante la crisis.

El fracaso en el objetivo político de atraer a los trabajadores organizados hacia el cauce gobiernista, ¿invalidó también el objetivo central de propiciar la formación de sindicatos en el marco de la ley? Las cifras indican que no: desde 1927 el número de sindicatos legales se incrementó año a año<sup>45</sup>.

Incluso los anarquistas, el otro sector “duro” de los trabajadores organizados, se incorporaron al esquema de relaciones industriales, lo que provocó cambios dramáticos en la orientación de algunos gremios.

Así, para la década de 1930 poco quedaba de la vocación anarquista y antisistema de los estibadores porteños del 1900. La legislación del año 31 les reconoció una serie de demandas históricas, lo que favoreció su adscripción a principios gremialistas. Esgrimiendo la consigna del “sindicalismo puro”, rechazaron toda influencia partidista en su movimiento e inscribieron sus reivindicaciones dentro de un marco sectorial, olvidando las viejas consignas contestatarias y revolucionarias<sup>46</sup>.

### *Sindicalismo “de clase” y sindicalismo “puro”: de héroes, antihéroes y mitos*

Las visiones tradicionales acerca del sindicalismo chileno han enfatizado su independencia frente al Estado y su fuerte compromiso con los partidos clasistas, en orden a superar la estructura capitalista por un régimen socialista.

Paralelo a esto, la prensa obrera, así como la historiografía marxista de los años 40 y 50, contribuyeron a formar la imagen “heroica” del movimiento obrero, caracterizándolo como un movimiento contestatario, con arraigada conciencia de clase, solidario y homogéneo.

Justo es reconocer que ese movimiento existió, y que bajo su alero se generó una cultura obrera que dignificó el trabajo y al trabajador, formó familia (la cual se involucró en los conflictos del jefe de hogar), y desarrolló un fuerte sentimiento de solidaridad interna, así como elevados grados de hostilidad hacia los patrones.

<sup>45</sup> Morris, J. *Las elites, los intelectuales y el consenso*. Ed. del Pacífico. Santiago 1967. p. 210.

<sup>46</sup> Herrera, H; Iglesias, R; Lira, R. *Reestructuración marítimo-portuaria en Chile. Efectos económicos, laborales y sociales*. Memoria de Licenciatura en Historia. UCV. Valparaíso 1993. También Jaime Sanhueza Tohá, “La Confederación General de Trabajadores y el anarquismo chileno de los años 30”, *Historia* vol. 30, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1997.

Sin embargo, sería un error creer que toda la cultura obrera respondió a este paradigma. No siempre el espíritu de hostilidad animó las relaciones obrero-patronales; no todas las organizaciones adhirieron al sindicalismo de clase. Incluso, aquellas que lo hicieron, muchas veces se quedaron más en el discurso que en la acción concreta.

Tal fue el caso de la **Confederación de Trabajadores de Chile** (CTCH). Su izquierdismo no impidió que esta instancia gremial se convirtiera en uno de los pilares del Frente Popular. El compromiso de la CTCH con esta alianza de centroizquierda integró al movimiento sindical a los tinglados de lo que algunos autores han denominado “pacto social” o “Estado de Compromiso”, en el que se deponía la hostilidad anti-sistema a cambio de ciertas cuotas de reconocimiento político y protección social.

Terminada la fase de integración orgánica con el sistema, el movimiento sindical volvió a enfatizar su oposición al régimen económico-social, a través de discursos (que exigieron la abolición de la propiedad privada) y acciones huelguísticas, encabezadas por la heredera de la CTCH, la **Central Unica de Trabajadores** (CUT). Aun así, las críticas nunca pusieron en entredicho a la democracia: el sindicalismo no debilitó el constitucionalismo.

Entre 1956 y 1970 el movimiento gremial atravesó su etapa más politizada y antiestatal, radicalizada por la lucha entre la izquierda y la Democracia Cristiana.

Los dirigentes gremiales de la DC no compartieron los principios revolucionarios y el marxismo ideológico de la CUT. De hecho, terminaron separándose de ella en la década del 60, acusándola de ser un instrumento al servicio de Moscú y de atacar, sin objetividad alguna, al presidente Eduardo Frei Montalva, cuyo gobierno sostuvo pésimas relaciones con el movimiento sindical, reflejo de sus igualmente malas relaciones con los partidos de izquierda.

Hasta 1970, el antagonismo entre el Estado y la CUT hizo que el movimiento sindical (pese a su poderío orgánico) no participase en las grandes decisiones de gobierno, ni siquiera en la gestión de asuntos laborales. Pese a lo que se dijo más arriba, ése parecería ser el “precio” que se debió pagar por asumir una opción “clasista” y no populista, al estilo del sindicalismo que se desarrolló en Argentina, Brasil o México —aunque también en estos casos hay autores que ponen en duda el protagonismo real de los sindicatos en la toma de decisiones.

La politización de las cúpulas sindicales fue una de las características más notables del movimiento gremial chileno. De hecho, se le considera una de los fundamentos en que la izquierda hizo descansar su proyecto de sociedad socialista.

Lo anterior, sin embargo, no valida la creencia de que la totalidad de los trabajadores chilenos estaban por cambios revolucionarios a fines de los años sesenta.

A nivel de bases, la lucha sindical no tuvo una orientación revolucionaria. Las principales preocupaciones de los socios y dirigentes sindicales eran alcanzar un

mejoramiento de las condiciones económicas y laborales para el trabajador, reducir la distancia entre su nivel de vida real y el nivel al cual se aspiraba. En lo fundamental, las huelgas del período 1953-1970 se ciñeron a esos objetivos<sup>47</sup>.

En los centros industriales donde hubo permeabilidad a las demandas laborales, el sindicalismo adoptó un cariz no rupturista, ni con la empresa ni con el Estado. Sus conflictos se quedaron en lo sectorial y no traspasaron al ámbito político, tal y como se lo había propuesto la legislación laboral.

Sin embargo, lo anterior fue la excepción y no la regla. La mayoría de los obreros pudo compartir las mismas concepciones respecto a la finalidad de su sindicato (elevar el nivel de bienestar para sus afiliados dentro de un ambiente de estabilidad laboral), pero la facilidad o no de concretar sus aspiraciones (no sólo materiales sino también subjetivas, como el hecho de sentirse integrado en la compañía) condicionó la orientación gremial, las más de las veces, en un sentido rupturista, haciendo del ideario “exclusivamente” gremialista un discurso carente de proyección.

Para Alan Angell, la actitud confrontacional de los grandes referentes sindicales se explica por las deficiencias de la legislación y los esfuerzos de los patrones por debilitar la capacidad negociadora de los sindicatos. Como respuesta, los gremios buscaron aliados y soluciones políticas<sup>48</sup>.

De parte de los patrones, hubo evidentes falencias para asumir los costos de la integración capital-trabajo, propiciada por el modelo de relaciones industriales diseñado en los años veinte.

Lo que se valoró de ese modelo fueron sus elementos de control. No hubo un real avance en orden a fundar, sobre bases sólidas, mecanismos que permitieran la común unión de intereses entre la empresa y sus trabajadores, un sistema de concertación al interior del recinto industrial, que legitimara a quienes lo conducían.

En este cuadro, no es extraño que el sindicalismo de clase terminara hegemonizando el espectro gremial. Al establecer alianzas con partidos de izquierda y/o con las concéntricas de trabajadores, lo que hizo fue estructurar una base de respaldo que incrementara su capacidad de negociación, orientando las relaciones industriales en un sentido que le favoreciera.

De la reivindicación sectorial, el sindicalismo de clase evolucionó a planteamientos de cambio radical en la estructura político-social, en forma directamente proporcional al grado de polarización en que fue entrando el país. Tal evolución se dio en muchos centros industriales, siendo quizá uno de los casos más paradigmáticos (o mejor estudiados) el de la textil Yarur.

---

<sup>47</sup> Cfr. Barrera, M. *El sindicato industrial chileno*. INSORA, Santiago, 1985, p. 106.

<sup>48</sup> Angell, A. *Partidos políticos y movimiento obrero en Chile*. Edic. Nueva Era, México, 1974, p. 89.

En esta empresa, tanto la permeabilidad de la demanda laboral como los mecanismos de integración patrón-obrero fueron mínimos. Los patrones se empeñaron en otorgarle a la fábrica un cariz moderno, despersonalizando las relaciones con los trabajadores e instaurando un sistema de rendimientos en base a criterios tayloristas. Los trabajadores protestaron, pero sus protestas fueron infructuosas<sup>49</sup>.

Alentados por el triunfo de la Unidad Popular, los obreros de la textil Yarur decidieron “tomarse” la industria y “liberarse del yugo” de sus patrones. Al ser los primeros en exigir su incorporación al Área de Propiedad Social, consolidaron su reputación de trabajadores comprometidos y combativos.

Por la misma época, otros trabajadores se granjeaban un apelativo no tan honorífico. “Amarillos” o “apatronados” se les llamó a aquellos trabajadores, como los de la industria azucarera CRAV, que se tomaron la fábrica para impedir su estatización.

A diferencia de Yarur, en la Refinería de Azúcar de Viña del Mar, desde hacía décadas se venía desarrollando un modelo exitoso en materia de integración obrero-patronal. La CRAV fue pionera en materia social y, por la vía paternalista, cooptó a los trabajadores. Posteriormente, éstos se autonomizaron y exigieron mayor participación en las decisiones de la empresa. En 1973 tenían bajo su control el 20 % de las acciones de la compañía<sup>50</sup>.

Lo anterior permite explicar por qué los refineros no vieron con buenos ojos los planes estatizadores del gobierno de Allende. Cuando en septiembre de 1973 sobrevino el golpe militar, una declaración de la Federación de Trabajadores Azucareros manifestó su satisfacción frente al término de lo que ella calificaba como una “pesadilla” que amenazó con la estabilidad de su fuente laboral y su esquema de empresa *integrada* en la que tanto obreros, empleados como ejecutivos participaban.

Pero al poco tiempo, los mismos representados en esa declaración se dieron cuenta que el proceso que tanto defendieron las dirigencias sindicales nada tenía que ver con las nuevas orientaciones políticas adoptadas por el régimen militar. El proceso de participación se interrumpió para nunca más retomarse, y la estabilidad laboral quedó en la nebulosa del lejano y buen recuerdo.

Como conclusión, podemos señalar que tanto los trabajadores textiles, como los del azúcar, fueron el anverso y el reverso de una historia sindical que se muestra más plurifacética de lo que aparenta. No se trata de rastrear en ella a “héroes” y “villanos”, a trabajadores “conscientes” o con “falsa conciencia”. Hay que reconocerla como una historia donde actuaron sujetos capaces de las más grandes abominaciones y de las más enaltecidas virtudes.

---

<sup>49</sup> Winn, P. *Weavers of Revolution*. Oxford University Press, 1986.

<sup>50</sup> Lira, R. “Modelo de relaciones industriales y orientación sindical: el caso de la Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar” en *Proposiciones* n° 27, Santiago 1997.

En general, todos los obreros se sintieron orgullosos de ser lo que eran y de su pasado. Al analizar su presente actuaron con criterios racionales, priorizando el bienestar de su familia y luego el de sus compañeros y miembros de “su clase”.

Cuando encontraron receptividad a sus demandas, el sindicato tendió al “gremialismo” y al “apoliticismo”. Cuando ello no ocurrió, el sindicalismo de clase fue la opción más recurrida. Ambas tendencias fueron formas racionales y válidas de representación social; el que una haya predominado no significa que la otra deba deslegitimarse.

En síntesis, como lo ha planteado Eduardo Cavieres, no se trata de quitar valor a lo que efectivamente lo tiene. Es cierto que existió un sindicalismo combativo, pero ello no descarta una variedad más amplia de casos.

Si el sindicalismo de clase fue un factor muy influyente en la historia social hasta 1973, debe reconocerse que no fue el único y exclusivo canal de expresión de los trabajadores chilenos. Las causas de dicha situación deben estudiarse con la mayor objetividad posible, porque quizá allí se encuentren claves importantes de la historia sindical y una de las causas que permita entender la muy preocupante situación en la que se encuentra actualmente.

#### 4.- REFUNDACIÓN NEOLIBERAL E IDENTIDAD POPULAR

##### *El desalojo: movimiento popular y golpe militar*

Para muchos chilenos, la Unidad Popular fue la culminación del proyecto de emancipación social que hiciera suyo el movimiento sindical.

Aunque es cierto que tras la retórica revolucionaria el sindicalismo muchas veces ocultó una aceptación tácita del *statu quo* (que excluyó de los beneficios del sistema a los sectores populares no obreros, como campesinos o “pobres de la ciudad”), no puede desconocerse su legitimidad como canal de expresión del mundo popular; de hecho, los “excluidos” no levantaron tienda aparte: junto a los obreros contribuyeron al triunfo de Allende. Según María Angélica Illanes, ése fue el momento en que el “sujeto pueblo” alcanzó su plena consumación histórica. El pueblo llegó al poder, se instaló en la casa del padre político, tomó la administración del Estado<sup>51</sup>.

Desde una perspectiva diferente, la UP habría constituido más bien la culminación del ciclo **nacional populista** en Chile. Su política económica se centró en la ampliación

<sup>51</sup> Illanes, M. “Marginalización y desmarginalización en el movimiento popular”. En *Proposiciones* n° 24. Santiago, 1994. p. 224.

del consumo popular más que en el funcionamiento eficiente de la economía. En términos políticos, el régimen se vio desbordado por lo que incluso algunos de sus partidarios calificaron de “hiper-participación”, que incluyó a sectores no incorporados a las estructuras “clásicas” de representación social, los cuales, bajo los auspicios del liderazgo carismático del presidente, se movilizaron con la expectativa de obtener beneficios de la política redistributiva del Estado<sup>52</sup>.

En una u otra lectura, la caída de Allende no fue sólo la derrota (el desalojo del poder) de una parte mayoritaria del mundo obrero que se identificó con él. También fue la derrota de un mundo social popular más amplio que incluyó a mujeres, mapuches, pobladores y campesinos, sectores que la modernidad neoliberal sometió a profundas frustraciones y desgarros, pero también a desafíos: el de afirmar o redefinir la identidad popular en un contexto hegemonizado por las fuerzas del mercado y la globalización.

### *La crisis sindical: primera fase, 1973-1979*

Producido el golpe militar, los gremios afines al gobierno derrocado fueron proscritos. El Código del Trabajo fue desarticulado y con ello, la libertad sindical pasó al olvido.

La “legislación de emergencia” en el campo laboral (1973-1979) encuadró al sindicalismo bajo los requerimientos de la “seguridad nacional”; fortaleció a la empresa privada (otorgándole tranquilidad laboral) y evitó la eclosión de protestas populares en contra de las políticas de shock neoliberal.

Dichas políticas habían tenido un impacto negativo en los trabajadores: la disminución del gasto fiscal perjudicó la calidad de los servicios en salud y educación. Las privatizaciones provocaron desempleo, la imposibilidad de negociar (y de presionar con la huelga) mantuvo los salarios a nivel de IPC<sup>53</sup>.

Esta situación produjo el divorcio definitivo de los sindicalistas demócrata cristianos con el gobierno militar<sup>54</sup>, más aún, cuando se convencieron que la vuelta a la normalidad política y sindical era improbable a corto plazo.

Fue así como anticomunistas acérrimos (que habían justificado el ascenso de Pinochet) pasaron a liderar la oposición sindical. Ellos conformaron el **Grupo de los 10**, una de las primeras asociaciones que aglutinó a los descontentos con el régimen.

<sup>52</sup> Valenzuela, E. “La experiencia nacional-popular” en *Proposiciones* n° 20. Santiago, 1991. p. 25 y 26.

<sup>53</sup> A este respecto, las cifras son elocuentes: entre 1973 y 1980 el desempleo llegó a 17 % y las remuneraciones reales descendieron entre un 20 y 30 %. Cfr. Ruiz Tagle, P. *El sindicalismo chileno después del Plan Laboral*. PET. Santiago, 1985. p. 14.

<sup>54</sup> El acercamiento se había producido en 1974 cuando Nicanor Díaz ocupó la cartera del Trabajo. Con él, los sindicalistas DC habían discutido un “estatuto social de la empresa” y un anteproyecto de Código del Trabajo de clara tendencia **corporativista**, neutralizado por los ministros neoliberales que sucedieron a Díaz.

El gobierno reaccionó reprimiendo a los dirigentes opositores (encarcelándolos, interviniendo sus sindicatos o clausurando sus federaciones) y en otros casos, promoviendo el paralelismo sindical para quebrar la organización e imposibilitar la acción cohesionada ante una política abiertamente hostil a la actividad sindical.

Las divergencias históricas entre dirigentes DC y de izquierda también contribuyeron a frustrar una respuesta cohesionada. Dos asociaciones se arrogaron la representatividad de los trabajadores: el “anticomunista” Grupo de los 10 (en los 80, **Unión Democrática de Trabajadores**, UDT) y la **Coordinadora Nacional Sindical** (CNS), antecedente directo de la nueva CUT.

Pese a las divisiones, el rol social que le cupo al movimiento sindical fue muy importante en los primeros años de la dictadura. Junto a la Iglesia Católica, encarnó la resistencia, fue la voz de la sociedad civil y de una conciencia anti-autoritaria que se expresó más a nivel de símbolos que de movilización social<sup>55</sup>.

¿Qué simbolizaba el movimiento sindical? Una historia de confrontación política con las administraciones de turno y, para el neoliberalismo, una interferencia “perversa” en las leyes del mercado. Por esto que el programa modernizador se propuso debilitar la estructura gremial. El **Plan laboral**, junto a otras reformas (como la previsional), asentaron las bases del Chile actual.

### *La crisis sindical: el Plan Laboral*

En 1979, las restricciones a la libertad sindical y las repercusiones internacionales del asesinato del dirigente socialista Orlando Letelier llevaron al país a enfrentar la posibilidad de un boicot a sus exportaciones. La moción, patrocinada por la AFL-CIO (la poderosa central sindical estadounidense), obligó al gobierno a negociar y al equipo económico, a concretar medidas que hacía tiempo venía incubando. José Piñera asumió la cartera del Trabajo y prometió a los norteamericanos un plan laboral que reglamentaría la organización sindical, la negociación colectiva y los contratos de trabajo.

El régimen superó así una situación internacional crítica, terminó con la etapa más restrictiva a nivel sindical e inauguró otra, algo más flexible, pero que igualmente buscó debilitar el poder negociador de los gremios para que no actuasen como órganos “monopolizadores del trabajo”, “distorsionadores del salario” o catalizadores del descontento político social.

El proyecto, aunque resistido por los trabajadores organizados, perseveró en el tiempo. Se aplicó en un momento oportuno porque dos años después, en un contexto de

---

<sup>55</sup> Campero - Falabella. “Los sindicatos en la transición a la democracia chilena” en Campero - Cuevas (ed.) *El sindicalismo latinoamericano en los 90*. Ed. Planeta, Santiago 1991. p. 134.

crisis generalizada, seguramente las condiciones habrían hecho más difícil (o imposible) la aplicación del plan laboral, puesto que el modelo económico al cual adscribía estaba deslegitimado. Las movilizaciones de 1983 así lo demostraron.

### *Entre el “acoso” y el proyecto: protesta popular y movimiento social*

La crisis económica de 1982 acalló los cantos de sirena del neoliberalismo y gatilló, en la sociedad civil (y en el mundo poblacional en particular), resistencias que hasta 1983 se habían mantenido ocultas.

Para algunos, las movilizaciones de pobladores fueron la expresión del descontento en contra de las frustraciones y la desintegración social provocada por la dictadura<sup>56</sup>. Otros, en cambio, han recalcado que dichas movilizaciones fueron más que una reacción: se trató de una forma nueva de construir sociedad desde abajo, que reivindicó identidades y proyectos de autonomía y levantó los tinglados de un auténtico **movimiento social**<sup>57</sup>.

Ambas lecturas son posibles de combinar al analizar el período de las protestas. Tomás Moulian señala que la crisis facilitó el despertar de energías sociales dormidas que acosaron al régimen, sin que ello haya significado una posibilidad real de fulminarlo. Las heridas no fueron de muerte<sup>58</sup>.

La primera protesta (mayo del 83) fue convocada por organismos sindicales (CNS y la Confederación de Trabajadores del Cobre) controlados por partidos de oposición que habían decidido movilizar a la población en contra del régimen. La actuación de los sindicalistas fue fundamental para desmontar el pánico a la represión, después de 10 años de orden y silencio. El movimiento sindical reafirmó así su tradicional autonomía respecto al Estado.

Pero el llamado de los líderes de arriba no habría sido eficaz sin el liderazgo de base, encarnado en autoridades como el sacerdote o el vecino-militante<sup>59</sup>. Lo anterior, unido a la transmisión oral (“lateralización”) de las experiencias de base<sup>60</sup>, afianzó el sentimiento de comunidad al interior de la población. Se tejió así una red solidaria que

---

<sup>56</sup> En esta línea se encuentran autores como Arriagada, G. *Pinochet: the politics of power*. Unwin Hyman, Boston, 1988 y Valenzuela, E. *La rebelión de los jóvenes*. Edc. SUR, Santiago 1988.

<sup>57</sup> Lynch, N. “las ambiciones de la sociedad por convertirse en Estado, en *Socialismo y Participación*. n° 53, 1991. p. 177.

<sup>58</sup> Moulian, T. *Chile actual: anatomía de un mito*. Ed. LOM, Santiago 1997, p. 277 y ss.

<sup>59</sup> Schneider. C. “La movilización de las bases: poblaciones marginales y resistencia en Chile autoritario” en *Proposiciones* n° 19. Santiago 1990. La tesis de la autora es que la resistencia más exitosa se dio en aquellas poblaciones dirigidas por militantes de base comunistas que eran reconocidos como autoridades en su medio, no como el militante externo.

<sup>60</sup> El concepto “lateralización” esta tomado de Salazar, G. “Tendencias transliberales del movimiento ciudadano en Chile, 1973 -1996”. Mimeo. Santiago, 1996.

ofreció seguridades a quienes participaron de la “fiesta catártica” en que se convirtieron las protestas.

Las protestas poblacionales combinaron sentimientos de frustración e irritabilidad, en especial del segmento juvenil y de desempleados, los más golpeados con la política neoliberal del régimen. Fueron, al decir de Salazar<sup>61</sup>, la expresión de fuerzas que siempre han estado presentes en el mundo popular y que resurgieron con inusitada potencia, una potencia historicista que convirtió al poblador y sus organizaciones de base, en actores protagónicos de su tiempo. Nunca hubo tanta **violencia política popular** (VPP) como en los años de la dictadura.

De alguna forma, la movilización poblacional desatada con motivo de las protestas puso en el primer plano a un actor y a una forma de acción popular que, aunque poseían una larga trayectoria, siempre habían aparecido como una especie de “socio menor” del proletariado racionalista e institucionalizado. Como lo ha recordado Gabriel Salazar, durante el siglo XX los ciclos de violencia política popular se fueron intensificando a partir de los años cuarenta, cuando el clientelista modelo “nacional desarrollista”, inaugurado por Alessandri, evidenció los primeros signos de agotamiento. El bloqueo (o ausencia) en las comunicaciones entre la base social y la cúpula político-institucional hizo que los sectores populares desearan los mecanismos clientelísticos y la institucionalidad, tomando la “historia en sus manos” y ejecutando acciones directas que expresaban el rechazo al sistema y sus representantes.

Esta suerte de política popular “premoderna” se expresó en revueltas callejeras, tomas de terreno y de fábricas, luchas encarnizadas con las fuerzas de orden. Se trató (como en abril de 1957) de “reventones sociales” que sobrepasaron a los líderes que habían dado la señal para iniciar la protesta. Los llamados a la cordura efectuados por dirigentes mesocráticos y obreros fueron desoídos por quienes, desde los márgenes, habían avanzado sobre el centro de la ciudad, arrasándolo todo.

Estas acciones (y otras revestidas de menos espectacularidad) demostraron ser efectivas o medianamente efectivas en términos reivindicativos; una huelga ilegal, con marchas y violencia callejera podía llevar al cumplimiento (parcial o total) de un petitorio. En términos históricos, la “violencia política popular” le otorgó a los sectores menos poderosos y organizados de la sociedad (mayoritarios), un protagonismo que puso en constante dilema a los gobiernos: el dilema entre privilegiar el equilibrio macroeconómico o acceder a la demanda social, con el riesgo de incurrir en espirales inflacionarias.

Salazar advierte que estos hechos de violencia política popular son la expresión de protesta del mundo popular ante las tendencias deshumanizantes de la modernización liberal, pero que en ningún caso el movimiento popular se quedó en la mera irracionalidad.

---

<sup>61</sup> Cfr. Salazar, G. *Violencia política popular en las grandes alamedas*. Ed. SUR, Santiago, 1990

La experiencia adquirida por obreros y pobladores en la acción directa configuró una dimensión material y territorial de la política que se ciñó a un proyecto difuso de nuevo orden social.

La territorialización del poder y la política popular se manifestó en concentraciones, marchas, focos de disturbio, barricadas, tomas de terreno e industriales. Incluso bajo un contexto presuntamente auspicioso, como el de la Unidad Popular, estas acciones desafiaron las directrices de los partidos que la conformaban, esos mismos partidos que, con anterioridad, habían acompañado (y no necesariamente controlado) el incremento del movimiento social.

En efecto, las acciones directas, como las tomas de terreno por parte de los “sin casa”, contaron con la anuencia y respaldo de parte de la clase política, pero ella no las condujo. En la historia poblacional se sintetiza la autonomía, el protagonismo social y la creación de identidad que los pobres del país fueron paulatinamente alcanzando<sup>62</sup>.

La toma de un terreno y la formación de una población materializó el proyecto de una “vida mejor”, que la institucionalidad había sido incapaz de cumplir o postergaba *ad eternum*. Era el modo de terminar con las precariedades y alcanzar de una vez y para siempre, la integración social.

Dicha integración se buscó, históricamente, a través de leyes u organismos públicos, que dieran curso a las demandas de los pobladores. Entre ellas, la más relevante de todas fue la demanda por habitación.

Los métodos con que los sujetos populares intentaron crear una institucionalidad afín a sus intereses siguieron pautas sistémicas y antisistémicas. En las primeras décadas del siglo reclamaron por leyes que les protegieran o por el cumplimiento o mejoría de éstas. Se agruparon en torno a las **ligas de arrendatarios**, y obtuvieron del gobierno la formación de tribunales de la vivienda donde los miembros de las ligas tenían representación.

Cuando el alquiler dejó de ser la principal forma de acceso a la vivienda, el movimiento poblacional presionó por leyes que facilitaran la compra de casas y el término de las irregularidades en los procesos de loteo.

En el primer gobierno de Ibáñez se aprobó el decreto 33, que protegía a los compradores de sitios a plazo y a los arrendatarios con promesa de venta. El frente de afectos a la ley 33 presionó por su cumplimiento y ampliación, pero a través de métodos legales, que no comprometieran el orden público, como sí lo habían hecho las movilizaciones de los arrendatarios en los años veinte.

Según autores como Vicente Espinoza, en el movimiento poblacional en gestación

---

<sup>62</sup> Cfr. Espinoza, V. *Para una Historia de los pobres de la ciudad*. Ed. SUR. Santiago 1988.

tendieron a primar estos criterios más bien “institucionalistas”. Se vio en el Estado un protector que actuaba mediante la promulgación de leyes, cuyo cumplimiento se alcanzaría mediante la participación directa de los afectados en los organismos públicos responsables del tema.

La impronta gremialista del movimiento poblacional demostró la profunda desconfianza hacia los partidos políticos y la convicción acerca de su propia efectividad para ejercer influencia en los organismos públicos y privados, obteniendo de ellos recursos, que unidos a los suyos, podían concretar sus aspiraciones.

Tal fue el caso de sindicatos que en los años cincuenta se abocaron a la tarea de construir poblaciones obreras. Un excelente ejemplo de ello fue Achupallas, en Viña del Mar, una población edificada sobre un programa de autoconstrucción, llevado a cabo por los propios interesados que adquirieron el terreno a través de cuotas pagadas en sus sindicatos<sup>63</sup>.

Los constructores de Achupallas (y de cientos de poblaciones populares a lo largo de Chile) fueron productores de espacio urbano, **pobladores** en toda la esencia del concepto. En ese espacio iniciaron una “nueva vida” y forjaron identidades colectivas que se reconocieron en el trabajo de tantas manos, sembradoras de nuevos sueños.

En Achupallas, los pobladores contaron con el respaldo de algunos empresarios y de las autoridades públicas, que vieron en su proyecto de autogestión la forma correcta de encarar las necesidades básicas de los sectores populares, prescindiendo de todo vínculo político o ideológico. Sin embargo, la perspectiva varió radicalmente al evaluar la forma rupturista en que otros sectores populares encararon sus necesidades.

En estos casos, y pasando por encima de las leyes, miles de “marginales” urbanos decidieron terminar con tal condición ocupando terrenos baldíos. La acción, formalmente ilegal, gozó sin embargo de bastante legitimidad social.

Desde 1945 que los “del Zanjón de la Aguada” venían escuchando promesas incumplidas acerca de futuras mejoras. En 1957 pusieron fin a la espera. A través de una acción directa (la “toma” de unos sitios en La Feria y Lo Valledor) iniciaron su propio proceso de autoconstrucción, proceso que, al igual que en el caso de Achupallas, no puede entenderse como un signo de individualismo, sino como expresión de auto-confianza de los pobladores (como grupo) para superar una situación difícil.

La acusación de que estas movilizaciones fueron promovidas por “agitadores profesionales” carece de fundamento. El estudio de las ocupaciones ilegales de terrenos demuestra que los militantes de base sí interpretaron los intereses de sus “compañeros” y que, las más de las veces, antepusieron su militancia social a la política. Los miembros de la cúpula partidista (diputados, regidores, alcaldes) más que promotores actuaron como

---

<sup>63</sup> Cfr. “Achupallas, historia de muchas manos, semilla de nuevos sueños”. CIDPA, Mimeo, Viña del Mar, 1993.

mediadores entre los pobladores y la autoridad, lo que en muchas ocasiones evitó el desalajo.

Por otra parte, hay que relativizar la creencia de que estas movilizaciones tuvieron un cariz radicalmente rupturista. Después de producida la toma, el movimiento poblacional solía orientarse hacia el diálogo con los organismos competentes, a objeto de consolidar el espacio conquistado.

Todo lo anterior muestra que, históricamente, el movimiento poblacional fundó su acción en el deseo de ascender socialmente, apoyándose en un Estado que acogiera sus demandas de integración. Tal objetivo se alcanzó en la década del sesenta, cuando leyes (como la de juntas de vecinos) y el saneamiento de los sitios “tomados”, demostraron que el Estado reconocía a los pobladores como interlocutores válidos, con los cuales estaba dispuesto a negociar la entrega de recursos públicos a cambio de apoyo para afianzar su dominio. Esa fue la dinámica bajo el Estado “nacional-popular”.

En la Dictadura, en cambio, tal dinámica fue desechada, induciendo a los pobladores a protestar. La protesta debe interpretarse como una forma de **reaccionar** contra la supresión de derechos por parte de un Estado cuyo proyecto (de libre mercado y competencia) no hacía sino ofrecer más pobreza y marginación, el reverso del proyecto popular que demandaba la integración al sistema<sup>64</sup>.

Se abrió así un espacio para la emergencia de proyectos “alternativos” que buscaron su fundamento en la base social y no en el poder institucional. Múltiples organizaciones populares (económicas, cristianas, de mujeres, jóvenes y derechos humanos) dieron cuenta de ese ideario.

En un contexto autoritario y de crisis de los referentes partidistas, el movimiento social-popular “cogió la historia en sus manos”. De alguna manera, tendió puentes entre los pobres afectados por la modernización neoliberal y los pobres que vivieron la transición hacia la modernidad a fines del siglo XIX. En ambos momentos, el pueblo demostró estar “vivo”, defendió su **autonomía** (resistió) y creó diversos mecanismos de autosubsistencia.

Pero el dinamismo de la sociedad popular de los 80 desapareció en los 90. Diversas explicaciones se han intentado, pero todas concuerdan en el diagnóstico: la protesta no dio paso a la propuesta. La crisis nos sitúa en el plano de las reafirmaciones y redefiniciones.

### *Los movimientos sociales bajo la Dictadura: crisis y redefinición*

En la segunda mitad de los ochenta las protestas declinaron, el “año decisivo” (1986) se esfumó y, con él, las convicciones acerca de la posibilidad de construir sociedad

---

<sup>64</sup> Espinoza, V. “tiempos cortos y largos en el movimiento poblacional”. En *Proposiciones* n° 24. Santiago 1994, p. 248.

desde abajo. Sacando conclusiones destinadas a tener un profundo impacto, Eugenio Tironi planteó por estos años que había que volver a mirar al Estado, y, desde él, reorganizar la sociedad<sup>65</sup>.

La clase política que Pinochet desplazó, buscó un diálogo con la autoridad, argumentando que la rutinización de las protestas amenazaba con desintegrar la sociedad. La “revuelta de los pobladores” se analizó, únicamente, como expresión de “anomia”, no reconociéndole su carácter de movimiento. Todo lo anterior avaló el llamado a acelerar la transición hacia un gobierno civil que restableciera un mínimo de legitimidad social.

Fue así como en nuestra institucionalista transición a la democracia los partidos políticos asumieron un rol central, en tanto el protagonismo de las organizaciones sociales de base se redujo al mínimo. El testimonio de una dirigente poblacional lo sintetiza todo: “cuántos nos deben no solamente la vida, sino el mantener la esperanza, el organizarse para la sobrevivencia y -otros muchos- el estar en el poder en estos momentos. Nosotras fuimos actores principales en la lucha por la democracia y, sin embargo, ésta nos margina”<sup>66</sup>.

La marginación se explica por el deseo de neutralizar tendencias que podrían haber roto el consenso político (democracia con enclaves autoritarios), económico (equilibrio macroeconómico e inserción dentro de una economía global) y social (transición pacífica y contención de las reivindicaciones inmediatas).

Hubo también causas internas que explican la derrota del movimiento popular. Salazar es claro al respecto: al caer en la inercia de los hechos de violencia política popular, la línea de acción directa terminó confundiendo con la línea de proyección sociopolítica.

A la izquierda también le cabe su cuota de responsabilidad. No apoyó políticamente a los movimientos sociales y con ello perdió la posibilidad de levantar un programa que la legitimara dentro del mundo popular. Al decir de Mario Garcés, la izquierda arribó a la transición sin proyecto y sin mucha identidad histórica<sup>67</sup>.

En síntesis, la experiencia que los movimientos sociales acumularon en los años ochenta no se proyectó hacia la transición. Dicha experiencia fue rica en la afirmación de la identidad popular, la socialización del poder y la autogestión económica. A diferencia del período anterior a 1973 (donde primó un colectivismo funcional, específico y reivindicativo), el movimiento popular de los ochenta era más comunitario, más ofensivo y, por lo mismo, más maduro.

En la actualidad, los pobres aparecen como un segmento social que no participa de su propio desarrollo: éste les viene dado desde arriba. El Estado ofrece ayuda pero no

---

<sup>65</sup> Tironi, E. *Autoritarismo, modernización y marginalidad*. Ed. SUR, Santiago 1990.

<sup>66</sup> Quintanilla, R. “Ser mujer, pobladora y dirigente en el Chile moderno...” en *Proposiciones* n° 24. Santiago 1994, p.304.

<sup>67</sup> Garcés, M. “Izquierda y movimiento popular: viejas y nuevas tensiones de la política popular chilena” en *Proposiciones* n° 24. Santiago 1994. p. 259.

potencia la autogestión. Es por eso que los pobres no aparecen como clase revolucionaria, sino más bien como receptores de beneficios; al decir de Salazar, “un saldo negativo en el desarrollo, pero que el propio desarrollo debería suprimir en el camino”<sup>68</sup>.

El movimiento social entra al 2000 en condiciones muy distintas a lo que ocurrió en el 1900. Las bases sociales han perdido protagonismo y sus organizaciones carecen de representatividad. Esta situación queda claramente reflejada en los dilemas por los que atraviesa el movimiento sindical.

### *El sindicalismo: de la crisis estructural a la crisis de identidad*

Tras 17 años de autoritarismo, las transformaciones en la estructura ocupacional de Chile y en el régimen laboral, han debilitado profundamente al sindicalismo.

La política neoliberal provocó cesantía y modificó la estructura del empleo, fortaleciendo el desarrollo de actividades informales, la terciarización de la economía y la aparición de nuevos sectores, ligados a las exportaciones de fruta y madera<sup>69</sup>.

El sindicalismo se vio afectado por cuanto su “base dura” y más tradicional disminuyó (a raíz de la desindustrialización y los despidos en el sector público). Hoy, confronta a una población trabajadora distinta, compuesta por sectores sin tradición sindical, poco propensos a la organización o que están bloqueados legalmente para ella.

Tras la vuelta a la democracia, la política laboral sigue privilegiando la atomización sindical. El sistema supone que los intereses se representan de mejor modo en forma individual o en pequeños grupos (la negociación colectiva está restringida al sindicato por empresa), lo cual evitaría alzas “artificiales” de salarios, salvándose los equilibrios macroeconómicos.

Bajo estas condiciones, quienes mejor negocian son los trabajadores con empleos “estratégicos” dentro de la empresa, pero en general, cuando se ha actuado individualmente (o a través del sindicato) el poder de negociación disminuye, entre otras razones, debido a la limitación del derecho a huelga. Todo lo anterior perjudica a los trabajadores menos calificados, con menores sueldos y mayor inestabilidad laboral.

Si el rol del sindicalismo en el ámbito organizativo está disminuido, su rol político-institucional lo está aún más. Los vínculos con los partidos, que en el pasado le permitieron un alto grado de intermediación con otros grupos de la sociedad, están debilitados o quebrados. Partidos que antes se autocalificaban de obreros, hoy han abandonado el

---

<sup>68</sup> Cit. en Contardo, O. “Cuando los pobres son protagonistas” en *El Mercurio*, Cuerpo E. Santiago, Agosto 17, 1997. p. 10.

<sup>69</sup> Para un balance de las modificaciones en la estructura ocupacional y en la noción de “asalariado moderno” ver: Tironi- Martínez: *Las clases sociales en Chile*. Ed. SUR, Santiago 1985. Miranda, V. “Nuevos desafíos del asalariado moderno” y Campero, G. “Asalariado moderno y movimiento sindical: ¿hacia un nuevo modelo de acción?” en *Proposiciones* n° 24. Santiago 1994, p. 246 y 255.

referente clasista y no representan los intereses del sindicalismo. Las más de las veces, su política laboral es difusa y hasta contradictoria con el pensamiento del militante que dirige alguna organización gremial<sup>70</sup>.

La identidad cultural del sindicalismo también ha sufrido modificaciones notables. En el pasado, los trabajadores organizados se mostraban optimistas frente al futuro, ya que se consideraban actores protagónicos de los cambios sociales y políticos que experimentaba el país. En base a esta idea, se fundó una identidad colectiva sintetizada en el concepto “unidad de los trabajadores”.

Esa unidad hoy no se percibe. Los sectores asalariados modernos se han diversificado. Antes de 1970 los encontrábamos en la industria, la minería, los servicios públicos estratégicos; en la actualidad, están en el sector agroexportador, forestal, minero, pesquero y en los servicios privados, como el financiero. Estas modificaciones estructurales, unidas a la pérdida de la identidad colectiva, han contribuido a fragmentar el mundo laboral.

El asalariado moderno de viejo cuño (con el cual se identificó el sindicalismo) está desaparecido o en retirada. La apertura comercial y la incapacidad para adaptarse a la competencia provocó el derrumbe de muchas industrias. Con ellas, no sólo desapareció una fuente laboral estable, sino un estilo de vida y un sentimiento de comunidad que entregaba satisfacciones de índole no material al trabajador. Las quiebras de los años 81 y 82 o el reciente cierre del mineral de Lota dejaron tras de sí inseguridad económica y un vacío cultural<sup>71</sup>.

Muchos de los que fueron expulsados de las industrias terminaron refugiándose en el sector informal de la economía, engrosando el contingente de trabajadores por cuenta propia. La gama de éstos es amplia: abarca al vendedor ambulante, al artesano tradicional y al microempresario popular. Ellos son parte de una estructura ocupacional donde se están afirmando nuevas identidades.

### *Trabajadores por cuenta propia: entre el cesante sin opción y el trabajador emprendedor*

En momentos de crisis, algunos trabajos por cuenta propia son el refugio natural para los expulsados del empleo formal, porque no demandan mucho capital ni calificación. Cuando la situación se revierte (como ha venido ocurriendo desde 1989 en Chile), lo lógico es que el trabajo por cuenta propia disminuya y se fortalezcan las relaciones salariales<sup>72</sup>.

---

<sup>70</sup> Miranda, V. *Op. Cit.* p. 253.

<sup>71</sup> Cfr. Aravena-Betancur. “Crisis y reconversión laboral del carbón” en *Proposiciones* n° 27. Santiago 1997, p. 211. Para el estudio acerca de la desestructuración provocada a raíz de la aplicación del Plan laboral a sectores con larga tradición gremial, cfr. Herrera-Iglesias-Lira. *Reestructuración marítimo-portuaria en Chile durante el régimen laboral: efectos económicos, sociales y laborales*. Memoria. UCV. Valparaíso 1993.

<sup>72</sup> Cfr. Prelac “Los trabajadores por cuenta propia en Santiago”. *Documento de trabajo* 184, Santiago 1980. Schkolnik, M. “Realidad y perspectivas del sector informal en Chile” *Documento de trabajo* n° 64. PET, Santiago 1989.

Esas tendencias hasta cierto punto se han dado en Chile. Sin embargo, llama la atención que exista un núcleo importante de trabajadores que sigue ligado al trabajo por cuenta propia y no desea asalariarse<sup>73</sup>. Se trata de personas que producen algún bien, prestan algún servicio o comercializan a pequeña escala. Se apegan a su oficio porque carecen de calificación para entrar al empleo formal, pero también, porque la actividad les reporta ganancias y satisfacciones que van más allá de lo económico.

Muchos de los trabajadores por cuenta propia están vinculados afectivamente con su oficio, como ocurre con familias y generaciones de artesanos. En otros casos, lo que existe es un interés de los sujetos populares por conservar su independencia como medio para alcanzar el progreso. Francisca Márquez se pregunta si esa valoración de la autonomía no corresponde a una “marca de nuestros tiempos, donde el ser empresario -aunque la empresa sea uno mismo- es mejor visto que ser empleado”<sup>74</sup>.

El afán de autonomía puede interpretarse también como una forma que los sujetos populares utilizan para “descolgarse” de la modernidad, buscando alternativas de desarrollo que privilegien la autogestión en detrimento de la alienación laboral.

Los dos enfoques tienen relación con problemáticas estudiadas en capítulos anteriores. Salazar ha planteado la existencia de un proyecto de **empresarialidad popular** abortado por el patriciado mercantil terrateniente. Sería interesante vincular su tesis con el “espíritu empresarial” de algunos trabajadores por cuenta propia y determinar si dicho espíritu responde a una continuidad histórica (que ha sobrevivido en la conciencia popular) más que a una “marca de nuestros tiempos”.

Por otra parte, la autonomía como forma de desentenderse de la modernidad, sugiere la continuación (en el plano individual) del proyecto alternativo de sociedad defendido por algunos movimientos sociales en la época en que el gobierno militar impuso un modelo económico excluyente del mundo popular.

En el ámbito rural también se han librado esfuerzos por conservar la independencia que algunos obtuvieron gracias a la reforma agraria. Sin embargo, la imposibilidad de competir terminó por arruinar a muchos pequeños propietarios, quienes, al transformarse en asalariados, postergaron, una vez más, sus afanes de autonomía.

### *El mundo rural bajo el neoliberalismo: consecuencias no previstas*

Con la reforma agraria, los campesinos rompieron vínculos con el patrón y establecieron una alianza con el Estado que reavivó su dependencia, puesto que éste asumió

---

<sup>73</sup> Los empleos informales alcanzan a un 21,8%, de éstos, más de la mitad corresponde al TCP. Cfr. Márquez, F. “Los trabajadores independientes en Chile: la opción de los excluidos” en *Proposiciones* n° 24, Santiago 1994 p. 243.

<sup>74</sup> *Ibid.* p. 244.

la conducción del proceso que debía terminar con la transformación en pequeños productores de ex inquilinos y, en casos especiales, de peones asalariados.

El Estado, a través de la CORA (Corporación de Reforma Agraria) reunió en **asentamientos** a los habitantes de un fundo expropiado. Entregó bienes de capital, asesoría técnica y créditos blandos. Los campesinos se comprometieron a trabajar en común el asentamiento y a cancelar los préstamos. A futuro, la CORA entregaría la tierra a los campesinos y éstos se convertirían en propietarios.

El proceso se interrumpió en septiembre de 1973. El Estado autoritario aplicó medidas represivas contra los campesinos movilizados, “regularizó” las tierras expropiadas (parte de ellas volvieron a sus antiguos dueños), parceló los asentamientos y terminó con el apoyo prestado por la CORA<sup>75</sup>. En definitiva, el Estado se desentendió de sus compromisos con los campesinos. Las consecuencias eran previsible.

Sin apoyo técnico ni financiero y agobiados por las deudas, los parceleros entraron en crisis. En un tiempo corto pasaron de la dependencia hacendal a la propiedad individual. El proceso fue demasiado rápido y muchos optaron por vender. Sin la protección estatal y en un medio competitivo que exigía productividad y eficiencia, el sueño de la “tierra para quien la trabaja” terminó, en muchos casos, convertido en pesadilla.

Quienes adquirieron las tierras de los parceleros insertaron al agro dentro de circuitos plenamente capitalistas y transformaron, radicalmente, el paisaje rural, las relaciones laborales y, en parte, la cultura del hombre y la mujer del campo.

### *Transformaciones en el espacio rural: los temporeros*

Al igual que en el pasado, el mundo popular sigue movilizándose en las áreas rurales en busca de empleo, sólo que ahora la moderna empresa frutícola ha reemplazado a la hacienda, el salario a las regalías y, en muchos casos, la mujer al varón.

Quienes laboran en las empresas agroexportadoras son adultos y jóvenes de ambos sexos que vienen de la ciudad, pueblos cercanos, ex asentamientos CORA y de pequeñas propiedades agrícolas arriunadas; su trabajo es de **temporada**.

El moderno temporero(ra) no es el peón soltero de antaño. Muchos de ellos o ellas tienen familia, la que sólo ven en invierno, que es el período de cesantía. En primavera se produce el desplazamiento masivo de adultos jefes de hogar y de jóvenes hacia los centros agroexportadores (Copiapó a Linares); 400 de los 500 mil asalariados agrícolas son temporeros.

El trabajo de temporada es en algunos casos evaluado positivamente porque otorga una mayor independencia, especialmente a las mujeres, permitiendo a éstas tejer nuevas

---

<sup>75</sup> Gómez-Echeñique. *La agricultura chilena: las dos caras de la modernización*. Santiago, 1988.

relaciones sociales e incorporarse a un patrón de consumo urbano que satisface expectativas que el propio mercado ha ido creando<sup>76</sup>.

Los aspectos negativos dicen relación con el sentimiento de culpa por dejar a los hijos solos, las enfermedades (por el manejo de pesticidas), la frialdad de las relaciones con los empleadores, la falta de previsión social y la precariedad del trabajo.

Éste último factor incide poderosamente en las identidades y memoria histórica de estos particulares sujetos rurales que son los temporeros. Por un lado, ellos (o más bien ellas) perciben que bajo el nuevo esquema laboral sus grados de libertad aumentan, pero la precarización del mercado de trabajo trae aparejados otros males: la desprotección y la falta de sustento. Así entonces, al rememorar el pasado hacendal, se le idealiza, evocándolo como un espacio de abundancia y protección<sup>77</sup>.

El mismo diagnóstico se percibe en aquellos que tuvieron una mala experiencia con la reforma agraria.

### *Los parceleros: de éxitos, fracasos y desafíos*

La política agrícola del gobierno militar, que privilegió el individualismo, abrió dos posibilidades a los campesinos que trabajaban asentamientos: o cedían a las presiones y vendían sus parcelas, o resistían los embates del mercado y las conservaban.

Quienes fueron propietarios por un corto tiempo, hoy son asalariados. La precariedad de su situación hace entendible sus idealizaciones de la vida en la hacienda y sus resquemores hacia los pequeños propietarios que hoy los emplean y que en el pasado fueron sus “compañeros”. Una de las consecuencias más evidentes de la aplicación del modelo neoliberal en el medio rural ha sido una creciente estratificación social y la pérdida del sentido de comunidad<sup>78</sup>.

Los parceleros que lograron resistir, atribuyen su éxito a su esfuerzo personal que otros habrían sido incapaces de demostrar. Un autor concluye que este discurso individualista impide la conformación de grupos como referente positivo, lo que aumenta la atomización, limitando las posibilidades de competir<sup>79</sup>, cuestión que se torna más grave aún si se consideran los perjuicios que podría traer una mayor globalización de los mercados al insertarse Chile en circuitos internacionales al estilo del Mercosur.

---

<sup>76</sup> Tinsman, Heidi, Cfr. “Dos enfoques al mundo de las temporeras” y “Temporeros: un mundo desconocido” en Revista *Espiga*. INPRU, organismo dependiente de la Conferencia Episcopal de Chile. n° 118 y 123.

<sup>77</sup> Ximena Valdés y Loreto Rebolledo. “Mujeres del campo: entre el brasero y la televisión” en *Proposiciones* n° 24. Santiago 1994. p. 292

<sup>78</sup> Parra, A. “Tradición y cambio en la identidad campesina. Chada, 1900 - 1995” en *Proposiciones* n° 27. Santiago, 1997. p. 171

<sup>79</sup> *Idem*.

210 mil jefes de familia con tierra y 70 mil familiares no remunerados son los más afectados con la caída de los precios agrícolas de los cereales, papas, maravillas y raps que compiten con productos subsidiados en sus países de origen. Bajo estas condiciones, las posibilidades de sobrevivir se tornan muy difíciles<sup>80</sup>.

Son entonces los pequeños productores los más perjudicados con la apertura de los mercados, ya que sus posibilidades de participar del esquema exportador son nulas debido a la falta de capitales, tecnología y capacitación.

Todo lo anterior indica que el campesinado tradicional no sólo está en retroceso en términos culturales, sino que la crisis puede terminar definitivamente con él, y con él moriría una historia que, aunque no nos demos cuenta de ello o no lo reconozcamos, forma parte de nuestra cultura, de nuestra desperfilada identidad, de nuestra comunidad perdida.

---

<sup>80</sup> Lira, C. "La agricultura y el campesinado" en *Servicio* n° 203. COP, Mayo de 1996.

## CAPÍTULO IV

# LAS ETNIAS INDÍGENAS

### 1.- ROL HISTÓRICO DE LAS ETNIAS EN CHILE

#### *Etnia, Nación y Estado*

En Chile existen comunidades cuya lengua, religión, valores e historia difieren del resto de la población. Desde hace siglos ocupan (y se identifican) con el mismo territorio. Se les conoce con el nombre de etnias indígenas: aymara, mapuche, qawasqar, yámana, quechua, colla, atacameños y rapa nui.

Culturalmente, los miembros de una etnia se perciben distintos y así son percibidos por los demás. Tienen conciencia de pertenecer a una comunidad cuya cultura nutre una suerte de “honor colectivo” que está por encima de consideraciones de clase, puesto que de él participa cualquier miembro del grupo étnico, al margen de su posición social<sup>1</sup>.

El Estado chileno reconoce la existencia de etnias pero no de **pueblos** indígenas. Hablar de pueblo equivaldría, en su opinión, a reconocer la existencia de varias **naciones** al interior de un mismo territorio, lo cual atentaría contra la visión clásica de una sola nación y un solo Estado.

Como contrapartida, las organizaciones indígenas y los defensores de los derechos indígenas, plantean que las etnias sí constituyen pueblos, por historia, identidad étnica, religiosa, lingüística y territorial. Si todos los pueblos tienen una igualdad básica de derechos, las etnias indígenas pueden aspirar, legítimamente, a la autodeterminación.

La visión que esta última perspectiva de análisis tiene de la relación entre cultura indígena y Estado-nación, es profundamente crítica. Se habla de colonialismo interno

---

<sup>1</sup> Bengoa, J. “Los derechos de los pueblos indígenas: El debate acerca de la declaración internacional” en *Liwen* n° 4. Centro de Estudios y documentación mapuche Liwen, Temuco, 1997, p. 214.

para dar cuenta de la existencia de pueblos, dentro de un Estado, económicamente explotados y culturalmente reprimidos.

Lo anterior se ampararía en el “valor supremo” de la unidad nacional. Históricamente, los Estados han privilegiado la vinculación del poder político con una sola nación o etnia, negando la existencia de otras comunidades culturales en su territorio o promoviendo su rápida asimilación.

Sin embargo, pese a siglos de discriminación etnocida y también genocida, la culturas indígenas no han desaparecido. En el último censo (1992), más de un millón de personas señaló sentirse identificado con alguna de las etnias indígenas que pueblan el territorio, principalmente la mapuche<sup>2</sup>.

Mal que les pese a muchos, las etnias indígenas existen. Este hecho obliga a repensarnos como nación y como Estado para abrirnos a una realidad que no puede seguir desconociéndose: que en Chile conviven diversos pueblos. El reconocimiento es fundamental para valorar el aporte de las culturas originarias y avanzar hacia políticas de Estado que aseguren el respeto y la sobrevivencia de las comunidades indígenas.

### *Hacia una definición de lo indígena*

A los miembros de las etnias originarias de América se les denomina “indígenas” o “indios”, término que nació de un error histórico (Colón no llegó, como él pensaba, a la India) y que no da cuenta de la diversidad étnica que caracteriza a los descendientes de los pueblos precolombinos.

A las dudas acerca de lo apropiado del término se agrega una cuestión más de fondo: ¿qué define a lo indígena? Para abordar esta cuestión, las ciencias sociales han empleado diversos criterios; uno de ellos es el **cultural**: indígena sería quien, habitualmente, habla un idioma y practica costumbres reputadas de tales.

El considerarse a sí mismo indígena es otro de los criterios aceptados. Esto último tiene que ver con la identidad, espacio donde las personas reconocen lo que les pertenece, lo que los constituye como tales y los diferencia de los otros.

Para el censo de 1992, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas propuso catalogar como indígena a quien descendiera de alguna cultura originaria, llevara un apellido indígena o estuviese casado con un miembro de alguna etnia<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> De acuerdo a datos aportados por último censo de población (1992) y la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, este es el total de población indígena según etnia:

Mapuche	928.060	Atacameña	10.000
Aymara	48.447	Qawasqar	101
Rapanui	21.848	Qaghan	64

<sup>3</sup> Consejo Nacional de Pueblos Indígenas de Chile. “Propuesta de los pueblos indígenas de Chile respecto al censo nacional de población” en *Nütram* Año VII, n°24, 1991/2. pp. 61 - 66.

A los criterios sociales y culturales se agregan los biológicos, de los cuales derivan los “fenotipos”. La apariencia física influye para calificar a alguien de indígena, aunque no sea un indio “puro” o aunque haya abandonado los rasgos fundamentales de su cultura, como el idioma o la vestimenta. Indígena sería, entonces, aquel que es definido como tal por el resto de la población y que, al mismo tiempo, muestra características culturales y fenotípicas asociadas a tal definición<sup>4</sup>.

Otro rasgo que define a los indígenas dice relación con su emplazamiento (histórico) en el esquema de relaciones de poder y en la estructura socioeconómica del país. En la conquista, el término “indio” aludió al sector colonizado. En la actualidad, esa relación de subordinación no ha desaparecido: los indígenas chilenos, como los del resto de Latinoamérica, constituyen un grupo políticamente impotente, socialmente discriminado y económicamente pauperizado.

Esto último ha despertado un fuerte cuestionamiento de parte de quienes critican el trato de los chilenos a los indígenas y exigen políticas que preserven y proyecten a las etnias originarias.

Cien años atrás, estas observaciones no habrían tenido sentido para los “notables” que dirigían la sociedad. Para ellos, lo indígena era expresión de una “barbarie” que debía desaparecer, en virtud del progreso y la modernidad. La historiografía liberal y conservadora avaló esta posición.

### *Pasado heroico, presente bárbaro: las visiones tradicionales acerca de lo indígena*

Cuando los grupos de poder se han pronunciado respecto a los indígenas, habitualmente lo han hecho pensando en sus propios intereses y necesidades de legitimación.

En la Colonia, el mito ercillano del “indio indómito” sirvió para justificar la guerra y de ese modo, decretar la esclavitud indígena y solicitar recursos para mantener al ejército. Los araucanos fueron el “chivo expiatorio” de un ejército que buscaba legitimar su posición en la sociedad<sup>5</sup>.

Más tarde, cuando los que propiciaron la Independencia buscaron fuentes que los legitimaran, encontraron en los araucanos un sujeto cuyo pasado, “guerrero y libertario”, debía reivindicarse, ya que su lucha contra el español entroncaba con la lucha por la emancipación. Los primeros íconos de la patria recogieron la figura de estilizados indígenas que representaban el espíritu indómito y libertario, el aura épica con la cual se quería revestir los orígenes de nuestra nacionalidad.

---

<sup>4</sup> Cfr. Muñoz, B. *Huairapamushcas*. Edic. Universidad de la Frontera. Temuco, 1996. Lipschütz, A. *El indoamericanismo y el problema racial en las Américas*. Ed. Andres Bello. Santiago, 1967.

<sup>5</sup> Sobre este tema, ver el clásico de Alvaro Jara, *Guerra y sociedad en Chile*, Editorial Universitaria, Santiago, 1971.

La valoración de los “héroes de Arauco” contrasta con la visión negativa que se tenía de sus sucesores. La historiografía liberal dedicó largos pasajes a elogiar las luchas entre araucanos y españoles, pero al mismo tiempo, denostó la actitud colaboracionista de los indios en las “guerras a muerte” del período independentista<sup>6</sup> y silenció lo que ocurrió con ellos tras la ocupación de la Araucanía.

Sólo los indios “heroicos” del pasado tuvieron cabida en el armado discursivo de los grupos de poder a fines del siglo XIX, no así los indios de carne y hueso, coetáneos a ellos. Estos últimos fueron vistos como una copia defectuosa de sus predecesores (por su degradación moral, atribuida al alcohol) y como un obstáculo al progreso de la nación.

El obstáculo estaba dado por las dificultades para aprovechar recursos que, como la tierra, estaban bajo el control de una sociedad cuyas conductas y concepciones no se ajustaban a las exigencias de la modernidad. Por eso que el Estado debía actuar.

Apropiarse de las tierras indígenas para entregarlas a particulares (chilenos e inmigrantes) fue una política de Estado durante la segunda mitad del siglo XIX, una política que contempló mecanismos de negociación y de exterminio físico. El resultado fue la muerte del que se opuso a la “pacificación”, y la reducción física y cultural del que optó por sobrevivir.

Los sectores más progresistas del liberalismo criollo criticaron las muertes de mapuches pero no cuestionaron las ideas-fuerza que guiaron el proceso. La modernización exigía, si no la muerte física, al menos la muerte cultural del indio. Intereses económicos, amparados en el discurso civilizatorio, legitimaron la conducta de los grupos dirigentes.

La visión conservadora fue aún más radical en cuanto a su evaluación de la presencia indígena. Encasillados en su hispanismo, autores como Jaime Eyzaguirre negaron a los indígenas todo aporte a la cultura nacional. Para esta línea historiográfica, nuestra nacionalidad se forjó, únicamente, en base al aporte de los españoles, que trajeron la “civilización”, representada en el idioma, el catolicismo y la idea de orden.

Estas concepciones han avalado conductas discriminatorias y etnocidas que han traspasado el ámbito académico para instalarse en el inconsciente colectivo: el indio es flojo por naturaleza y por eso el país no progresa. Hasta en memorias universitarias de no hace mucho se reproducían las mismas ideas: “el pueblo chileno es aún demasiado indígena, haciéndole falta mayor mezcla de sangre europea, que le daría iniciativa de ahorro, seriedad, honradez (...) es indispensable aumentar la inmigración para mejorar la raza, acrecentar la producción y el consumo y levantar el nivel humano de nuestro pueblo”<sup>7</sup>. Sólo durante el siglo XX surgieron algunas voces reivindicatorias de lo indígena, pero en

---

<sup>6</sup> Vicuña Mackenna, B. *La guerra a muerte*. Ed. Francisco de Aguirre. Buenos Aires, 1972.

<sup>7</sup> Walker, F. *Nociones elementales de derecho del trabajo*. Ed. Nacimiento. Santiago, 1957. p. 45.

general a través de una expresión que no ponía en duda el principio de la unidad esencial de la nación: el mestizaje.

### *La reivindicación del mestizo: visión de los indígenas en los ensayos nacionalistas*

Los intelectuales “mesocráticos” del Centenario (1910) denostaron a la oligarquía por buscar un modelo cultural fuera de nuestras fronteras. Como contrapartida, y recogiendo una tendencia que por esos años se propagaba por toda Latinoamérica, afirmaron nuestra identidad nacional en el sustrato mestizo, encarnado en la figura del “**roto chileno**”.

En el “roto” se fundían las virtudes del español pobre y aguerrido que vino a buscar fortuna, con las del “indómito araucano”, viril, arriesgado y leal. La fusión de estas cualidades explicaba por qué los ejércitos chilenos habían retornado triunfantes de Yungay y Huamachuco.

En esta perspectiva, el rol histórico de los araucanos era haber contribuido a formar el carácter del verdadero representante de nuestra “raza chilena”. Lo indígena fue reivindicado, pero también en forma parcial. Lo que los nacionalistas rescataron fueron aquellas virtudes de un pasado heroico y aguerrido que había muerto con sus héroes, con Lautaro y Galvarino.

El mestizo aparecía como el heredero de esas nobles tradiciones indígenas a las cuales debía agregarse el espíritu de industria, del cual el indio carecía. Según Nicolás Palacios y Francisco Antonio Encina, destacados portavoces de esta sensibilidad<sup>8</sup>, una buena educación técnica supliría la deficiencia, haciendo del chileno un pueblo apto a los requerimientos de una sociedad moderna.

Esta confianza en el pueblo mestizo como futuro “protagonista de la historia” también fue compartida por el socialismo.

### *Entre la vindicación y la vindicta: el socialismo frente a lo indígena*

Un detalle de un mural del pintor Mario Toral, expuesto en una céntrica estación del Metro de Santiago, muestra un árbol frondoso que representa a Chile. Sus raíces las conforman nombres que simbolizan a los fundadores de nuestra nacionalidad: Caupolicán y Lautaro quedan a la par con O’Higgins y Carrera.

Los símbolos que hay tras la lectura de este mural no son nuevos; la izquierda latinoamericana, y el movimiento artístico asociado a ella, hace décadas viene desarrollando la idea de unidad continental en base al reconocimiento de nuestra identidad mestiza.

---

<sup>8</sup> Cfr. Palacios, N. *Raza Chilena*. Valparaíso, 1904. Encina, F. *Nuestra inferioridad económica*. Ed. Universitaria. Santiago 1960 (edición original, 1911).

La afirmación de nuestra condición mestiza aparece como un reconocimiento al aporte de las etnias indígenas, puesto que ellas, al fundir su cultura con la civilización occidental dieron vida al carácter y la cultura del hombre americano.

En torno a esta idea se desarrolló un movimiento cultural que ensalzó la figura del mestizo como el prototipo del “hombre nuevo”. El socialismo latinoamericano se hizo eco de estas tendencias. Reconoció lo positivo de las culturas originarias y relacionó algunos elementos de su cultura con el moderno comunismo proletario. Este movimiento se desarrolló principalmente en los países andinos, pero también en México<sup>9</sup>.

Los socialistas decían estar comprometidos con las etnias originarias. Su discurso reivindicaba el rescate de lo indígena, para liberar y, por ende, salvar lo indígena.

Pero esa salvación sólo funcionaba en términos económicos o políticos, no culturales. El socialismo vio en los indígenas una de las fuerzas por las que pasaba la historia. El indígena sería el nuevo proletario, constructor, no de una sociedad particular, sino universal: la sociedad socialista.

En el fondo, este proyecto de sociedad desconfiaba de la diversidad y defendía la uniformidad. Aunque rescataba de la cultura indígena su colectivismo, rechazaba otros aspectos de su ethos identitario, porque al igual que el liberalismo, se identificaba con lo civilizado y en ello no cabían los ritos ancestrales ni otras manifestaciones que desviaban del recto camino que conducía a la plena conciencia de clase.

El socialismo fue, por tanto, una corriente modernista y “civilizatoria” que seleccionó los aspectos de la cultura indígena que le eran funcionales, descartando los que no se ajustaban a su proyecto.

Se dio así la paradoja que en su empeño por convertirse en la “voz de los sin voz” el indigenismo socialista terminó escuchándose a sí mismo y no a los que decía defender. Adoptando esta postura, dicha corriente no hizo sino proclamar la muerte cultural del indio. No se trató de una muerte declarada a los cuatro vientos; fue peor aún, dice el analista peruano Braulio Muñoz, “porque no se presentó como una negación o una degradación del indio, sino como su reivindicación. En todo el continente el indio como indio fue exaltado hasta el olvido”<sup>10</sup>.

En síntesis, el proyecto de nación socialista, al igual que el del liberalismo, prescindía de lo indígena. Llegado el momento, el indio debía adoptar una cultura que no era la suya, la cultura **proletaria**, y rechazar su condición de indio, para asumir la de mestizo. Todo lo anterior se justificaba en virtud de concretar el anhelado y postergado sueño de la unidad americana, que privilegiaba la homogeneidad y no la diversidad, característica de los pueblos originarios de este continente.

---

<sup>9</sup> Cfr. Mariátegui, J.C. *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*. Ed. Universitaria. Santiago 1995.

<sup>10</sup> Muñoz, B. *Op. cit.* p. 191.

## *La reivindicación de lo indígena desde las propias etnias*

Las organizaciones que representan a las etnias originarias concuerdan en que su historia ha sido la de pueblos explotados, a los cuales se les ha cerrado toda opción de proyectar su cultura y de ser reconocidos como nación.

Consideran que la sociedad chilena ha sido intolerante con quienes son racial y culturalmente distintos. El Estado es visto como un instrumento de los grupos dominantes a través del cual se ha despojado a los indígenas de sus derechos fundamentales, tanto en el plano material (acceso a la tierra y al agua) como espiritual, lo que ha provocado la desaparición, total o parcial, de las culturas originarias. Estudios como los de José Bengoa avalan muchas de estas aseveraciones<sup>11</sup>.

Según estas visiones críticas, las ideas democrático-liberales no han traído ningún beneficio a los pueblos originarios: sólo nuevas formas de sometimiento que han tenido por objeto incorporar a las etnias dentro del modelo dominante. Tal es la dinámica del “colonialismo interno”<sup>12</sup>.

Bajo estas consideraciones, el rol histórico que las mismas etnias se asignan está marcado por el signo de la resistencia cultural. El término “vencidos” no les acomoda, por cuanto el haber sobrevivido al etnocidio y genocidio se considera un logro que demuestra la capacidad de los pueblos indígenas de defender, en las peores condiciones, su proyecto cultural, alternativo al de la modernidad occidental.

Pero la defensa de la cultura no implica una reivindicación ciega de la tradición y un rechazo a toda expresión “moderna” de vida. Una de las claves de la sobrevivencia étnica ha sido la aptitud para abrirse a lo externo. Se trata de una “aculturación antagónica”, que rescata los medios de la cultura dominante con el propósito de repeler sus fines etnocidas.

Esto es lo que otorga dinámica a las identidades indígenas. A medida que se fue produciendo el contacto (fluido o traumático) con la población hispana y mestiza, los indígenas debieron adoptar y adaptar a su estructura cultural nuevos elementos con los cuales han terminado identificándose.

Prueba de esa capacidad de adaptación las tenemos en todas las formas de sincretismo religioso. Un estudioso de los pueblos andinos reconoce que el culto mariano (factor constituyente de la identidad religiosa del pueblo Aymara) fue la adopción de tradiciones y símbolos hispanos que fueron entendidos “según la simbología autóctona, realizados en sus templos rústicos y sentidos en su corazón de místicos andinos”<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Bengoa, J. *Historia del pueblo mapuche*. Ed. SUR, Santiago 1987.

<sup>12</sup> López, M. “Herramientas para análisis del Estado chileno y la cuestión étnica” en *Liwen* n° 4. Centro de Estudios y documentación mapuche Liwen, Temuco, 1997, p. 182.

<sup>13</sup> Van Kessel, J. “Virgen Pachamama - Virgen María” en *Nüttram*. Año VII, n° 25. 1991.

Con los mapuches ha ocurrido otro tanto. En la actualidad, sus reducciones constituyen una pieza clave dentro de su cultura; sin embargo, ellas no fueron el producto de una evolución operada en el seno de su sociedad, sino el resultado de una imposición decretada por el Estado chileno, una vez ocupada la Araucanía.

En este último caso, la identificación está dada por el hecho de que las reducciones salvaguardan un espacio mínimo donde producir el alimento y, tan importante como ello, reproducir la cultura, cultura en que la relación con la naturaleza ocupa un lugar central.

La cultura indígena está estrechamente relacionada con el espacio natural. Este factor la diferencia notablemente de la civilización occidental, para la cual la naturaleza es un objeto de dominación y no parte integrante de un cosmos donde hombre y espacio natural conviven armónicamente. Las vinculaciones entre esta cosmovisión indígena y las demandas de grupos ambientalistas han cimentado una alianza que, en ocasiones, se muestra como formando parte de un proyecto más global, cuyo propósito es salvar a la humanidad de un desastre ecológico.

Los pueblos indígenas, que en su cultura y espiritualidad consideran a la tierra como el valor fundamental y el factor que los une y alimenta su identidad, han perdido en forma progresiva el acceso a ella. Los espacios se han estrechado y no ha quedado más que emigrar.

En las ciudades les ha sido muy difícil mantener los vínculos heredados de pasadas generaciones. Aunque se han creado organizaciones destinadas a preservar y difundir su cultura, lo común es que ella se pierda en el espacio urbano y mestizado.

¿Cómo evitar la pérdida definitiva de la identidad étnica? ¿Vale ello la pena? En tal caso, ¿cómo armonizar progreso y tradición? Estas son algunas de las preguntas presentes en el debate en torno a la “cuestión indígena”, un debate en que la historia ha hecho aportes recientes que dan cuenta del trauma de la colonización y de las múltiples formas de resistencia que ésta provocó.

## **2.- MOVIMIENTO INDÍGENA: COLONIZACIÓN Y RESISTENCIA**

*Los espacios colonizados: violencia, sometimiento y etnocidio*

La presencia de españoles en América entrañó elevados grados de violencia hacia las etnias originarias. En el Caribe, el despliegue de terror y violencia injustificada terminó con la vida de cientos de miles de indígenas.

En otras partes, la violencia se encauzó hacia un objetivo más “provechoso”: someter a la población indígena a una virtual esclavitud para encuadrarla dentro de los

sistemas productivos impuestos por los españoles. En este contexto se inserta la conquista de la Araucanía, una región que resultaba atractiva por cuanto proveía oro (base de la economía del siglo XVI) y abundante mano de obra.

Por medio del “servicio personal” y luego, a través de la encomienda, los conquistadores se apropiaron de la fuerza de trabajo indígena, incorporándola a un modelo laboral de trabajo-masa, que maximizaba el número de trabajadores y la intensidad del proceso productivo<sup>14</sup>.

En el siglo XVII, el gasto con desgaste de la masa laboral indígena fue reemplazado por una concepción que privilegió el trabajo artesanal. Para ello se recurrió también a indígenas que por su estabilidad y mayor productividad, eran preferidos a los blancos y mestizos pobres. Cuando los indios escaseaban, los patrones los compraban o arrendaban.

Si los conquistadores-colonizadores se apropiaron físicamente de la población indígena, por medio de la religión, los misioneros buscaron apropiarse de su espíritu.

La evangelización fue otra modalidad de dominación colonial que nació de la incapacidad para aceptar un mundo fuera del cristianismo y una cosmovisión no europea. La negación del “otro” es propia de toda conducta etnocentrista.

Jorge Pinto considera que el etnocentrismo de los misioneros condujo, en el plano de los discursos, a actitudes etnocidas que no necesariamente se reflejaron en la práctica cotidiana. Su fe era tan absoluta que, ante ella, todo lo demás era relativo, lo que dio pie para justificar la violencia hacia quienes no aceptaban la “verdad revelada” u obstaculizaban su expansión<sup>15</sup>.

Lo anterior explica por qué hubo religiosos que en la Colonia propiciaron el uso de las armas como medio de conversión, y en el siglo XIX celebraron la ocupación de la Araucanía, por la posibilidad de establecer, en la paz garantizada por el ejército, misiones encargadas de evangelizar y civilizar<sup>16</sup>.

Esta relación entre evangelización y civilización siguió presente en el discurso misional del siglo XX. A través de la **Unión Araucana** (1926), los capuchinos insistieron en el abandono de las tradiciones ancestrales y la lucha por el “blanqueamiento” y la civilización, representada en la monogamia, la abstinencia alcohólica, la educación y la modernización agrícola<sup>17</sup>.

El que parte del movimiento mapuche hiciera suyo el discurso misional no significó

---

<sup>14</sup> Salazar, G. *Labradores, peones y proletarios*. Ed. SUR, Santiago 1985, p. 23.

<sup>15</sup> Pinto, Jorge. “Franciscanos y jesuitas en La Araucanía” en *Nütram*. n° 24, 1992. Pinto hace el distingo entre franciscanos (partidarios de la conversión) y jesuitas (partidarios de la salvación) lo cual explicaría por qué estos últimos fueron menos etnocidas que los primeros.

<sup>16</sup> Cit. en Pinto, J. *Op. Cit.* p. 11 y 13.

<sup>17</sup> Foerster, R.- Montecino, S. *Organizaciones, líderes y contiendas mapuches (1900 - 1970)*. Edic. CEM. Santiago 1988.

el abandono total de las antiguas cosmovisiones. Los indígenas no asimilaron el mensaje cristiano tal como lo hubiesen querido los franciscanos o capuchinos. Ese mensaje fue decodificado según sus propias concepciones. En tal sentido, los sincretismos religiosos pueden ser interpretados como una forma de resistencia, espiritual, frente al embate etnocentrista del conquistador.

### *La resistencia espiritual: adopción y adaptación. Los sincretismos religiosos*

En las regiones sometidas al Imperio español se impuso un “cristianismo oficial” (ligado estructuralmente a la dominación colonialista) que no pudo desterrar viejas concepciones religiosas del mundo indígena, las cuales se relacionaron, sincréticamente, con elementos del catolicismo popular europeo.

Surgió así un tipo de cristianismo que, según Maximiliano Salinas, recogió la experiencia histórica y espiritual de opresión de los indígenas y la fundió con el acervo religioso-espiritual de la España medieval y renacentista. El resultado, un cristianismo popular que ha penetrado en la cultura del bajo pueblo y se ha desarrollado en forma paralela (y en tensión) con el cristianismo central, jerárquico y distante<sup>18</sup>.

Para el autor referido, este “cristianismo de los pobres” fue una forma de resistencia a la hegemonía cultural del clero. Los símbolos que hizo objeto de su devoción (hasta el día de hoy) se construyeron, muchas veces, a partir de símbolos y tradiciones prehispánicas.

Por ejemplo, en las comunidades indígenas del norte, la “andinización” de símbolos cristianos ha permitido a los aymara y tarapaqueños conservar el sustrato religioso-espiritual de su identidad cultural. Se ha traspasado a la Virgen María funciones que los antepasados atribuían a la **Pachamama**, funciones maternas que protegen del mal y que el fiel invoca o agradece, en coloridas fiestas, peregrinando a los mismos lugares de culto prehispánicos que hoy están dedicados a la Virgen de la Tirana, las Peñas o Ayquina.

En el otro extremo de Chile, al sur del Bío Bío, las formas de resistencia fueron más allá de lo meramente espiritual: se trató de una resistencia militar que en no pocas ocasiones puso en jaque al español, en su primer siglo de irrupción.

### *La resistencia militante*

La penetración de las huestes hispanas en el actual territorio nacional provocó una reacción inmediata en las etnias afectadas, que se tradujo en resistencia militar.

Así, los **aymara** pusieron variados obstáculos a las tropas de Almagro pero quienes le sucedieron terminaron imponiéndose. Por su parte, los **atacameños** lucharon desde

---

<sup>18</sup> Salinas, M. *Historia del pueblo de Dios en Chile*. Ed. Rehue, Santiago, 1987.

sus pucarás, pero su escaso número (4000 indígenas), su impotencia frente al acero y las armas de fuego, su dependencia del agua y los alimentos, los doblegaron. Por último, los **diaguitas** ocultaron alimentos para impedir el avance de Valdivia y arrasaron La Serena, segunda ciudad fundada en Chile. Pero la escasez de alimentos y su reducido contingente demográfico (25.000 personas) los llevaron, también, a la derrota.

Entre el Aconcagua y el Cachapoal habitaban los **picunches**. Su población era más numerosa (110.000 indígenas) y su resistencia más prolongada. Estuvieron a punto de destruir Santiago en 1541. Durante cuatro años obstaculizaron al invasor: lo espionaron, lo atacaron y luego se refugiaron en los cerros, bosques o en sus fortalezas. Pero igual que en los casos anteriores, el agotamiento y la necesidad de alimentos llevó a los picunches a someterse y, en otros momentos, buscar una alianza con el español para convertirse en “indios amigos”.

La resistencia de las etnias originarias del norte y centro de Chile sirve de base para que un autor sostenga que los araucanos no fueron los únicos en oponerse al invasor y desarrollar técnicas ingeniosas para deshacerse de él. Para Sergio Villalobos, los araucanos no fueron una “raza guerrera” porque éstas no existen; su valor e ingenio habría arrancado de la estricta necesidad de defender tierra, mujeres, hijos, costumbres, concepciones de mundo, todo aquello que “un poco románticamente denominamos libertad”<sup>19</sup>.

Varias serían las razones de por qué el araucano resistió, exitosamente, al español. No era fácil someter a un número tan crecido de indígenas, ni sobreponerse al medio boscoso donde éstos habitaban, que dificultaba el avance de la caballería y facilitaba las tácticas de ocultamiento, la recolección de frutos y la mantención del ganado, tipos de economía que permitían el desplazamiento de población en situaciones de emergencia.

El menor grado de organicidad social de los mapuches, en relación a las etnias del norte, también fue un factor que facilitó la resistencia. Al no existir una autoridad central, los españoles no tenían con quién negociar o a quién asestarle un golpe definitivo.

Todas las razones mencionadas permitieron a los mapuches conservar sus tierras y obligaron al Imperio español a negociar con ellos a través de parlamentos, que reconocieron la independencia de la “nación mapuche” y regularon el comercio en la frontera.

De lo anterior se desprende otra conclusión: la guerra de Arauco tuvo su etapa más intensa en el siglo XVI; después, los choques armados fueron cada vez más esporádicos y las relaciones con la sociedad hispano-criolla y mestiza más intensas.

---

<sup>19</sup> Las cifras respecto al número aproximado de indígenas que existían en Chile antes de la llegada de los españoles, se han extraído de la obra de Villalobos, S. *Vida fronteriza en Chile*. Ed. Mapfre, Madrid 1990.

## *Frontera sur: la coexistencia pacífica. Redes comerciales indígenas y mercantilistas*

Entre el siglo XVII y la primera mitad del XIX, la sociedad mapuche experimentó transformaciones radicales respecto al siglo XVI. El comercio y el contacto permanente con los hispano-criollos y mestizos los transformó en una sociedad ganadera, mercantil y, en algunas regiones, con una agricultura desarrollada.

Al otro lado del Bío Bío, la sociedad colonial tampoco fue la misma después del siglo XVI. Oficiales, soldados, campesinos y comerciantes no vieron en los indígenas a enemigos mortales, sino que excelentes aliados comerciales; por eso privilegiaron el contacto pacífico. Esta sería la verdadera dinámica de las relaciones fronterizas, especialmente en el siglo XVIII.

La riqueza y complejidad de las relaciones fronterizas en el Bío Bío es un tema poco conocido, en parte, porque nuestra historia nacional siempre se ha escrito desde la capital. Contra esta tendencia han reaccionado autores como Sergio Villalobos, Jorge Pinto, Rolf Foerster, Leonardo León y Patricia Cerda, entre otros<sup>20</sup>.

Los primeros estudios de frontera consideraron a la Araucanía como un espacio aislado del concierto colonial, una zona marginal del Imperio<sup>21</sup>. Estudios recientes han modificado esa visión.

Jorge Pinto y Leonardo León han estudiado las relaciones entre las redes comerciales indígenas y las redes mercantiles de la sociedad hispano-criolla durante la Colonia, llegando a la conclusión que esas relaciones fueron intensas y crearon un espacio donde el mapuche participó activamente en un proceso económico que envolvió a las pampas, la Araucanía y el Cono Sur en general<sup>22</sup>.

El ganado y la sal de las pampas argentinas y los textiles araucanos (ponchos) eran adquiridos por comerciantes y hacendados hispano-criollos y mestizos, que los incorporaban a los mercados de consumo en las áreas urbanas de Concepción, el Valle Central y las minas del Norte Chico y el Alto Perú<sup>23</sup>.

En el mundo indígena, varias fueron las consecuencias de esta intensa relación comercial. Para sostener el comercio con los hispano-criollos, los mapuches “araucanizaron” a los pehuenche y a los indios de las pampas, con el objeto de controlar los pasos cordilleranos y el arreo de ganado desde Argentina.

<sup>20</sup> Cfr. Cerda, P. *Fronteras del sur: la región del Biobío y la Araucanía Chilena 1604-1883*. Ed. UFRO. Temuco. Villalobos, S. *Relaciones fronterizas en la Araucanía*. Ed. UC. Santiago, 1982.

León, L. *Maloqueros y conchavadores en la Araucanía y las Pampas*. Ed. UFRO. Temuco, 1991.

<sup>21</sup> Cfr. Villalobos (1982), *Op. Cit.* Pinto, Jorge. *Misioneros en la Araucanía*. CELAM. Bogotá, 1982.

<sup>22</sup> Pinto, Jorge. “Redes indígenas y redes capitalistas. La Araucanía y las pampas en el siglo XIX” en “Huincas y Mapuche, 1550-1900. Encuentros y desencuentros de dos sociedades”. Proyecto FONDECYT. Manuscrito.

<sup>23</sup> Los mapuche adquirirían de la sociedad colonial ropa, baratijas, azúcar, yerba, aperos de montar, herramientas, monedas de plata y principalmente alcohol (aguardiente y vino). A través de los parlamentos se regulaba el comercio entre las “dos naciones”.

De lo anterior se deriva otra consecuencia. La mayor concentración de ganado en algunos **loncos** y la necesidad de contar con dirigentes que negociaran con el poder colonial, intensificó la jerarquización social y la centralización del poder político<sup>24</sup>

En síntesis, el siglo XIX encontró a los mapuche en transición. No eran los del siglo XVI: la guerra, el comercio y el contacto permanente con la sociedad que estaba al norte del Bío Bío los habían transformado. Avanzaban hacia una sociedad señorial basada en la ganadería, con pleno desarrollo de la propiedad privada, la servidumbre y formas centralizadas de poder político.

La importancia económica que adquirieron los contactos entre la sociedad occidental y los mapuche obligó a crear toda una estructura de paz que otorgó, a los indígenas no sometidos, una autonomía que el siglo XIX borraría completamente.

### *Frontera sur: la Araucanía intervenida*

En el siglo XIX se produjo la anexión definitiva de la Araucanía al territorio chileno. Algunos autores consideran que para los mapuche el proceso tuvo un carácter dramático. Otros, en cambio, plantean que tal dramatismo es irreal, puesto que las relaciones fronterizas, fluidas y pacíficas desde el siglo XVII, allanaron el camino de la incorporación.

Posturas tan disímiles coinciden sí en un hecho: que las causas que motivaron la intervención del Estado chileno en la Araucanía tuvieron un profundo trasfondo económico<sup>25</sup>.

Instalada la República, los grupos de poder se articularon a los mercados capitalistas más desarrollados de Europa. En este esquema, la complementariedad entre las redes comerciales indígenas y coloniales era inviable, puesto que dejaban en manos de los mapuche, tierras que eran necesarias para ampliar la producción y sostener el modelo exportador<sup>26</sup>.

De la complementariedad se pasó a la subordinación de la economía indígena en favor de la capitalista. El proceso comenzó a evidenciarse en la primera mitad del siglo XIX.

Desde 1830 la economía chilena experimentó renovados impulsos. Las vinculaciones con el capital internacional se hicieron más estrechas por la llegada de

<sup>24</sup> Cfr. Bengoa, J. *Historia del Pueblo Mapuche*. Ed. SUR. Santiago, 1985. p. 62.

<sup>25</sup> Un planteamiento diferente es el que sostiene Arturo Leiva, quien atribuye gran importancia a hechos políticos, como la rebelión de 1859 que habría llevado al Estado central a temer que posturas federalistas a las cuales adhirieron los araucanos, tuvieran éxito a futuro. Cfr. Leiva, A. *El primer avance en la Araucanía, Angol, 1862*. Ed. UFRO. Temuco, 1984.

<sup>26</sup> Pinto, J. *Op. Cit.* p. 137

<sup>27</sup> Cfr. Cavieres, E. *Comercio chileno y comerciantes ingleses, un ciclo de historia económica de Chile*. Ed. UCV. Valparaíso 1988.

inversiones a Valparaíso y a los yacimientos de plata y cobre en el Norte Chico<sup>27</sup>.

El norte aumentó su demanda de alimentos (trigo y harina) y nuevos mercados se abrieron en California y Australia. El Valle Central y la región del Bío Bío atendieron esa demanda, pero las posibilidades de aumentar la producción y exportar hacia otros mercados (y con ello superar la crisis de 1857) se veían limitadas si no se incorporaban nuevas tierras<sup>28</sup>.

Las miradas se dirigieron entonces a la frontera sur. Allí estaban las tierras que, se dijo, asegurarían el desarrollo agrícola del país (a través de una eficiente política de colonización) y contribuirían al progreso, aportando el carbón que las fundiciones de cobre y los medios de transporte requerían.

En una primera etapa, la ocupación de tierras baldías se hizo en forma espontánea y con el consentimiento de los caciques que arrendaron o donaron tierras próximas a la frontera, en un tiempo en que la presencia aislada de los huincas no era vista con temor. Así fue como se ocupó el área costera de la Araucanía.

Posteriormente, el Estado pasó a dirigir el proceso, encargándole al ejército la misión de adelantar la línea de frontera. La primera etapa se cumplió en 1862 con la refundación de Angol. En 1878 se ocupó la margen del río Traiguén, en 1881 se llegó hasta el Cautín y en 1883 se refundó Villarrica.

### *El fin de la frontera: de resistencias y reducciones*

La fluidez de las relaciones fronterizas ha llevado a que algunos historiadores sostengan que no hubo resistencia a la penetración chilena en la Araucanía. Según Sergio Villalobos, todo se redujo a palabras altisonantes, amenazas y una que otra escaramuza. En síntesis, la convivencia fronteriza de siglos habría facilitado la integración de los mapuche a la sociedad chilena. El alcohol, el hierro y las baratijas pudieron más que los fusiles<sup>29</sup>.

La contrapartida de esta tesis no niega la importancia de las relaciones fronterizas en la creación de un ambiente de paz, pero recalca que esa paz descansó en el reconocimiento de la autonomía del pueblo mapuche<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> Jorge Pinto plantea que como solución a la crisis de 1857 el Estado se vio impulsado a ocupar la Araucanía para aumentar la producción, equilibrar la baja de precios y así sostener el modelo exportador. Cfr. Pinto, J. "ocupación de la Araucanía en el siglo XIX: ¿solución a una crisis del modelo exportador chileno?" en *Nütram*, año VI, N°3, Temuco, 1990.

<sup>29</sup> Villalobos, S. *Op. Cit.* p. 410.

<sup>30</sup> José Bengoa plantea en *Historia del Pueblo Mapuche*. Ed. SUR. Santiago, 1985, que sobre esa autonomía los mapuches afirmaron su identidad cultural que les permitió abrirse a los de afuera y prescindir del concepto "pureza racial", característico de las sociedades acosadas por otra. Si en este siglo una parte significativa de los mapuches cerraron filas en torno a su cultura fue por una reacción al acoso de la sociedad huinca.

Lo anterior permite comprender por qué los indígenas adhirieron a los ejércitos realistas en las guerras de independencia, a los grupos federalistas que se levantaron en 1851 y 1859, y al “desquiciado” proyecto monárquico de Orélie Antoine I. Todas estas fueron estrategias que intentaron neutralizar una mayor intervención de los gobiernos centrales en la Araucanía.

Cuando esa intervención se hizo más directa, la resistencia armada cobró dramática vitalidad. La presunción de que la “pacificación” costaría más vino que balas fue irreal.

La vía diplomática no resolvió la incorporación de la Araucanía al territorio nacional; si ella se llevó a cabo, fue por la fuerza. La “pacificación” fue un eufemismo y el discurso “civilizatorio”, que la justificó, oculta una historia de intereses económicos, intolerancia y violencia.

Particularmente violentos fueron los enfrentamientos en el alto Malleco. En 1869 el coronel Pinto desató una guerra de exterminio con incendios de rucas, captura de mujeres, arreo de animales y quema de sementeras. Poco pudieron hacer los indígenas frente a un ejército profesional. El testimonio oral da cuenta de la impotencia:

“Sufrimos mucho con esa guerra, nos robaron los ganados, nos incendiaron las rucas, se llevaron las mujeres, querían apoderarse de nuestra tierra. Los antiguos se defendieron con lanzas de coligües y boleadoras; los chilenos los mataban con fusiles ¿cómo iban a ganar? Se metió el chileno y nos acorralaron”<sup>31</sup>.

El ataque a las sementeras y el robo de ganado trajeron hambre y debilidad ante las enfermedades. Muchas familias optaron por huir, otras decidieron hacer las paces. El testimonio de los sobrevivientes, señala que de no haber sido por la actitud negociadora de los caciques “abajinos”<sup>32</sup>, los mapuche no se habrían quedado con tierras.

En la década de 1880 el avance sobre la frontera araucana era incontenible. Quien comandaba ese avance, el ejército, aparecía más invencible después de su experiencia en la Guerra del Pacífico. Aun así, ante la certeza de la derrota, se hizo el último llamado a defender la independencia.

El ataque exitoso a Traiguén animó la lucha, pero la respuesta sería demoledora. En 1881 se apagó el último levantamiento general de los mapuches, su independencia moría muriendo.

Tras el orden militar vino el jurídico. Por ley, las tierras ocupadas y mal habidas pasaron al fisco. A través de concesiones y remates, fueron adquiridas por privados que reprodujeron el sistema de latifundio del Valle Central, barriendo las esperanzas de los

---

<sup>31</sup> cit. en *Ibid.* p. 185.

<sup>32</sup> “Abajinos” es una denominación genérica que hace alusión a los mapuche que habitaban en las llanuras y lomajes que bajaban de la Cordillera de Nahuelbuta hacia el valle central. A los que vivían en las llanuras precordilleranas se les llamó “arribanos” y fueron los que opusieron más resistencia a la ocupación.

inmigrantes “populares” que se habían instalado en la frontera con la aspiración de convertirse en pequeños productores.

En su condición de derrotados, los mapuche carecieron de poder para negociar en condiciones ventajosas. Se abrió así un largo período de imposiciones legales cuya finalidad ha sido forzar la integración de la sociedad mapuche al Estado-Nación.

La ley radicó a los mapuche en **reducciones**, pequeñas extensiones de tierra, de dominio común e inalienable, que se entregaban a título de merced. El objetivo de ellas era arraigar a los indígenas, transformándolos en una sociedad agrícola; de ese modo podía ejercerse mayor control sobre ellos.

Como las reducciones se entregaron al cacique local, muchos jefes de familia no tuvieron acceso a ellas. Lo mismo ocurrió con etnias completas, como la mapuche-huilliche<sup>33</sup>. Quienes quedaron en esta situación terminaron empleándose en las haciendas recién formadas. Al poco tiempo se les unieron los mapuche “reducidos”, obligados por la estrechez del territorio asignado.

En resumen, en la década de 1880 se escribió el último capítulo de una historia que comenzó con la Conquista. Paralelamente, otra historia comenzaba a escribirse, una que dio cuenta del sometimiento de otras etnias, en las alturas andinas y en ultramar.

### *El avance sobre las nuevas fronteras: la chilenuzación de los Andes*

Después de una resistencia infructuosa, la etnia aymara fue incorporada a la estructura colonial peruana. Los indígenas fueron empleados como mano de obra minera en los “reventones de plata” de lo que hoy es Norte Grande de Chile, el más importante de ellos, Huantajaya, en las cercanías de Iquique.

Las penosas condiciones de trabajo contribuyeron al descenso demográfico de los aymara. La reducción de población se acompañó de una reducción del territorio de las comunidades o **Ayllu**, por la vía del despojo “ilegal” de los encomenderos, que centraron su atención en las tierras cultivables y en los pastizales, cuando la minería entró en decadencia.

El trabajo forzoso y los tributos, unidos al endeudamiento y la reactivación de la **mita** a mediados del siglo XVIII, debilitaron a las comunidades, pero no las acabaron. En las partes altas de la región andina continuaron reproduciendo su sistema de intercambio, en base a los denominados “pisos ecológicos”, y se insertaron en los circuitos comerciales abiertos por la minería alto peruana y luego boliviana.

---

<sup>33</sup> Entre 1884 y 1919 se entregaron 510.386,67 hectáreas a los mapuche de la región, lo que equivalía a un 6,39% del total de tierras. A 40.000 mapuches - huilliches de Osorno y Llanquihue no se les entregó merced alguna. Cfr. Aylwin, J.- Castillo, E. “Legislación sobre indígenas en Chile a través de la Historia”, Documento de Trabajo n° 3. Comisión chilena de derechos humanos, diciembre 1990.

Durante la República, las comunidades sobrevivieron porque eran funcionales a un sistema que seguía manteniendo muchos rasgos de su pasado colonial. En este sentido, el pago de tributo indígena era fundamental para abastecer las siempre escuálidas arcas fiscales.

Después de la Guerra del Pacífico, la región andina de Tarapacá y Atacama quedó bajo jurisdicción chilena. El hecho coincidió con la intensificación de un proceso económico que transformaría a todo el Norte Grande.

En la segunda mitad del siglo XIX el capitalismo se instaló en las costas y la depresión intermedia de las actuales Primera a Tercera regiones, convocado por la plata, el guano, el salitre y el cobre. La población andina se insertó en el proceso como mano de obra asalariada, iniciándose así lo que ha sido una constante en la historia aymara de este siglo: el despoblamiento de las comunidades en favor de los centros mineros y ciudades costeras.

Bajo el contexto económico y administrativo impuesto por las autoridades chilenas, las comunidades no tenían razón de ser. Al contrario de lo que ocurrió en la frontera sur (donde se impuso un sistema comunitario ajeno a la tradición mapuche), en la frontera norte no hubo un reconocimiento legal de las comunidades vernáculas, conformadas y constituidas tanto por la organización comunal como por las unidades familiares, asentadas en un territorio colectivo<sup>34</sup>.

Para Van Kassel, la muerte jurídica de las comunidades, amparada en la falacia de la supuesta igualdad legal de los indígenas con el resto de los ciudadanos del país, no fue más que un atentado etnocida que debilitó las viejas solidaridades, porque al privatizarse la tierra surgieron los conflictos por deslindes y el acceso al agua y pastizales<sup>35</sup>.

En otras partes del territorio incorporado a Chile, los cambios fueron un poco menos dramáticos. Bajo un espacio “chilenizado”, las comunidades de Atacama continuaron reproduciendo lo que José Luis Martínez califica de vieja tradición política dentro del mundo andino, la “negociación” con el Estado dominante, para asegurar su continuidad como sociedad<sup>36</sup>.

Las comunidades atacameñas se mostraron favorables a su incorporación a Chile porque de ese modo se libraban de los tributos que debían pagarle al Estado boliviano, ya que al chileno sólo le interesaba controlar la tierra y sus riquezas y no a los indígenas, que por su pobreza eran poco atractivos para el fisco.

<sup>34</sup> Según Castro y Martínez, la organización comunal descansa en la organización y control de los recursos naturales y sociales, la identidad grupal, la representación y defensa de los intereses comunales y en manifestaciones políticas, como la asamblea comunal. Cfr. Castro, V.- Martínez, J. “Poblaciones indígenas de Atacama” en Hidalgo y otros *Etnografía* Vol. 2. Ed. Andrés Bello, Santiago 1996. p. 79

<sup>35</sup> Van Kassel, J. *Holocausto al progreso: los aymara de Tarapacá*. Centro de estudios y documentación latinoamericanos, Amsterdam, 1980. p. 227 y ss.

<sup>36</sup> Martínez, J. “Relaciones y negociaciones entre las comunidades indígenas de la región atacameña, el Estado y la sociedad chilenos. Siglos XIX y XX” en *Proposiciones* n° 24. Ed. SUR, Santiago, 1994.

La inserción de los indígenas atacameños en la economía minera se hizo sobre la base del control indígena sobre sus propios espacios y recursos. Arrieros indígenas trasladaron desde Argentina y Bolivia vacunos y mulas a los yacimientos de plata de la actual Tercera región. Hacia Chuquicamata se llevó la llareta, planta que al combustionarse proveyó de energía al mineral.

Toda esta dinámica de intercambio no era nueva para las comunidades, que desde hacía siglos venían relacionándose con la sociedad occidental. Estos contactos pudieron haber allanado la dominación (los indígenas se cautivaron y dependieron de los bienes occidentales)<sup>37</sup>, pero no desestructuraron la vida comunitaria.

En el mundo andino existe una complementariedad de géneros que permitió al hombre relacionarse con la “modernidad” y a la mujer aferrarse a la tradición (sembrando lo que el varón intercambiaba); hasta hoy “es a través de ella y su fecundidad, asociada a la tierra, la que permite la sobrevivencia del grupo y su perpetuación en el tiempo y el espacio”<sup>38</sup>.

Perpetuar el modo de vida tradicional se ha hecho cada vez más difícil, por el acelerado desarrollo de la minería y la presencia estable de autoridades civiles y militares.

La expansión de la minería (azufrera y cuprífera) generó disputas por tierras y aguas entre las compañías y las comunidades altoandinas. La pérdida de estas últimas ha llevado a un progresivo abandono de los cultivos, lo que explica la emigración de los jóvenes y la desestructuración de la familia indígena.

La reproducción cultural también se ha visto perjudicada por una política estatal que desde los años veinte se ha propuesto “chilenizar” la zona, restringiendo el acceso hacia los países fronterizos y educando a los niños bajo concepciones “occidentales”, en un idioma, historia y cultura que no son los de sus antepasados.

### *El avance sobre las nuevas fronteras: la chilenización de ultramar*

La década de 1880 conoció también del sometimiento de otra etnia a la nación chilena; se trató de los pascuenses o **rapa nui**.

Pese a su lejanía y pobreza, Pascua no estuvo al margen de las ambiciones colonialistas. En 1862 los nuevos “traficantes de esclavos” llevaron a las guaneras del Perú entre 1000 y 1500 rapa nui, en calidad de mano de obra forzada. La mayoría no volvió jamás, entre ellos los traductores de la única forma de escritura que existe en la Polinesia, la que podría revelar el contenido de lo que debió ser una civilización floreciente. Su desconocimiento acrecienta el misterio<sup>39</sup>.

---

<sup>37</sup> Villalobos, S. *Op Cit.* p. 556.

<sup>38</sup> Arévalo, P. “Persistencia de los patrones de subsistencia y opuestos complementarios en el espacio económico del extremo Norte de Chile” en *Comunidades indígenas*. USACH. Santiago, 1992. P. 52.

<sup>39</sup> Cfr. Mízón, L. “El último secreto de la Isla de Pascua” en *Correo de la Unesco*. Diciembre de 1997.

En Pascua quedaron menos de 300 indígenas que, de facto, estuvieron sometidos a un protectorado francés dirigido por los dueños de la única estancia ovejera que existía en la isla. Esta era la situación en el momento en que emergió la propuesta de anexar la isla a Chile, aduciendo objetivos estratégicos.

En 1888 se firmó un acta entre el rey de Rapa Nui y Policarpo Toro, representante del gobierno chileno. En ella, los pascuenses aceptaron la soberanía chilena a condición de no renunciar a sus autoridades locales. El compromiso no sería respetado.

La lejanía y otras prioridades hicieron que el gobierno continental dejara al arbitrio de la Compañía Explotadora de la Isla de Pascua (fundada por Enrique Merlet) el control de Rapa Nui. Las consecuencias fueron predecibles. La compañía de Merlet, que arrendó tierras y ganado ovino fiscal, fue el centro de la única actividad exportadora de la isla. Hasta 1953 fue la “ama y señora” de Pascua, desconoció las autoridades locales, obligó al trabajo forzoso de los indígenas, y restringió su circulación.

El Estado chileno reaccionó, movido por los abusos (denunciados por representantes de la Armada), pero también por el temor que la Compañía fuera a quedarse con las tierras que arrendaba. Este conflicto llevó a que en 1933 el Fisco inscribiera a su nombre la totalidad de las tierras de Pascua. La medida desconoció el derecho de los pascuenses a poseer la tierra de sus ancestros, generando la protesta de éstos y su reivindicación histórica: que el Estado devuelva la tierra que no le pertenece.

En la segunda mitad de este siglo, el Estado ejerció mayor presencia en la isla, primero, a través de la Armada y luego, por medio de autoridades civiles que se instalaron allí una vez aprobado el decreto que la convirtió en Departamento. La mayor presencia del Estado significó también el arribo de un número mayor de **mauku**, término con que los pascuenses se refieren a los chilenos. El concepto alude a maleza o pasto que brota de la nada y que es indeseable en cuanto ocupa un espacio útil.

El término **mauku** simboliza el sentimiento de acoso de los isleños por parte de los continentales. Se dice que los chilenos se llevan el dinero que la isla produce, que ocupan cargos públicos que debieran estar en manos de pascuenses y que nunca se han incorporado realmente a la isla, porque no participan del contacto habitual que existe dentro de la sociedad<sup>40</sup>.

Este rechazo hacia los chilenos se aprecia también en otras etnias. Pero en los pascuenses la visión crítica de los extranjeros se ve atenuada por la importancia del turismo como generador de divisas. Al igual que en el siglo XVIII, los rapa nui siguen vendiendo a los extranjeros artesanía en concha, madera y piedra. A diferencia de otras islas polinésicas, los isleños asumieron el control del comercio y de una parte importante de la infraestructura turística.

---

<sup>40</sup> Mc Call, G. “El pasado en el presente de Rapanui” en Hidalgo y otros, *Op. Cit.* p. 38.

Pese a que la muerte, las depredaciones, deportaciones y enfermedades han provocado una ruptura con el pasado (un desconocimiento de la historia); pese a los galanteos con los extranjeros y la facilidad para adoptar su forma de vida, estudios recientes concluyen que los rapa nui conservan aún formas tradicionales de cohesión social que se fundan en el parentesco, la cooperación económica y el uso familiar de la tierra.

Un autor concluye que mientras los pascuenses mantengan el control de su tierra, continuarán controlando su destino<sup>41</sup>. En el continente, la etnia más numerosa también está convencida de ello; por lo mismo, su reivindicación histórica se ha centrado en la lucha por mantener un espacio donde cobijar la vida y recrear la cultura.

### *De la imposición a la identificación: la reducción mapuche como espacio de identidad y resistencia*

Pese a ser una institución que no emanó del seno de la sociedad mapuche (sino que se impuso por la fuerza tras la ocupación militar de la Araucanía), las reducciones se han convertido en una pieza clave dentro del armado identitario y cultural de la “gente de la tierra”; de hecho, una de sus principales reivindicaciones en este siglo ha sido la defensa de este territorio de las ambiciones de los particulares.

La radicación convirtió a los mapuche en agricultores pobres y los obligó a cambiar costumbres, formas de producción y normas jurídicas. Aun así, la etnia ha sobrevivido, justamente, gracias a que las reducciones se transformaron en un espacio de resistencia donde se han desarrollado procesos de construcción, reconstrucción y afirmación cultural. Al igual que otras etnias, el mapuche del siglo XX adoptó elementos de la sociedad dominante y preservó su identidad.

Los mapuche utilizaron medios institucionales para defender el espacio reduccional de la amenaza de la subdivisión y/o enajenación, y terminar con las usurpaciones. Las organizaciones mapuche (cuyos orígenes se remontan a 1910), aunque contestatarias, no han propuesto subvertir el orden establecido<sup>42</sup>, al contrario, trataron de “infiltrarlo”, ocupando plazas en los poderes públicos. Incluso existieron organizaciones que, al amparo misional, han propuesto el abandono total de la cultura indígena y su “blanqueamiento” definitivo en aras de la civilización<sup>43</sup>.

Pero quienes han estudiado al movimiento indígena concuerdan en que este tipo de posturas fue minoritario. La mayoría de las organizaciones mapuche habría defendi-

---

<sup>41</sup> *Ibid.* p. 44

<sup>42</sup> Cfr. Marimán, P. “Tierra y legislación indígena: una mirada desde el programa del movimiento mapuche (1910 - 1970). En *Liwen* n°4. Centro de estudios y documentación mapuche Liwen, Temuco, 1997, p. 146.

<sup>43</sup> Tal fue el planteamiento de la “Unión Araucana” que desarrolló su acción en la primera mitad del siglo XX, Cfr. Foerster, R. - Montecino, S. *Organizaciones, líderes y contiendas mapuches (1900 -1970)*, op. cit., p. 52.

do, bajo diferentes ópticas, un proyecto de sobrevivencia cultural. En defensa de ese proyecto, los indígenas utilizaron medios emanados de la propia legislación huinca; aun así, sus propuestas se estrellaron contra un cúmulo de intereses. En los años cuarenta, grupos regionales promovieron una campaña para terminar con las reducciones que, se decía, “asfixiaban” a Temuco, porque impedían un manejo “científico” de su entorno. La recurrida imagen del “salvajismo” indígena volvía a justificar un abierto etnocidio.

Así como las imágenes peyorativas del mundo indígena se reprodujeron una y otra vez a lo largo de este siglo, la ley huinca también se ciñó a ciertas constantes. La más notoria fue aquella que pretendía disolver comunidades para crear propiedades individuales y enajenables, de las que se apropiaron particulares no mapuches<sup>44</sup>.

La reacción frente a las pretensiones del legislador no fueron unívocas. Hubo organizaciones que se mostraron conformes con subdividir la comunidad y privilegiar la explotación individual. Pero donde sí hubo consenso fue en otros tópicos, como la defensa de la cultura originaria, la recuperación de tierras usurpadas, la radicación indígena en tierras fiscales, el acceso a la educación y al crédito estatal y, sobre todo, la idea de no enajenar las tierras reduccionales.

Pese a los consensos, el punto débil del movimiento indígena sería su marcado caudillismo. Salvo el período dominado por la **Corporación Araucana** (1946-1960), el resto del siglo está marcado por la atomización y la división político partidista. Contra ello luchó la Corporación Araucana, que presentó candidatos a regidores y diputados en el segundo gobierno de Carlos Ibáñez (1952-58), y, además, logró colocar a uno de los suyos (Venancio Coñuepán) a cargo del Ministerio de Tierras y Colonización. Fuerza es reconocer, sin embargo, que grupos mapuche críticos de la Corporación Araucana atribuyen sus aparentes “éxitos” a una política de colaboración con el Estado nacional y con la derecha política que ellos no vacilan en calificar de asimilacionista. Como sea, en la década de 1960 la Corporación perdió protagonismo, reemergiendo una atomización organizacional que se vio potenciada por las divisiones en torno al tema de la reforma agraria.

Organizaciones de izquierda consideraron insuficiente la reforma de Eduardo Frei Montalva, que insertó el problema indígena dentro del marco general del minifundio campesino. En este momento cobraron legitimidad vías no institucionales de resolución para la cuestión indígena, como la toma de terrenos para recuperar lo usurpado o, en casos específicos, la apropiación de tierras fiscales, en concordancia con la política de “ir a la conquista de más tierra”, defendida por la Federación Nacional Campesina e Indígena de Chile y el Movimiento Campesino Revolucionario. Estudios de la época resaltaron

---

<sup>44</sup> Entre 1931 y 1971, 832 comunidades fueron divididas. La ley 4111 de 1931 establecía que con 1/3 de aprobación podía iniciarse el proceso de división. Otras leyes que facilitaron este proceso se dieron en otros períodos: 1943 y 1961. Cfr. Aylwin, J.- Castillo, E. *Op. Cit.* y Lipschutz, A. *La comunidad indígena en América y en Chile*. Ed. Universitaria. Santiago, 1956. p. 144.

como una particularidad la conducta de los campesinos indígenas que ocuparon tierras, ya que el resto del campesinado se movilizó en torno a reivindicaciones económicas más que territoriales<sup>45</sup>.

¿Cómo debieran interpretarse estas movilizaciones indígenas? Algunos consideran discutible creer que ellas respondieron a factores ideológicos, como la “conciencia de clase”<sup>46</sup>. La radicalización política creó un clima favorable a las tomas, pero ellas se habrían enmarcado dentro de un proyecto étnico de recuperación de espacios históricos y culturales, tal y como se dio en otras partes de la América andina e indígena.

Durante la Unidad Popular el movimiento indígena encontró alguna recepción a sus demandas. La ley 17.729 reconoció a los indígenas como individuos que, habitando en cualquier parte del territorio, formaban parte de un grupo cuyas características lingüísticas, formas de trabajo, normas de convivencia, costumbres y religión diferían de la generalidad de los ciudadanos de la república. Este mismo cuerpo legal creó el Instituto de Desarrollo Indígena, cuya finalidad era promover el desarrollo social, económico, educacional y cultural de los indígenas. Asimismo, en materia de tierras la ley impidió la división, mientras que las expropiaciones permitieron la recuperación de tierras en litigio. Estas medidas constituyeron un avance notorio y un cambio de rumbo que no logró sostenerse en el tiempo, ya que cuando los militares irrumpieron con su proyecto de modernización capitalista, una vez más se puso en entredicho la continuidad cultural del pueblo mapuche.

### 3.- LAS ETNIAS DESAPARECIDAS

#### *La extinción bajo el antiguo orden: pestes, mestizaje y genocidio*

A causa de la conquista, las etnias indígenas experimentaron un dramático descenso demográfico. Un estudio clásico señala que hacia 1650 la población originaria de América llegaba a 11 millones; antes de que los españoles se instalaran en el continente esa cifra habría bordeado los 90 a 112 millones<sup>47</sup>.

Los primeros espacios conquistados fueron los más impactados. En el Caribe, los indígenas fueron literalmente exterminados. En este caso se trató de una muerte directa. Sin embargo, el genocidio mayor se dio por otras causas: malas condiciones de trabajo,

<sup>45</sup> Cfr. Affonso, A y otros. *Movimiento campesino chileno*. ICIRA, Santiago 1970, p. 233 y ss.

<sup>46</sup> Cfr. Berdichevsky, B. *Antropología aplicada e indigenismo en los mapuches de Cautín*. Santiago, 1971, sin datos de edición.

<sup>47</sup> Sánchez Albornoz, N.: *La población de América Latina*. Ed. Paidós. Buenos Aires, 1968, p. 29.

“desgano vital” ante el sometimiento y destrucción del tejido social y cultural, disminución de la natalidad por traslados forzosos de población masculina, mestizaje y epidemias.

El último factor fue uno de los más importantes; sin embargo, atribuir a los virus y bacterias la responsabilidad de la hecatombe demográfica, de algún modo mitiga la responsabilidad que le cupo en ésta al orden colonial. Es “como si los agentes microbianos, por su sola esencia biológica pudieran descontextualizarse de lo histórico-social”<sup>48</sup>. Si las epidemias tuvieron un efecto devastador fue porque existía un medio que las viabilizaba y potenciaba.

El otro factor importante en la desaparición de las etnias fue el mestizaje. El encuentro sexual entre españoles e indígenas fue violento, y de esa violencia emergió el mestizo. Racial y culturalmente se trató de un “otro” que con frecuencia renegó de sus raíces indígenas para adoptar un remedo de cultura hispana. El aumento de la población mestiza fue directamente proporcional al descenso de las etnias originarias.

Chile no estuvo excluido del proceso descrito. La presencia española en estas tierras provocó también un severo descenso de la población indígena, que debió bordear el millón al iniciarse la conquista. Sólo después de la Independencia se recuperaría el nivel demográfico de 1536<sup>49</sup>.

Los factores de muerte ya los conocemos. En el Norte Chico y la región central, la guerra, el hambre, los malos tratos de los encomenderos, las enfermedades, el mestizaje y el enrolamiento en las huestes que lucharon contra los araucanos, hicieron estragos. En el siglo XVII el contingente demográfico indígena al norte del Bío Bío habría descendido en un 90%<sup>50</sup>.

Al incorporarse al orden colonial, los sobrevivientes diaguitas y picunches debieron enfrentar una política de asimilación que terminó con su homogeneidad étnica y los desintegró social y culturalmente. Tras de sí dejaron un pasado valioso del cual nos hemos enterado por las crónicas y el paciente trabajo arqueológico.

Mientras se producía el exterminio físico y cultural de las poblaciones sujetas al viejo orden colonial, en las regiones marginales del imperio, las bandas canoeras y pedestres de Aysén y Magallanes continuaban impertérritas, ignorantes del futuro que les esperaba bajo el nuevo orden capitalista.

---

<sup>48</sup> Fraguas, N. - Monsalve, P. “Procesos de conformación de la identidad étnica en América Latina” en Lischetti, M (comp.) *Antropología*. EUDEBA. Buenos Aires, 1997, p. 195.

<sup>49</sup> Cfr. Mellafe, R. “Evolución de la población” en García Vidal (ed), *Chile: esencia y evolución*. Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Chile. Japón, 1982, pp. 71-82.

<sup>50</sup> Villalobos, S. *Historia del pueblo chileno* vol. II. Ed, Zig Zag. Santiago, 1981. p. 105.

*La extinción bajo el nuevo orden: el capitalismo, las últimas fronteras y el “canto del cisne”*

Habría que ser poeta para describir la inquietante soledad de las praderas magallánicas; habría que ser historiador, para dar cuenta de las transformaciones que se operaron en la región con la introducción de la economía minera y ganadera; pero basta ser humano, para conmoverse ante el genocidio de etnias enteras, de culturas silenciadas en los llanos australes.

Por más de trescientos años, los contactos entre los indígenas de Aysén y Magallanes y los europeos fueron esporádicos. La lejanía y las condiciones climáticas hicieron de esta parte del imperio español una zona marginal. No por ello dejó de estar presente en el imaginario popular, que la concibió como una tierra “de césares”.

Ya en los tiempos de Magallanes se comenzaron a tejer las primeras leyendas. En la búsqueda de un paso hacia el Mar del Sur, los acompañantes del marino portugués creyeron encontrarse con una raza de hombres gigantes que llamaron **patagones**. Se trataba de la etnia **aonikenk** (o tehuelche), que junto a la **selknam** (u ona), deambulaba con libertad por sus australes tierras. Ambos pueblos se agrupaban por familias patrilineales; la cacería era la actividad social y económica más importante.

Otras etnias de esta vasta región se desplazaron en sus canoas por las desmembradas costas comprendidas entre Puerto Montt y la boca occidental del Estrecho de Magallanes. Se trató de los **chonos**, **qawasqar** y **yámanas**.

Los chonos fueron los primeros ocupantes de Chiloé. En el siglo XVII abandonaron totalmente la isla, presionados por los **cuncos**. A fines del siglo XIX desaparecieron como etnia, mestizándose con los cuncos del norte y los qawasqar del sur.

Los qawasqar (o alacalufes) fueron vistos y mencionados como pueblo por primera vez por miembros de la expedición de Joaquín de Loaysa en 1526. Los yámanas (o yaganes) fueron los habitantes más australes del mundo; manejaban cinco dialectos de un mismo idioma. Entraron en contacto con los europeos en 1624 y, según las crónicas, se trató de un encuentro violento que acabó con la vida de 17 holandeses.

El hecho referido fue excepcional, por su violencia y porque no era habitual el contacto con marinos extranjeros. Las tierras y canales australes estuvieron por siglos liberadas de asentamientos o de planes colonizadores europeos. Los escasos encuentros tenían el encanto de aquello que se sabe único; de ahí la curiosidad, de ahí la leyenda.

Pero el halo de misterio que envolvió a la zona comenzó a desaparecer a fines del siglo XVIII. Las autoridades borbónicas emprendieron el reconocimiento de la región (la norpatagónica, por ejemplo), llevados por el temor de que ésta fuera ocupada por los

enemigos de España. Además hubo un objetivo económico: ampliar la frontera en busca de recursos y pasos transoceánicos<sup>51</sup>.

Así se fue transformando el paisaje austral. El espacio económico-político se sobrepuso al mítico. La tarea modernizadora la emprendió el Estado borbón y la concluyeron los Estados nacionales de Chile y Argentina, que por el expediente de las concesiones, dejaron las tierras magallánicas bajo el control de los buscadores de oro y las compañías ganaderas. Las consecuencias para las culturas indígenas fueron desastrosas. La misma marginalidad que las había preservado del colonialismo hispano sirvió, en los siglos XIX y XX, para ocultar la agonía de su exterminio.

En 1843 se fundó el fuerte Bulnes y en 1848, Punta Arenas. En sus primeros años, la vida comercial de los colonos giró en torno al intercambio con los indígenas: los qawasqar llevaron pieles de lobo y los tehuelches, plumas y quillangos, o capas de cuero de guanaco<sup>52</sup>. A cambio, los indígenas adquirieron alcohol y armas de fuego. Por ocupar un espacio que quedaba fuera de los intereses de los colonizadores, yámanas y qawasqar sólo se vieron afectados indirectamente a causa del contacto progresivo con individuos de la cultura no autóctona, loberos y buscadores de oro, que los proveyeron de alcohol y los contagiaron con la mortal tuberculosis.

La situación no fue la misma para aonikenk y selknam. Ellos sí ocupaban un espacio ambicionado, tanto por intereses geopolíticos (el Estado chileno y argentino disputaron el mismo territorio), como netamente mercantiles. En un principio, la relación chileno-tehuelche fue pacífica y se basó en el intercambio comercial. Los chilenos no manifestaron interés en enemistarse con los indígenas porque éstos los superaban en número y porque Argentina podría haberse aprovechado de estas rencillas para ganar aliados a su causa.

Durante más de una década Punta Arenas vivió de las plumas y las pieles que traían los tehuelches. Al intensificarse los intercambios, el consumo alcohólico de los aonikenk creció en forma desmesurada, con consecuencias devastadoras. La mezcla de alcohol y armas de fuego fue mortífera: toda borrachera concluía, por lo común, con la muerte de algún indígena y posteriores venganzas<sup>53</sup>. Igual que en otras partes de América, el alcohol fue un excelente instrumento de dominación; la adicción anuló toda posibilidad de acción y reacción.

Hacia fines de la década de 1870, nuevos factores se sumaron al exterminio étnico. Magallanes se incorporó a los circuitos noratlánticos, satisfaciendo parte de la de-

---

<sup>51</sup> Navarro, P. *Ciencia y política en la región norpatagónica: el ciclo fundador (1779 - 1806)*. UFRO, Temuco, 1994.

<sup>52</sup> El quillango era una capa confeccionada con las pieles de pequeños guanacos (chulengos). Una vez cortadas, las pieles eran entregadas a las mujeres para que las unieran y pintaran. Cfr. Prieto, A. "La confección de capas pintadas en la Patagonia" en *El Mercurio*, Diciembre 7, 1997. P. E-27 .

<sup>53</sup> Martinic, M. "Los Aonikenk, cazadores terrestres de la patagonia austral" En Hidalgo y otros. *Op. Cit.* p. 159.

manda lanera generada por el mercado inglés. Para ello, el gobierno otorgó concesiones territoriales en la Patagonia, que fue dividida en pequeñas fracciones<sup>54</sup>. Primero se ocupó el litoral patagónico y luego se avanzó hacia el interior. Los colonos ovejeros terminaron expulsando a los tehuelches trashumantes de sus pastos ancestrales.

Hacia 1890 el gobierno agrupó a los pocos indígenas que sobrevivían en una reserva territorial de 10.000 hectáreas. Pero el “hambre de tierras” hizo imposible la mantención de los indígenas en los territorios que se les había asignado. Los tehuelches protestaron, no en una forma “salvaje”, sino como el colonizador quería: “civilizadamente” plantearon sus reclamos al gobierno central. En dos ocasiones, el cacique Mulato se entrevistó con el Presidente. Cuando regresó trajo promesas que jamás se cumplirían, y junto con ellas un brote de viruela que, en medio de la indiferencia generalizada, acabaría con él, su familia y los suyos.

El caso de los selknam no fue menos dramático. En 1879 se descubrió oro en Tierra del Fuego. En los años 80 se inició la explotación de ovejas, a cargo de compañías, cuyos principales accionistas se encontraban en Valparaíso y Punta Arenas. De inmediato se produjeron conflictos con la población originaria, que no entendió de propiedad privada. Así como cazaban guanacos también comenzaron a cazar ovejas. Los chilenos, para quienes los onas eran “ladrones salvajes”, reaccionaron, construyendo cercas de alambre y puestos donde establecieron una vigilancia permanente.

Se recurrió a misioneros anglicanos para que actuaran como “mediadores”, pero nada dio resultados. En la década de 1880 selknam y colonos reactualizaron los malones y malocas de la época de la conquista<sup>55</sup>. Los enfrentamientos siempre favorecieron a los chilenos: bandas armadas por la Compañía Explotadora de Tierra del Fuego castigaron el abigeato con la muerte. Las “cacerías” tuvieron una terrorífica efectividad<sup>56</sup>.

Los que sobrevivieron fueron deportados a la isla Dawson, donde existía una misión cristiana. Para los colonizadores ésa era la mejor solución para acabar con el problema indígena. Era más económica que gastar en balas y tenía la ventaja adicional de “liberar” la conciencia de odiosas culpabilidades. Reducidos en misiones, los onas enfermaron y rápidamente comenzaron a morir, ante la impotencia de sus protectores católicos y protestantes. La extinción fue total.

---

<sup>54</sup> Para el Estado chileno, igual que el Estado colonial, los espacios de caza y recolección eran tierras baldías que le pertenecían y que, legítimamente, podía conceder, sin importar la población originaria que durante siglos había dominado ese territorio, sobre la base de ciclos anuales de vida vegetal y animal, que eran aprovechados en su debida oportunidad.

<sup>55</sup> Martinc, M. “Panorama de la colonización en Tierra del Fuego entre 1881 y 1900” en *Anales* Vol. 4. Instituto de la Patagonia. Punta Arenas, 1973, p. 24.

<sup>56</sup> Con el mismo propósito salieron aventureros como K. Popper, al cual el gobierno de Buenos Aires pagaba por cada “pieza” de indio muerto.

## *Incompatibilidades de la modernidad*

En el siglo XX la vida nómada desapareció de las tierras y canales australes; las etnias que durante siglos habían practicado esta forma de vida se extinguieron. Para desgracia de los 12.000 indígenas que habitaban la región hacia mediados del siglo XIX, su escaso grado de “sofisticación” cultural hizo incompatible su modo de vida con el modo de producción capitalista, lo cual alimentó el prejuicio y la violencia. A algunos (como los tehuelches) se les temió, pero rápidamente los colonos los conquistaron, para luego, en medio de la indiferencia, observar su exterminio. A los onas, en cambio, no se les temió, más bien se les consideró un obstáculo. Los cazaron y deportaron; las enfermedades terminaron cerrando el triste proceso del genocidio.

En la muerte de estos pueblos, la mayor parte de la responsabilidad recayó en los ciegos e inhumanos intereses mercantiles. Pero también el Estado y la sociedad de la época fueron responsables; el Estado, por no diseñar una política de colonización que salvaguardara a las etnias originarias; la sociedad, seguramente inspirada en los principios del “darwinismo social”, por tolerar la muerte de los indígenas sin hacer nada, salvo contadas excepciones, por detener el exterminio.

Algunos qawasqar y yámanas aún sobreviven, pero su número es ínfimo<sup>57</sup>. El mestizaje está haciendo desaparecer los últimos vestigios de estas etnias. Ya en 1973 una investigación concluía que, tanto la transculturación como el mestizaje, se estaban realizando en forma no conflictiva y progresiva<sup>58</sup>. En la actualidad casi nada queda del antiguo estilo de vida canoero. En 1968 el gobierno les construyó casas a los qawasqar, radicándolos en Puerto Edén. Veinte años después, la vida nómada se reduce a dos o tres meses fuera del hogar, cazando lobos marinos y nutrias. El producto de la cacería pasa a manos chilenas a cambio de un atado de cigarrillos, aguardiente o vino. En materia de abusos, nada nuevo bajo el sol.

En Puerto Edén también existe un alto contingente de población chilota, para quien la identidad qawasqar resulta poco importante, si no indeseable. Los indígenas adultos hablan un castellano pobre, pero los niños, gracias al influjo de la escuela, no tienen ese problema. Como contrapartida, se teme la progresiva desaparición de la lengua vernácula<sup>59</sup>.

Para sobrevivir, los descendientes de los antiguos “nómadas del mar” demandan más ayuda pública: “Las palabras no nos valen de nada, nuestros hermanos desean hechos concretos”, señalaba una proclama de 1992, que criticaba la falta de apoyo del gobierno

---

<sup>57</sup> Según el censo de 1992, existen en el país 101 qawasqar y 64 yámanas.

<sup>58</sup> Ortiz, O. “Los yámanas, veinticinco años después de la misión Lipschutz” en *Anales* n° 4. Instituto de la Patagonia, Punta Arenas, 1973. p. 102.

<sup>59</sup> Salas, A. “Lenguas indígenas de Chile” en Hidalgo y otros, *Op. Cit.* p. 278.

de Patricio Aylwin<sup>60</sup>. Para un autor, las raíces de esta dependencia se encuentran en una mal planteada política de transculturación y ayuda, que incapacitó a los indígenas de Magallanes para valerse por sí mismos, “convirtiéndolos en mendigos dependientes de una ayuda que quizá no necesitaban”<sup>61</sup>.

En síntesis, en el extremo sur, la vida cultural de los últimos indígenas está desapareciendo. Esta muerte cultural es parte de una larga historia de exterminio que, *ad portas* del siglo XXI, llega a su fin. ¿Qué actitud asumir frente a los hechos consumados? Más allá del conocimiento “duro”, hay aquí una historia que remece la conciencia y devela las prioridades de un país que, afanosamente, ha querido incorporarse a la modernidad.

En un momento, ello significó, si no promover, a lo menos tolerar un despliegue de violencia e inhumanidad que superó toda barrera de lo “civilizado”. A fin de cuentas, se trataba de “salvajes” que estarían mejor bajo el alero de la cultura occidental.

Es bajo ese alero, sin embargo, que las culturas indígenas terminaron extinguiéndose. ¿Qué queda de ellas?: la palabra y la leyenda. Quien vivió, a través de la palabra dio vida a las cosas (las nombró) y recreó cosmovisiones en forma de leyendas. De ello da cuenta la toponimia y la oralidad magallánica. Por otra parte, las técnicas que qawasqar y yámanas utilizaron para proveerse de alimentos tienen gran valor arqueológico, lo mismo que las técnicas de confección tehuelches, que aún hoy siguen empleándose.

En nuestra conciencia, un mundo apartado y carente de las urgencias de la sociedad moderna, aún ejerce influencia y nos cautiva. En el fondo, es una cuestión de libertad (o soledad). Quizá por ello, la naturaleza y los hombres que poblaron la Patagonia siguen inspirando el estudio científico y la creación literaria.

Una familia ona observa impasible la ajetreada vida del centro londinense. Se trata de un aviso promocional de una exposición del Museo de la Humanidad acerca de la Patagonia. No podía ser de otro modo: sólo el recurso publicitario puede representar a los ya extinguidos onas. ¿Cómo evitar que otras etnias sigan igual camino? ¿Cómo lograr reconocimiento (y hasta admiración) en vida y no después de la muerte? ¿Cómo, en definitiva, reproducir y recrear la vida en medio de la tierra vernácula y no en el erudito, aunque frío y reducido, espacio de los museos?

---

<sup>60</sup> Catalán, J. “Qawasqars, Tierra del Fuego, XII región” en *Nütram* n° 24. Temuco, 1992, p. 44.

<sup>61</sup> Claris, CH. “La lengua qawasqar”. Cit. en Ortiz, O. “Los últimos canoeros” en Hidalgo y otros. *Op. Cit.* p. 143.

## 4.- SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ETNIAS INDÍGENAS

### *Indígenas y gobierno militar: el caso mapuche*

Mucho de lo alcanzado por el movimiento indígena se perdió en los años de la Dictadura. Las organizaciones fueron desarticuladas y, en un marco de “contrarreforma agraria”, se terminó con la posibilidad de ampliar la base territorial indígena.

En el caso de los mapuche, las únicas organizaciones que sobrevivieron fueron aquellas que condescendieron con los propósitos **integracionistas** del régimen, para quien el problema indígena se resumía al hecho de que esta “noble raza” no se había incorporado plenamente a la nación.

En concordancia con lo anterior, el gobierno dictó decretos que pretendieron terminar con las excepciones legales hacia los mapuche e introducir, de una vez por todas, el concepto de la propiedad individual a sus tierras. Un ministro de la época comentó que con la nueva ley se impondría un nuevo enfoque: “que en Chile no hay indígenas, son todos chilenos”<sup>62</sup>.

Al privarse al pueblo mapuche de su reconocimiento como tal, la identidad étnica se reforzó. Después de un período de letargo, volvieron a surgir organizaciones que recogieron la idea de un proyecto histórico que asegurara la continuidad de los mapuche como pueblo indígena, con una identidad diferente a la nacional. La defensa de la tierra, así como de la lengua y la historia, se convirtieron en una cuestión de sobrevivencia. A cien años de la ocupación militar de la Araucanía, se volvía a reeditar el viejo conflicto entre etnia y Nación.

Las movilizaciones que comenzaron en 1979 fueron incrementando de grado, hasta llegar a 1983. La “explosión social” en el pueblo mapuche era reflejo de un malestar más generalizado, que los sectores populares canalizaron a través de las protestas.

La comunión de intereses entre las organizaciones mapuche y los opositores al régimen militar, le permitió a éstas ganar aliados. Sin embargo, el haberse involucrado en los conflictos nacionales (en algunos casos levantando un discurso de clase) y las diversas estrategias que se esgrimieron para derrocar a Pinochet, hizo que las organizaciones mapuche se dividieran y distanciaran de su base social: “los grupos envueltos en las movilizaciones de 1984 no fueron tan amplios como en 1979, y representaban a grupos más militantes, especialmente en los sectores urbanos”<sup>63</sup>.

---

<sup>62</sup> Declaraciones del Ministro de Agricultura al *Diario Austral* de Valdivia, Agosto 23 de 1978. El Ministro aludía al DL. 2568 de 1979 que facultó a cualquier miembro de la comunidad (indígena o no) a solicitar la división de la misma. Se estableció que al inscribirse en el conservador, la “hijuela” no sería considerada tierra indígena, ni indígena su propietario.

<sup>63</sup> Gacitúa, E. “Hacia un marco interpretativo de las movilizaciones mapuche en los últimos 17 años” en *Nütram* año VIII, N° 28. Santiago, 1992, p. 33.

El divorcio entre la sociedad indígena y sus organizaciones (hegemonizadas por colectividades políticas, como el Partido Comunista, **Ad Mapu**, y la Democracia Cristiana, **Nehuen Mapu**) seguirá presente hasta el día de hoy.

Entre 1987 y 1989 las organizaciones mapuche y de otras etnias estrecharon vínculos con la futura alianza de gobierno y obtuvieron de ella un compromiso en orden a mejorar la condición social de los indígenas y alcanzar un reconocimiento constitucional de sus pueblos, en el marco de una legislación representativa que revirtiera los efectos de 17 años de gobierno militar.

En efecto, la presencia del gobierno militar se hizo sentir con fuerza en el mundo mapuche. En un proceso sin precedentes, los decretos de 1979 permitieron la división de más de 460 mil hectáreas de tierras indígenas. La división no respetó espacios que siempre se consideraron comunes y que eran fundamentales para la reproducción material y cultural del pueblo mapuche, tales como áreas destinadas a bosques, pastizales y ceremonias religiosas. El aumento de la población, unido a lo reducido de su territorio<sup>64</sup>, contribuyó a “vaciar” las comunidades de su gente y su cultura.

Todo lo anterior ha servido para que algunos historiadores concluyan que el propósito fundamental del régimen militar era terminar con el pueblo mapuche. Al promover la parcelación, los indígenas perderían su identidad étnica y se asumirían como campesinos chilenos. De indígena a campesino: ésa era la apuesta<sup>65</sup>. Ese objetivo, en todo caso, encontró variadas resistencias en las personas y sus organizaciones, por lo que el “nuevo trato” con la Concertación de Partidos por la Democracia adoptó la finalidad de recuperar la identidad étnica y situarla bajo la protección de la ley.

### *Indígenas y gobierno militar: el caso aymara y rapa nui*

Por su condición de región fronteriza, el régimen militar penetró hondamente en el espacio andino, intensificando el proceso de “chilenización”<sup>66</sup>.

En el caso aymara, el problema de la tierra no fue tan importante como el del

---

<sup>64</sup> La disponibilidad de tierras por familia ha ido disminuyendo dramáticamente. Estudios de la CORA en la década de 1960 estimaban que una familia mapuche podía vivir “dignamente” con 50 hectáreas; en esa época el promedio era de sólo 9.2. Entre 1979 y 1986, la superficie de cada hijuela por familia decreció a 5,3. En la actualidad el promedio es de sólo 3 hectáreas de tierra por familia. Cfr. González, H. “Propiedad comunitaria e individual. Las leyes indígenas y el pueblo mapuche” en *Nütram* año II, n° 3, Santiago, 1986.

<sup>65</sup> “De indígena a campesino y de campesino a indígena”. Apuntes de una conferencia dictada por la profesora Florencia Mallon, correspondiente al Avance de una investigación preliminar. Santiago, Agosto de 1997.

<sup>66</sup> Se creó la municipalidad fronteriza-militar y las escuelas fronterizas de concentración rural, el propósito de ambas instituciones era cimentar un espíritu nacionalista que permitiera la erradicación de costumbres y relaciones ancestrales dentro del mundo aymara. Cfr. Van Kassel, J. *Holocausto al progreso. Los Aymara de Tarapacá*. CEDLA, Amsterdam, 1980.

agua. En 1981 se dictó un nuevo código de aguas que permitió a los particulares aprovisionarse de este recurso, aunque proviniera de las comunidades indígenas. Los derechos ancestrales fueron desconocidos, sólo valía la inscripción legal.

En concordancia con la idea de que en Chile no había indígenas, la ley facultó a las personas o grupos de personas a inscribir los derechos, y no a la comunidad vernácula, pues se entendía que ella no existía. A raíz de esta legislación, las comunidades perdieron el acceso a un recurso que, en un medio árido, resultaba básico para desarrollar una agricultura sin muchas pretensiones, pero que a lo menos, evitaba la emigración.

Las compañías mineras se han quedado con el agua. Este factor, unido a las expectativas que crea la ciudad (fomentadas por una educación des-indigenizada), gatillaron un proceso migratorio que está dejando sin jóvenes a las comunidades altiplánicas y precordilleranas.

Este fue el marco que condicionó la reivindicación aymara durante los años de la Dictadura. Las organizaciones coordinaron la defensa jurídica de las aguas y de la tierra, promoviendo la inscripción legal de éstas y entablado juicios contra las empresas mineras.

La actitud del pueblo aymara de exigir el reconocimiento legal de sus tierras contrasta con la actitud asumida por los pascuenses frente a este mismo problema. Entre 1979 y 1981 el gobierno dictó una serie de normas sobre otorgamiento de títulos de dominio en la isla de Pascua. Se facultó a los pascuenses a solicitar dichos títulos; si lo hacían, reconocían que esas tierras eran del Estado. La medida pretendía legitimar el cuestionado dominio fiscal sobre las tierras rapa nui.

Contrariando los propósitos gubernamentales, los pascuenses no solicitaron los títulos de propiedad. En 1990, el 60 % de los isleños urbanos y el 70 % de los rurales no habían inscrito sus terrenos. Aún más: en 1988 los 700 pascuenses representados en el Consejo de Ancianos presentaron una demanda civil contra el Fisco, exigiendo la restitución de las tierras que el Estado, sin su conocimiento, inscribió a su nombre en 1933.

### *Indígenas y gobierno militar: balance final*

Como se ha podido apreciar, la presencia del gobierno militar en el mundo indígena no pasó inadvertida.

A través de una legislación excepcional, el gobierno anterior había hecho un reconocimiento explícito de los derechos indígenas. La dictadura revirtió toda iniciativa en tal sentido. Por el contrario, negó la existencia de pueblos indígenas y por medio de leyes *ad hoc*, inició o reavivó procesos que tuvieron un profundo carácter etnocida.

Las etnias reaccionaron, pero siempre apegándose a la institucionalidad. La vía legal nunca fue desechada y frente a las autoridades no pocas veces se mostró

condescendencia con su propuesta integracionista, puesto que ello podía derivar en beneficios individuales o comunitarios. De los aymaras se ha dicho que el arma que mejor manejaron fue el silencio<sup>67</sup>.

Ante las organizaciones no gubernamentales y de oposición al régimen, el discurso indígena adoptó un cariz más étnico. En el caso aymara, éstos reafirmaban su condición de indígenas y no de chilenos (como ocurría ante las autoridades de gobierno). Defendieron su capacidad de autogestión y sus esfuerzos por recuperar la cultura. De ese modo facilitaron el acceso a otras fuentes de ayuda.

En el imaginario de los dirigentes, siempre primó la idea de “avanzar conservando”, vale decir, incorporar elementos de la cultura dominante y fundirlos, creativamente, con la cultura tradicional. El juicio que realizaron del gobierno militar era sumamente crítico.

No necesariamente ocurrió lo mismo con las bases indígenas, cuya actitud era ocasionalmente más “realista” que la de sus dirigentes. En algunos casos, la conducta electoral de los indígenas demostró estrechas lealtades con el régimen militar. Esto puede atribuirse al asistencialismo autoritario del gobierno, al temor o respeto a la fuerza militar, al control directo sobre las personas (ejercido por el dirigente vecinal) y, en último término, a la alianza gobierno-evangélicos.

En efecto, durante la dictadura se produjo un notable crecimiento de las doctrinas evangélicas (pentecostales en particular). No es el caso analizar las razones<sup>68</sup>, pero sí cabe destacar que este tipo de iglesias, debido a su “apoliticismo”, fue funcional a los intereses de la Dictadura.

Sin embargo, pese a todas las fuerzas desintegradoras que, por uno u otro conducto, presagiaban su desaparición, las etnias indígenas aún marcan presencia en Chile. La vuelta a la democracia anunció lo que parecía una nueva etapa reivindicativa de la condición indígena, tal y como había ocurrido en la década del setenta. Pero al poco tiempo, las esperanzas se confundieron con las frustraciones.

### *¿De campesinos a indígenas?: indígenas y Concertación*

La vuelta a la democracia se mostró auspiciosa para el movimiento indígena. El borrador de una nueva ley prometió respeto y participación de los indígenas en la vida nacional, reconociendo, legalmente, su existencia como pueblos.

A ese borrador se llegó recogiendo ideas del mundo académico y, principalmente,

---

<sup>67</sup> Van Kassel, J. “¿Renace el aymara en Chile?” en *Nüttram* año VI, N° 3. Santiago, 1990 p. 70.

<sup>68</sup> Para un estudio acerca de la penetración y las consecuencias de las doctrinas evangélicas en los sectores populares, cfr. Fontaine- Beyer. “Retrato del movimiento evangélico a la luz de las encuestas de opinión pública”. *Estudios Públicos* n° 44. Santiago, 1991 y, en esta misma revista, Martin, D. “El protestantismo radical en América Latina”.

de las organizaciones indígenas. Se generó un espacio en que éstas pudieron expresarse como jamás lo habían hecho. El presidente Patricio Aylwin se mostró orgulloso de ello y comprometió su apoyo a la ley que pronto se discutiría en el Parlamento<sup>69</sup>.

Pero en esta corporación se produjo una cirugía mayor. Las viejas arquitecturas ideológicas acerca de la unidad nacional prevalecieron sobre concepciones nuevas surgidas del derecho internacional y que se expresan en el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (1988), y en el proyecto de declaración sobre los derechos indígenas que actualmente se discute en Naciones Unidas.

Sobre estos dos documentos se fundamentan las reivindicaciones políticas del movimiento indígena. El primero, reconoce el carácter de **pueblos** de los grupos indígenas, aunque de este término no se derivarían implicancias políticas. La segunda declaración corrige lo que se considera una contradicción, puesto que reconocer la existencia de un pueblo, implica reconocer sus derechos políticos colectivos, como el de la **autodeterminación**.

La autodeterminación engloba una serie de otros derechos: el de la autoafirmación como pueblo y no sólo como etnia; el de la autodelimitación del espacio en el cual desarrolla su existencia y el derecho a representarse interna y externamente<sup>70</sup>. Este tipo de formulaciones, por su carácter supuestamente separatista, ha provocado escozor en el medio jurídico chileno. En 1992 el Congreso rechazó la aprobación del convenio 169 y el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.

Quienes están en contra de estas posiciones, argumentan la deuda histórica del Estado chileno con sus culturas originarias, que no podrá haber justicia sin reformulaciones jurídicas. Dichas reformulaciones no tienen un carácter separatista, puesto que el problema es **étnico** y no nacional. El problema étnico no implica separación territorial, sino el reconocimiento de una autonomía que permita a los pueblos indígenas decidir sobre su futuro en un marco estatal que reconozca la pluriétnicidad<sup>71</sup>.

Todo este debate acerca de los derechos políticos de pueblos (como el mapuche), representa la parte más débil de las reivindicaciones indigenistas. Los sectores académicos ligados a ellas así lo han manifestado. Esos sectores demandan una mayor preocupación por el tema para crear un marco teórico que dé forma a una nueva relación Estado chileno/ Pueblo mapuche que, además, contribuya al fortalecimiento de una alianza social, en detrimento de una alianza político-partidista<sup>72</sup>.

---

<sup>69</sup> Cfr. "Discurso de S. E. el Presidente de la República, don Patricio Aylwin Azócar, en clausura del Congreso Nacional de Pueblos indígenas. Temuco, 18 de enero de 1991" en *Nütram* año VIII, n° 1, Santiago 1991.

<sup>70</sup> Cfr. Neguil, V. "Desarrollo mapuche y derecho de autodeterminación" en *Liven* n° 4. Temuco, 1997. pp. 24-29.

<sup>71</sup> Bengoa, J. "Los derechos de los pueblos indígenas: el debate acerca de la declaración internacional" en *Liven* n° 4. Temuco, 1997 p. 215.

<sup>72</sup> Cfr. Neguil, V. *Op. Cit.* p. 33.

## *Los que se han quedado: entre la integración y el rechazo*

El mundo indígena rural es parte constituyente de la pobreza estructural de Chile. La miseria y la marginación han acompañado la vida de quienes han optado por permanecer en sus tierras.

El estrecho espacio para el cultivo familiar sólo alcanza para sobrevivir. A futuro las expectativas no son halagüeñas debido al exceso de población y la erosión del terreno. La producción forestal puede ser una alternativa de crecimiento económico, pero se requiere un acabado manejo del recurso y de innovaciones tecnológicas que hoy las comunidades indígenas no poseen<sup>73</sup>.

Las presiones de la sociedad chilena siguen haciéndose sentir con fuerza sobre las comunidades indígenas. En el norte, las compañías mineras están en conflicto con los aymara por el agua. En el sur, las empresas forestales e hidroeléctricas disputan o tratan de llegar a una negociación con los mapuche por sus tierras. Algunas de estas disputas han alcanzado especial notoriedad, siendo Alto Pangué y Ralco quizá los ejemplos más destacados. El Alto Bío Bío simboliza una nueva faceta del secular conflicto entre tradición y modernidad, entre intereses étnicos y nacionales.

Las autoridades públicas y la empresa privada argumentan que sin nuevas fuentes de energía se hipoteca el crecimiento del país. *Contrario sensu*, la posición indigenista y ambientalista afirma que ese crecimiento no tiene por qué hipotecar el futuro de la cultura pehuenche y de un ecosistema único. Se considera que el costo es demasiado elevado, máxime, si se piensa que la vida útil de las represas no superará los cien años.

El conflicto en torno a las centrales hidroeléctricas ha movilizizado las voluntades del pueblo pehuenche; la inundación de sus tierras y el traslado a otras (adquiridas por la ENDESA) ha provocado el rechazo de los afectados y de los grupos ambientalistas.

Podrían escribirse largos párrafos acerca de la resistencia de aquellos que se aferran a su tierra como algo sagrado. Podría escribirse también acerca de las presiones que se han ejercido sobre los pobladores del Alto Bío Bío y los ex miembros de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas. No hay duda que aquí hay una historia que reactualiza viejas luchas y vuelve a poner en cuestión el dominio de una sociedad sobre la otra.

Pero tampoco hay que creer que existe una uniformidad de criterios para enfrentar la presencia huinca en esta región. Para muchos pehuenche, Endesa ofrece la única oportunidad en siglos para salir de la pobreza. Algunos con dudas, y otros con sincera fe, creen en los ofrecimientos de la empresa y están dispuestos a entregar sus tierras. Otros se niegan a ello, pero de mejorar la oferta cambiarían de posición, sin considerar los deseos de los ambientalistas y de sus propios hermanos de raza.

<sup>73</sup> Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile. *Potencial forestal campesino e indígena de Chile*. DEFOR. Santiago, 1997.

En el fondo lo que se ha producido es un cuestionamiento de la tradición ¿Qué nos ha ofrecido ella?, preguntan algunos, y responden: sólo pobreza. Los líderes evangélicos son los que más han insistido en la necesidad de cambiar de forma de vida. El tema de la presencia evangélica en el mundo popular, e indígena en particular daría, como se insinuó, para un capítulo aparte. Para el caso aymara existen estudios que afirman que la adopción de dichos cultos terminará por desestructurar el acervo cultural indígena, ya que su idea de la “conversión” implica una ruptura total con la tradición y con la comunidad étnica en particular, en tanto el fiel está llamado a ser partícipe de una comunidad universal que se encamina a la *parusía*<sup>74</sup>. Otros, en cambio, consideran que la integración a las iglesias evangélicas crea un movimiento social que transforma la comunidad, revitalizándola desde el punto de vista religioso<sup>75</sup>. En definitiva, se trataría de una forma de resistencia cultural que, bajo otras formas, combate el influjo desintegrador de la modernización y la escuela.

En el caso mapuche, los estudios debieran profundizar una idea que se maneja a nivel de sectores populares urbanos y que dice relación con las formas en que las tesis weberianas estarían penetrando en el mundo indígena. Se entiende que el discurso ascético (fuertemente censurador de la ingesta alcohólica) estaría contribuyendo a integrar la sociedad indígena al discurso modernizador de la sociedad occidental. Esas mismas tendencias integradoras se aprecian en otras comunidades mapuche que se han abierto a los huincas pobres y a sus organizaciones de clase, y en donde no se habla mapudungun ni se celebran nguillatunes.

En otras comunidades ha operado un proceso inverso. Se ha desarrollado una defensa militante de la tradición como una forma de reaccionar contra las tendencias “modernizadoras” impuestas desde afuera. En no pocas ocasiones han desafiado la institucionalidad, “tomándose” las tierras usurpadas. En términos políticos, la versión más radicalizada de estas posturas está representada en el **Consejo de Todas las Tierras**. La estrategia de su líder (Aucan Huilcamán, ex dirigente de Ad Mapu) es la de recuperar tierras para luego negociar con el Estado chileno un sistema de poder compartido al sur del Bío Bío.

Las “recuperaciones” provocaron la reacción inmediata del gobierno. Siempre ha sido así. La aplicación de la ley ha sido estrictísima con aquellos indígenas que la han desafiado. El calificativo de “delincuentes comunes” que se les aplicó en 1992 a los dirigentes del Consejo de Todas las Tierras está en sintonía con el término “terroristas” que en 1997 sirvió a las autoridades para calificar a los miembros de una comunidad en

---

<sup>74</sup> Van Kassel, J. *Op. Cit.* y Guerrero, B. “La estructura ideológica del movimiento pentecostal” en *Cuadernos de investigación social* N° 3, CIREN Iquique, 1984.

<sup>75</sup> Tudela, P. “Cambio religioso y revitalización de la comunidad entre los aymara de Arica” en *Nüttram*, Año IX, n° 33. Santiago, 1993.

Lumaco, que habría participado en la quema de tres camiones de una empresa forestal con la cual la comunidad tiene un largo litigio. El hecho aparece grave, pero pocas veces se ahonda en las causas.

### *Los que se han ido: entre conservar la identidad y renunciar a ella*

Entre 1970 y 1990, 31.597 personas solicitaron cambio de nombre en Chile. De ese número, más de mil solicitudes correspondieron a sujetos mapuche, que deseaban eliminar su nombre propio o su apellido, aduciendo menoscabo moral, ridiculez o risibilidad.

Más allá de las cifras, el hecho en sí es revelador. El cambio de nombre, como expresión de silencio o rechazo de la propia identidad<sup>76</sup>, cuestiona la incapacidad histórica de la sociedad y el Estado chileno para valorar, o al menos tolerar, a las culturas originarias. Esto explica el que algunos de sus descendientes se hayan relacionado en forma tan conflictiva y dolorosa con sus raíces, que finalmente las han rechazado.

Esta suerte de suicidio étnico se inserta en una larga historia de etnocidio cultural (y no pocas veces de genocidio) que viene operando desde los tiempos de la conquista. Este proceso le ha negado historicidad al sujeto indígena y mermado las identidades colectivas sujetas a una etnia, en favor de una supuesta homogeneidad étnica que sabemos no es cierta.

Hoy en día ha crecido la conciencia acerca del necesario respeto a la diversidad cultural y el derecho de las etnias indígenas a vivir en paz y seguridad en sus tierras y fuera de ellas. Estos propósitos llegaron incluso a manifestarse en círculos oficiales tras la vuelta a la democracia y se concretaron con la promulgación de la Ley Indígena.

Sin embargo aún falta mucho por hacer. En sus comunidades o fuera de ellas, el indígena sigue inmerso en la marginalidad. Las cárceles de Iquique están llenas de aymara acusados de narcotráfico. En Santiago, los mapuche se emplean en trabajos precarios y mal remunerados; por añadidura, deben vivir bajo el peso de la sospecha y la discriminación. La sociedad chilena (sectores populares incluidos) es profundamente discriminatoria e intolerante. Las encuestas de opinión pública así lo revelan, y nuestra experiencia cotidiana lo confirma: vivimos de lugares comunes, ensalzando a los indígenas del pasado y denostando a los del presente.

La institucionalidad, a través de la CONADI o de las nuevas políticas emanadas del Ministerio de Educación, tratan de crear conciencia respecto del problema, pero los frutos son de largo plazo. Mientras tanto, han surgido en Santiago y en otras grandes

---

<sup>76</sup> Llanquileo, C. "La identidad cultural en los procesos de modernización. Un análisis de los cambios de nombres en sujetos mapuche, 1970 - 1990" en *Proposiciones* n° 27. Edic. SUR, 1996.

urbes, una serie de organizaciones indígenas que se han entrelazado, creando redes de asistencia y recreación de la cultura originaria. En las ciudades del Norte Grande, prósperos comerciantes aymara regresan a su comunidad para organizar (y financiar) el Carnaval. En Santiago, las organizaciones mapuche organizan ceremonias religiosas y recreativas, como el juego del palín, en concurridos espacios públicos. La cultura indígena, dicen, está viva.

¿Vale la pena todo ello? Algunos círculos consideran que no, que es un error incurrir en políticas o conductas disociadas de las urgencias de una modernidad que demanda la integración definitiva de las etnias al desarrollo nacional. Hay jóvenes, sin embargo, que piensan de otro modo. En la Plaza de Armas de la capital, en el primer centro cívico y religioso que los hispanos diseñaron en Chile, un grupo de estudiantes mapuche muestran sus bailes y hablan en mapudungun. Dicen que más que el dinero, lo que los anima es dar a conocer parte de una cultura que, insisten, está y seguirá estando viva. Esa vitalidad encanta; es causa y efecto de nuevas fuerzas que orientan nuevas luchas. Si existe movimiento indígena es porque existe movimiento social.



# INDICE

INTRODUCCIÓN	7
CAPÍTULO I	
ELITES SOCIALES Y LIDERAZGO	13
1.1.- PROBLEMAS DEL LIDERAZGO: CONSENSOS Y DISENSOS	13
I. Primer Problema: las propuestas de liderazgo	13
El concepto de liderazgo	13
El proyecto de orden y unidad nacional	15
Los proyectos alternativos	18
II. Segundo problema: la construcción y defensa de la legitimidad	19
La carencia del soporte social	21
Respuesta autoritaria y represión	23
III. Tercer problema: los consensos y disensos del liderazgo	27
Los conflictos de las elites decimonónicas	27
Consenso y Disensos del siglo XX	30
1.2.- CARACTERIZACIÓN DE LAS ELITES	
DIRIGENTES CHILENAS (1810-1980)	31
I. Las Elites Decimonónicas (1810-1891)	31
El “mito de los orígenes” de las elites chilenas	32
De la “aristocracia” terrateniente a la burguesía mercantil	33
Vuelta a la definición	37
<b>La crisis de una “aristocracia” (1891-1920)</b>	38
La aristocracia distanciada e inoperante	38
<b>La transformación de las elites (1920-1980)</b>	41
Pluralización y complejización de las elites dirigentes	41
El disenso profundo y el enfrentamiento	43

1.3.- PROBLEMAS DEL LIDERAZGO: RELACIÓN CON EL ESTADO, EL MERCADO Y LA SOCIEDAD CIVIL	46
I. La relación con el Estado	46
II. La relación con el Mercado	48
¿Quién manda en la economía chilena?	49
El vaivén proteccionismo-liberalismo	51
III. La relación con la Sociedad	52
El desafío de ser “clase modelo”	52
Las relaciones con los otros	53
<b>Grupos populares: entre el paternalismo y el miedo</b>	55
El paternalismo y el corregimiento	55
1.4. LIDERAZGO NACIONAL Y GLOBALIZACIÓN (1980-1998)	57
<b>Nuevo planteamiento de la pregunta: ¿Existe el proyecto nacional?</b>	57
I.- La recuperación de los roles hegemónicos:	
el empresariado como portador de modernidad	58
II. El problemático liderazgo de las elites concertacionistas:	
¿dirigentas o administradoras?	60
CAPÍTULO II	
LOS GRUPOS MEDIOS	65
2.1 LA DEFINICIÓN DE LOS GRUPOS MEDIOS.	65
Las dificultades del análisis clasista	65
La clase esperanza y la clase traidora	68
2.2 PRODUCTIVISTAS, MERCANTILISTAS E INDEPENDIENTES.	70
I. El artesanado decimonónico y el estrato de “productores independientes”:	
¿el caso de una clase media frustrada?	70
II. Siglo XX. La continuación de la inseguridad	74
III. La presencia inmigrante	76
Origen de los grupos inmigrantes	76
Evolución del inmigrante en Chile	78
IV. Los grupos profesionales	81
Evolución de la capa profesional: del intelectual de elite al “poder mesocrático”	81

2.3 LOS GRUPOS FUNCIONARIOS	84
I. El empleado público y su evolución	84
II. El empleado particular	87
2.4. EL PROBLEMA DE LA HEGEMONÍA Y LAS ALIANZAS	88
Las constantes de los grupos medios	88
Los grupos “sin discurso”	90
CAPÍTULO III	
EL SUJETO POPULAR	93
1.- CUESTIONES DE DEFINICIÓN Y CONCEPTO	93
¿”Ser” o “estar siendo”? el Sujeto como categoría analítica	93
Presencia histórica y desafío conceptual: el sujeto popular	95
Entre “moverse” en la historia y “mover” la Historia: el concepto de “movimiento social-popular”	97
2.- CAMPESINOS, PEONES Y ARTESANOS: EL PUEBLO “TRADICIONAL”	102
<b>Campesinos</b>	102
Un mundo de vagabundos y labradores	102
La “pax rural”: el orden hacendal y la búsqueda de libertad “en la medida de lo posible”	103
El desafío: la cuestión rural y el movimiento campesino en el siglo XX	105
<b>Peones</b>	106
El desarraigo: orígenes del peonaje rural	106
Orden y transgresión: orientaciones y conductas del peonaje rural	107
<b>Artesanos</b>	109
Artesanos y sectores populares	109
El movimiento del artesano: ¿primer movimiento social o prehistoria del movimiento obrero?	111
3.- EL PUEBLO ORGANIZADO: OBREROS Y SINDICATOS	112
La proletarización como idealización: tesis “clásicas” acerca de los orígenes del movimiento obrero	112
Hacia una economía de la violencia: de la violencia popular a la protesta obrera	113
Movimiento obrero y obrerismo ilustrado: de integrados y excluidos	115

De auroras modernizadoras ¿y crepúsculos revolucionarios?	117
Sindicalismo “de clase” y sindicalismo “puro”: de héroes, antihéroes y mitos	118
4.- REFUNDACIÓN NEOLIBERAL E IDENTIDAD POPULAR	122
El desalojo: Movimiento popular y golpe militar	122
La crisis sindical: primera fase, 1973-1979	123
La crisis sindical: el Plan Laboral	124
Entre el “acoso” y el proyecto: protesta popular y movimiento social	125
Los movimientos sociales bajo la Dictadura: crisis y redefinición	129
El sindicalismo: de la crisis estructural a la crisis de identidad	131
Trabajadores por cuenta propia: entre el cesante sin opción y el trabajador emprendedor	132
El mundo rural bajo el neoliberalismo: consecuencias no previstas	133
Transformaciones en el espacio rural: los temporeros	134
Los parceleros: de éxitos, fracasos y desafíos	135

## CAPÍTULO IV

LAS ETNIAS INDÍGENAS	137
1.- ROL HISTÓRICO DE LAS ETNIAS EN CHILE	137
Etnia, Nación y Estado	137
Hacia una definición de lo indígena	138
Pasado heroico, presente bárbaro: las visiones tradicionales acerca de lo indígena	139
La reivindicación del mestizo: visión de los indígenas en los ensayos nacionalistas	141
Entre la vindicación y la vindicta: el socialismo frente a lo indígena	141
La reivindicación de lo indígena desde las propias etnias	143
2.- MOVIMIENTO INDÍGENA: COLONIZACIÓN Y RESISTENCIA	144
Los espacios colonizados: violencia, sometimiento y etnocidio	144
La resistencia espiritual: adopción y adaptación. Los sincretismos religiosos	146
La resistencia militante	146
Frontera sur: la coexistencia pacífica redes comerciales indígenas y mercantilistas	148
Frontera sur: la Araucanía intervenida	149
El fin de la frontera: de resistencias y reducciones	150

El avance sobre las nuevas fronteras: la chilenización de los Andes	152
El avance sobre las nuevas fronteras: la chilenización de ultramar	154
De la imposición a la identificación: La reducción mapuche como espacio de identidad y resistencia	156
3.- LAS ETNIAS DESAPARECIDAS	158
La extinción bajo el antiguo orden: pestes, mestizaje y genocidio	158
La extinción bajo el nuevo orden: el capitalismo, las últimas fronteras y el “canto del cisne”	160
Incompatibilidades de la modernidad	163
4.- SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ETNIAS INDÍGENAS	165
Indígenas y gobierno militar: el caso mapuche	165
Indígenas y gobierno militar: el caso aymara y rapa nui	166
Indígenas y gobierno militar: balance final	167
¿De campesinos a indígenas?: indígenas y Concertación	168
Los que se han quedado: entre la integración y el rechazo	170
Los que se han ido: entre conservar la identidad y renunciar a ella	172

**ESTE LIBRO HA SIDO POSIBLE**

**POR EL TRABAJO DE**

**Comité Editorial** Silvia Aguilera, Mauricio Ahumada, María Bohigas, Carlos Cociña, Mario Garcés, Luis Alberto Mansilla, Tomás Moulian, Naín Nómez, Julio Pinto, Paulo Slachevsky, Hernán Soto, José Leandro Urbina, Verónica Zondek **Proyectos** Ignacio Aguilera **Secretaría Editorial** Alejandra Céspedes **Dirección de Arte** Txomin Arrieta **Diseño y Diagramación Editorial** Ángela Aguilera, Paula Orrego, Rodrigo Urzúa **Corrección de Pruebas** Raúl Cáceres **Exportación** Ximena Galleguillos **Página web** Leonardo Flores **Comunidad de Lectores** Olga Herrera, Francisco Miranda **Secretaría Distribución** Sylvia Morales **Ventas** Elba Blamey, Luis Fre, Marcelo Melo **Administración y Bodegas** Jaime Arel, Leonidas Osorio, Servando Maldonado, Nelson Montoya, Jorge Peyrellade **Librerías** Nora Carreño, Ernesto Córdova **Secretaría Gráfica LOM** Tatiana Ugarte **Comercial Gráfica LOM** Juan Aguilera, Marcos Sepúlveda, Cristina Rosas **Servicio al Cliente** Elizardo Aguilera, José Lizana, Edgardo Prieto **Diseño y Diagramación Computacional** Guillermo Bustamante, César Escárate, Claudio Mateos, Alejandro Millapan, Felipe Sauvageot **Secretaría Imprenta** Carmen Gloria Jeldres **Producción** Javier Gutiérrez, Eugenio Cerda **Impresión Digital** Carlos Aguilera, Sergio Jorquera, Efraín Maturana, William Tobar **Control de Calidad** Ingrid Rivas **Preprensa Digital** María Francisca Huentén, Daniel Véjar **Impresión Offset** Eduardo Cartagena, Freddy Pérez, Rodrigo Véliz, Francisco Villaseca **Corte** Eugenio Espíndola, Sandro Robles, René Muñoz **Encuadernación** Alexis Ibaceta, Rodrigo Carrasco, Sergio Fuentes, Aníbal Garay, Pedro González, Carlos Muñoz, Luis Muñoz, Marcelo Toledo **Despachos** Miguel Altamirano, Pedro Morales **Administración** Mirtha Ávila, Alejandra Bustos, Diego Chonchol, César Delgado, Aracelly González.

**LOM EDICIONES**